

Maria Camila Guio <mguio@godoycordoba.com>

Lun 22/04/2024 12:11 PM

Para: Juzgado 03 Laboral Circuito - Boyacá - Tunja <j03labtun@cendoj.ramajudicial.gov.co>

CC: gloriam.guerra@gmail.com <gloriam.guerra@gmail.com>; consultas@fabianguarin.com <consultas@fabianguarin.com>; AGALEJO7@GMAIL.COM

<agalejo7@gmail.com>; notificacionesjudiciales <notificacionesjudiciales@colpensiones.gov.co>; accioneslegales@protección.com.co

<accioneslegales@protección.com.co>; Buzon ProcesosJudiciales <procesosjudiciales@colfondos.com.co>; cliente@skandia.com.co <cliente@skandia.com.co>

 1 archivos adjuntos (26 MB)

GCL 22 04 2024 MCGM (CD) (2024-00072) +A.pdf;

Señores:

**JUZGADO TERCERO (3) LABORAL DEL CIRCUITO DE TUNJA**

j03labtun@cendoj.ramajudicial.gov.co

E. S. D.

**Demandante:** GLORIA MARIA GUERRA SANZ

**Demandados:** ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A. y OTROS

**Rad:** 15001310500320240007200

**MARÍA CAMILA GUIO MARTÍNEZ**, mayor de edad, identificada con la Cédula de Ciudadanía No. 1.032.505.503 expedida en Bogotá D.C., abogada portadora de la Tarjeta Profesional número 414.733 del Consejo Superior de la Judicatura, domiciliada y residente en Bogotá D.C., con correo electrónico mguio@godoycordoba.com, actuando en calidad de apoderada especial de la **ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.**, identificada con NIT 800.144.331-3, según poder debidamente otorgado, respetuosamente y dentro del término legal, doy respuesta a la demanda interpuesta por **GLORIA MARIA GUERRA SANZ**.

En esta oportunidad en cumplimiento de lo dispuesto en el en el art. 8° de la Ley 2213 de 2022, y en el numeral 14 del art. 78 del CGP se remite el presente memorial con copia:

- a. Demandante: gloriam.guerra@gmail.com
- b. Apoderado judicial parte demandante: consultas@fabianguarin.com agalejo7@gmail.com
- c. Colpensiones: notificacionesjudiciales@colpensiones.gov.co
- d. Protección S.A.: accioneslegales@protección.com.com
- e. Colfondos S.A.: procesosjudiciales@colfondos.com.co
- f. Skandia S.A.: cliente@skandia.com.co

Se suscribe,



**María Camila Guio Martínez**  
C.C. 1.032.505.503 de Bogotá D.C.

T.P. 414.733 del C.S. de la J.

[mguio@godoycordoba.com](mailto:mguio@godoycordoba.com)

Bogotá · Calle 84A No. 10 – 33, piso 5

PBX: (60-1) 317 4628

Celular: 311 762 8099

[www.godoycordoba.com](http://www.godoycordoba.com)

Bogotá | Barranquilla | Cali | Medellín



Godoy Córdoba Abogados forma parte de la práctica de derecho internacional Littler Global, que opera en todo el mundo a través de una serie de entidades jurídicas independientes. Para obtener más información, visite: [www.Littler.com](http://www.Littler.com)

Señores:

**JUZGADO TERCERO (3) LABORAL DEL CIRCUITO DE TUNJA**

[j03labtun@cendoj.ramajudicial.gov.co](mailto:j03labtun@cendoj.ramajudicial.gov.co)

E. S. D.

**Demandante:** GLORIA MARIA GUERRA SANZ  
**Demandados:** ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS  
PORVENIR S.A. y OTROS  
**Rad:** 15001310500320240007200

**MARÍA CAMILA GUIO MARTÍNEZ**, mayor de edad, identificada con la Cédula de Ciudadanía No. 1.032.505.503 expedida en Bogotá D.C., abogada portadora de la Tarjeta Profesional número 414.733 del Consejo Superior de la Judicatura, domiciliada y residente en Bogotá D.C., con correo electrónico [mguio@godoycordoba.com](mailto:mguio@godoycordoba.com), actuando en calidad de apoderada especial de la **ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.**, identificada con NIT 800.144.331-3, en adelante La Demandada, según poder debidamente otorgado, respetuosamente y dentro del término legal, doy respuesta a la demanda interpuesta por **GLORIA MARIA GUERRA SANZ**, en adelante La Demandante, en los siguientes términos:

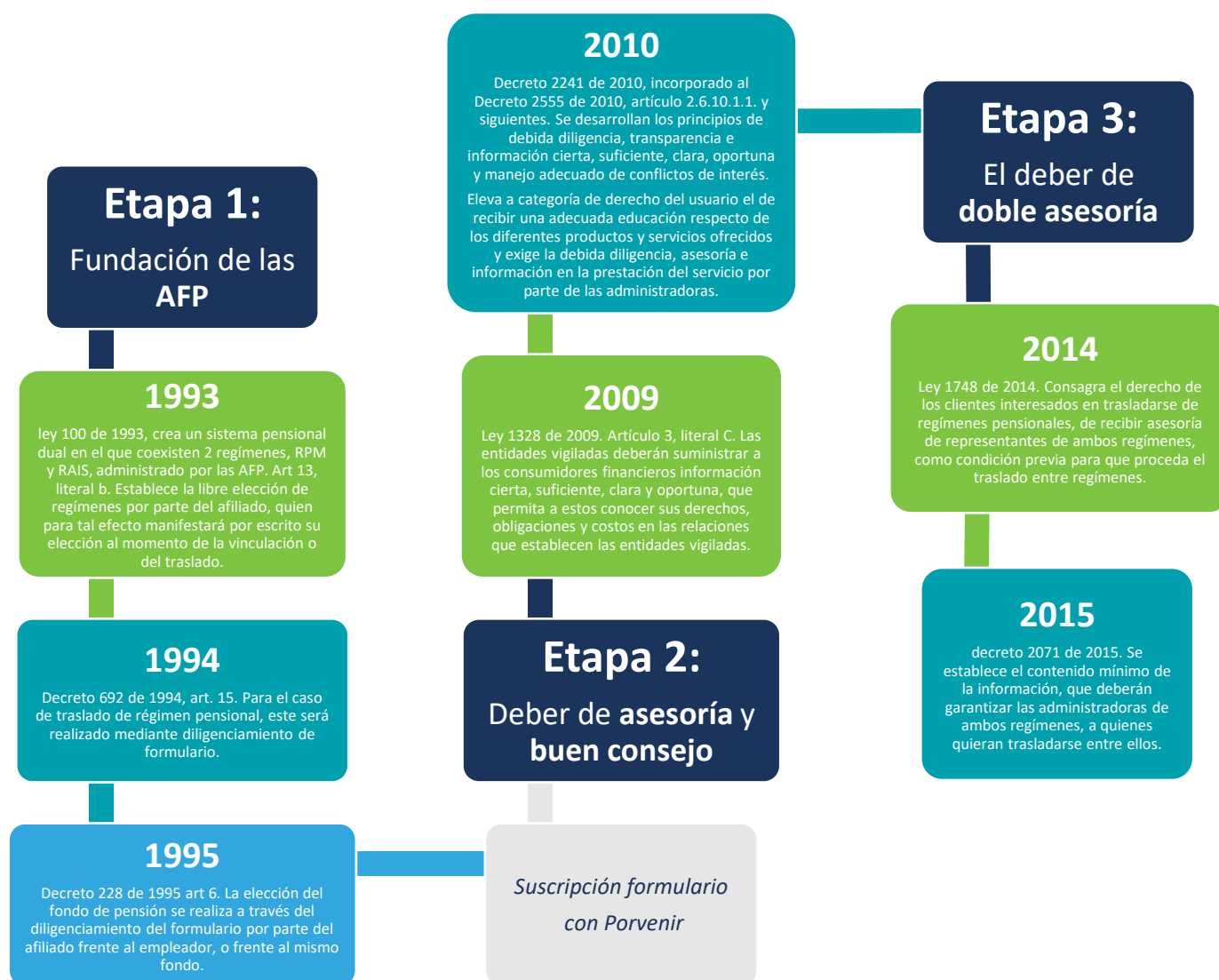
## 1. Resumen Ejecutivo Problema Jurídico

Nos permitimos proponer al Despacho que, adicional a verificar la ineficacia del traslado de régimen pensional en atención a las condiciones particulares de la parte actora, se aborden los siguientes problemas jurídicos a lo largo del proceso:

- Analizar la procedencia del traslado de los gastos de administración, primas de seguros y el porcentaje destinado al fondo de garantía de pensión mínima.
- Verificar la procedencia de la teoría de las restituciones mutuas en caso de declararse la ineficacia del traslado de régimen pensional y ordenarse el traslado de recursos con destino a Colpensiones.
- Determinar si es procedente el traslado de los gastos de administración, primas de seguros y el porcentaje destinado al fondo de garantía de pensión mínima de manera indexada.

### 1.1 Contexto jurídico

A continuación, se presentan algunas consideraciones sobre el contexto jurídico en relación con el deber de información. Si bien existe esta obligación en la normatividad sobre seguridad social, no siempre ha sido uniforme en el tiempo y su claridad se ha ido desarrollando a medida que se han expedido normas más recientes, tal como se puede evidenciar en la siguiente gráfica:



## 1.2 Regímenes pensionales y sus características

En nuestro país existen dos (2) regímenes pensionales, por lo que el despacho al momento de estudiar la procedencia o no de declarar la nulidad o ineficacia de la afiliación deberá tener en cuenta cada uno de ellos, así como sus principales características y diferencias, las cuales se pueden observar en el siguiente cuadro:

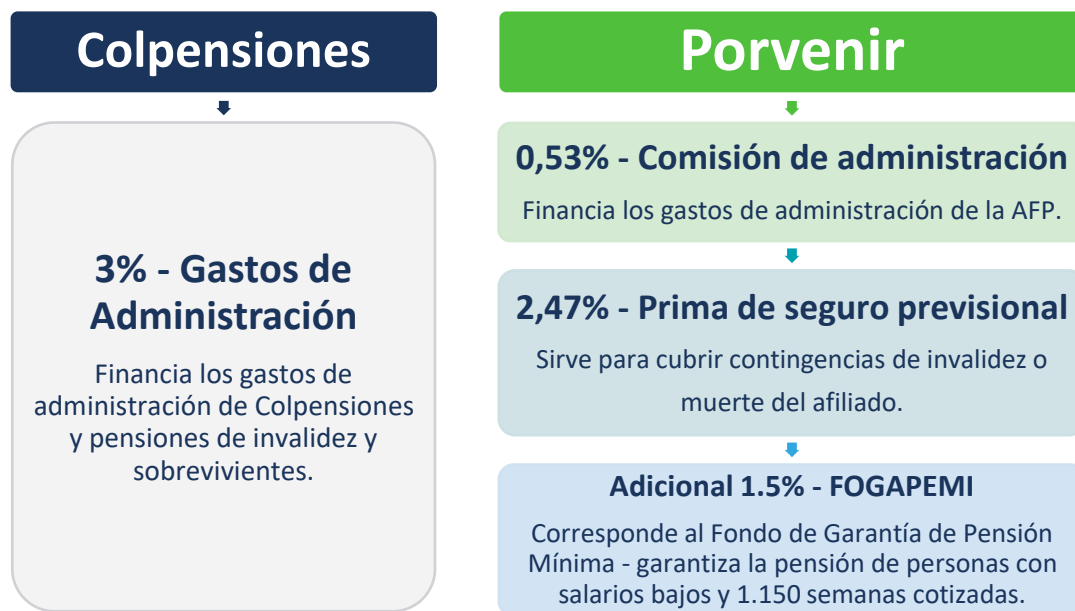


<h2>Precisiones sobre regímenes pensionales</h2>	<h3>Naturaleza jurídica de las administradoras:</h3> <p><b>RPM:</b> creadas como entidades públicas (Ley 100 de 1993, art 52).</p> <p><b>RAIS:</b> Sociedades anónimas o entidades cooperativas (Ley 100 de 1993, art 91, Lit a).</p>	<h3>Aportes o cotizaciones voluntarias:</h3> <p><b>RPM:</b> No proceden</p> <p><b>RAIS:</b> Se pueden efectuar (Ley 100 art 62).</p>
<h3>Manejo de los recursos</h3> <p><b>RPM:</b> Fondo común de naturaleza pública, constituido con los aportes de los afiliados y sus rendimientos.</p> <p><b>RAIS:</b> Patrimonio autónomo e independiente de la AFP, de propiedad de los afiliados, constituido por el conjunto de cuentas individuales de ahorro pensional (Ley 100 de 1993, art, 63) y sus rendimientos.</p>	<h3>Aportes o cotizaciones voluntarias:</h3> <p><b>RPM:</b> 13% para reserva de vejez, 3% para gastos de administración y reservas de invalidez y sobrevivientes (Ley 100, art 20).</p> <p><b>RAIS:</b> 11,5% para la cuenta individual, 1,5% para Fondo de Garantía de Pensión Mínima y 3% para seguros previsionales y comisión de administración (Ley 100 de 1993, art 20).</p>	<h3>Modalidades de pensión:</h3> <p><b>RPM:</b> Única modalidad (prestación definida)</p> <p><b>RAIS:</b> Renta Vitalicia Inmediata, Retiro Programado, Retiro programado con renta vitalicia diferida, Renta temporal cierta con renta vitalicia de diferimiento cierto, retiro programado sin negociación de bono pensional, Renta temporal variable con renta vitalicia inmediata, entre otros. (Ley 100 de 1993, art. 80 a 83).</p>
<h3>Monto de las prestaciones</h3> <p><b>RPM:</b> Única modalidad (prestación definida)</p> <p><b>RAIS:</b> Renta Vitalicia Inmediata, Retiro Programado, Retiro programado con renta vitalicia diferida, Renta temporal cierta con renta vitalicia de diferimiento cierto, retiro programado sin negociación de bono pensional, Renta temporal variable con renta vitalicia inmediata, entre otros. (Ley 100 de 1993, art. 80 a 83).</p>	<h3>Prestaciones adicionales</h3> <p><b>RPM:</b> Auxilio funerario (Ley 100, art 33). Mesada adicional (Ley 100 del 93, art 50).</p> <p><b>RAIS:</b> Auxilio funerario (Ley 100 de 1993, art 86). Excedentes de libre disponibilidad (Ley 100 de 1993, art 86). Planes alternativos de capitalización y de pensiones (Ley 100 de 1993 art. 87 y 88). Garantía de crédito y adquisición de vivienda (Ley 100 de 1993, art 89).</p>	<h3>Masa sucesoral</h3> <p><b>RPM:</b> cuando no hay beneficiarios de la pensión de sobrevivientes, se extingue.</p> <p><b>RAIS:</b> las sumas acumuladas en la cuenta individual de ahorro pensional hacen parte de la masa sucesoral de los bienes del causante. (Ley 100 de 1993, art 76).</p>

### 1.3 Aportes en el RAIS y su distribución

Ahora, es importante hacer énfasis en la forma en la que en el RAIS se distribuye el total del aporte, pues tal y como se evidencia en la siguiente gráfica, el monto de la cotización se distribuye en gastos de administración, fondo de garantía de pensión mínima, pago de seguro previsional y lo destinado a la cuenta de ahorro individual. Así las cosas, debe advertirse que, mientras en Colpensiones el 3% del aporte se dirige a cubrir gastos de administración, que comprende además lo relativo a invalidez y sobrevivientes, en el Régimen de Ahorro Individual, particularmente en Porvenir, el aporte se distribuye de manera porcentual de la siguiente manera:





## 2 CONTESTACIÓN DEMANDA

### 2.1 Contestación de hechos

De conformidad con lo establecido en artículo 25 del C.P.T y de la S.S. y de acuerdo con la numeración expuesta en la demanda, respondemos a cada uno de los hechos de esta, en la siguiente forma:

<b>Al 1</b>	<b>Es cierto</b> , como se evidencia en el documento de identidad de la demandante que obra en el plenario.
<b>Al 2</b>	<b>No me consta</b> , se trata de una situación de índole personal de la demandante.
<b>Al 3</b>	<b>No me consta</b> , se trata de una afirmación de la demandante que involucra a un tercero, como lo es el ISS hoy Colpensiones. Por lo anterior, nos atenemos a lo que se pruebe dentro del proceso.
<b>Al 4</b>	<b>No es un hecho</b> , lo manifestado corresponde a una apreciación subjetiva respecto de un fundamento jurídico.
<b>Al 5</b>	<b>No es un hecho</b> , lo manifestado corresponde a una apreciación subjetiva respecto de un fundamento jurídico.
<b>Al 6</b>	<b>No es cierto como se indica en lo que respecta a mi representada</b> , en tanto que, la demandante recibió una asesoría de manera clara, oportuna, suficiente y cierta por parte de Horizonte hoy Porvenir S.A., respecto a las condiciones pensionales en cada régimen, sobre las características de cada uno y, las diferencias entre los dos, así como las consecuencias de su traslado, cumpliendo a cabalidad con las normas que se encontraban vigentes para dicha data.



	<p>Por lo anterior, la demandante de manera libre y voluntaria realizó el traslado horizontal ante horizonte hoy Porvenir S.A., mediante la suscripción del formulario de afiliación el 26 de agosto del 2000 con fecha de efectividad el 01 de noviembre del 2000.</p>
AI 7	<p><b>No es cierto como se indica en lo que respecta a mi representada</b>, en tanto que, la demandante recibió una asesoría de manera clara, oportuna, suficiente y cierta por parte de Horizonte hoy Porvenir S.A., respecto a las condiciones pensionales en cada régimen, sobre las características de cada uno y, las diferencias entre los dos, así como las consecuencias de su traslado, cumpliendo a cabalidad con las normas que se encontraban vigentes para dicha data.</p> <p>No obstante, debe indicarse que, para la fecha en que se la afiliación, no existía la obligación de informar el monto de la pensión que se obtendría entre un régimen y otro, razón por la cual, no era obligatorio hacer proyecciones pensionales por escrito en uno u otro régimen, pues ninguna norma así lo exigía, máxime, si se tiene en cuenta que esos requerimientos surgieron con mucha posterioridad, es decir, a partir de la expedición de los Decretos 2555 de 2010, el Decreto 2071 de 2015 y la Ley 1748 de 2015.</p>
AI 8	<p><b>No es un hecho</b>, lo manifestado corresponde a una apreciación subjetiva respecto de un fundamento jurídico.</p>
AI 9	<p><b>No es cierto como se indica en lo que respecta a mi representada</b>, en tanto que, la demandante recibió una asesoría de manera clara, oportuna, suficiente y cierta por parte de Horizonte hoy Porvenir S.A., respecto a las condiciones pensionales en cada régimen, sobre las características de cada uno y, las diferencias entre los dos, así como las consecuencias de su traslado, cumpliendo a cabalidad con las normas que se encontraban vigentes para dicha data.</p> <p>En dicha asesoría, se le informó a la demandante, entre otras cosas, sobre el régimen de transición; que el monto de su pensión dependería del capital aportado en su cuenta individual (110% del valor del salario mínimo y sometida a la realización de un cálculo actuarial); que podría realizar aportes voluntarios, periódicos u ocasionales a su cuenta; que tendría derecho a bono pensional si había aportado 150 semanas dentro de los tres años anteriores al traslado de régimen pensional; que su vinculación al Régimen de Ahorro Individual era completamente voluntaria; sobre las diferentes modalidades de pensión y la forma en que cada una de ellas funcionaba, al igual que los requisitos para acceder a esta. También se le comunicó que su pensión dependería de variables como su edad, su estado civil, sus beneficiarios entre otros. Se le informó también que podría acceder a una pensión mínima si a los 62 años no cumplía con el capital necesario para la pensión.</p>



Al 10	<b>No es un hecho</b> , lo manifestado corresponde a una apreciación subjetiva respecto de un fundamento jurídico.
Al 11	<b>No es un hecho</b> , lo manifestado corresponde a una apreciación subjetiva respecto de un fundamento jurídico.
Al 12	<p><b>No es cierto como se indica en lo que respecta a mi representada</b>, en tanto que, la demandante recibió una asesoría de manera clara, oportuna, suficiente y cierta por parte de Horizonte hoy Porvenir S.A., respecto a las condiciones pensionales en cada régimen, sobre las características de cada uno y, las diferencias entre los dos, así como las consecuencias de su traslado, cumpliendo a cabalidad con las normas que se encontraban vigentes para dicha data.</p> <p>Debe decirse que, la afiliación se realiza con base en la información suministrada por el afiliado por cuanto es este el conocedor de su situación personal y laboral, en esos términos se diligencia el formulario de vinculación.</p>
Al 13	<p><b>No es cierto como se indica en lo que respecta a mi representada</b>, en tanto que, la demandante recibió una asesoría de manera clara, oportuna, suficiente y cierta por parte de Horizonte hoy Porvenir S.A., respecto a las condiciones pensionales en cada régimen, sobre las características de cada uno y, las diferencias entre los dos, así como las consecuencias de su traslado, cumpliendo a cabalidad con las normas que se encontraban vigentes para dicha data.</p> <p>Debe decirse que, la afiliación se realiza con base en la información suministrada por el afiliado por cuanto es este el conocedor de su situación personal y laboral, en esos términos se diligencia el formulario de vinculación.</p>
Al 14	<b>No me consta</b> , se trata de una afirmación de la demandante que involucra a un tercero, como lo es ING hoy Protección. Por lo anterior, nos atenemos a lo que se pruebe dentro del proceso.
Al 15	<b>No me consta</b> , se trata de una afirmación de la demandante que involucra a un tercero, como lo es ING hoy Protección. Por lo anterior, nos atenemos a lo que se pruebe dentro del proceso.
Al 16	<b>No me consta</b> , se trata de una afirmación de la demandante que involucra a un tercero, como lo es ING hoy Protección. Por lo anterior, nos atenemos a lo que se pruebe dentro del proceso.
Al 17	<b>No me consta</b> , se trata de una afirmación de la demandante que involucra a un tercero, como lo es ING hoy Protección. Por lo anterior, nos atenemos a lo que se pruebe dentro del proceso.
Al 18	<b>No me consta</b> , se trata de una afirmación de la demandante que involucra a un tercero, como lo es ING hoy Protección. Por lo anterior, nos atenemos a lo que se pruebe dentro del proceso.



Al 19	<b>No me consta</b> , se trata de una afirmación de la demandante que involucra a un tercero, como lo es ING hoy Protección. Por lo anterior, nos atenemos a lo que se pruebe dentro del proceso.
Al 20	<b>No me consta</b> , se trata de una afirmación de la demandante que involucra a un tercero, como lo es ING hoy Protección. Por lo anterior, nos atenemos a lo que se pruebe dentro del proceso.
Al 21	<b>No me consta</b> , se trata de una afirmación de la demandante que involucra a un tercero, como lo es ING hoy Protección. Por lo anterior, nos atenemos a lo que se pruebe dentro del proceso.
Al 22	<b>No me consta</b> , se trata de una afirmación de la demandante que involucra a un tercero, como lo es ING hoy Protección. Por lo anterior, nos atenemos a lo que se pruebe dentro del proceso.
Al 23	<b>No me consta</b> , se trata de una afirmación de la demandante que involucra a un tercero, como lo es ING hoy Protección. Por lo anterior, nos atenemos a lo que se pruebe dentro del proceso.
Al 24	<b>No me consta</b> , se trata de una afirmación de la demandante que involucra a un tercero, como lo es ING hoy Protección. Por lo anterior, nos atenemos a lo que se pruebe dentro del proceso.
Al 25	<b>No me consta</b> , se trata de una afirmación de la demandante que involucra a un tercero, como lo es ING hoy Protección. Por lo anterior, nos atenemos a lo que se pruebe dentro del proceso.
Al 26	<b>No me consta</b> , se trata de una afirmación de la demandante que involucra a un tercero, como lo es ING hoy Protección. Por lo anterior, nos atenemos a lo que se pruebe dentro del proceso.
Al 27	<b>No me consta</b> , se trata de una afirmación de la demandante que involucra a un tercero, como lo es ING hoy Protección. Por lo anterior, nos atenemos a lo que se pruebe dentro del proceso.
Al 28	<b>No me consta</b> , se trata de una afirmación de la demandante que involucra a un tercero, como lo es ING hoy Protección. Por lo anterior, nos atenemos a lo que se pruebe dentro del proceso.
Al 29	<b>No me consta</b> , se trata de una afirmación de la demandante que involucra a un tercero, como lo es ING hoy Protección. Por lo anterior, nos atenemos a lo que se pruebe dentro del proceso.
Al 30	<b>No me consta</b> , se trata de una afirmación de la demandante que involucra a un tercero, como lo es ING hoy Protección. Por lo anterior, nos atenemos a lo que se pruebe dentro del proceso.
Al 31	<b>No me consta</b> , se trata de una afirmación de la demandante que involucra a un tercero, como lo es Colfondos. Por lo anterior, nos atenemos a lo que se pruebe dentro del proceso.



Al 32	<b>No me consta</b> , se trata de una afirmación de la demandante que involucra a un tercero, como lo es Colfondos. Por lo anterior, nos atenemos a lo que se pruebe dentro del proceso.
Al 33	<b>No me consta</b> , se trata de una afirmación de la demandante que involucra a un tercero, como lo es Colfondos. Por lo anterior, nos atenemos a lo que se pruebe dentro del proceso.
Al 34	<b>No me consta</b> , se trata de una afirmación de la demandante que involucra a un tercero, como lo es Colfondos. Por lo anterior, nos atenemos a lo que se pruebe dentro del proceso.
Al 35	<b>No me consta</b> , se trata de una afirmación de la demandante que involucra a un tercero, como lo es Colfondos. Por lo anterior, nos atenemos a lo que se pruebe dentro del proceso.
Al 36	<b>No me consta</b> , se trata de una afirmación de la demandante que involucra a un tercero, como lo es Colfondos. Por lo anterior, nos atenemos a lo que se pruebe dentro del proceso.
Al 37	<b>No me consta</b> , se trata de una afirmación de la demandante que involucra a un tercero, como lo es Colfondos. Por lo anterior, nos atenemos a lo que se pruebe dentro del proceso.
Al 38	<b>No me consta</b> , se trata de una afirmación de la demandante que involucra a un tercero, como lo es Colfondos. Por lo anterior, nos atenemos a lo que se pruebe dentro del proceso.
Al 39	<b>No me consta</b> , se trata de una afirmación de la demandante que involucra a un tercero, como lo es Colfondos. Por lo anterior, nos atenemos a lo que se pruebe dentro del proceso.
Al 40	<b>No me consta</b> , se trata de una afirmación de la demandante que involucra a un tercero, como lo es Colfondos. Por lo anterior, nos atenemos a lo que se pruebe dentro del proceso.
Al 41	<b>No me consta</b> , se trata de una afirmación de la demandante que involucra a un tercero, como lo es Colfondos. Por lo anterior, nos atenemos a lo que se pruebe dentro del proceso.
Al 42	<b>No me consta</b> , se trata de una afirmación de la demandante que involucra a un tercero, como lo es Colfondos. Por lo anterior, nos atenemos a lo que se pruebe dentro del proceso.
Al 43	<b>No me consta</b> , se trata de una afirmación de la demandante que involucra a un tercero, como lo es Colfondos. Por lo anterior, nos atenemos a lo que se pruebe dentro del proceso.
Al 44	<b>No me consta</b> , se trata de una afirmación de la demandante que involucra a un tercero, como lo es Colfondos. Por lo anterior, nos atenemos a lo que se pruebe dentro del proceso.



AI 45	<b>No me consta</b> , se trata de una afirmación de la demandante que involucra a un tercero, como lo es Colfondos. Por lo anterior, nos atenemos a lo que se pruebe dentro del proceso.
AI 46	<b>No me consta</b> , se trata de una afirmación de la demandante que involucra a un tercero, como lo es Colfondos. Por lo anterior, nos atenemos a lo que se pruebe dentro del proceso.
AI 47	<b>No me consta</b> , se trata de una afirmación de la demandante que involucra a un tercero, como lo es Colfondos. Por lo anterior, nos atenemos a lo que se pruebe dentro del proceso.
AI 48	<p><b>No es cierto como se indica</b>, en tanto que, la demandante recibió una asesoría de manera clara, oportuna, suficiente y cierta por parte de Horizonte hoy Porvenir S.A., respecto a las condiciones pensionales en cada régimen, sobre las características de cada uno y, las diferencias entre los dos, así como las consecuencias de su traslado, cumpliendo a cabalidad con las normas que se encontraban vigentes para dicha data.</p> <p>Por lo anterior, la demandante de manera libre y voluntaria realizó el traslado horizontal ante horizonte hoy Porvenir S.A., mediante la suscripción del formulario de afiliación el 26 de agosto del 2000 con fecha de efectividad el 01 de noviembre del 2000.</p>
AI 49	<p><b>No es cierto como se indica</b>, en tanto que, la demandante recibió una asesoría de manera clara, oportuna, suficiente y cierta por parte de Horizonte hoy Porvenir S.A., respecto a las condiciones pensionales en cada régimen, sobre las características de cada uno y, las diferencias entre los dos, así como las consecuencias de su traslado, cumpliendo a cabalidad con las normas que se encontraban vigentes para dicha data.</p> <p>No obstante, debe indicarse que, para la fecha en que se la afiliación, no existía la obligación de informar el monto de la pensión que se obtendría entre un régimen y otro, razón por la cual, no era obligatorio hacer proyecciones pensionales por escrito en uno u otro régimen, pues ninguna norma así lo exigía, máxime, si se tiene en cuenta que esos requerimientos surgieron con mucha posterioridad, es decir, a partir de la expedición de los Decretos 2555 de 2010, el Decreto 2071 de 2015 y la Ley 1748 de 2015.</p>
AI 50	<b>No es cierto como se indica</b> , en tanto que, la demandante recibió una asesoría de manera clara, oportuna, suficiente y cierta por parte de Horizonte hoy Porvenir S.A., respecto a las condiciones pensionales en cada régimen, sobre las características de cada uno y, las diferencias entre los dos, así como las consecuencias de su traslado, cumpliendo a cabalidad con las normas que se encontraban vigentes para dicha data.



	<p>Por lo anterior, la demandante de manera libre y voluntaria realizó el traslado horizontal ante horizonte hoy Porvenir S.A., mediante la suscripción del formulario de afiliación el 26 de agosto del 2000 con fecha de efectividad el 01 de noviembre del 2000.</p>
<b>Al 52</b>	<p><b>No es cierto</b>, como quiera que, la demandante recibió una asesoría de manera clara, oportuna, suficiente y cierta por parte de Horizonte hoy Porvenir S.A., respecto a las condiciones pensionales en cada régimen, sobre las características de cada uno y, las diferencias entre los dos, así como las consecuencias de su traslado, cumpliendo a cabalidad con las normas que se encontraban vigentes para dicha data.</p> <p>En dicha asesoría, se le informó a la demandante, entre otras cosas, sobre el régimen de transición; que el monto de su pensión dependería del capital aportado en su cuenta individual (110% del valor del salario mínimo y sometida a la realización de un cálculo actuarial); que podría realizar aportes voluntarios, periódicos u ocasionales a su cuenta; que tendría derecho a bono pensional si había aportado 150 semanas dentro de los tres años anteriores al traslado de régimen pensional; que su vinculación al Régimen de Ahorro Individual era completamente voluntaria; sobre las diferentes modalidades de pensión y la forma en que cada una de ellas funcionaba, al igual que los requisitos para acceder a esta. También se le comunicó que su pensión dependería de variables como su edad, su estado civil, sus beneficiarios entre otros. Se le informó también que podría acceder a una pensión mínima si a los 62 años no cumplía con el capital necesario para la pensión.</p> <p>Así mismo, a la demandante se le indicó que de sus aportes se realizaría un descuento mensual para gastos de gastos de administración, los cuales se verían reflejados en los rendimientos que sus aportes generarían; que de este mismo descuento se destinaría otra parte para el pago de una aseguradora que, en caso de incurrir en contingencias de invalidez o muerte, cubriría el 100% de la prestación a la cual tuviese derecho; lo anterior de conformidad con el artículo 20 de la Ley 100 de 1993.</p> <p>De igual manera, se le comunicó que entre los beneficios más importantes del Régimen de Ahorro Individual se destacan: En caso de que el afiliado fallezca y no cumpla con el capital para pensionarse, sus herederos podrán disponer de ese capital; en caso de no completar el capital necesario para la pensión y si cuenta con 1150 semanas de cotización, podría acceder a la garantía de la pensión mínima; si el monto de su pensión llega a ser superior al 70% de su Ingreso Base de Liquidación, podrá disponer de sus excedentes de libre disposición. Así mismo, se le explicaron las características técnicas del Régimen de Prima Media, administrado por el Instituto de Seguros Sociales.</p>



	<p>Por lo anterior, la demandante de manera libre y voluntaria realizó el traslado horizontal ante horizonte hoy Porvenir S.A., mediante la suscripción del formulario de afiliación el 26 de agosto del 2000 con fecha de efectividad el 01 de noviembre del 2000.</p>
AI 53	<p><b>No es cierto como se indica</b>, en tanto que, la demandante recibió una asesoría de manera clara, oportuna, suficiente y cierta por parte de Horizonte hoy Porvenir S.A., respecto a las condiciones pensionales en cada régimen, sobre las características de cada uno y, las diferencias entre los dos, así como las consecuencias de su traslado, cumpliendo a cabalidad con las normas que se encontraban vigentes para dicha data.</p> <p>Por lo anterior, la demandante de manera libre y voluntaria realizó el traslado horizontal ante horizonte hoy Porvenir S.A., mediante la suscripción del formulario de afiliación el 26 de agosto del 2000 con fecha de efectividad el 01 de noviembre del 2000.</p>
AI 54	<p><b>No es cierto como se indica</b>, como quiera que, la demandante recibió una asesoría de manera clara, oportuna, suficiente y cierta por parte de Horizonte hoy Porvenir S.A., respecto a las condiciones pensionales en cada régimen, sobre las características de cada uno y, las diferencias entre los dos, así como las consecuencias de su traslado, cumpliendo a cabalidad con las normas que se encontraban vigentes para dicha data.</p> <p>En dicha asesoría, se le informó a la demandante, entre otras cosas, sobre el régimen de transición; <b>que el monto de su pensión dependería del capital aportado en su cuenta individual (110% del valor del salario mínimo y sometida a la realización de un cálculo actuarial)</b>; que podría realizar aportes voluntarios, periódicos u ocasionales a su cuenta; que tendría derecho a bono pensional si había aportado 150 semanas dentro de los tres años anteriores al traslado de régimen pensional; que su vinculación al Régimen de Ahorro Individual era completamente voluntaria; sobre las diferentes modalidades de pensión y la forma en que cada una de ellas funcionaba, al igual que los requisitos para acceder a esta. <b>También se le comunicó que su pensión dependería de variables como su edad, su estado civil, sus beneficiarios entre otros.</b> Se le informó también que podría acceder a una pensión mínima si a los 62 años no cumplía con el capital necesario para la pensión.</p>
AI 55	<p><b>No es cierto como se indica</b>, como quiera que, la demandante recibió una asesoría de manera clara, oportuna, suficiente y cierta por parte de Horizonte hoy Porvenir S.A., respecto a las condiciones pensionales en cada régimen, sobre las características de cada uno y, las diferencias entre los dos, así como las</p>





	<p>consecuencias de su traslado, cumpliendo a cabalidad con las normas que se encontraban vigentes para dicha data.</p> <p>En dicha asesoría, se le informó a la demandante, entre otras cosas, sobre el régimen de transición; que el monto de su pensión dependería del capital aportado en su cuenta individual (110% del valor del salario mínimo y sometida a la realización de un cálculo actuarial); que podría realizar aportes voluntarios, periódicos u ocasionales a su cuenta; que tendría derecho a bono pensional si había aportado 150 semanas dentro de los tres años anteriores al traslado de régimen pensional; que su vinculación al Régimen de Ahorro Individual era completamente voluntaria; sobre las diferentes modalidades de pensión y la forma en que cada una de ellas funcionaba, al igual que los requisitos para acceder a esta. También se le comunicó que su pensión dependería de variables como su edad, su estado civil, sus beneficiarios entre otros. Se le informó también que podría acceder a una pensión mínima si a los 62 años no cumplía con el capital necesario para la pensión.</p> <p>Así mismo, a la demandante se le indicó que de sus aportes se realizaría un descuento mensual para gastos de administración, los cuales se verían reflejados en los rendimientos que sus aportes generarían; que de este mismo descuento se destinaría otra parte para el pago de una aseguradora que, en caso de incurrir en contingencias de invalidez o muerte, cubriría el 100% de la prestación a la cual tuviese derecho; lo anterior de conformidad con el artículo 20 de la Ley 100 de 1993.</p> <p>De igual manera, se le comunicó que entre los beneficios más importantes del Régimen de Ahorro Individual se destacan: En caso de que el afiliado fallezca y no cumpla con el capital para pensionarse, sus herederos podrán disponer de ese capital; en caso de no completar el capital necesario para la pensión y si cuenta con 1150 semanas de cotización, podría acceder a la garantía de la pensión mínima; si el monto de su pensión llega a ser superior al 70% de su Ingreso Base de Liquidación, podrá disponer de sus excedentes de libre disposición. Así mismo, se le explicaron las características técnicas del Régimen de Prima Media, administrado por el Instituto de Seguros Sociales.</p> <p>Por lo anterior, la demandante de manera libre y voluntaria realizó el traslado horizontal ante horizonte hoy Porvenir S.A., mediante la suscripción del formulario de afiliación el 26 de agosto del 2000 con fecha de efectividad el 01 de noviembre del 2000.</p>
Al 56	<p><b>No es cierto como se indica</b>, como quiera que, la demandante recibió una asesoría de manera clara, oportuna, suficiente y cierta por parte de Horizonte hoy Porvenir S.A., respecto a las condiciones pensionales en cada régimen, sobre las</p>



	<p>características de cada uno y, las diferencias entre los dos, así como las consecuencias de su traslado, cumpliendo a cabalidad con las normas que se encontraban vigentes para dicha data.</p> <p>En dicha asesoría, se le informó a la demandante, entre otras cosas, sobre el régimen de transición; <b>que el monto de su pensión dependería del capital aportado en su cuenta individual (110% del valor del salario mínimo y sometida a la realización de un cálculo actuarial)</b>; que podría realizar aportes voluntarios, periódicos u ocasionales a su cuenta; que tendría derecho a bono pensional si había aportado 150 semanas dentro de los tres años anteriores al traslado de régimen pensional; que su vinculación al Régimen de Ahorro Individual era completamente voluntaria; sobre las diferentes modalidades de pensión y la forma en que cada una de ellas funcionaba, al igual que los requisitos para acceder a esta. <b>También se le comunicó que su pensión dependería de variables como su edad, su estado civil, sus beneficiarios entre otros.</b> Se le informó también que podría acceder a una pensión mínima si a los 62 años no cumplía con el capital necesario para la pensión.</p>
AI 57	<p><b>No es un hecho</b>, lo manifestado corresponde a una apreciación subjetiva respecto de un fundamento jurídico.</p> <p>No obstante, lo anterior, debe indicarse que, para la fecha en que se la afiliación, no existía la obligación de informar el monto de la pensión que se obtendría entre un régimen y otro, razón por la cual, no era obligatorio hacer proyecciones pensionales por escrito en uno u otro régimen, pues ninguna norma así lo exigía, máxime, si se tiene en cuenta que esos requerimientos surgieron con mucha posterioridad, es decir, a partir de la expedición de los Decretos 2555 de 2010, el Decreto 2071 de 2015 y la Ley 1748 de 2015.</p>
AI 58	<p><b>No es cierto como se indica</b>, como quiera que, la demandante recibió una asesoría de manera clara, oportuna, suficiente y cierta por parte de Horizonte hoy Porvenir S.A., respecto a las condiciones pensionales en cada régimen, sobre las características de cada uno y, las diferencias entre los dos, así como las consecuencias de su traslado, cumpliendo a cabalidad con las normas que se encontraban vigentes para dicha data.</p> <p>En dicha asesoría, se le informó a la demandante, entre otras cosas, sobre el régimen de transición; <b>que el monto de su pensión dependería del capital aportado en su cuenta individual (110% del valor del salario mínimo y sometida a la realización de un cálculo actuarial)</b>; que podría realizar aportes voluntarios, periódicos u ocasionales a su cuenta; que tendría derecho a bono pensional si había aportado 150 semanas dentro de los tres años anteriores al traslado de régimen pensional; que su vinculación al Régimen de Ahorro Individual era</p>



	completamente voluntaria; sobre las diferentes modalidades de pensión y la forma en que cada una de ellas funcionaba, al igual que los requisitos para acceder a esta. <b>También se le comunicó que su pensión dependería de variables como su edad, su estado civil, sus beneficiarios entre otros.</b> Se le informó también que podría acceder a una pensión mínima si a los 62 años no cumplía con el capital necesario para la pensión.
Al 59	<b>No es cierto como se indica</b> , los asesores comerciales están plenamente capacitados para brindar la debida información a los potenciales afiliados, respecto a las condiciones pensionales en cada régimen, sobre las características de cada uno y, las diferencias entre los dos, así como las consecuencias de los traslados.
Al 60	<b>No es cierto como se indica</b> , los asesores comerciales están plenamente capacitados para brindar la debida información a los potenciales afiliados, respecto a las condiciones pensionales en cada régimen, sobre las características de cada uno y, las diferencias entre los dos, así como las consecuencias de los traslados.
Al 61	<p><b>No es cierto como se indica</b>, como quiera que, la demandante recibió una asesoría de manera clara, oportuna, suficiente y cierta por parte de Horizonte hoy Porvenir S.A., respecto a las condiciones pensionales en cada régimen, sobre las características de cada uno y, las diferencias entre los dos, así como las consecuencias de su traslado, cumpliendo a cabalidad con las normas que se encontraban vigentes para dicha data.</p> <p>En dicha asesoría, se le informó a la demandante, entre otras cosas, sobre el régimen de transición; <b>que el monto de su pensión dependería del capital aportado en su cuenta individual (110% del valor del salario mínimo y sometida a la realización de un cálculo actuarial)</b>; que podría realizar aportes voluntarios, periódicos u ocasionales a su cuenta; que tendría derecho a bono pensional si había aportado 150 semanas dentro de los tres años anteriores al traslado de régimen pensional; que su vinculación al Régimen de Ahorro Individual era completamente voluntaria; sobre las diferentes modalidades de pensión y la forma en que cada una de ellas funcionaba, al igual que los requisitos para acceder a esta. <b>También se le comunicó que su pensión dependería de variables como su edad, su estado civil, sus beneficiarios entre otros.</b> Se le informó también que podría acceder a una pensión mínima si a los 62 años no cumplía con el capital necesario para la pensión.</p>
Al 62	<b>No es cierto como se indica</b> , como quiera que, la demandante recibió una asesoría de manera clara, oportuna, suficiente y cierta por parte de Horizonte hoy Porvenir S.A., respecto a las condiciones pensionales en cada régimen, sobre las características de cada uno y, las diferencias entre los dos, así como las

	<p>consecuencias de su traslado, cumpliendo a cabalidad con las normas que se encontraban vigentes para dicha data.</p> <p>Aunado a ello, debe indicarse que al momento de la afiliación, así como durante la vigencia de esta, mi representada dio una continua asesoría e información en relación con las condiciones del régimen acorde a la normatividad vigente, y mantiene informados a sus afiliados de las distintas alternativas de ahorro, los cambios normativos, así como toda la información de relevancia en materia de seguridad social, a través de distintos canales (extractos trimestrales, línea de servicio al cliente, medios de comunicación, página de internet, asesores comerciales).</p>
Al 63	<b>No me consta</b> , como quiera que no obra en poder de mi representada dicha solicitud, aunado a ello, la petición que fue aportada con la demanda no cuenta con soporte de entrega ni de recibido.
Al 64	<b>No me consta</b> , como quiera que no obra en poder de mi representada dicha solicitud, aunado a ello, la petición que fue aportada con la demanda no cuenta con soporte de entrega ni de recibido.
Al 65	<b>No me consta</b> , se trata de una afirmación de la demandante que involucra a un tercero, como lo es Skandia. Por lo anterior, nos atenemos a lo que se pruebe dentro del proceso.
Al 66	<b>No me consta</b> , se trata de una afirmación de la demandante que involucra a un tercero, como lo es Skandia. Por lo anterior, nos atenemos a lo que se pruebe dentro del proceso.
Al 67	<b>No me consta</b> , se trata de una afirmación de la demandante que involucra a un tercero, como lo es Skandia. Por lo anterior, nos atenemos a lo que se pruebe dentro del proceso.
Al 68	<b>No me consta</b> , se trata de una afirmación de la demandante que involucra a un tercero, como lo es Skandia. Por lo anterior, nos atenemos a lo que se pruebe dentro del proceso.
Al 69	<b>No me consta</b> , se trata de una afirmación de la demandante que involucra a un tercero, como lo es Skandia. Por lo anterior, nos atenemos a lo que se pruebe dentro del proceso.
Al 70	<b>No me consta</b> , se trata de una afirmación de la demandante que involucra a un tercero, como lo es Skandia. Por lo anterior, nos atenemos a lo que se pruebe dentro del proceso.
Al 71	<b>No me consta</b> , se trata de una afirmación de la demandante que involucra a un tercero, como lo es Skandia. Por lo anterior, nos atenemos a lo que se pruebe dentro del proceso.
Al 72	<b>No me consta</b> , se trata de una afirmación de la demandante que involucra a un tercero, como lo es Skandia. Por lo anterior, nos atenemos a lo que se pruebe dentro del proceso.

AI 73	<b>No me consta</b> , se trata de una afirmación de la demandante que involucra a un tercero, como lo es Skandia. Por lo anterior, nos atenemos a lo que se pruebe dentro del proceso.
AI 74	<b>No me consta</b> , se trata de una afirmación de la demandante que involucra a un tercero, como lo es Skandia. Por lo anterior, nos atenemos a lo que se pruebe dentro del proceso.
AI 75	<b>No me consta</b> , se trata de una afirmación de la demandante que involucra a un tercero, como lo es Skandia. Por lo anterior, nos atenemos a lo que se pruebe dentro del proceso.
AI 76	<b>No me consta</b> , se trata de una afirmación de la demandante que involucra a un tercero, como lo es Skandia. Por lo anterior, nos atenemos a lo que se pruebe dentro del proceso.
AI 77	<b>No me consta</b> , se trata de una afirmación de la demandante que involucra a un tercero, como lo es Skandia. Por lo anterior, nos atenemos a lo que se pruebe dentro del proceso.
AI 78	<b>No me consta</b> , se trata de una afirmación de la demandante que involucra a un tercero, como lo es Skandia. Por lo anterior, nos atenemos a lo que se pruebe dentro del proceso.
AI 79	<b>No me consta</b> , se trata de una afirmación de la demandante que involucra a un tercero, como lo es Skandia. Por lo anterior, nos atenemos a lo que se pruebe dentro del proceso.
AI 80	<b>No me consta</b> , se trata de una afirmación de la demandante que involucra a un tercero, como lo es Skandia. Por lo anterior, nos atenemos a lo que se pruebe dentro del proceso.
AI 81	<b>No me consta</b> , se trata de una afirmación de la demandante que involucra a un tercero, como lo es Skandia. Por lo anterior, nos atenemos a lo que se pruebe dentro del proceso.
AI 82	<b>No me consta</b> , se trata de una afirmación de la demandante que involucra a un tercero, como lo es Skandia. Por lo anterior, nos atenemos a lo que se pruebe dentro del proceso.
AI 83	<b>No me consta</b> , se trata de una afirmación de la demandante que involucra a un tercero, como lo es Colpensiones. Por lo anterior, nos atenemos a lo que se pruebe dentro del proceso.
AI 84	<b>No me consta</b> , se trata de una afirmación de la demandante que involucra a un tercero, como lo es Colpensiones. Por lo anterior, nos atenemos a lo que se pruebe dentro del proceso.
AI 85	<b>No me consta</b> , se trata de una afirmación de la demandante que involucra a un tercero, como lo es Colpensiones. Por lo anterior, nos atenemos a lo que se pruebe dentro del proceso.

## 2.2 Contestación pretensiones

En nombre de la Demandada, me opongo a todas y cada una de las pretensiones contrarias a mi representación, por cuanto carecen de manera manifiesta de todo fundamento jurídico y fáctico. Sin embargo, se da contestación frente a cada una de las pretensiones, según su numeración:

DECLARATIVAS	
A la 1	<b>Me opongo a esta pretensión</b> , por cuanto, el traslado de régimen pensional efectuado por la demandante y su posterior traslado horizontal efectuado con Horizonte hoy Porvenir S.A. es completamente válido, ya que el mismo estuvo precedido por una asesoría clara, expresa, completa, veraz y oportuna, con toda la información pertinente y necesaria, acerca de cada uno de los regímenes pensionales, por lo cual, se realizó conforme a la ley.
A la 2	<b>Me opongo a esta pretensión</b> , por cuanto, el traslado de régimen pensional efectuado por la demandante y su posterior traslado horizontal efectuado con Horizonte hoy Porvenir S.A. es completamente válido, ya que el mismo estuvo precedido por una asesoría clara, expresa, completa, veraz y oportuna, con toda la información pertinente y necesaria, acerca de cada uno de los regímenes pensionales, por lo cual, se realizó conforme a la ley.
A la 3	<b>Me opongo a esta pretensión</b> , por cuanto, el traslado de régimen pensional efectuado por la demandante y su posterior traslado horizontal efectuado con Horizonte hoy Porvenir S.A. es completamente válido, ya que el mismo estuvo precedido por una asesoría clara, expresa, completa, veraz y oportuna, con toda la información pertinente y necesaria, acerca de cada uno de los regímenes pensionales, por lo cual, se realizó conforme a la ley.
A la 4	<b>Me opongo a esta pretensión</b> , por cuanto, el traslado de régimen pensional efectuado por la demandante y su posterior traslado horizontal efectuado con Horizonte hoy Porvenir S.A. es completamente válido, ya que el mismo estuvo precedido por una asesoría clara, expresa, completa, veraz y oportuna, con toda la información pertinente y necesaria, acerca de cada uno de los regímenes pensionales, por lo cual, se realizó conforme a la ley.
CONDENATORIAS	
A la 1	<b>Me opongo a esta pretensión</b> , el traslado de régimen pensional efectuado por la demandante y su posterior traslado horizontal efectuado con Horizonte hoy Porvenir S.A. es completamente válido, ya que el mismo estuvo precedido por una asesoría clara, expresa, completa, veraz y oportuna, con toda la información pertinente y necesaria, acerca de cada uno de los regímenes pensionales, por lo cual, se realizó conforme a la ley.

	De ahí que, no es procedente ordenar la devolución de los dineros obrantes en la Cuenta de Ahorro Individual de la demandante en virtud de las cotizaciones realizadas, en tanto su vinculación al RAIS reviste de completa validez.
<b>A la 2</b>	<b>Me opongo a esta pretensión</b> , ya que, si bien es una pretensión dirigida en contra de un tercero ajeno a Porvenir S.A., en la medida en que el traslado fue completamente válido y el demandante se encuentra vinculado con mi representada, no hay ninguna obligación que deba cumplir dicha Administradora del RPM.
<b>A la 3</b>	<b>Me opongo a esta pretensión</b> , ya que, si bien es una pretensión dirigida en contra de un tercero ajeno a Porvenir S.A., en la medida en que el traslado fue completamente válido y el demandante se encuentra vinculado con mi representada, no hay ninguna obligación que deba cumplir dicha Administradora del RPM.
<b>A la 4</b>	<b>Me opongo a esta pretensión</b> , ya que, si bien es una pretensión dirigida en contra de un tercero ajeno a Porvenir S.A., en la medida en que el traslado fue completamente válido y el demandante se encuentra vinculado con mi representada, no hay ninguna obligación que deba cumplir dicha Administradora del RPM.
<b>A la 5</b>	<b>Me opongo a esta pretensión</b> , ya que, si bien es una pretensión dirigida en contra de un tercero ajeno a Porvenir S.A., en la medida en que el traslado fue completamente válido y el demandante se encuentra vinculado con mi representada, no hay ninguna obligación que deba cumplir dicha Administradora del RPM.
<b>A la 6</b>	<b>Ni me opongo, ni me allano</b> , como quiera que se trata de una apreciación subjetiva con base en un fundamento jurídico.
<b>A la 7</b>	<b>Me opongo a esta pretensión</b> , por cuanto que, al no haber fundamento de las pretensiones de la demanda, deberá absolverse a mi representada de todas y cada una de las pretensiones y, en consecuencia, condenar al demandante en costas y agencias en derecho.
<b>A la 8</b>	<b>Me opongo a esta pretensión</b> , por cuanto que, al no haber fundamento de las pretensiones de la demanda, deberá absolverse a mi representada de todas y cada una de las pretensiones incluyendo cualquier condena que se pudiese imponer a título de facultades ultra y extra petita.

### 3. FUNDAMENTOS DE DERECHO

#### 3.1. “Hablemos de la ineficacia de la afiliación”

Mi representada cumplió con el deber de brindarle información a la demandante al momento del cambio de AFP privada.

Es importante señalar que la demandante tomó la decisión libre y voluntaria de cambiarse de AFP privada luego de recibir de parte de mi representada la información necesaria para tomar dicha decisión, información que se brindó atendiendo los parámetros establecidos en las normas vigentes en ese momento, pues era materialmente imposible aplicar las directrices que fueron desarrolladas con mucha posterioridad por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, y, más adelante, por varias normas legales y reglamentarias.

Sobre lo anterior, nos permitimos hacer la siguiente línea de tiempo para mayor claridad del despacho:

1	2	3	4
Dec. 3466/1982 (art.14)	Dec. 663/1993 (art. 30)	Dec. 656/1994 (arts. 14 y 15)	Ley 100/1993 (art. 13)
Aplica para consumidores / Podría aplicarse a los afiliados al SISS – Obligación de brindar información “veraz y suficiente”	Obligación de las AFP de “Suministrar a los usuarios de los servicios que prestan la información necesaria para lograr la mayor transparencia en las operaciones que realicen, de suerte que les permita, a través de elementos de juicio claros y objetivos, escoger las mejores opciones del mercado y poder tomar decisiones informadas.”	Regula las obligaciones de las entidades administradoras de fondos de pensiones no menciona la de entregar información a los afiliados.	No se establece obligación a cargo de las AFP respecto del suministro de información.  “La selección de uno cualquiera de los regímenes previstos por el artículo anterior es libre y voluntaria por parte del afiliado, quien para tal efecto manifestará por escrito su elección al momento de la vinculación o del traslado (...)”

De lo antes expuesto es forzoso colegir que si bien existía una obligación para las administradoras del Sistema General de Pensiones de entregar información a quienes pretendiesen vincularse a ellas, era una información necesaria, veraz y suficiente, pero nada más. Por lo tanto, no había obligación de brindar una asesoría, de dar un buen consejo incluso para desincentivar la afiliación, ni, mucho menos una doble asesoría. Tampoco existía la obligación de informar por escrito sobre los beneficios puntuales que cada uno de los regímenes pensionales ofrecía, ni sobre el monto de la pensión que se obtendría, esto es, no era obligatorio hacer proyecciones pensionales por escrito en uno u otro régimen, pues ninguna norma así lo exigía, si se tiene en cuenta que esos requerimientos surgieron con mucha posterioridad, como se explicó con antelación.

De las pruebas documentales aportadas con este escrito de contestación de demanda se puede observar que en el formulario de afiliación suscrito por el demandante se le indicó a este que podía retractarse de la afiliación que estaba haciendo, sin embargo, el demandante no optó por ejercer dicho derecho de retracto, lo cual es una clara e inequívoca manifestación de su convicción y deseo de estar afiliado al RAIS y pensionarse en dicho régimen.



Por otro lado, debemos manifestar que las obligaciones y requerimientos en los términos reclamados en la demandada nacieron con los Decretos 2241 y 2555 de 2010, la Ley 1748 de 2014, el Decreto 2071 de 2015 y la Circular 016 de 2016 de la Superintendencia Financiera (doble asesoría), normas muy posteriores a la fecha en la cual se llevó a cabo el traslado régimen/cambio de AFP privada, por lo que, se reitera, mi representada no estaba obligada a aplicar las mismas, de hecho era imposible aplicarlas pues no habían nacido a la vida jurídica.

### 3.1.1. CAMBIO EN LAS REGLAS SOBRE LA CARGA DE LA PRUEBA EN PROCESOS DE INEFICACIA DE TRASLADO DE RÉGIMEN PENSIONAL

Debe destacarse que en este caso no es posible aplicar en forma indiscriminada una inversión de la carga de la prueba para exigir a la administradora demandada la prueba de la información que se le ha debido dar al demandante al momento de trasladarse de régimen pensional.

En efecto, al hacer referencia a la posición actual de la Corte Suprema de Justicia sobre la carga de la prueba la Corte Constitucional en Sentencia SU-107/24 consideró que ese precedente es desproporcionado en materia probatoria y viola el derecho constitucional al debido proceso en los casos en los cuales se discute la ineficacia del traslado de los afiliados del RPM al RAIS por problemas de información ocurridos entre 1993 y 2009.

Dijo la Corte:

*“(...) el precedente es desproporcionado en materia probatoria y con ello viola el derecho constitucional al debido proceso en los casos en los cuales se discute la ineficacia del traslado de los afiliados del RPM al RAIS por problemas de información ocurridos entre 1993 y 2009. La Corte consideró que de conformidad con la Constitución y la ley procesal no se pueden imponer cargas probatorias imposibles de cumplir para ninguna de las partes (ni al afiliado, ni a la AFP), así como no se puede despojar al juez de su papel de director del proceso, de su autonomía judicial para decretar y practicar todas las pruebas que sean necesarias, pertinentes y conducentes para analizar las pretensiones o las excepciones propuestas y de su facultad para conforme a las reglas de la sana crítica valorar las pruebas con el objeto de resolver los casos de ineficacia de traslados de los afiliados del RPM al RAIS.*

*Para tal efecto, en los procesos en los cuales se pretenda declarar la ineficacia de un traslado de un afiliado del RPM al RAIS deben tenerse en cuenta, de manera exclusiva, las reglas contenidas en la Constitución Política, en el Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social y en el Código General del Proceso. En tal virtud, conforme a ellas, al juez corresponderá, seguir cuando menos las siguientes directrices: **(i) decretar todas las pruebas pedidas por las partes que sean pertinentes y conducentes o las que de oficio sean necesarias; (ii) valorar por igual todas las pruebas decretadas y practicadas, de manera individual y en su conjunto con las demás, inclusive los indicios, que le permitan determinar el grado de convicción que aquellas ofrecen sobre los hechos ocurridos y el***

conocimiento del afiliado sobre las consecuencias del traslado; (iii) no será posible aplicar como único recurso la inversión de la carga de la prueba. La Corte determinó extender efectos inter pares a las reglas de modulación del precedente de la Sala de Casación Laboral". (Comunicado 13 de abril 9 de 2024). (Negritas y subrayado fuera de texto).

Expuso también la Corte que la aplicación masiva del precedente de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia puede llegar a generar una afectación del principio constitucional de sostenibilidad financiera del sistema pensional. Al respecto, se indicó:

*"(...) regla según la cual, siempre y en todos los casos corresponde a la AFP demandada demostrar que suministró información. Con dicha regla, aparte de desbalancear la actividad probatoria de las partes, se desconoce que el juez es el director del proceso judicial, se afecta la autonomía e independencia de este para decretar y practicar todas las pruebas que sean necesarias, pertinentes y conducentes y se altera la regla acerca de la apreciación y valoración de las mismas conforme a la sana crítica.*

*Igualmente, el precedente de la Sala de Casación Laboral impone a las administradoras la carga de demostrar, por medio de pruebas directas, que sí informaron al afiliado sobre las consecuencias del traslado surtido entre 1993 y 2009. Esto es, reproducir el momento exacto en el que se dio el traslado. Así, reconstruir ese hecho resulta sumamente complejo solo mediante esos elementos de prueba directos.*

*Ante la carga probatoria desproporcionada, una cantidad importante de personas se han trasladado al RPM, pasando por alto las reglas normales de traslado entre regímenes establecidas en el artículo 2 de la Ley 797 de 2003, con lo cual, se afecta la sostenibilidad financiera del RPM en un grado importante (...)"*

Bajo el anterior escenario, la Corte instó para que, en los procesos donde se pretenda declarar la ineficacia de un traslado de régimen pensional, se tengan en cuenta de manera exclusiva las reglas contenidas en la Constitución Política, el Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social y en el Código General del Proceso. Por lo que, para llegar a un total convencimiento, podrá el juez:

- Decretar, practicar y valorar en igualdad todas las pruebas que soliciten las partes que sean necesarias, pertinentes y conducentes para demostrar los hechos que sirven de causa a las pretensiones o las excepciones.
- Procurar, de manera oficiosa, la obtención de pruebas acudiendo a las enlistadas en el Código General del Proceso, tales como "(...) la declaración de parte, la confesión, el juramento, el testimonio de terceros, el dictamen pericial, la inspección judicial, los documentos, los indicios, los informes", y las demás que considere necesarias, pertinentes y conducentes.

- Valorar las pruebas decretadas y debidamente practicadas con su inmediación, de manera individual y en su conjunto con las demás, luego de lo cual puede determinar el grado de convicción que aquellas ofrecen sobre lo ocurrido.
- Acudir a la prueba indiciaria si lo estima necesario, en los términos de los artículos 176 y 242 del CGP.
- Invertir la carga de la prueba cuando, analizando el caso concreto y la posición de las partes, esté ante un demandante que se encuentra en la imposibilidad de demostrar sus dichos, y en un proceso donde no haya sido posible desentrañar por completo la verdad a pesar de los esfuerzos oficiosos. Sin embargo, como se anotó, resaltó que no será posible aplicar como único recurso la inversión de la carga de la prueba.

Téngase en cuenta que la Corte extendió con efectos *inter pares* y de inmediato cumplimiento las reglas expuestas en la citada Sentencia SU-107/24 a todas las demandas que estén en curso ante la Jurisdicción Ordinaria Laboral ya sea en primera, segunda instancia o en sede de casación y cuya pretensión principal o subsidiaria, esté dirigida a que se declare la ineficacia del traslado del Régimen de Prima Media al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad.

### 3.2. Restituciones mutuas

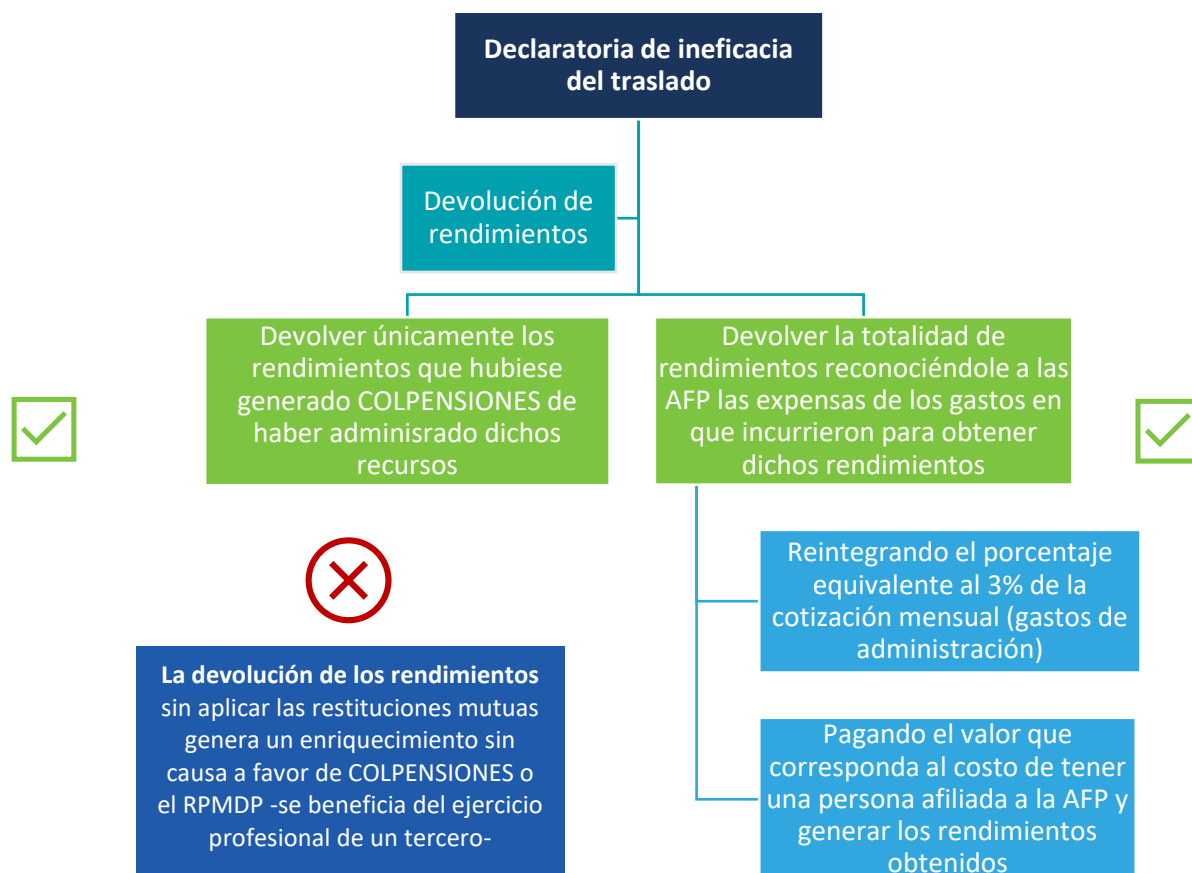
En la jurisdicción ordinaria laboral la mayoría de los jueces al declarar la ineficacia del traslado de régimen pensional le ordenan a las AFP devolver la totalidad de emolumentos recibidos, incluyendo, por supuesto, los rendimientos que hacen parte de la cuenta de ahorro individual de la afiliada.

También se observa, con cierto asombro, que los despachos judiciales hacen referencia a la figura de las restituciones mutuas para aplicarla única y erradamente en una sola vía, a favor de Colpensiones o el Régimen de Prima Media con Prestación Definida y en contra de las AFP.

Pues bien, si los jueces optan por aplicar la figura de las restituciones mutuas no pueden perder de vista que, respecto de Colpensiones, la AFP ha actuado como un agente oficioso involuntario (artículos 2304 y 2310 del Código Civil), en cuanto creyendo administrar su propia actividad, administró los negocios de otro (el manejo de los aportes de la afiliada).

En ese sentido, en caso de declararse la ineficacia del traslado de régimen pensional las AFP, en su calidad de agente oficio involuntario, tienen derecho a que se les reembolsen la utilidad efectiva obtenida, lo cual se traduce en que solamente deberán estar obligadas a entregar a Colpensiones los rendimientos que habrían tenido los aportes de haber sido administrados por esa entidad, que en la totalidad de los casos son inferiores a los generados por las AFP en el RAIS.

Ahora bien, si el despacho considera que, sí hay lugar a restituir en su totalidad los rendimientos generados en el RAIS, también deberá autorizar a las AFP a descontar las expensas de los gastos que se hayan hecho en favor de la afiliada en procura de generar Dichos rendimientos, tal y como se explicará en la siguiente gráfica:



### 3.3. Enriquecimiento sin causa si no se dan las Restituciones mutuas

El enriquecimiento sin causa es una institución orientada a corregir las situaciones en las cuales el patrimonio de un sujeto de derecho sufre un detrimento en su patrimonio, mientras otro ve reflejado un incremento en el mismo, sin que exista una razón objetiva para tal alteración. Por este motivo, ante el riesgo de presentarse un enriquecimiento sin causa, las partes deben ajustar el desequilibrio que se genera, con el fin de evitar un daño o afectación a una de las partes. Así lo ha definido la Corte Suprema de Justicia en Sentencia SC de 19 de dic. de 2012, exp. 1999-00280 al indicar:

*“No obstante lo anterior, es decir, a pesar del tardío reconocimiento explícito de la institución, la jurisprudencia de la Corte, además de abundante, ha sido pacífica en cuanto a la ocurrencia, regulación y corrección del desequilibrio inequitativo que el enriquecimiento sin causa genera, encaminándose “a prevenirlo o corregirlo (...)”.*

Ahora, esta misma corporación, en Sentencia SL3814-2020 señaló la existencia de **cinco elementos que conforman la figura del enriquecimiento sin causa**, como se verá a continuación:

*“1º Que exista un enriquecimiento, es decir, que el obligado haya obtenido una ventaja patrimonial, la cual puede ser positiva o negativa (...) 2º Que haya un empobrecimiento correlativo, lo cual significa que la ventaja obtenida por el enriquecido haya costado algo al empobrecido, o sea que a expensas de éste se haya efectuado el enriquecimiento (...) 3º Para que el empobrecimiento sufrido por el demandante, como consecuencia del enriquecimiento del demandado, sea injusto, se requiere que el desequilibrio entre los dos patrimonios se haya producido sin causa jurídica”. **Resaltado fuera del texto***

Frente al tercer requisito, vale la pena aclarar que, al omitir la figura de las restituciones mutuas, el juez no solo estaría fallando en contravía de lo que significa la declaratoria de ineficacia y/o nulidad, sino que además crearía un escenario en el que permite que la afiliada regrese posiblemente al RPM con un porcentaje mayor al que debería corresponderle:

*“4º Para que sea legitimada en la causa la acción de in rem verso, se requiere que el demandante a fin de recuperar el bien, carezca de cualquiera otra acción originada por un contrato, un cuasicontrato, un delito, un cuasi-delito, o de las que brotan de los derechos absolutos (...) 5º La acción de in rem verso no procede cuando con ella se pretende soslayar una disposición imperativa de la ley”. **Resaltado fuera del texto***

En este caso debe aclararse que, como consecuencia de la nulidad o la ineficacia, la afiliada tendrá solamente derecho a que se le devuelvan las cotizaciones que, de no haber realizado el traslado, hubiese continuado haciendo en el RPM. Lo anterior, porque de recibir los elementos propios del RAIS, como los rendimientos, réditos, operaciones comerciales y de inversión, portafolios de cartera, comisión por administración, estaría pasándose por alto la figura de la restitución y se estaría incrementando el patrimonio de la parte actora, afectando el de la Demandada.

**Para graficar este punto, se tiene lo siguiente:**

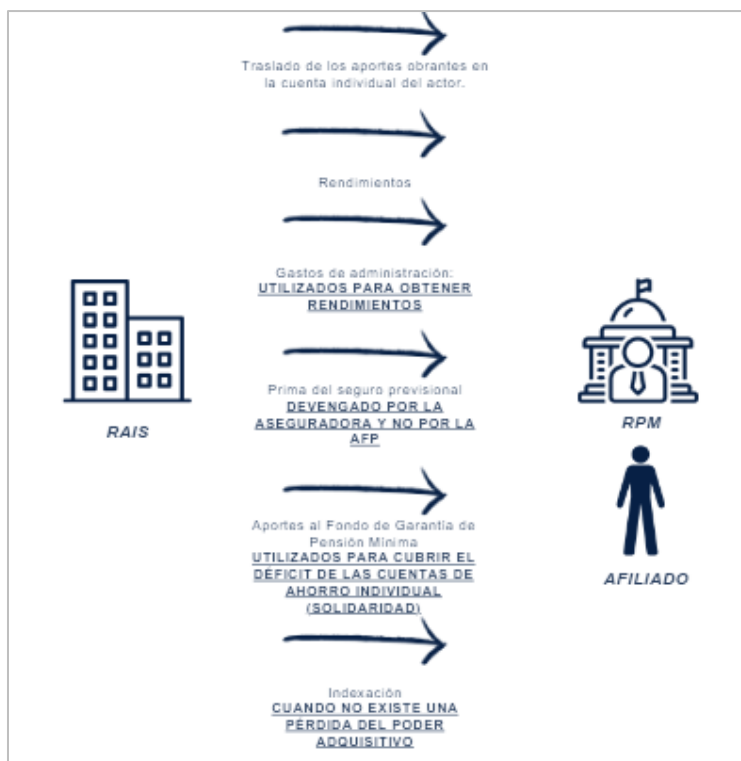
- **Restituciones Mutuas:** Este es el escenario en el cual debería fundarse la decisión del Despacho, si se da correcta aplicación a la ficción de “ineficacia”.



- **Restituciones Mutuas sin rendimientos:** A pesar de que habría lugar a la devolución de los rendimientos, Porvenir entiende que tales rendimientos se generaron con un esfuerzo **conjunto** entre la afiliada (dinero) y Porvenir (profesionalismo, inversión y administración de los recursos), por lo cual, estos no se restituirían.



- **Enriquecimiento sin justa causa:** Existe entonces un enriquecimiento sin justa causa tanto para la afiliada como para el RPM:



Así las cosas, en el improbable caso en que se declare la ineficacia del traslado de régimen (es decir como si no hubiese existido el traslado al RAIS); paralelamente, las partes del negocio tendrán la obligación de devolver todo aquello que sea propiedad de la otra parte o que esta haya puesto a disposición en la relación que mediante “ficción jurídica”, se pretende hacer ver como si nunca hubiera existido.

Descontar cualquier suma adicional a los aportes o a los rendimientos, configura un **enriquecimiento sin causa a favor de la afiliada o del RPM**, la cual genera situaciones de desequilibrio, desigualdad y privilegio para una de las partes del contrato que fue declarado ineficaz.

### 3.4. Gastos de Administración

**Es totalmente improcedente que, como consecuencia de la ineficacia del acto de traslado de régimen pensional, se ordene la devolución de los gastos de administración.**

En el hipotético caso de que se declare la nulidad o la ineficacia del acto de traslado de régimen pensional que es materia del presente proceso, no resulta viable que, como parte de las prestaciones mutuas que correspondan, se ordene a la administradora demandada la devolución de los gastos destinados a la administración, por las razones que se exponen a continuación:

El Régimen de Ahorro Individual se basa en la capitalización de los aportes pensionales depositados en la cuenta de ahorro de la afiliada, en donde también se consignan los rendimientos que generen

los aportes. Del porcentaje del aporte una parte se capitaliza en la cuenta de ahorro individual, mientras que el remanente se destina a cubrir la prima de seguros de invalidez y sobrevivientes, la prima de reaseguro de Fogafin, los gastos de administración, así como la financiación del fondo de garantía mínima y del fondo de solidaridad pensional.

Los costos derivados de la gestión de la cuenta individual de la afiliada se cubren con la suma destinada a los gastos de administración que se encuentran asociados a las actividades propias del reconocimiento de las pensiones de jubilación, invalidez y sobrevivencia, incluyendo tareas como la afiliación, la recaudación de los aportes periódicos, la administración de los registros en cuentas individuales, la inversión de los fondos y el otorgamiento de los beneficios.

Tal y como se demostró gráficamente en el numeral 1.3 de esta contestación, la comisión de administración está dirigida a retribuir las diferentes actividades que desarrollan las Administradoras de Pensiones y no está destinada a la financiación de la pensión de vejez, porque tanto en el RAIS como en el RPM, la ley destina dicho porcentaje a favor de las administradoras. Es por eso, que esta diferenciación se presenta en virtud de que al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS) las administradoras de pensiones deben cumplir en favor de cada uno de los afiliados a este subsistema obligaciones adicionales a las que tiene al Régimen de Prima Media, en el que se destacan las siguientes:

- Administrar la cuenta de ahorro individual de los afiliados.
- Reconocer la pensión de invalidez y sobreviviente con las mismas condiciones del RPM, sin tener en cuenta las diferencias de los regímenes.
- Garantizar una rentabilidad mínima de los fondos de pensiones.
- Garantizar que en caso de cumplirse con requisitos de pensión de sobrevivencia e invalidez se pueda financiar dicha prestación a los afiliados y sus beneficiarios, entre otras.

Corresponde en este punto precisar que, en el Régimen de Ahorro Individual, los aportes de los afiliados que ingresan al fondo deben invertirse. Es así como, el dinero que aportan los afiliados con destino a su cuenta individual puede estar representado en unidades de participación del fondo. Dichas inversiones deben ser valoradas diariamente por las Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantías, en cumplimiento de lo establecido en el Capítulo I de la Circular Externa 100 de 1995 expedida por la Superintendencia Bancaria.

Ahora, si bien el objetivo de los fondos de pensiones es permitir que el ahorro obtenga los mayores rendimientos posibles, las Administradoras de Fondos Pensionales no pueden disponer de los ahorros de los afiliados e invertirlos de cualquier manera. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público establece los límites en que AFP deben dividir el dinero que recogen en fondos en tres tipos de riesgo: alto, medio y bajo. La afiliada puede escoger el tipo de riesgo con unas limitantes que dependen de su edad: entre más cerca esté de jubilarse el perfil de riesgo debe ser menor.

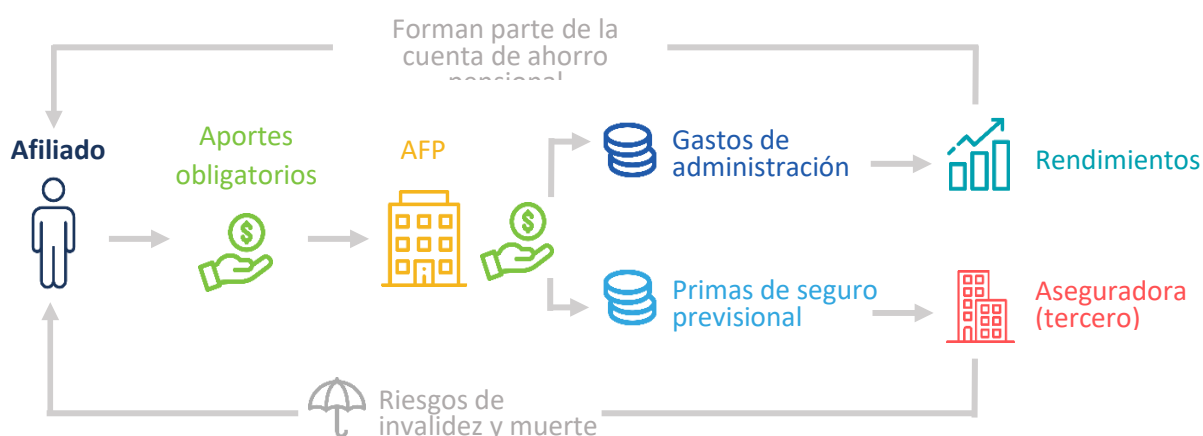


Asimismo, el Decreto 2949 de 2010 por el cual se modifica el Decreto 2550 de 2010, en su artículo 2.6.5.1.4 estableció el período de cálculo de la rentabilidad mínima para los tipos de fondos de pensiones obligatorias y la Ley 2112 de 2021 determina que el 3% de los recursos de los fondos se inviertan en fondos de capital privado local.

Así pues, las Administradoras de Fondos Pensionales tienen como objetivo alcanzar la mayor cantidad de beneficios presentes y futuros. Estos beneficios están ligados a la estructura de costos e ingresos provenientes de las comisiones, que permiten a las Administradoras hacer el mejor uso posible de los recursos en su administración. Según el Ministerio de Hacienda, los gastos de administración se destinan por parte de las administradoras a “la acreditación de los aportes, los cobros de aportes en mora, la reconstrucción de la historia laboral para bono pensional, la administración financiera de los recursos (...), la atención al cliente, el reconocimiento de pensiones y el pago de nómina de pensionados”, como también se emplean para financiar los equipos que gestionan las inversiones y que buscan las oportunidades de inversión.

Con base en lo anterior, se concluye que los gastos de administración descontados por las Administradoras de Fondos Pensionales no están llamados a financiar ninguna prestación económica. Por el contrario, permiten que las administradoras maximicen la productividad de los recursos en su administración, pues están obligadas a garantizar cuando menos una rentabilidad mínima del patrimonio de los afiliados, como también seguridad y liquidez de los dineros del sistema, en sujeción a las estrictas regulaciones y limitantes de inversión establecidas en los instrumentos normativos.

Al respecto, es mandatorio explicar qué hacen las AFP con dichos recursos que, desde ya se aclara, tienen una destinación legal específica. Para explicar mejor lo anterior observemos la siguiente gráfica:



### 3.5. ¿Por qué no es lógico ordenar el traslado a Colpensiones de los gastos de administración?

Como se ha visto, los gastos de administración se agotan con el cumplimiento de las obligaciones de las administradoras relacionadas con la gestión y crecimiento de la cuenta individual de la afiliada.

De decidirse el traslado de la afiliada al Régimen de Prima Media, es claro que a partir de ese momento Colpensiones va a contar con los recursos para administrar la vinculación de la afiliada y asumir las obligaciones a su cargo, pues estos se descontarán de los aportes que a partir de ese momento se deban efectuar. Por lo tanto, esa administración estará suficientemente garantizada y no será necesario contar con sumas adicionales que, de sufragarse, no tendrán ninguna incidencia en el reconocimiento de las eventuales prestaciones que puedan surgir a favor de la afiliada.

Ordenar que se devuelva el porcentaje de comisión de administración es generar un pago de lo no debido a favor de Colpensiones, pues ésta nunca realizó la función de administración conforme lo dispone la ley, como tampoco lo concerniente a la prima del seguro de invalidez y sobrevivencia, en tanto la afiliada cuenta con la cobertura de estos riesgos durante toda la vigencia con la administradora, pues fue pagado a un tercero (aseguradora) con este fin y propósito.

### **3.6. ¿Por qué no hay razones jurídicas admisibles para ordenar la devolución de los gastos de administración?**

No debe haber lugar a ordenarse la devolución de los gastos de administración. En primer lugar, dicho mandato no se correspondería con las normas legales que gobiernan las restituciones mutuas como lo señala el artículo 1746 y 1747 del Código Civil, en el entendido que la persona a la cual se le ordena restituir o devolver un bien, en este caso unas sumas depositadas en una cuenta, igualmente deba devolver las sumas que invirtió para mantener ese bien y para incrementarlo en cumplimiento de mandatos legales que está obligada a acatar.

En segundo lugar, es claro que la sociedad que represento siempre actuó de buena fe y de conformidad con las normas que rigen la materia frente a la vinculación y al manejo de los recursos efectuados a su nombre en el Fondo de Pensiones Obligatorias, manifestando que dichas sumas ya fueron debidamente invertidas en la forma exigida por la ley y no se encuentran en poder de la demandada, pues fueron destinadas a cubrir todos los gastos que implicaron la correcta administración de los recursos aportados a la cuenta individual de la demandante, principalmente el manejo de las inversiones tendientes a obtener el incremento o rentabilidad de esos recursos, y cuyos rendimientos fueron abonados a la accionante.

Frente a ello hay que considerar lo señalado en el artículo 964 del Código Civil, que aplica para todos los casos en los que hay lugar a la restitución de frutos, en lo relativo a que el poseedor de buena fe no es obligado a la restitución de los frutos percibidos antes de la contestación de la demanda, en consecuencia, quien posea un bien de buena fe está obligado a restituir los frutos solo a partir de la fecha en que le sea notificada la demanda que finalmente culmine con la orden judicial de restitución mutua.

Así lo ha indicado la sentencia 25307 de la Sala Civil de la Corte suprema de Justicia, con fecha 5 de agosto de 2014, con ponencia del magistrado Arturo Solarte alude:

«Es patente, entonces, que el Tribunal erró en la interpretación del artículo 1746 del Código Civil y que, como consecuencia de tal yerro, no hizo actuar el artículo 964 ibídem, pues de no haber cometido tales desatinos, habría colegido que el aquí demandado, al ser poseedor de buena fe, como esa misma Corporación lo calificó en su propio fallo, apreciación fáctica que al no estar comprendida en la acusación no puede ser revisada por la Corte, estaba obligado a restituir únicamente los frutos percibidos con posterioridad a la notificación del auto admisorio de la demanda, porque sólo a partir de este momento quedaba sometido al régimen q»

De acuerdo con lo anterior, el actuar de la administradora aquí llamada a juicio siempre ha sido de buena fe objetiva, pues todas sus acciones se ejecutaron en virtud de los presupuestos legales vigentes al momento del traslado de régimen, cumpliendo con todas las obligaciones que para ese entonces se encontraban a su cargo por mandato legal y reglamentario.

Ahora bien, en el caso de que se considere que deben existir restituciones mutuas, debe tenerse en cuenta que respecto de Colpensiones, la AFP ha actuado como un agente oficioso involuntario, en los términos establecidos por los artículos 2304 y 2310 del Código Civil, en cuanto, creyendo administrar su propia actividad, administró los negocios de otro (el manejo de los aportes de un afiliada) y, luego de declarada la ineficacia del acto termina entregando unos rendimientos superiores a los que habrían tenido los aportes, de haber sido gestionados por el encargado. Si ello es así, esa agencia oficiosa involuntaria debe dar lugar al reembolso de la utilidad efectiva obtenida, lo cual se traduce en que solamente debería estar obligada a entregar a Colpensiones los rendimientos que habrían tenido los aportes de haber sido administrados por esa entidad.

A modo de conclusión, la Superintendencia Financiera de Colombia ha manifestado que lo procedente sería que se respeten las restituciones mutuas que se hayan realizado, que no se ordene el traslado de la prima de seguro previsional, que tampoco se ordene la devolución de la comisión de las cuotas de administración que han sido utilizadas para generar rendimientos a la cuenta individual de la afiliada y que corresponden al trabajo de administración de dichos recursos.

Dada la autoridad doctrinal de esa entidad, se considera que los criterios antes expuestos merecen ser considerados y debidamente ponderados en este caso.

### **3.7. Ordenar la devolución de gastos es desconocer la gestión que realizan las administradoras de pensiones sobre los aportes pensionales de la afiliada**

Sin perjuicio de todo lo anterior, se hace necesario precisar lo siguiente: cuando se declara la ineficacia del acto jurídico de traslado de régimen pensional, se crea la ficción de que dicho acto jurídico jamás existió o generó efectos jurídicos, pues se aplica como consecuencia de la declaratoria de ineficacia el principio de las restituciones mutuas, es decir, que las cosas vuelven al estado anterior. Es por ello que el condenar a la administradora privada al traslado de los descuentos legales que realiza a los aportes de los afiliadas hacia el R.P.M.D. sería desconocer la excelente gestión que desempeña esta corporación en cuanto el manejo de los recursos, toda vez, de cómo bien es

conocido, los fondos privados generan una rentabilidad en los aportes que, en muchos casos, es superior al monto aportado por la afiliada, situación que se encuentra debidamente soportada en el artículo 101 de la Ley 100 de 1993.

En este orden de ideas, y teniendo en cuenta que dentro de las obligaciones que deben cumplir las administradoras de pensiones se encuentra la de garantizar una rentabilidad mínima en las cuentas de ahorro individual de sus afiliadas, rentabilidad que tras la declaratoria de ineficacia no se debió de haber ocasionado, resulta improcedente condenar la restitución hacia el régimen público de pensiones los descuentos legales que son realizados a los aportes de los afiliadas, ya que los mismos, se pueden ver compensados con el traslado de los rendimientos generados, máxime que el no acoger esta postura, sería condenar de manera más gravosa a la que en derecho corresponde al fondo privado, pues se estaría condenado a la AFP bajo el escenario en que el acto jurídico produjo efectos, como en el evento en que no produjo efectos.

Así las cosas, vemos que, con la actual jurisprudencia sobre la materia se está afectando de forma muy gravosa a los administradoras, es por ello que le solicitamos al despacho, en caso de que se declare la ineficacia del acto jurídico de traslado de régimen pensional, se condene a la AFP únicamente a restituir los rubros habidos en la cuenta de ahorro individual de la afiliada, ello por cuanto resulta más entorpecedor y no tan beneficioso para la demandante, el que no se trasladen los rendimientos, sino los descuentos legales que realizó el fondo privado a los aportes pensionales del actor cuando estuvo vinculado con este, sumado a que también se estaría afectando los negocios jurídicos que se celebraron con aseguradoras y demás entidades que intervinieron en la gestión que realiza el fondo privado para que al afiliada, y a su núcleo familiar y/o cercano, no se le vulnere su derecho a la seguridad social bajo los principios y reglas plasmadas en la norma, esto es el estar protegido en casos de contingencias por invalidez o muerte, y el aumentar el monto ahorrado en la cuenta de ahorro individual con los rendimientos financieros.

#### **4. Improcedencia del traslado de los descuentos realizados a los aportes de la afiliada con destino al pago de seguros previsionales por invalidez y muerte**

La Ley 100 de 1993 establece en el artículo 20 cómo se debe realizar la distribución de los aportes, tanto en el Régimen de Prima Media como en el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad. En la misma línea el artículo 36 del Decreto 692 de 1994 dispone cómo se realiza la distribución de la cotización.

De conformidad con las normas aludidas, como se advirtió en precedencia, el tres por ciento (3%) de la cotización en ambos regímenes pensionales se destina a cubrir, los gastos o la comisión de administración y el pago de la prima para los seguros de invalidez y sobrevivientes. Sin embargo, la diferencia se encuentra en la distribución que se debe hacer cada en cada régimen de ese 3%, pues se tiene que en el RAIS aproximadamente el 2% corresponde a la prima de seguro previsional con el

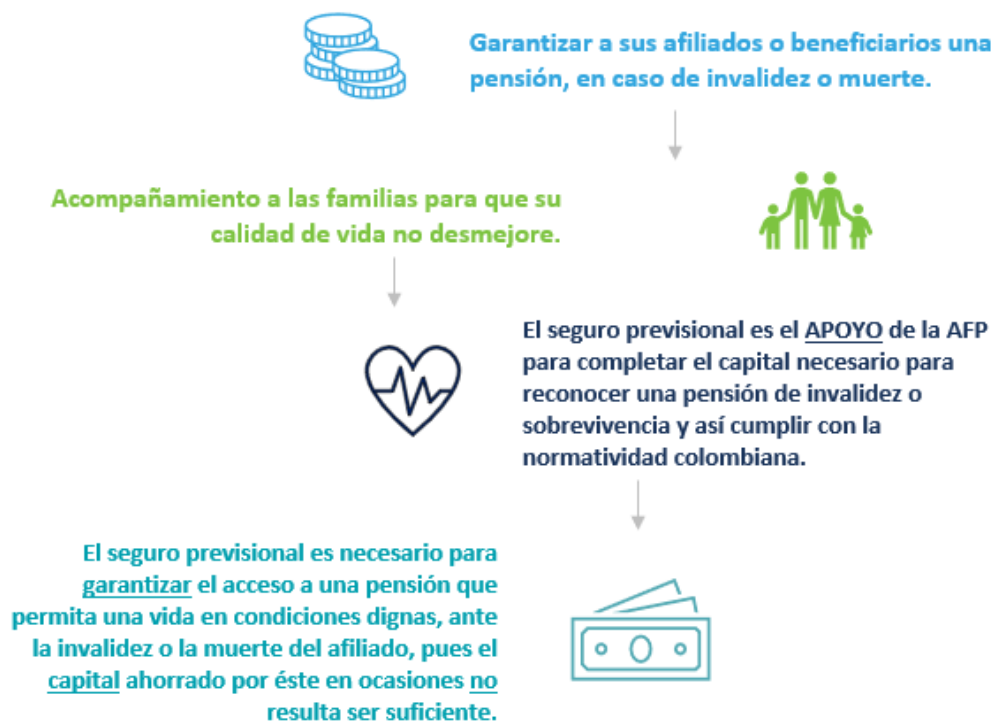
que se cubre la pensión de invalidez y de sobrevivencia, y el 1% sirve para la administración, mientras que en Colpensiones este porcentaje no se diferencia.

#### 4.1 Necesidad de suscribir la póliza del seguro previsional

El contrato de seguro previsional es un seguro colectivo, esto quiere decir que se hace un único pago mensual por parte de uno de los intervinientes del contrato, que en este caso son dos, el tomador, que sería la AFP, quien realiza el pago, y el asegurador, que sería la aseguradora que estaría cargo de reconocer la prestación económica, y es que una vez suscrita dicha póliza, serían las compañías de seguro quienes asumen los riesgos de muerte y de invalidez, como contraprestación del valor que mes a mes cobran y que la AFP descuenta a su vez de los aportes que va efectuando la afiliada, por disposición normativa de los artículos 20, 60, 70 y 77 de la Ley 100 de 1993.

Otro aspecto que permite resaltar la importancia de dicho descuento es que el pago de las pensiones de invalidez y sobrevivientes requiere que sea la compañía de seguros quien suministre la suma adicional, la cual se entiende como la cantidad de dinero que gira la aseguradora al fondo privado para que complete la cantidad de dinero necesaria que permita financiar la pensión de vejez o sobrevivencia, una vez se materialice cualquier de las dos contingencias. Sumado a los beneficios que se exponen a continuación:

#### 4.2 Con el seguro previsional las AFP pueden:



#### **4.3 ¿Por qué no es razonable ordenar la devolución de lo pagado por primas del seguro previsional?**

La contratación de un seguro previsional solamente se exige en el RAIS, como parte de la financiación de las pensiones de invalidez y de sobrevivientes. En el Régimen de Prima Media con Prestación Definida no hay lugar a contratar ese seguro porque las prestaciones se financian de otra manera: con las sumas acumuladas en el fondo común. Por esa razón, la devolución de esas sumas tendría sentido si fuese necesario contratar ese tipo de seguros cuando la afiliada regrese a ese régimen.

De otra parte, tampoco tiene sentido devolver unas sumas que no existen, que se entregaron a un tercero, que se destinaron a un objetivo que fue cabalmente cumplido y que no se va a seguir presentando en el futuro porque, se insiste, Colpensiones no debe contratar seguros previsionales.

#### **5. Sobre la procedencia de los rendimientos del régimen de prima media rpm y no los del régimen de ahorro individual con solidaridad RAIS**

En el hipotético caso de que se considere que en este caso debe declararse la ineficacia del traslado de régimen pensional, las determinaciones que se adopten deben estar en consonancia con esa declaratoria que supone, como lo ha explicado reiteradamente la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, que las cosas deben retrotraerse a su estado anterior, sin solución de continuidad y como si la afiliación al RAIS nunca hubiese existido, por lo que surge el siguiente interrogante ¿es lógico dentro de esa perspectiva jurídica pensar que los rendimientos que deben trasladarse son los que generó la cuenta de ahorro individual del fondo de pensiones?

La respuesta a la anterior pregunta es: NO, pues bajo el supuesto de que la afiliada nunca se trasladó de régimen pensional al RAIS los rendimientos que deben ser entregados a Colpensiones son los que habrían tenido los aportes en el Régimen de Prima Media con Prestación Definida, es decir, los rendimientos que hubiese generado Colpensiones administrando los aportes obligatorios de la afiliada, hoy demandante; recordemos que la rentabilidad de los aportes no es un tema ajeno al RPMPD pues existen diferentes normas que definen que debe considerarse como rentabilidad de los recursos que administra dicho régimen (Ley 100 de 1993, Decreto 1887 de 1994, Decreto 1888 de 1994, Decreto 1748 de 1995, Decreto 816 de 2002, Decreto 3800 de 2003, Decreto 3798 de 2003, Decreto 3771 de 2007, Decreto 3995 de 2008 y Decreto 1051 de 2014).

Respecto de esa consecuencia existen varias normativas que la avalan y dos antecedentes jurisprudenciales relevantes en esta materia por parte de la Corte Constitucional como lo son las sentencias C-1024 de 2004 y la SU – 062 de 2010, en donde para efectos de la validez del traslado de las personas que contaban con 15 años al primero de abril de 1994, se dijo que los rendimientos de los aportes debían ser equivalentes a los del RPM, no a los del RAIS al que se hallaba vinculado la afiliada.

Resulta claro, entonces, que para todos los efectos de traslados de recursos del régimen de prima media debe tenerse en cuenta la rentabilidad mínima de las reservas de Colpensiones, de tal suerte que con base en los pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia, en el caso de declararse ineficaz una afiliación al RAIS, constituiría un híbrido absolutamente extraño y alejado de los efectos jurídicos de la ineficacia exigir entregar a Colpensiones los recursos de la cuenta individual de la afiliada con los rendimientos obtenidos en el RAIS, cuando lo que se ha manejado por parte de esta doctrina de la Corte es que las cosas deben volver a su estado anterior, esto es, debe considerarse como si la afiliada siempre hubiese mantenido su vinculación al régimen de prima media con prestación definida, para todos los efectos, lo que en sana lógica implica que los rendimientos que deben entregarse son los que habrían tenido sus aportes en ese régimen.

De lo anteriormente expuesto podemos concluir que la correcta gestión llevada a cabo por mi representada sobre los aportes obligatorios entregados por la demandante conllevó a que en la actualidad el mismo cuente con un saldo en su CAI notoriamente superior a aquel que tendría en caso de haber permanecido afiliada al ISS hoy COLPENSIONES.

## **6. Sobre la improcedencia del traslado de las sumas con destino al Fondo de Garantía de Pensión Mínima**

No hay ninguna razón de orden jurídico para ordenar la remisión a Colpensiones de las sumas aportadas con destino al Fondo de Garantía de Pensión Mínima con cargo a los propios recursos de mi representada. Si bien, los efectos de la ineficacia, en particular, es la de devolver las cosas al estado en que se hallaban antes de que se produjera el acto ineficaz y como consecuencia de ello, trasladar a Colpensiones los recursos que se recibieron durante el periodo de vinculación de la demandante, es importante precisar que, de conformidad con el artículo 7° de la Ley 797 de 2003 el cual hace referencia a que el porcentaje destinado al Fondo de Garantía de Pensión Mínima, tienen como propósito financiar las pensiones de garantía de pensión mínima de aquellos afiliados que pertenezcan al RAIS y su capital acumulado no alcance a financiar la prestación económica de conformidad con los parámetros del artículo 64 de la Ley 100 de 1993.

Al respecto, ha entendido la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en la consulta del 3 de agosto de 2022 (Número único: 11001030600020220006200), al examinar algunas decisiones de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, se ha considerado que, *“lo relevante es cerciorarse de que en el régimen pensional en que se encuentre el cotizante estén también sus aportes pensionales. En consecuencia, si aquel opta por un cambio de régimen, lo propio debe ocurrirles a los aportes, sin salvedad ni excepción alguna”*.

De acuerdo con este criterio, no tiene sentido trasladar ese 1.5% sobre la base de cotización puesto que sirve para equilibrar la diferencia que existe en el monto de los aportes que existe entre los dos regímenes, tal y como se expuso en la referida consulta: *“Quiere decir lo anterior, parafraseando a la Corte Suprema de Justicia, que la decisión que ordena trasladar los recursos pensionales al régimen al que esté vinculado el cotizante no lesiona el principio de sostenibilidad fiscal del Sistema*

General de Pensiones, puesto que los recursos que deben reintegrar los fondos privados a Colpensiones serán utilizados para el reconocimiento del derecho pensional”.

Así las cosas, no tiene sentido alguno que se traslade dichos rubros a Colpensiones cuando dicho régimen no cuenta con la capacidad ni la facultad de administrar tales dineros, puesto que, ello equivaldría a un enriquecimiento sin justa causa y, además, una sanción injustificada, que no guarda ninguna correspondencia con los efectos jurídicos de una ineficacia, ni, mucho menos, con las restituciones que de ellos puedan derivarse.

## 7. EXCEPCIONES

### 7 Buena fe

Todas las actuaciones de Porvenir se han realizado teniendo en cuenta la voluntad de la parte demandante y sus intereses al pertenecer al régimen y al fondo, pues se han puesto todos los recursos adecuados a disposición este para lograr su cometido y es la consecución de una pensión de vejez. Los actos de Porvenir desde el inicio del litigio se exponen favoreciendo el deseo de la parte actora, y por esto se deja clara la VOLUNTAD DE LA CONCILIACIÓN por parte de Porvenir, bajo el respeto de la figura de las restituciones mutuas del que se ha hablado desde el principio de este escrito.

#### 7.1 Ausencia de requisitos legales para que se declare la nulidad o ineficacia del traslado

No existe legalmente una definición de los efectos de la ineficacia; no obstante, por vía jurisprudencial se ha decidido que son los mismos de la declaración de la nulidad; es decir, que su objetivo es reestablecer las condiciones del negocio jurídico a su estado inicial, para el caso en concreto “a través de la ficción jurídica” hacer como si nunca hubiese existido una relación en las partes. No obstante, para que la declaratoria de la solicitud de ineficacia o nulidad sea viable, debe estar precedida de situaciones de error, fuerza, dolo, que constituyan decisiones viciadas.

Es importante frente a lo anterior, precisar que, la “omisión” de información que pueda establecer el Despacho que hubo dentro del proceso de afiliación a Porvenir, no vició el consentimiento de la parte demandante para que proceda la nulidad o ineficacia porque no ha sido demostrado que dicha decisión no fuera voluntaria, tuviera un fin calificado como doloso o indujera en error. Simplemente obedeció a situaciones que para la época no estaban reguladas, pero no por ello puede entenderse que existió una situación que afectó el consentimiento, más aún, cuando hemos expuesto que en las situaciones de índole laboral no procede la retroactividad de la norma.

Para el caso en concreto, es importante exponer que la carga de la información para el momento del traslado, como lo hemos expuesto en este documento, no era exclusiva de la Demandada sino también de la parte actora; toda vez que se trata de una relación donde existe un deber de informarse también para la afiliada. Así las cosas, la parte demandante debió asumir la carga de



enterarse del régimen al cual se trasladaba, sus particularidades, condiciones, modalidades de pensión, mecanismos de divulgación, obligaciones y derechos lo que supone actos de mediana diligencia para el consumidor y actos de atención y cuidado en la toma de decisiones, según lo establecido en el Decreto 2241 de 2021, lo cual no ha logrado demostrar la parte actora dentro del proceso.

Un acto que Porvenir considera propio para poner en práctica el fundamento anterior, es que todos los fondos del RAIS cuentan con un simulador; con este, la parte demandante pudo haber realizado la proyección de su pensión de manera autónoma, lo cual, no toma más de 10 minutos en línea, como puede verse en este enlace <https://www.porvenir.com.co/web/simuladorpensional>. Dichas ausencias, demuestran la falta de diligencia que hemos mencionado en el párrafo anterior.

## 7.2 Aceptación tácita de las condiciones del RAIS

Es importante aclarar, sin perjuicio de lo anteriormente argumentado, que la parte actora lleva varios años afiliada al RAIS, por lo cual, con esa medida diligencia que le correspondía actuar según lo expuesto en el Decreto 2241 de 2021, pudo identificar en el régimen las condiciones, características de este, así como las diferencias con el RPM, las cuales incluso son de conocimiento público.

## 7.3 Prescripción

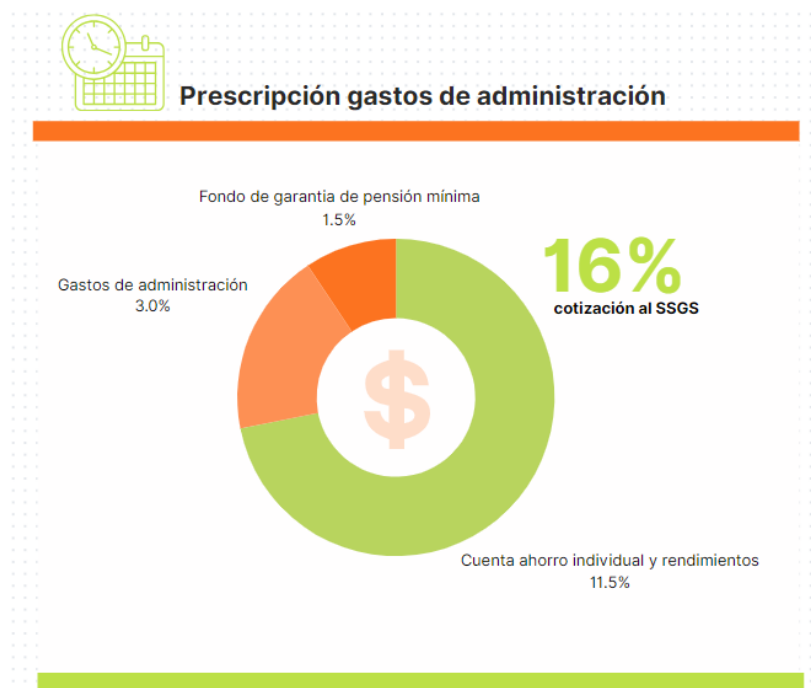
El ordenamiento jurídico contempla la prescripción extintiva como una garantía a la seguridad jurídica y como un modo de extinguir las obligaciones dentro del marco de una relación obligacional. Conforme a esta institución jurídica, el titular del derecho debe exigir el cumplimiento de una obligación dentro de un término perentorio, so pena de que su obligado, pueda alegar su negligencia al demorar en exceso el cobro de su acreencia y así extinguir dicha obligación. De esta forma, si el titular del derecho deja de exigir la prestación por largo tiempo, es de presumir que tal acreencia o derecho no le interesa, por lo cual este pierde su razón de ser.

Descendiendo al caso que nos ocupa y sin que se le esté reconociendo mediante este acápite derecho alguno a la parte actora, se propone la excepción de prescripción frente a todos aquellos derechos que hubiere podido tener dicha parte y que no se hayan exigido dentro del término perentorio<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Respecto del término perentorio, este lapso es de 3 años, conforme a lo dispuesto en el artículo 488 del Código Sustantivo del Trabajo que dispone: “(l)as acciones correspondientes a los derechos regulados en este código prescriben en tres (3) años, que se cuentan desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible, salvo en los casos de prescripciones especiales establecidas en el Código Procesal del Trabajo o en el presente estatuto”.

#### 7.4.1 Prescripción de los gastos de administración



La imprescriptibilidad de los aportes pensionales no debe operar para los gastos de administración, teniendo en cuenta que, **estos NO constituyen parámetros para liquidar la mesada pensional** de ningún afiliado en el SSGS (RPM – RAIS). Cabe resaltar que, aun cuando se decretase la nulidad o ineficacia de la afiliación los aportes se trasladarían con los rendimientos causados a la fecha, los cuales, en la mayoría de los casos constituyen un porcentaje superior al valor de los aportes como quedó probado en el proceso.

Es por lo anterior que, de acuerdo con el hecho de no haberse trasladado nunca al RAIS, en el RPM también se efectuaría el cobro de gastos de administración.

Al respecto, el Artículo 48 de la Constitución Nacional establece que, para la liquidación de las pensiones sólo se tendrán en cuenta los factores sobre los cuales cada persona hubiere efectuado las cotizaciones y estas, son de obligatorio cumplimiento y no puede invocarse acuerdo alguno para apartarse de lo allí establecido, por cuanto puede afectar la sostenibilidad financiera del sistema pensional y a fin de evitar fraudes al sistema, conforme cita textualmente:

*“El Estado garantizará los derechos, la sostenibilidad financiera del Sistema Pensional, respetará los derechos adquiridos con arreglo a la ley...**la liquidación de las pensiones sólo se tendrá en cuenta los factores sobre los cuales cada persona hubiere efectuado las cotizaciones...** Los requisitos y beneficios pensionales para todas las personas, incluidos los de pensión de vejez por actividades de alto riesgo, serán los establecidos en las leyes del*

*Sistema General de Pensiones. **No podrá dictarse disposición o invocarse acuerdo alguno para apartarse de lo allí establecido***". Negrilla y Subrayado fuera de texto.

En adición, y en concordancia con el artículo 20 modificado por el artículo 7 de la Ley 797 de 2003, y el art 101 de la Ley 100 de 1993 que señala: "Rentabilidad Mínima a cargo de las AFP. La totalidad de los rendimientos obtenidos en el manejo de los fondos de pensiones será abonada en las cuentas de ahorro pensional individual de los afiliados."

Así las cosas, en el presente caso es evidente que existe la configuración de la prescripción, toda vez que la afiliación a Porvenir que hoy se discute, ocurrió en un término superior a los 3 años, contados desde el momento en que se suscribió el Formulario respectivo.

#### **7.4 Cobro de lo no debido por ausencia de causa e inexistencia de la obligación**

En la medida en la que la afiliación de la demandante al RAIS cuenta con plena validez, al llevarse a cabo de acuerdo con las disposiciones legales y reglamentarias, mi representada no se encuentra en obligación de acceder a las peticiones de la demanda.

#### **7.5 Compensación**

Sin aceptar ningún tipo de responsabilidad frente a mi representada, se entiende que cualquier suma de dinero pagada previamente a la demandante compensa las obligaciones monetarias que puedan llegar a surgir en el presente proceso.

#### **7.6 Innominada o Genérica**

Excepción que se fundamenta en lo dispuesto en el artículo 282 del C.G. del P., aplicable por analogía al procedimiento laboral, que indica:

*"Cuando el juez halle probados los hechos que constituyen una excepción, deberá reconocerla oficiosamente, en la sentencia, salvo las de prescripción, compensación y nulidad relativa, que deberán alegarse en la contestación de la demanda..."*.

Por tal motivo, si su señoría encontrare probada alguna excepción la misma deberá ser declarada al proferirse la sentencia de manera oficiosa.

### **8. PRUEBAS**

De acuerdo con lo establecido en el artículo 165 del Código General del Proceso (en adelante el "CGP") y siguientes, me permito solicitar a su Señoría que, llegado el momento procesal oportuno, se sirva disponer la adjunción, el decreto y la práctica de las siguientes pruebas:

## 8.1 Documentales

Me permito adjuntar con la presente contestación de demanda, los siguientes documentos que reposan en la base de datos de mi representada:

- 8.1.1. Formulario de afiliación ante Horizonte. 1 folio.
- 8.1.2. Certificado de egreso. 1 folio.
- 8.1.3. Historia Laboral Consolidada. 3 folios.
- 8.1.4. Relación de aportes. 6 folios.
- 8.1.5. Historial de vinculaciones SIAFP. 1 folio.
- 8.1.6. Viabilidad SIAFP. 1 folio.
- 8.1.7. Consulta bono pensional. 1 folio.
- 8.1.8. Comunicado #13 de la Corte Constitucional sobre Sentencia SU-107/24. 22 folios.
- 8.1.9. Comunicado de prensa. 3 folios.
- 8.1.10. Concepto emitido por la Superfinanciera 2019152169-003-000. 7 folios.
- 8.1.11. Concepto No. 11001030600020220006200 de fecha 3 de agosto de 2022 emitido por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado. 42 folios.
- 8.1.12. Respuesta del Ministerio de Hacienda – Auto 583 de 2021. 29 folios.

## 8.2 Pruebas solicitadas en la demanda

Se allega con la presente contestación de demanda el expediente administrativo que reposa en poder de Porvenir S.A. respecto de la señora GLORIA MARIA GUERRA SANZ identificada con C.C. No. 32677031, correspondiente a las pruebas documentales 8.1.1. a la 8.1.7.

## 8.3 Interrogatorio de parte

Solicito a su Señoría, se fije fecha y hora para que la demandante comparezca a su despacho a absolver el interrogatorio de parte que le formularé, con exhibición de documentos.

## 9. ANEXOS

- 1. Los documentos relacionados como prueba.
- 2. Copia simple de Escritura Pública por medio del cual Porvenir S.A. otorga poder general para ejercer representación y defensa judicial a Godoy Córdoba S.A.S.
- 3. Certificado de existencia y representación legal de Porvenir S.A.
- 4. Certificado de existencia y representación legal de Godoy Córdoba S.A.S., expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá, donde me encuentro inscrita.
- 5. Documentos de identidad de la suscrita.

## 10. NOTIFICACIONES

En esta oportunidad en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 8° de la Ley 2213 de 2022, y en el numeral 14 del art. 78 del CGP se remite el presente memorial con copia:

- a. Demandante: [gloriam.guerra@gmail.com](mailto:gloriam.guerra@gmail.com)
- b. Apoderado judicial parte demandante: [consultas@fabianguarin.com](mailto:consultas@fabianguarin.com) [agalejo7@gmail.com](mailto:agalejo7@gmail.com)
- c. Colpensiones: [notificacionesjudiciales@colpensiones.gov.co](mailto:notificacionesjudiciales@colpensiones.gov.co)
- d. Protección S.A.: [accioneslegales@protección.com.com](mailto:accioneslegales@protección.com.com)
- e. Colfondos S.A.: [procesosjudiciales@colfondos.com.co](mailto:procesosjudiciales@colfondos.com.co)
- f. Skandia S.A.: [cliente@skandia.com.co](mailto:cliente@skandia.com.co)
- g. Representada: [notificacionesjudiciales@porvenir.com.co](mailto:notificacionesjudiciales@porvenir.com.co)
- h. Apoderada: Avenida Calle 84ª No. 10-33, piso 5 y 11 de la ciudad de Bogotá y correo [mguio@godoycordoba.com](mailto:mguio@godoycordoba.com)

De manera atenta se suscribe,



**MARÍA CAMILA GUIO MARTÍNEZ**

C.C. 1.032.505.503 de Bogotá D.C.

T.P. 414.733 del C.S de la J.

**SOLICITUD DE VINCULACIÓN O TRASLADO AL FONDO  
DE PENSIONES OBLIGATORIAS Y AL FONDO DE CESANTÍAS**  
DILIGENCIAR EN LETRA IMPRENTA Y DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES DEL RESPALDO

www.horizonte.com.co

No. 99- 1025907

USO INTERNO

5580688

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO	PRIMERA COTIZACIÓN	MES PRIMER PAGO	CIUDAD O MUNICIPIO	DEPARTAMENTO
20000926	AAAAAMM	AAAAAMM	Bogotá	Cundinamarca
PENSIONES OBLIGATORIAS <input type="checkbox"/> VINCULACIÓN INICIAL <input checked="" type="checkbox"/> TRASLADO AFP <input type="checkbox"/> T. RÉGIMEN ADMINISTRADORA ANTERIOR Colfondos				
CESANTÍAS <input type="checkbox"/> VINCULACIÓN INICIAL <input type="checkbox"/> TRASLADO AFPC ADMINISTRADORA ANTERIOR				
PARA ENTIDADES DE SALUD Y ENTIDADES TERRITORIALES, ESPECIFICAR TIPO DE RÉGIMEN: <input type="checkbox"/> LIQUIDACIÓN ANUAL <input type="checkbox"/> RETROACTIVO				

**A. INFORMACIÓN DEL TRABAJADOR**

NÚMERO DOCUMENTO DE IDENTIDAD	T.I. C.C. C.E.	FECHA DE NACIMIENTO	NACIONALIDAD	SEXO
32677031	1	19640407	Colombiana	M
PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	NOMBRES		
Guerra	Saenz	Gloria Maria		
DIRECCIÓN DE RESIDENCIA	CIUDAD O MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	TELÉFONO	
Av 15 + 110 - 60 Apt 103	Bogotá	Cundin	2140027	
ENVÍO DE CORRESPONDENCIA			E-MAIL	
<input type="checkbox"/> RESIDENCIA <input checked="" type="checkbox"/> LUGAR DE TRABAJO A.A. DE				
TIPO DE TRABAJADOR		¿HA COTIZADO MÁS DE 150 SEMANAS?	TIEMPO TOTAL DE COTIZACIÓN	CUÁL(ES) CAJA(S)
<input type="checkbox"/> INDEPENDIENTE <input type="checkbox"/> INDEPENDIENTE Y DEPENDIENTE		ISS NO	CAJAS SI NO	AÑOS MESES
<input checked="" type="checkbox"/> DEPENDIENTE				

**B. INFORMACIÓN VÍNCULO LABORAL**

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR	NIT. C.C. C.E.	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL EMPLEADOR		
8160002426-3	1	B.P. Exploration Company (Colomb)		
OCCUPACIÓN O CARGO ACTUAL	SALARIO O INGRESO MENSUAL	ÁREA O DEPENDENCIA	FECHA DE VINCULACIÓN	
COORDINADOR NEGOCIOS	\$ 5.202.000	INTEGRAL SI NO	AAAAAMDD	
DIRECCIÓN LUGAR DE TRABAJO	CIUDAD O MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	TELÉFONO	
Cra 9A + 99-02 P9	Bogotá	Cundin	6284188	
DIRECCIÓN DEL ÁREA DE NÓMINA	CIUDAD O MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	TELÉFONO	
Cra 9A + 99-02 P9	Bogotá	Cundin	6284188	
CLASIFICACIÓN DE LA EMPRESA:	CÓDIGO CIU	CÓDIGO SEGMENTO	CÓDIGO SUBSEGMENTO	

**C. APOORTE VOLUNTARIO**

<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	% DEL SALARIO	VALOR FIJO \$	FECHA DE INICIO DESCUENTO
<input type="checkbox"/> ANUAL <input type="checkbox"/> SEMESTRAL <input type="checkbox"/> MENSUAL		OTRA	AAAAAMDD

**D. INFORMACIÓN DE BENEFICIARIOS**

PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	NOMBRES	SEXO	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	C.C. T.I. R.C. C.E.	FECHA DE NACIMIENTO	CÓDIGO PARENTESCO
Torres	Guerra	Mariana	M			19960503	04
Saenz	Mateo	Maria Gloria	F	116946		19440625	03
Guerra	Ramos	Carlos Manuel	M	2'860.467		19340101	03

LOS BENEFICIARIOS ANTERIORMENTE RELACIONADOS SERÁN VERIFICADOS DE ACUERDO CON LAS NORMAS LEGALES VIGENTES

**VOLUNTAD DE AFILIADO Y EMPLEADOR:** Me comprometo con Horizonte Pensiones y Cesantías S.A. a cumplir las condiciones que elegí y actualizar anualmente la información arriba consignada.

<b>ESPACIO PARA EL EMPLEADOR</b> DECLARO BAJO JURAMENTO QUE LOS ANTECEDENTES DEL TRABAJADOR INCLUIDOS EN EL PRESENTE CONTRATO SON LOS QUE CORRESPONDEN A LA INFORMACIÓN QUE ME HA SIDO SUMINISTRADA. NOMBRE PEDRO RAMOS BELTRAN CARGO ADMINISTRADOR PERSONAL BP EXPLORATION Company (Colombia) Ltd. FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL	<b>VOLUNTAD DE AFILIACIÓN - PENSIONES OBLIGATORIAS</b> HAGO CONSTAR QUE LA SELECCIÓN DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL CON SOLIDARIDAD LA HE EFECTUADO EN FORMA LIBRE, ESPONTÁNEA Y SIN PRESIONES. MANIFIESTO QUE HE ELEGIDO A LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS HORIZONTE S.A. PARA QUE ADMINISTRE MIS APOORTES PENSIONALES Y QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA SOLICITUD SON VERDADEROS. FIRMA DEL AFILIADO Gloria M. Guerra C.C. 32.674.031	<b>VOLUNTAD DE AFILIACIÓN - CESANTÍAS</b> POR MEDIO DE LA PRESENTE COMUNICO A USTEDES QUE HE ESCOGIDO A LA COMPAÑÍA HORIZONTE PENSIONES Y CESANTÍAS S.A. COMO LA SOCIEDAD QUE DEBE ADMINISTRAR MI CESANTÍA, PARA TAL EFECTO LE SOLICITO SE SIRVA REALIZAR EL DEPÓSITO CORRESPONDIENTE A DICHA ENTIDAD. FIRMA DEL AFILIADO HUELLA DACTILAR ÍNDICE DERECHO
--	---	---

**E. ESPACIO PARA LA ADMINISTRADORA**

ASESOR COMERCIAL	DIRECTOR COMERCIAL	ZONA
NOMBRE Fabiola Ortiz	NOMBRE Pilar Camasquilla	CANAL
CÉDULA: 511613526	CÉDULA: 52618435	NOMBRE CANAL
FIRMA	FIRMA	

**F. REFERIDOS**

NOMBRE COMPLETO	TELÉFONO(S) OFICINA	DIRECCIÓN OFICINA	TELÉFONO RESIDENCIA
1.			
2.			



**SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS  
PORVENIR S.A.  
NIT 800.144.331-3**

**INFORMA QUE:**

El (la) Señor (a) **GUERRA SANZ GLORIA MARIA** identificado (a) con CC 32677031, presenta en su cuenta individual número 6707516 del **FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS** los siguientes datos:

**Vigencias**

FECHA DE INICIO	FECHA DE RETIRO	ENTIDAD TRASLADO
01/11/2000	30/04/2011	FONDO DE PENS OBLIG OLD MUTUAL

**Empleadores que efectuaron aportes:**

NIT	RAZÓN SOCIAL
860,002,426	EQUION ENERGIA LIMITED
830,032,718	BP ENERGY COMPANY (COLOMBIA) LTD

**Valores Traslados:**

FECHA PAGO	VALOR	ENTIDAD
13/05/2011	\$516,106,043	FONDO DE PENS OBLIG OLD MUTUAL
18/11/2013	\$156	FONDO DE PENS OBLIG OLD MUTUAL

Cordialmente,

**Gerencia de Clientes**

Nombre afiliado:

Gloria Guerra

Tipo y número de documento:

CC 32,677,031

Fecha de nacimiento:

07/04/1964

## Tu Historia Laboral Consolidada

Semanas

### Entidades Públicas

A

Consolidada

Traslados de aportes

0

Semanas cotizadas

Válidas para bono

0

Semanas cotizadas

+

### Fondos de Pensiones (RAIS)

B

Otras Administradoras

0

Semanas cotizadas

+

C

Porvenir

540

Semanas cotizadas

[Ver detalles](#)

=

### Total

A + B + C

Cotizadas\*

540

Semanas cotizadas



\*Este total corresponde a las semanas que has cotizado y están confirmadas

\* Si cotizaste simultáneamente para más de un empleador, el valor total del aporte estará incluido en el saldo y el tiempo sumará solo una vez para el cálculo de las semanas cotizadas

Por consolidar

Traslados de aportes

D

0

Semanas pendientes por confirmar

• ¿Por qué estas semanas no hacen parte de las que se muestran en la sección consolidada?

Porque las entidades públicas no han enviado los aportes pertinentes.

• ¿Cómo puedes identificar que estas semanas aún están en verificación?

En la sección D de este documento se ven reflejadas las semanas que serán verificadas por la entidad que corresponda.

• ¿Cómo se puede verificar si las semanas están validadas?

Una vez recibamos los aportes, las semanas se sumarán en la sección A, (en este punto como afiliado puedes validar tu Historia Laboral y reportar las inconsistencias que identifiques, para revisarla). [haz clic aquí](#)

Aportes

Valor de las semanas válidas para bono a fecha de generación del certificado

+

Otras Administradoras y Porvenir

Saldo de la cuenta individual

\$ 0

=

Total acumulado

\$ 0



¿Te hacen falta semanas cotizadas?  
Para actualizar tu Historia Laboral,  
[haz clic aquí](#)



¿Cuántas semanas cotizadas  
tienes en los últimos 3 años?

0

Si has cotizado por lo menos 50 semanas en este período estás cubierto por un seguro previsional que te ampara a ti y a tu familia, teniendo en cuenta los demás requisitos legales.

\* El valor del bono pensional es un cálculo provisional y no debe entenderse en ningún caso como una situación jurídica concreta y definitiva, el mismo puede variar por cambios en su historia laboral o por el tipo de redención de su bono pensional





Semanas cotizadas en Porvenir

Tipo	N° Identificación	Razón Social del Empleador	Historia Laboral Oficial				Historia Laboral recordada por el afiliado en proceso de verificación		
			Periodo Inicial mm/aaaa	Periodo Final mm/aaaa	Ingreso Base de Cotización	Días Cotizados	Periodo Inicial mm/aaaa	Periodo Final mm/aaaa	Días Cotizados
NIT	860002426	EQUION ENERGIA LIMITED	11/2000	12/2000	\$ 5,202,000	60			
NIT	860002426	EQUION ENERGIA LIMITED	01/2001	12/2001	\$ 5,720,000	360			
NIT	860002426	EQUION ENERGIA LIMITED	01/2002	12/2002	\$ 6,180,000	360			
NIT	860002426	EQUION ENERGIA LIMITED	01/2003	01/2003	\$ 6,640,000	30			
NIT	860002426	EQUION ENERGIA LIMITED	02/2003	02/2003	\$ 8,298,711	30			
NIT	860002426	EQUION ENERGIA LIMITED	03/2003	03/2003	\$ 8,296,793	30			
NIT	860002426	EQUION ENERGIA LIMITED	04/2003	05/2003	\$ 8,300,000	60			
NIT	860002426	EQUION ENERGIA LIMITED	06/2003	06/2003	\$ 8,290,096	30			
NIT	860002426	EQUION ENERGIA LIMITED	07/2003	12/2003	\$ 8,300,000	180			
NIT	860002426	EQUION ENERGIA LIMITED	01/2004	08/2004	\$ 8,950,000	240			
NIT	860002426	EQUION ENERGIA LIMITED	09/2004	09/2004	\$ 8,945,095	30			
NIT	860002426	EQUION ENERGIA LIMITED	10/2004	10/2004	\$ 8,950,000	30			
NIT	860002426	EQUION ENERGIA LIMITED	11/2004	11/2004	\$ 8,942,888	30			
NIT	860002426	EQUION ENERGIA LIMITED	12/2004	12/2004	\$ 8,945,008	30			
NIT	860002426	EQUION ENERGIA LIMITED	01/2005	01/2005	\$ 9,531,872	30			
NIT	860002426	EQUION ENERGIA LIMITED	02/2005	02/2005	\$ 9,531,904	30			
NIT	860002426	EQUION ENERGIA LIMITED	03/2005	07/2005	\$ 9,537,000	150			
NIT	860002426	EQUION ENERGIA LIMITED	08/2005	08/2005	\$ 9,537,500	30			
NIT	860002426	EQUION ENERGIA LIMITED	09/2005	12/2005	\$ 9,537,000	120			



Semanas cotizadas en Porvenir

Tipo	N° Identificación	Razón Social del Empleador
NIT	860002426	EQUION ENERGIA LIMITED
NIT	860002426	EQUION ENERGIA LIMITED
NIT	860002426	EQUION ENERGIA LIMITED
NIT	860002426	EQUION ENERGIA LIMITED
NIT	860002426	EQUION ENERGIA LIMITED
NIT	830032718	BP ENERGY COMPANY (COLOMBIA) LTD
NIT	830032718	BP ENERGY COMPANY (COLOMBIA) LTD

Historia Laboral Oficial			
Periodo Inicial mm/yyyy	Periodo Final mm/yyyy	Ingreso Base de Cotización	Días Cotizados
01/2006	12/2006	\$ 10,200,000	360
01/2007	12/2007	\$ 10,842,000	360
01/2008	12/2008	\$ 11,537,000	360
01/2009	12/2009	\$ 12,422,000	360
01/2010	10/2010	\$ 12,875,000	300
11/2010	12/2010	\$ 12,875,000	60
01/2011	04/2011	\$ 13,390,000	120

Historia Laboral recordada por el afiliado en proceso de verificación		
Periodo Inicial mm/yyyy	Periodo Final mm/yyyy	Días Cotizados

Total de semanas cotizadas:  
**540**

Para tus  
solicitudes  
consulta

**Servifácil**  
porvenir

For more  
Web

Porvenir  
Miguel

Chat:  
Por favor



Contacto  
Por favor

Audio  
Requests



Andrew A. Stalder is  
Virtual



Punto de Atención  
Elioda Rosendo



Forward  
APP



SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS  
Relacion de aportes

Cédula	32677031	Nombre	GLORIA MARIA GUERRA SANZ	Numero Cuenta	6707516
Dirección	KR 7 A 90 33 TO 2 AP 302 CO PARQUES	Ciudad	BOGOTA D.C.	Departamento	BOGOTA
Estado Afiliado	NO_VIGENTE	SubEstado Afiliado	TRASLADO_SALIDA	Fecha Generación Informe	2024/04/19
Fecha Afiliación	2000/09/26	Fecha Efectividad Afiliación	2000/11/01	Tipo de Vinculación	TRASLADO DE AFP

Fecha Pago	Periodo Pago	Nit Pago	Razon Social	IBC	Dias Cotizados	Aporte Obligatorio	Comision	FSP	FGPM	Vol. Afiliado	Vol. Empleador	Alt. Riesgo	Sancion
2000/12/05	200011	860002426	EQUION ENERGIA LIMITED	5,202,000	30	520,223	182,077	52,000	0	0	0	0	0
2001/01/04	200012	860002426	EQUION ENERGIA LIMITED	5,202,000	30	520,223	182,077	52,000	0	0	0	0	0
2001/02/07	200101	860002426	EQUION ENERGIA LIMITED	5,720,000	30	572,000	200,200	57,200	0	0	0	0	0
2001/03/05	200102	860002426	EQUION ENERGIA LIMITED	5,720,000	30	572,000	200,200	57,200	0	0	0	0	0
2001/04/09	200103	860002426	EQUION ENERGIA LIMITED	5,720,000	30	572,000	200,200	57,200	0	0	0	0	0
2001/05/04	200104	860002426	EQUION ENERGIA LIMITED	5,720,000	30	572,000	200,200	57,200	0	0	0	0	0
2001/06/04	200105	860002426	EQUION ENERGIA LIMITED	5,720,000	30	572,000	200,200	57,200	0	0	0	0	0
2001/07/05	200106	860002426	EQUION ENERGIA LIMITED	5,720,000	30	572,000	200,200	57,200	0	0	0	0	0
2001/08/03	200107	860002426	EQUION ENERGIA LIMITED	5,720,000	30	572,000	200,200	57,200	0	0	0	0	0
2001/09/06	200108	860002426	EQUION ENERGIA LIMITED	5,720,000	30	572,000	200,200	57,200	0	0	0	0	0
2001/10/03	200109	860002426	EQUION ENERGIA LIMITED	5,720,000	30	572,000	200,200	57,200	0	0	0	0	0
2001/11/06	200110	860002426	EQUION ENERGIA LIMITED	5,720,000	30	572,000	200,200	57,200	0	0	0	0	0
2001/12/05	200111	860002426	EQUION ENERGIA LIMITED	5,720,000	30	572,000	200,200	57,200	0	0	0	0	0
2002/01/04	200112	860002426	EQUION ENERGIA LIMITED	5,720,000	30	572,000	200,200	57,200	0	0	0	0	0
2002/02/05	200201	860002426	EQUION ENERGIA LIMITED	6,180,000	30	618,000	216,300	61,800	0	0	0	0	0
2002/03/05	200202	860002426	EQUION ENERGIA LIMITED	6,180,000	30	619,236	215,064	61,800	0	0	0	0	0
2002/04/04	200203	860002426	EQUION ENERGIA LIMITED	6,180,000	30	619,236	215,064	61,800	0	0	0	0	0

Fecha Pago	Periodo Pago	Nit Pago	Razon Social	IBC	Dias Cotizados	Aporte Obligatorio	Comision	FSP	FGPM	Vol. Afiliado	Vol. Empleador	Alt. Riesgo	Sancion
2002/05/06	200204	860002426	EQUION ENERGIA LIMITED	6,180,000	30	618,000	216,300	61,800	0	0	0	0	0
2002/06/07	200205	860002426	EQUION ENERGIA LIMITED	6,180,000	30	618,000	216,300	61,800	0	0	0	0	0
2002/07/04	200206	860002426	EQUION ENERGIA LIMITED	6,180,000	30	618,000	216,300	61,800	0	0	0	0	0
2002/08/02	200207	860002426	EQUION ENERGIA LIMITED	6,180,000	30	618,000	216,300	61,800	0	0	0	0	0
2002/09/04	200208	860002426	EQUION ENERGIA LIMITED	6,180,000	30	618,000	216,300	61,800	0	0	0	0	0
2002/10/03	200209	860002426	EQUION ENERGIA LIMITED	6,180,000	30	618,000	216,300	61,800	0	0	0	0	0
2002/11/06	200210	860002426	EQUION ENERGIA LIMITED	6,180,000	30	618,000	216,300	61,800	0	0	0	0	0
2002/12/05	200211	860002426	EQUION ENERGIA LIMITED	6,180,000	30	618,000	216,300	61,800	0	0	0	0	0
2003/01/07	200212	860002426	EQUION ENERGIA LIMITED	6,180,000	30	618,000	216,300	61,800	0	0	0	0	0
2003/02/05	200301	860002426	EQUION ENERGIA LIMITED	6,640,000	30	664,000	232,400	66,400	0	0	0	0	0
2003/03/05	200302	860002426	EQUION ENERGIA LIMITED	8,298,667	30	829,862	248,958	166,000	41,500	0	0	0	0
2003/11/27	200302	860002426	EQUION ENERGIA LIMITED	1,333	1	140	40	0	0	0	0	0	23
2003/04/02	200303	860002426	EQUION ENERGIA LIMITED	8,296,793	30	829,667	248,900	166,000	41,500	0	0	0	0
2003/05/07	200304	860002426	EQUION ENERGIA LIMITED	8,300,000	30	830,000	249,000	166,000	41,500	0	0	0	0
2003/06/05	200305	860002426	EQUION ENERGIA LIMITED	8,300,000	30	830,000	249,000	166,000	41,500	0	0	0	0
2003/07/04	200306	860002426	EQUION ENERGIA LIMITED	8,290,096	30	828,972	248,691	166,000	41,500	0	0	0	0
2003/08/05	200307	860002426	EQUION ENERGIA LIMITED	8,300,000	30	830,000	249,000	166,000	41,500	0	0	0	0
2003/09/03	200308	860002426	EQUION ENERGIA LIMITED	8,300,000	30	830,000	249,000	166,000	41,500	0	0	0	0
2003/10/03	200309	860002426	EQUION ENERGIA LIMITED	8,300,000	30	830,000	249,000	166,000	41,500	0	0	0	0
2003/11/06	200310	860002426	EQUION ENERGIA LIMITED	8,300,000	30	830,000	249,000	166,000	41,500	0	0	0	0
2003/12/03	200311	860002426	EQUION ENERGIA LIMITED	8,300,000	30	830,000	249,000	166,000	41,500	0	0	0	0
2004/01/07	200312	860002426	EQUION ENERGIA LIMITED	8,300,000	30	830,000	249,000	166,000	41,500	0	0	0	0
2004/02/05	200401	860002426	EQUION ENERGIA LIMITED	8,950,000	30	894,961	268,489	179,000	134,250	0	0	0	0
2004/03/04	200402	860002426	EQUION ENERGIA LIMITED	8,950,000	30	894,961	268,489	179,000	134,250	0	0	0	0
2004/04/05	200403	860002426	EQUION ENERGIA LIMITED	8,950,000	30	894,961	268,489	179,000	134,250	0	0	0	0

Fecha Pago	Periodo Pago	Nit Pago	Razon Social	IBC	Dias Cotizados	Aporte Obligatorio	Comision	FSP	FGPM	Vol. Afiliado	Vol. Empleador	Alt. Riesgo	Sancion
2004/05/05	200404	860002426	EQUION ENERGIA LIMITED	8,950,000	30	894,961	268,489	179,000	134,250	0	0	0	0
2004/06/03	200405	860002426	EQUION ENERGIA LIMITED	8,950,000	30	894,961	268,489	179,000	134,250	0	0	0	0
2004/07/07	200406	860002426	EQUION ENERGIA LIMITED	8,950,000	30	894,961	268,489	179,000	134,250	0	0	0	0
2004/08/06	200407	860002426	EQUION ENERGIA LIMITED	8,950,000	30	894,961	268,489	179,000	134,250	0	0	0	0
2004/09/03	200408	860002426	EQUION ENERGIA LIMITED	8,950,000	30	894,961	268,489	179,000	134,250	0	0	0	0
2004/10/06	200409	860002426	EQUION ENERGIA LIMITED	8,944,938	30	894,435	268,331	179,000	134,250	0	0	0	0
2007/07/13	200409	860002426	EQUION ENERGIA LIMITED	4,717	1	543	141	0	0	0	0	0	0
2004/11/04	200410	860002426	EQUION ENERGIA LIMITED	8,950,000	30	894,961	268,489	179,000	134,250	0	0	0	0
2004/12/03	200411	860002426	EQUION ENERGIA LIMITED	8,942,655	30	894,181	268,254	179,000	134,250	0	0	0	0
2007/07/13	200411	860002426	EQUION ENERGIA LIMITED	7,000	1	805	210	0	0	0	0	0	0
2005/01/05	200412	860002426	EQUION ENERGIA LIMITED	8,944,848	30	894,425	268,328	179,000	134,250	0	0	0	0
2007/07/13	200412	860002426	EQUION ENERGIA LIMITED	4,807	1	553	144	0	0	0	0	0	0
2005/02/04	200501	860002426	EQUION ENERGIA LIMITED	9,531,707	30	1,000,767	285,934	190,800	143,055	0	0	0	0
2007/07/13	200501	860002426	EQUION ENERGIA LIMITED	4,960	1	595	149	0	0	0	0	0	0
2005/03/04	200502	860002426	EQUION ENERGIA LIMITED	9,531,740	30	1,000,772	285,934	190,800	143,055	0	0	0	0
2007/07/13	200502	860002426	EQUION ENERGIA LIMITED	4,927	1	591	148	0	0	0	0	0	0
2005/04/07	200503	860002426	EQUION ENERGIA LIMITED	9,537,000	30	1,001,346	286,099	190,700	143,055	0	0	0	0
2005/05/05	200504	860002426	EQUION ENERGIA LIMITED	9,537,000	30	1,001,346	286,099	190,800	143,055	0	0	0	0
2005/06/03	200505	860002426	EQUION ENERGIA LIMITED	9,537,000	30	1,001,346	286,099	190,800	143,055	0	0	0	0
2005/07/06	200506	860002426	EQUION ENERGIA LIMITED	9,537,000	30	1,001,346	286,099	190,800	143,055	0	0	0	0
2005/08/04	200507	860002426	EQUION ENERGIA LIMITED	9,537,000	30	1,001,346	286,099	190,800	143,055	0	0	0	0
2005/09/14	200508	860002426	EQUION ENERGIA LIMITED	9,537,500	30	1,001,495	286,142	190,800	143,063	0	0	0	0
2005/10/07	200509	860002426	EQUION ENERGIA LIMITED	9,537,000	30	1,001,346	286,099	190,700	143,055	0	0	0	0
2005/11/04	200510	860002426	EQUION ENERGIA LIMITED	9,537,000	30	1,001,346	286,099	190,700	143,055	0	0	0	0
2005/12/05	200511	860002426	EQUION ENERGIA LIMITED	9,537,000	30	1,001,346	286,099	190,700	143,055	0	0	0	0

Fecha Pago	Periodo Pago	Nit Pago	Razon Social	IBC	Dias Cotizados	Aporte Obligatorio	Comision	FSP	FGPM	Vol. Afiliado	Vol. Empleador	Alt. Riesgo	Sancion
2006/01/04	200512	860002426	EQUION ENERGIA LIMITED	9,537,000	30	1,001,346	286,099	190,700	143,055	0	0	0	0
2006/02/03	200601	860002426	EQUION ENERGIA LIMITED	10,200,000	30	1,122,000	306,000	204,000	153,000	0	0	0	0
2006/03/06	200602	860002426	EQUION ENERGIA LIMITED	10,200,000	30	1,122,000	306,000	204,000	153,000	0	0	0	0
2006/04/04	200603	860002426	EQUION ENERGIA LIMITED	10,200,000	30	1,122,000	306,000	204,000	153,000	0	0	0	0
2006/05/04	200604	860002426	EQUION ENERGIA LIMITED	10,200,000	30	1,122,000	306,000	204,000	153,000	0	0	0	0
2006/06/06	200605	860002426	EQUION ENERGIA LIMITED	10,200,000	30	1,122,000	306,000	204,000	153,000	0	0	0	0
2006/07/06	200606	860002426	EQUION ENERGIA LIMITED	10,200,000	30	1,122,000	306,000	204,000	153,000	0	0	0	0
2006/08/08	200607	860002426	EQUION ENERGIA LIMITED	10,200,000	30	1,122,000	306,000	204,000	153,000	0	0	0	0
2006/09/06	200608	860002426	EQUION ENERGIA LIMITED	10,200,000	30	1,122,000	306,000	204,000	153,000	0	0	0	0
2006/10/06	200609	860002426	EQUION ENERGIA LIMITED	10,200,000	30	1,122,000	306,000	204,000	153,000	0	0	0	0
2006/11/03	200610	860002426	EQUION ENERGIA LIMITED	10,200,000	30	1,122,000	306,000	204,000	153,000	0	0	0	0
2006/12/06	200611	860002426	EQUION ENERGIA LIMITED	10,200,000	30	1,122,000	306,000	204,000	153,000	0	0	0	0
2007/01/05	200612	860002426	EQUION ENERGIA LIMITED	10,200,000	30	1,122,000	306,000	204,000	153,000	0	0	0	0
2007/02/07	200701	860002426	EQUION ENERGIA LIMITED	10,842,000	30	1,192,612	325,258	216,800	162,630	0	0	0	0
2007/03/06	200702	860002426	EQUION ENERGIA LIMITED	10,842,000	30	1,192,612	325,258	216,800	162,630	0	0	0	0
2007/04/04	200703	860002426	EQUION ENERGIA LIMITED	10,842,000	30	1,192,612	325,258	216,800	162,630	0	0	0	0
2007/05/07	200704	860002426	EQUION ENERGIA LIMITED	10,842,000	30	1,192,612	325,258	216,800	162,630	0	0	0	0
2007/06/06	200705	860002426	EQUION ENERGIA LIMITED	10,842,000	30	1,192,612	325,258	216,800	162,630	0	0	0	1,166
2007/07/04	200706	860002426	EQUION ENERGIA LIMITED	10,842,000	30	1,192,612	325,258	216,800	162,630	0	0	0	0
2007/08/02	200707	860002426	EQUION ENERGIA LIMITED	10,842,000	30	1,192,612	325,258	216,800	162,630	0	0	0	0
2007/09/05	200708	860002426	EQUION ENERGIA LIMITED	10,842,000	30	1,192,612	325,258	216,800	162,630	0	0	0	0
2007/10/02	200709	860002426	EQUION ENERGIA LIMITED	10,842,000	30	1,192,612	325,258	216,800	162,630	0	0	0	0
2007/11/02	200710	860002426	EQUION ENERGIA LIMITED	10,842,000	30	1,192,612	325,258	216,800	162,630	0	0	0	0
2007/12/04	200711	860002426	EQUION ENERGIA LIMITED	10,842,000	30	1,192,612	325,258	216,800	162,630	0	0	0	0
2008/01/03	200712	860002426	EQUION ENERGIA LIMITED	10,842,000	30	1,192,612	325,258	216,800	162,630	0	0	0	0

Fecha Pago	Periodo Pago	Nit Pago	Razon Social	IBC	Dias Cotizados	Aporte Obligatorio	Comision	FSP	FGPM	Vol. Afiliado	Vol. Empleador	Alt. Riesgo	Sancion
2008/02/01	200801	860002426	EQUION ENERGIA LIMITED	11,537,000	30	1,326,739	346,106	230,800	173,055	0	0	0	0
2008/03/05	200802	860002426	EQUION ENERGIA LIMITED	11,537,000	30	1,326,739	346,106	230,800	173,055	0	0	0	0
2008/04/02	200803	860002426	EQUION ENERGIA LIMITED	11,537,000	30	1,326,739	346,106	230,800	173,055	0	0	0	0
2008/05/06	200804	860002426	EQUION ENERGIA LIMITED	11,537,000	30	1,326,739	346,106	230,800	173,055	0	0	0	0
2008/06/04	200805	860002426	EQUION ENERGIA LIMITED	11,537,000	30	1,326,739	346,106	230,800	173,055	0	0	0	0
2008/07/01	200806	860002426	EQUION ENERGIA LIMITED	11,537,000	30	1,326,739	346,106	230,800	173,055	0	0	0	0
2008/08/01	200807	860002426	EQUION ENERGIA LIMITED	11,537,000	30	1,326,739	346,106	230,800	173,055	0	0	0	0
2008/09/02	200808	860002426	EQUION ENERGIA LIMITED	11,537,000	30	1,326,739	346,106	230,800	173,055	0	0	0	0
2008/10/02	200809	860002426	EQUION ENERGIA LIMITED	11,537,000	30	1,326,739	346,106	230,800	173,055	0	0	0	0
2008/11/05	200810	860002426	EQUION ENERGIA LIMITED	11,537,000	30	1,326,739	346,106	230,800	173,055	0	0	0	0
2008/12/02	200811	860002426	EQUION ENERGIA LIMITED	11,537,000	30	1,326,741	346,106	230,700	173,053	0	0	0	0
2008/12/24	200812	860002426	EQUION ENERGIA LIMITED	11,537,000	30	1,326,741	346,106	230,700	173,053	0	0	0	0
2009/02/03	200901	860002426	EQUION ENERGIA LIMITED	12,422,000	30	1,428,516	372,656	248,400	186,328	0	0	0	0
2012/03/26	200901	860002426	EQUION ENERGIA LIMITED	122	1	0	0	0	0	0	14	0	0
2009/03/03	200902	860002426	EQUION ENERGIA LIMITED	12,422,000	30	1,428,516	372,656	248,400	186,328	0	0	0	0
2009/04/02	200903	860002426	EQUION ENERGIA LIMITED	12,422,000	30	1,428,516	372,656	248,400	186,328	0	0	0	0
2009/05/05	200904	860002426	EQUION ENERGIA LIMITED	12,422,000	30	1,428,516	372,656	248,400	186,328	0	0	0	0
2009/06/03	200905	860002426	EQUION ENERGIA LIMITED	12,422,000	30	1,428,516	372,656	248,400	186,328	0	0	0	0
2009/07/02	200906	860002426	EQUION ENERGIA LIMITED	12,422,000	30	1,428,516	372,656	248,400	186,328	0	0	0	0
2009/08/05	200907	860002426	EQUION ENERGIA LIMITED	12,422,000	30	1,428,516	372,656	248,400	186,328	0	0	0	0
2009/09/04	200908	860002426	EQUION ENERGIA LIMITED	12,422,000	30	1,428,516	372,656	248,400	186,328	0	0	0	0
2009/10/02	200909	860002426	EQUION ENERGIA LIMITED	12,422,000	30	1,428,516	372,656	248,400	186,328	0	0	0	0
2009/11/05	200910	860002426	EQUION ENERGIA LIMITED	12,422,000	30	1,428,516	372,656	248,400	186,328	0	0	0	0
2009/12/02	200911	860002426	EQUION ENERGIA LIMITED	12,422,000	30	1,428,516	372,656	248,400	186,328	0	0	0	0
2009/12/22	200912	860002426	EQUION ENERGIA LIMITED	12,422,000	30	1,428,516	372,656	248,400	186,328	0	0	0	0

Fecha Pago	Periodo Pago	Nit Pago	Razon Social	IBC	Dias Cotizados	Aporte Obligatorio	Comision	FSP	FGPM	Vol. Afiliado	Vol. Empleador	Alt. Riesgo	Sancion
2010/02/02	201001	860002426	EQUION ENERGIA LIMITED	12,875,000	30	1,480,625	386,250	257,500	193,125	0	0	0	0
2010/02/02	201001	860002426	EQUION ENERGIA LIMITED	226	1	0	0	0	0	0	26	0	0
2010/03/02	201002	860002426	EQUION ENERGIA LIMITED	12,875,000	30	1,480,625	386,250	257,500	193,125	0	0	0	0
2010/03/02	201002	860002426	EQUION ENERGIA LIMITED	270	1	0	0	0	0	0	31	0	0
2010/04/06	201003	860002426	EQUION ENERGIA LIMITED	12,875,000	30	1,480,625	386,250	257,500	193,125	0	0	0	0
2010/04/06	201003	860002426	EQUION ENERGIA LIMITED	287	1	0	0	0	0	0	33	0	0
2010/05/04	201004	860002426	EQUION ENERGIA LIMITED	12,875,000	30	1,480,625	386,250	257,500	193,125	0	0	0	0
2010/06/02	201005	860002426	EQUION ENERGIA LIMITED	12,875,000	30	1,480,625	386,250	257,500	193,125	0	0	0	0
2010/07/02	201006	860002426	EQUION ENERGIA LIMITED	12,875,000	30	1,480,625	386,250	257,500	193,125	0	0	0	0
2010/08/03	201007	860002426	EQUION ENERGIA LIMITED	12,875,000	30	1,480,625	386,250	257,500	193,125	0	0	0	0
2010/09/02	201008	860002426	EQUION ENERGIA LIMITED	12,875,000	30	1,480,625	386,250	257,500	193,125	0	0	0	0
2010/10/05	201009	860002426	EQUION ENERGIA LIMITED	12,875,000	30	1,480,625	386,250	257,500	193,125	0	0	0	0
2010/11/03	201010	860002426	EQUION ENERGIA LIMITED	12,875,000	30	1,480,625	386,250	257,500	193,125	0	0	0	0
2010/12/06	201011	830032718	BP ENERGY COMPANY (COLOMBIA) LTD	12,875,000	30	1,480,618	386,248	257,500	193,125	0	0	0	3,684
2010/12/24	201012	830032718	BP ENERGY COMPANY (COLOMBIA) LTD	12,875,000	30	1,480,618	386,248	257,500	193,125	0	0	0	0
2011/02/07	201101	830032718	BP ENERGY COMPANY (COLOMBIA) LTD	13,390,000	30	1,539,784	401,683	267,800	200,850	0	0	0	5,563
2011/03/03	201102	830032718	BP ENERGY COMPANY (COLOMBIA) LTD	13,390,000	30	1,539,792	401,685	267,800	200,850	0	0	0	0
2011/04/04	201103	830032718	BP ENERGY COMPANY (COLOMBIA) LTD	13,390,000	30	1,539,789	401,685	267,800	200,850	0	0	0	0
2012/06/19	201103	830032718	BP ENERGY COMPANY (COLOMBIA) LTD	139	1	0	0	0	0	0	16	0	0
2011/04/27	201104	830032718	BP ENERGY COMPANY (COLOMBIA) LTD	13,390,000	30	1,539,800	401,687	267,800	200,850	0	0	0	0



- Historial de novedades
- Relaciones laborales
- Historia laboral
- No Vinculados
- Historico de pagos
- Beneficios Pensionales
- Tareas por Afiliado
- Vista Integral

Historial de vinculaciones

Hora de la consulta : 1:59:19 PM

Afiliado: CC 32677031 GLORIA MARIA GUERRA SANZ [Ver detalle](#)

Afiliado presenta vinculaciones eliminadas Afiliado presenta vinculaciones inválidas

Vinculaciones para : CC 32677031

Tipo de vinculación	Fecha de solicitud	Fecha de proceso	AFP destino	AFP origen	AFP origen antes de reconstrucción	Fecha inicio de efectividad	Fecha fin de efectividad
Traslado regimen	1994-05-11	2008/11/19	ING	COLPENSIONES		1994-06-01	2000-10-31
Traslado de AFP	2000-09-26	2008/11/19	HORIZONTE	ING		2000-11-01	2011-04-30
Traslado de AFP	2011-03-18	2011/04/18	SKANDIA	HORIZONTE		2011-05-01	

3 registros encontrados, visualizando todos registros.

1

Vinculaciones migradas de Mareigua para: CC 32677031

Fecha de novedad	Fecha de proceso	Código de novedad	Descripción	AFP	AFP involucrada
1994-10-25	1996-06-13	01	AFILIACION	COLFONDOS	
2000-09-26	2000-10-10	79	TRASLADO AUTOMATICO	HORIZONTE	COLFONDOS

2 registros encontrados, visualizando todos registros.

1

USUARIO: PVCVIUCHEF

CARLOS ANDRES VIUCHE  
FONSECA

19 de Abril de 2024

[Registrar  
servicio](#)

Buscar en Wiki SIAFP



A partir del 01

[Afirmados](#) [Personas](#) [Aportantes](#) [Estadísticas](#) [Documentación](#) [Entrega HL al RPM](#) [Usuarios](#) [Autoservicio](#) [Administrador de Tareas](#)

Consulta de viabilidad

Hora de la Consulta : 1:59:26 PM

Los resultados obtenidos de la consulta son:

Identificación :	CC 32677031
Apellidos :	GUERRA SANZ
Nombres :	GLORIA MARIA
Certificado por :	ANI MINISTERIO DE SALUD
Fecha de certificación :	2014/04/19
Código de vigencia :	00 VIGENTE
Novedad de respuesta :	037 Afiliado a otro Administradora. Traslado viable AFP
Lugar de expedición :	
Fecha de expedición :	1982/11/25
Género :	F
Fecha de nacimiento :	1964/04/07
Edad :	60
Indicador fecha de nacimiento verificada :	SI
Nacionalidad :	
Fecha de traslado al RPM :	
Entidad del RPM :	
Entidad certificadora fecha de nacimiento :	UGPP

Los cálculos sobre la viabilidad del traslado por edad, los cuales hacen referencia con que al afiliado le falten diez o menos años para pensionarse se realizaron con la fecha certificada en Siafp

Imprimir

Regresar

SOLICITADO POR	mhlcurre 172.27.6.1
FECHA Y HORA	19/04/2024 03:09:37
ENTIDAD	SOC ADM DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S A

### CONSULTA DE BONOS



* Tipo Documento	CEDULA CIUDADANIA ▼	Documento	32677031
------------------	---------------------	-----------	----------

El beneficiario no se encuentra afiliado a la AFP solicitante.



## COMUNICADO 13

Abril 9 de 2024

**Sentencia SU-107/24**

**M.P. Jorge Enrique Ibáñez Najar**

**Expediente: T-7.867.632 AC**

**La Corte Constitucional modula el precedente de la Corte Suprema de Justicia en materia probatoria en procesos ordinarios donde se discute la ineficacia del traslado de afiliados del Régimen de Prima Media al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad por problemas de información ocurridos entre 1993 y 2009**

La Corte Constitucional dispuso modular el precedente de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en materia probatoria en los procesos ordinarios en los cuales se discute la ineficacia del traslado de afiliados del Régimen de Prima Media con Prestación Definida -en adelante, RPM-, al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad -en adelante, RAIS-, debido a problemas de información ocurridos entre 1993 y 2009.

La Corte Suprema de Justicia ha sostenido que siempre que se indique, en la demanda, que una Administradora de Fondo de Pensiones -en adelante AFP- no informó sobre las consecuencias de un cambio de régimen pensional, corresponde a la AFP demostrar que sí brindó dicha información. Esta regla se enunció por primera vez en la Sentencia 31989 del 9 de septiembre de 2008, en la que se advirtió lo que sigue: “[e]n estas condiciones el engaño, no solo se produce en lo que se afirma, sino en los silencios que guarda el profesional, que ha de tener la iniciativa en proporcionar todo aquello que resulte relevante para la toma de decisión que se persigue; de esta manera la diligencia debida se traduce en un traslado de la carga de la prueba del actor a la entidad demandada.” (Subrayas fuera de texto). Esta regla fue reiterada con posterioridad, y ha adoptado varias manifestaciones: (i) Algunas providencias señalaron que el traslado de la carga de la prueba obedecía a la aplicación estricta del artículo 1604 del Código Civil (v. gr., Sentencias SL19447-2017 y SL17595-2017); (ii) otras indicaron que la inversión aludida obedece a la facilidad que tienen las AFP de demostrar el suministro de información (Sentencia SL4296-2018); y, (iii) en otras providencias se ha advertido que quien alega una falta de información no está obligado a demostrar una negación indefinida (SL1452-2019).

La Corte Constitucional consideró que el precedente es desproporcionado en materia probatoria y con ello viola el derecho constitucional al debido proceso en los casos en los cuales se discute la ineficacia del traslado de los afiliados del RPM al RAIS por problemas de información ocurridos entre 1993 y 2009. La Corte consideró que de conformidad con la Constitución y la ley procesal no se pueden imponer cargas probatorias imposibles de cumplir para ninguna de las partes (ni al afiliado, ni a la AFP), así como no se puede despojar al juez de su papel de director del proceso, de su autonomía judicial para decretar y practicar todas las pruebas que sean necesarias, pertinentes y conducentes para analizar las pretensiones o las excepciones propuestas y de su facultad para conforme a las reglas de la sana crítica valorar las pruebas con el objeto de resolver los casos de ineficacia de traslados de los afiliados del RPM al RAIS.

Para tal efecto, en los procesos en los cuales se pretenda declarar la ineficacia de un traslado de un afiliado del RPM al RAIS deben tenerse en cuenta, de manera exclusiva, las reglas contenidas en la Constitución Política, en el Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social y en el Código General del Proceso. En tal virtud, conforme a ellas, al juez corresponderá, seguir cuando menos las siguientes directrices: (i) decretar todas las pruebas pedidas por las partes que sean pertinentes y conducentes o las que de oficio sean necesarias; (ii) valorar por igual todas las pruebas decretadas y practicadas, de manera individual y en su conjunto con las demás, inclusive los indicios, que le permitan determinar el grado de convicción que aquellas ofrecen sobre los hechos ocurridos y el conocimiento del afiliado sobre las consecuencias del traslado; (iii) no será posible aplicar como único recurso la inversión de la carga de la prueba. La Corte determinó extender efectos inter pares a las reglas de modulación del precedente de la Sala de Casación Laboral.

## **1. Antecedentes**

La Corte Constitucional revisó veinticinco acciones de tutela dirigidas contra providencias judiciales en las que se había resuelto sobre la *ineficacia* del traslado que algunos afiliados realizaron dentro del periodo comprendido entre 1993 y 2009, de un fondo privado a Colpensiones.

En veinte de los casos<sup>1</sup> los demandantes señalaron que las autoridades judiciales se habían apartado de manera injustificada del precedente de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, según el cual, cuando un afiliado alegue que fue indebidamente informado sobre las implicaciones de su traslado, le correspondería a la AFP demandada demostrar que sí informó adecuadamente sobre las consecuencias del traslado.

A su turno, en cinco de los veinte casos antes mencionados,<sup>2</sup> se presentó el fenómeno de la *multivinculación*. Los demandantes iniciaron procesos ordinarios laborales con el ánimo de que allí se declarara la *ineficacia* de sus traslados, sobre la base de que habían sido indebidamente trasladados. Los demandantes, en apoyo de la falta de información, señalaron que ello repercutió en la decisión de regresar al RPM lo cual, a la postre les resultó lesivo. En la mayoría de estos casos, los jueces de primera instancia accedieron a las pretensiones de los demandantes y declararon la *ineficacia* del traslado.<sup>3</sup> En otros casos, los jueces negaron lo pretendido.<sup>4</sup>

De cualquier modo, luego de que en cada proceso se surtiera el grado jurisdiccional de consulta o se interpusiera el respectivo recurso de apelación, los jueces de segunda instancia confirmaron las decisiones que negaban la *ineficacia* del traslado, o revocaron aquellas en las que se había accedido a ello.<sup>5</sup>

Las razones para negar lo pretendido consistieron en que los demandantes: (i) no estaban amparados por el régimen de transición, ni estaban cerca de pensionarse cuando realizaron el traslado al RAIS; (ii) no probaron haber sido objeto de coacción, error o inducción cuando se trasladaron; y, (iii) suscribieron debidamente el formulario de afiliación. Contra estas decisiones, en la mayoría de los casos los actores no

---

<sup>1</sup> Expedientes T-7.930.563, T-7.936.682, T-7.938.558, T-7.940.054, T-7.944.741, T-7.946.315, T-7.946.354, T-8.040.807, T-8.224.223, T-8.235.289, T-8.256.424, T-8.261.557, T-8.322.441, T-8.355.875, T-8.357.853, T-8.405.298, T-8.464.250, T-8.464.951, T-8.489.328 y T-8.255.677.

<sup>2</sup> Expedientes T-7.936.682, T-7.938.558, T-7.944.741, T-8.256.424 y T-8.355.875.

<sup>3</sup> Expedientes T-7.930.563, T-7.936.682, T-7.938.558, T-7.940.054, T-7.944.741, T-7.946.315, T-7.946.354, T-8.224.223, T-8.235.289, T-8.322.441, T-8.357.853, T-8.405.298, T-8.464.250, T-8.464.951, T-8.489.328 y T-8.255.677.

<sup>4</sup> Expedientes T-8.040.807, T-8.256.424, T-8.261.557 y T-8.355.875.

<sup>5</sup> Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá -Sala Laboral- (Expedientes T-7.930.563, T-7.936.682, T-7.938.558, T-7.940.054, T-7.944.741, T-7.946.315, T-7.946.354, T-8.224.223, T-8.235.289, T-8.256.424, T-8.261.557, T-8.322.441, T-8.355.875, T-8.357.853, T-8.405.298, T-8.464.250, T-8.464.951, T-8.489.328 y T-8.255.677). Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia -Sala Civil, Familia, Laboral (Expediente T-8.040.807).

formularon el recurso extraordinario de casación, pero sí acudieron a la acción de tutela.

En las acciones de tutela respectivas, los demandantes señalaron, básicamente, que los accionados habían desconocido el precedente establecido por la Corte Suprema de Justicia al abordar materias como estas.

En la gran mayoría de los casos, quien conoció del proceso de tutela en primera instancia fue la Corte Suprema de Justicia en su Sala de Casación Laboral. En todos ellos se amparó el derecho al debido proceso de los tutelantes, al comprobarse que las autoridades judiciales accionadas habían desconocido el precedente vertical, establecido por parte de la Sala de Casación Laboral. De acuerdo con ese precedente se debían aplicar las siguientes reglas:

- (i) Debe operar la inversión en la carga de la prueba, a efectos de que las AFP demuestren que sí informaron al afiliado sobre los efectos de su traslado de régimen;
- (ii) esta regla no aplica solo para beneficiarios del régimen de transición;
- (iii) el formulario de afiliación no acredita el consentimiento informado; y
- (iv) el desconocimiento del deber de información no se sana con el tiempo.

En los cinco casos restantes, se presentó una discusión distinta. En el expediente T-8.031.929, el Tribunal accionado determinó que había operado el fenómeno de la prescripción, pues la demandante había acudido a la jurisdicción ordinaria varios años después de haber descubierto los efectos adversos de su traslado al RAIS. La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, como juez de tutela, revocó esa decisión sosteniendo que cuando se requiere la ineficacia de un traslado, no opera la prescripción.

En el expediente T-7.981.335, el Tribunal accionado sostuvo que, en el proceso, se había demostrado que la accionante sí recibió la información sobre las implicaciones de su traslado. La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, como juez de tutela, indicó que la sentencia censurada no contenía ninguna "vía de hecho", pues, de cualquier manera, la decisión se fundó en el material probatorio obrante en el expediente.

En el expediente T-8.319.475, la accionante pidió al Tribunal accionado aceptar su devolución al RPM con base en lo dispuesto en el artículo 2 del Decreto 1642 de 1995,<sup>6</sup> con todo, el Tribunal resolvió no acceder a esa petición fundando su postura en dos normas distintas a la invocada.<sup>7</sup> Por eso, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, como juez de tutela, advirtió la existencia de un defecto sustantivo.

En el expediente T-8.484.811, la Corte Suprema de Justicia -Sala Laboral, Sala de Descongestión No. 4-, como tribunal de casación, declaró que, por la movilidad que al interior del RAIS llevó a cabo una accionante, aquella ratificó su intención de permanecer en el RAIS y no en el RPM. La Sala de Casación Penal -Sala de Decisión de tutelas No. 1- de la Corte Suprema de Justicia, como juez de tutela, no advirtió irregularidad alguna en la decisión indicada.

Y, por último, en el expediente T-7.867.632, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, como tribunal de casación, estableció que en este tipo de solicitudes no operaba la figura de la prescripción, por eso falló en favor de un ciudadano que había acudido de manera tardía a la jurisdicción laboral. Luego de que Colpensiones formulara acción de tutela contra esta decisión, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia -Sala de Decisión de Tutelas No. 3-, resolvió negar dicho amparo.

## 2. Decisión

En la Sentencia SU-107 de 2024, la Corte Constitucional resolvió lo siguiente:

**PRIMERO. LEVANTAR** la suspensión de términos decretada en este proceso.

---

<sup>6</sup> “[l]as personas que con ocasión de la vigencia del Sistema General de Pensiones se trasladaron de régimen podrán, hasta el 31 de diciembre de 1996, solicitar su retiro de la entidad administradora seleccionada y por lo tanto regresar a la entidad administradora de la cual se desafiliaron, cuando se cumplan los siguientes dos requisitos: // 1. Que el solicitante sea beneficiario del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y sus reglamentos; y // 2. Que el traslado de régimen evidencie un perjuicio al afiliado frente al régimen del cual se trasladó”

<sup>7</sup> Decreto 1161 de 1994 -artículo 3-, y Decreto 692 de 1994 -artículo 15-.



**SEGUNDO. REVOCAR** las sentencias que ampararon los derechos fundamentales a la seguridad social, a la igualdad, al acceso a la administración de justicia y al debido proceso en el marco de los siguientes 9 expedientes. En su lugar, declarar la **IMPROCEDENCIA** de esas acciones de tutela por no acreditarse el requisito de inmediatez:

**T-7.946.354.** Sentencia proferida el 28 de julio de 2020 por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal -Sala de Decisión de Tutelas No. 1-, que confirmó la decisión proferida el 24 de junio de 2020 por la Sala de Casación Laboral de esa misma Corporación, en el proceso de acción de tutela promovido por Leyla Esperanza Escobar Vásquez, contra el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá -Sala Laboral-.

**T-8.031.929.** Sentencia proferida el 21 de julio de 2020 por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal -Sala de Decisión de Tutelas No. 1-, que confirmó la decisión proferida el 27 de mayo de 2020 por la Sala de Casación Laboral de esa misma Corporación, en el proceso de acción de tutela promovido por María Cecilia Gamboa Casablanca, contra el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá -Sala Laboral-.

**T-8.040.807.** Sentencia proferida el 17 de septiembre de 2020 por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal -Sala de Decisión de Tutelas No. 3-, que confirmó la decisión proferida el 22 de julio de 2020 por la Sala de Casación Laboral de esa misma Corporación, en el proceso de acción de tutela promovido por Claudia Victoria Pareja Martínez, contra el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia (Sala Civil-Familia-Laboral).

**T-8.355.875.** Sentencia proferida el 29 de junio de 2021 por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal -Sala de Decisión de Tutelas No. 1-, que confirmó la decisión proferida el 5 de mayo de 2021 por la Sala de Casación Laboral de esa misma Corporación, en el proceso de acción de tutela promovido por Magda Cristina Suárez Rodríguez, contra el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá -Sala Laboral-.

**T-8.357.853.** Sentencia proferida el 15 de junio de 2021 por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal -Sala de Decisión de Tutelas No. 1-, que confirmó la decisión proferida el 9 de diciembre de 2020 por la Sala de Casación Laboral de esa misma Corporación, en el proceso de acción de tutela promovido por José Manuel Ríos Martínez, contra el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá -Sala Laboral-.

**T-8.405.298.** Sentencia proferida el 6 de abril de 2021 por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal -Sala de Decisión de Tutelas No. 2-, que confirmó la decisión proferida el 27 de enero de 2021 por la Sala de Casación Laboral de esa misma Corporación, en el proceso de acción de tutela promovido por Rosa Ángela Cruz Poveda, contra el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá -Sala Laboral-.

**T-8.464.250.** Sentencia proferida el 20 de mayo de 2021 por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal -Sala de Decisión de Tutelas No. 3-, que confirmó la decisión proferida el 10 de marzo de 2021 por la Sala de Casación Laboral de esa misma Corporación, en el proceso de acción de tutela promovido por Rocío del Socorro Jaimes Villamizar, contra el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá -Sala Laboral-.

**T-8.464.951.** Sentencia proferida el 13 de julio de 2021 por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal -Sala de Decisión de Tutelas No. 1-, que confirmó la decisión proferida el 21 de abril de 2021 por la Sala de Casación Laboral de esa misma Corporación, en el proceso de acción de tutela promovido por Luz Stella Corredor Cañón, contra el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá -Sala Laboral-.

**T-8.489.328.** Sentencia proferida el 13 de julio de 2021 por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal -Sala de Decisión de Tutelas No. 1-, que confirmó la decisión proferida el 9 de diciembre de 2020 por la Sala de Casación Laboral de esa misma Corporación, en el proceso de acción de tutela promovido por Blanca Nieves Herrera Majén, contra el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá -Sala Laboral-.

**TERCERO. CONFIRMAR** el amparo de los derechos fundamentales a la seguridad social, a la igualdad, al acceso a la administración de justicia y al debido proceso en el marco de los siguientes 12 expedientes:

**T-7.930.563.** Sentencia proferida el 26 de mayo de 2020 por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, que confirmó la decisión proferida el 18 de marzo de 2020 por la Sala de Casación Laboral de esa misma Corporación, en el proceso de acción de tutela promovido por Ana Patricia Rodríguez Rubiano contra el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá -Sala Laboral-.

**T-7.940.054.** Sentencia proferida el 9 de junio de 2020 por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal - Sala de decisión de tutelas No. 2-, que confirmó la decisión proferida el 18 de marzo de 2020 por la Sala de Casación Laboral de esa misma Corporación, en el proceso de acción de tutela promovido por Mauricio Perea Restrepo, contra el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá -Sala Laboral-.

**T-7.946.315.** Sentencia proferida el 18 de junio de 2020 por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal -Sala de Decisión de Tutelas No. 3-, que confirmó la decisión proferida el 18 de marzo de 2020 por la Sala de Casación Laboral de esa misma Corporación, en el proceso de acción de tutela promovido por Blanca Leonor Aponte Castro, contra el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá -Sala Laboral-.

**T-8.224.223.** Sentencia proferida el 2 de febrero de 2021 por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal -Sala de Decisión de Tutelas No. 1-, que confirmó la decisión proferida el 11 de noviembre de 2020 por la Sala de Casación Laboral de esa misma Corporación, en el proceso de acción de tutela promovido por Pilar Barrientos Ortega, contra el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá -Sala Laboral-.

**T-8.235.289.** Sentencia proferida el 10 de diciembre de 2020 por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal -Sala de Decisión de Tutelas No. 3-, que confirmó la decisión proferida el 30 de septiembre de 2020 por

la Sala de Casación Laboral de esa misma Corporación, en el proceso de acción de tutela promovido por Diana del Pilar Aguilera, contra el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá -Sala Laboral-.

**T-8.261.557.** Sentencia proferida el 19 de enero de 2021 por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal -Sala de Decisión de Tutelas No. 1-, que confirmó la decisión proferida el 21 de octubre de 2020 por la Sala de Casación Laboral de esa misma Corporación, en el proceso de acción de tutela promovido por Judith Rodríguez Gómez, contra el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá -Sala Laboral-.

**T-8.322.441.** Sentencia proferida el 16 de diciembre de 2020 por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal -Sala de Decisión de Tutelas No. 3-, que confirmó la decisión proferida el 21 de octubre de 2020 por la Sala de Casación Laboral de esa misma Corporación, en el proceso de acción de tutela promovido por Nubia Ingrith Cardona, contra el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá -Sala Laboral-.

**T-8.255.677.** Sentencia proferida el 9 de febrero de 2021 por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal -Sala de Decisión de Tutelas No. 1-, que confirmó la decisión proferida el 18 de noviembre de 2020 por la Sala de Casación Laboral de esa misma Corporación, en el proceso de acción de tutela promovido por Lucelly García Rico, contra el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá -Sala Laboral-.

**T-7.936.682.** Sentencia proferida el 30 de junio de 2020 por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal - Sala de decisión de tutelas No. 1-, que confirmó la decisión proferida el 18 de marzo de 2020 por la Sala de Casación Laboral de esa misma Corporación, en el proceso de acción de tutela promovido por Armando Padilla Romero, contra el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá -Sala Laboral-.

**T-7.938.558.** Sentencia proferida el 18 de junio de 2020 por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal -Sala de Decisión de Tutelas No. 3-, que confirmó la decisión proferida el 18 de marzo de 2020 por la

Sala de Casación Laboral de esa misma Corporación, en el proceso de acción de tutela promovido por María del Carmen Castañeda, contra el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá -Sala Laboral-.

**T-7.944.741.** Sentencia proferida el 23 de junio de 2020 por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal -Sala de Decisión de Tutelas No. 2-, que confirmó la decisión proferida el 27 de abril de 2020 por la Sala de Casación Laboral de esa misma Corporación, en el proceso de acción de tutela promovido por Maritza Navarro García, contra el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá -Sala Laboral-.

**T-8.256.424.** Sentencia proferida el 16 de marzo de 2021 por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal -Sala de Decisión de Tutelas No. 1-, que confirmó la decisión proferida el 11 de noviembre de 2020 por la Sala de Casación Laboral de esa misma Corporación, en el proceso de acción de tutela promovido por Elsy Jeannete Garzón Martínez, contra el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá -Sala Laboral-.

**CUARTO.** En el expediente **T-8.319.475, CONFIRMAR** la Sentencia proferida el 23 de marzo de 2021 por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal -Sala de Decisión de Tutelas No. 2-, que confirmó el amparo en la decisión proferida el 27 de enero de 2021 por la Sala de Casación Laboral de esa misma Corporación, en el proceso de acción de tutela promovido por Araminta Angarita Angarita, contra el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá -Sala Laboral- al constar la ocurrencia de un defecto sustantivo.

**QUINTO. CONFIRMAR** las sentencias que negaron el amparo al derecho al debido proceso en el marco de los siguientes 2 expedientes:

**T-7.981.335.** Sentencia proferida el 17 de marzo de 2020 por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal -Sala de Decisión de Tutelas No. 3-, que confirmó la decisión **proferida** el 27 de agosto de 2019 por la Sala de Casación Laboral de esa misma Corporación, en el proceso de

acción de tutela promovido por Gloria Patricia Patiño Duque, contra el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira.

**T-7.867.632.** Sentencia proferida el 16 de enero de 2020 por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, que confirmó la decisión proferida el 30 de octubre de 2019 por la Sala de Casación Penal -Sala de Decisión de Tutelas No. 3- de esa misma Corporación, en el proceso de acción de tutela promovido por Colpensiones, contra la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia.

**SEXTO.** En el expediente **T-8.484.811, REVOCAR** la sentencia proferida el 7 de julio de 2021 por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, que confirmó la decisión proferida el 1 de diciembre de 2020 por la Sala de Casación Penal -Sala de Decisión de Tutelas No. 1- de esa misma Corporación, en el proceso de tutela promovido por Ana Esperanza Lara Rodríguez, contra la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, que negó el amparo deprecado, y en su lugar, amparar el derecho fundamental al debido proceso de la accionante Ana Esperanza Lara Rodríguez.

**SÉPTIMO. DEJAR SIN EFECTOS** la sentencia del 15 de septiembre de 2020 proferida por la Corte Suprema de Justicia -Sala Laboral, Sala de Descongestión No. 4. En consecuencia, **ORDENAR** a dicha Sala de Descongestión, que dentro de los 30 días siguientes contados a partir de la notificación de la presente sentencia, dentro del proceso ordinario laboral No. 11001310502820140013900, promovido por Ana Esperanza Lara Rodríguez, adopte una nueva decisión de acuerdo con las reglas, hasta este momento, establecidas por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia.

**OCTAVO. EXTENDER,** con efectos *inter pares* y de inmediato cumplimiento, las reglas expuestas en esta providencia a todas las demandas que estén en curso ante la Jurisdicción Ordinaria Laboral ya sea en primera, segunda instancia o en sede de casación, como también las que se tramiten mediante acción de tutela y cuya pretensión, principal o subsidiaria, esté dirigida a que se declare la ineficacia del

traslado del Régimen de Prima Media al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad.

**NOVENO. NOTIFICAR** la presente providencia por conducto de la Secretaría General de la Corte Constitucional a las partes y a los terceros con interés, para lo cual libraré las comunicaciones pertinentes.

### 3. Síntesis de los fundamentos

En primer lugar, la Corte resolvió si cada una de estas acciones superaba los requisitos de procedibilidad de tutela contra providencias judiciales. Allí advirtió que, en todos los casos, (i) los accionantes estaban legitimados para instaurar los recursos de amparo; (ii) los accionados estaban legitimados para responder por la presunta vulneración de derechos fundamentales alegada; (iii) se acreditaba la relevancia constitucional, pues se discutía el presunto desconocimiento del derecho al debido proceso de los actores, y (iv) se identificaron los hechos que causaron la eventual vulneración de las prerrogativas.

Luego, la Corte se detuvo en el cumplimiento del requisito de la *inmediatez*. Al respecto, indicó que, aunque en varios expedientes se acreditó este requisito, ello no ocurrió en los expedientes: T-7.946.354, T-8.031.929, T-8.040.807, T-8.355.875, T-8.357.853, T-8.405.298, T-8.464.250, T-8.464.951 y T-8.489.328. Esto porque en esos casos la acción de tutela se formuló varios meses después de que se hubiere conocido la sentencia judicial objeto de reproche. En tal sentido, la Corte declaró la improcedencia de estos asuntos por incumplir el requisito referido.

En cuanto a la *subsidiariedad*, la Corte advirtió que en la inmensa mayoría de los casos los demandantes tampoco formularon el recurso extraordinario de casación contra las decisiones que censuraban sino que acudieron directamente a la acción de tutela. Ante esta situación, y sin que implicara un cambio en las reglas reiteradas pacíficamente por la Corte Constitucional, solo para estos casos en particular, el pleno flexibilizó esta exigencia sobre la base de que: (i) durante un tiempo extenso la Corte Suprema de Justicia consideró que la declaratoria de la *ineficacia* de un traslado no podía cuantificarse. En esa medida, cuando los tribunales de lo ordinario laboral no accedían a dicha pretensión, el demandante no tenía la posibilidad de acudir al recurso extraordinario

de casación por no tener “*interés jurídico para recurrir*”.<sup>8</sup> Y, (ii) que la Corte Suprema de Justicia -Sala de Casación Laboral- empezó a flexibilizar el requisito de la subsidiariedad, para casos como estos, el 18 de marzo de 2020.<sup>9</sup> Esto supuso que los demandantes confiaran en la flexibilización del requisito de la subsidiariedad. Y esta confianza que surgió en ellos, estimó la Corte, debía protegerse en este proceso. Por eso, frente a los casos donde no se interpuso el respectivo recurso de casación, la Corte no declaró la improcedencia.

En cuanto a los dieciséis casos restantes, los cuales superaron los requisitos de procedibilidad de la tutela contra providencia judicial, la Sala Plena se planteó dos problemas jurídicos: (i) determinar si el precedente de la Sala de Casación Laboral sobre la ineficacia de los traslados y la forma en que se debe probar el consentimiento informado es contrario a la Constitución y, en consecuencia, debe ser matizado por la Corte Constitucional. Este problema jurídico se deriva de la tutela interpuesta por Colpensiones (Expediente T-7.867.632). Y, (ii) determinar si los tribunales accionados desconocieron o no el precedente de la Sala de Casación Laboral en lo referido a la *ineficacia* de los traslados y al estándar probatorio que debe llevarse a cabo para demostrarla. Ambos problemas jurídicos se circunscribieron a los traslados que tuvieron lugar entre 1993 y 2009.

Luego de resaltar algunas consideraciones, históricas y generales, relacionadas con el funcionamiento del Sistema General de Seguridad Social en Pensiones y el deber de información legal desde los inicios de la Ley 100 de 1993, la Sala Plena resaltó la importancia que tiene el deber de suministrar información clara, pertinente y suficiente a los usuarios que desean trasladarse de régimen. Esto porque esa decisión tiene importantes repercusiones sobre el derecho a la seguridad social de estos. Por ello, puntualizó que el deber de información que se exigía, de 1993 a 2009, imponía a los asesores de las administradoras comunicar las características esenciales del régimen al que la persona pretendía trasladarse.

La Corte Constitucional recordó que muchas de las personas que se trasladaron en el aludido periodo, han demandado ante la jurisdicción ordinaria laboral con el ánimo de que allí se declare la *ineficacia* de

---

<sup>8</sup> Cfr., Autos AL, 9 oct. 2012, rad. 57289. Reiterado en los autos AL, 29 jul. 2015, rad. 67272, AL5108-2017 y AL5102-2017.

<sup>9</sup> Cfr. Sentencias STL3226-2020, STL3202-2020, STL3201-2020, STL3200-2020, STL3199-2020, STL3197-2020, STL3196-2020 STL3193-2020, STL3191-2020, STL3187-2020 y STL3186-2020.



dicho traslado. Esa pretensión derivó en el precedente de la Corte Suprema de Justicia, quien como órgano de cierre ha sostenido que siempre que se indique, en la demanda, que una AFP no informó sobre las consecuencias de un cambio de régimen pensional, solo le corresponde a la AFP demostrar que sí brindó dicha información. Esta regla con base en la cual se genera una desproporción en las cargas probatorias, se enunció por primera vez en la Sentencia 31989 del 9 de septiembre de 2008, y se ha reiterado hasta la fecha.<sup>10</sup> Igualmente, la Corte Constitucional reconoció que esta regla estaba vigente cuando se profirieron todas las providencias censuradas en este proceso.

A esta regla de decisión, con el tiempo, se han sumado otras, según las cuales: (i) el formulario de afiliación no demuestra, con suficiencia, el suministro de información; (ii) el traslado entre AFP, al interior del RAIS, no sana la falta de información; (iii) no se puede declarar la ineficacia si el petitionerio está pensionado por el RAIS; (iv) si se declara la ineficacia, no solo debe devolverse al afiliado con todos los recursos disponibles en la cuenta individual sino que además incluyen otros gastos no susceptibles de traslado tales como: la comisión de administración, la prima del seguro previsional, el porcentaje de pago de la garantía de pensión mínima con cargo a los recursos de la AFP, perjuicios, indexación, entre otros; y, (v) la declaratoria de ineficacia puede proceder aunque el petitionerio no hubiese estado amparado por el régimen de transición.

Dicho esto, la Corte se ocupó de revisar, desde una perspectiva constitucional, el alcance e implicaciones de este precedente, puesto que de conformidad con la Constitución y la ley procesal no se pueden imponer cargas probatorias imposibles de cumplir para ninguna de las partes (ni al afiliado, ni a la AFP), así como no se puede despojar al juez de su papel de director del proceso, de su autonomía judicial para decretar y practicar todas las pruebas que sean necesarias, pertinentes y conducentes para analizar las pretensiones o las excepciones propuestas y de su facultad para conforme a las reglas de la sana crítica valorar las pruebas con el objeto de resolver los casos de ineficacia de traslados de los afiliados del RPM al RAIS.

A su vez, pues tal y como se señaló en la audiencia pública celebrada en el marco del expediente T-7.867.632 AC y las pruebas recaudadas, la aplicación masiva de dicho precedente puede llegar a generar una afectación del principio constitucional de sostenibilidad financiera del

---

<sup>10</sup> Al respecto, pueden revisarse las sentencias: SL1421-2019, SL2030-2019, SL2817-2019, SL2865-2019 y SL2954-2019, entre muchas otras.

sistema pensional. De acuerdo con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público el impacto financiero sería del orden de los 35 billones de pesos y estaría concentrado en las personas que devengan montos elevados de salarios. Señaló que "(...) *el conjunto de los afiliados con aportes de más de 4 SML hasta 25 SML, que representan el 25,5% de la población demandante, es decir unos 55.826 de un total de demandantes de 223.305, recibirían el 82,8% de los subsidios, esto es 29 billones del total de déficit de la Nación*".

Sobre este punto, la Corte Constitucional reconoció que el precedente de la Corte Suprema de Justicia si bien tenía un componente altamente tuitivo resultaba abiertamente desproporcionado en lo que tiene que ver con la inversión de la carga de la prueba, regla según la cual, siempre y en todos los casos corresponde a la AFP demandada demostrar que suministró información. Con dicha regla, aparte de desbalancear la actividad probatoria de las partes, se desconoce que el juez es el director del proceso judicial, se afecta la autonomía e independencia de este para decretar y practicar todas las pruebas que sean necesarias, pertinentes y conducentes y se altera la regla acerca de la apreciación y valoración de las mismas conforme a la sana crítica.

Igualmente, el precedente de la Sala de Casación Laboral impone a las administradoras la carga de demostrar, por medio de pruebas directas, que sí informaron al afiliado sobre las consecuencias del traslado surtido entre 1993 y 2009. Esto es, reproducir el momento exacto en el que se dio el traslado. Así, reconstruir ese hecho resulta sumamente complejo solo mediante esos elementos de prueba directos.

Ante la carga probatoria desproporcionada, una cantidad importante de personas se han trasladado al RPM, pasando por alto las reglas normales de traslado entre regímenes establecidas en el artículo 2 de la Ley 797 de 2003, con lo cual, se afecta la sostenibilidad financiera del RPM en un grado importante.

De conformidad con lo anterior, la Corte Constitucional moduló el precedente establecido por la Corte Suprema de Justicia en lo relativo a la inversión de la carga de la prueba en este tipo de procesos. Para ello, ordenó que en los procesos donde se pretenda declarar la ineficacia de un traslado deben tenerse en cuenta, de manera exclusiva, las reglas contenidas en la Constitución Política, el Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social y en el Código General del Proceso que se refieren al debido proceso. Esto supone que el juez, debe actuar como director del

proceso judicial, con la autonomía e independencia que le son propios y, dentro de las muchas actuaciones dirigidas a formar su convencimiento para decidir lo que en derecho corresponda, puede:

- (i) Decretar, practicar y valorar en igualdad todas las pruebas que soliciten las partes que sean necesarias, pertinentes y conducentes para demostrar los hechos que sirven de causa a las pretensiones o las excepciones.
- (ii) Procurar, de manera oficiosa, la obtención de pruebas acudiendo a las enlistadas en el Código General del Proceso, tales como “(...) *la declaración de parte, la confesión, el juramento, el testimonio de terceros, el dictamen pericial, la inspección judicial, los documentos, los indicios, los informes*”, y las demás que considere necesarias, pertinentes y conducentes.
- (iii) Valorar las pruebas decretadas y debidamente practicadas con su inmediación, de manera individual y en su conjunto con las demás, luego de lo cual puede determinar el grado de convicción que aquellas ofrecen sobre lo ocurrido.
- (iv) Acudir a la prueba indiciaria si lo estima necesario, en los términos de los artículos 176 y 242 del CGP; e
- (v) Invertir la carga de la prueba cuando, analizando el caso concreto y la posición de las partes, esté ante un demandante que se encuentra en la imposibilidad de demostrar sus dichos, y en un proceso donde no haya sido posible desentrañar por completo la verdad a pesar de los esfuerzos officiosos.

La Corte Constitucional hizo énfasis en que la inversión de la carga de la prueba no puede ser la primera o la única opción de la que puede hacer uso el juez, pues es necesario que se haga uso de las herramientas que conforme a las reglas del debido proceso ya se encuentran dispuestas en el CPTSS y en el CGP.

La Corte señaló que su decisión, que supone una modificación al precedente de la Corte Suprema de Justicia, debe ser *extendida*, con efectos *inter pares* y de inmediato cumplimiento, a todas las demandas que estén en curso ante la Jurisdicción Ordinaria Laboral en todos aquellos procesos que siguen su trámite actualmente, y en los que se inicien con posterioridad a esta providencia.

De cualquier modo, la Corte Constitucional advirtió que estas reglas, por razones de seguridad jurídica, no podían aplicarse en todos los 16 casos respecto de los cuales se pronunciaría de fondo. En tal sentido, señaló que, respecto de estos, era imperioso analizar si los tribunales accionados se habían apartado del precedente de la Corte Suprema de Justicia objeto de análisis.

Así, en lo relativo a 12 expedientes,<sup>11</sup> sostuvo que objetivamente se había desconocido el derecho al debido proceso de los accionantes porque las autoridades judiciales accionadas se habían apartado de un precedente construido por la Corte Suprema de Justicia, sin presentar razones poderosas para ello. Por esta razón, la Sala confirmó la decisión de los jueces de instancia que, en todas estas causas, habían amparado los derechos fundamentales a la seguridad social, a la igualdad, al acceso a la administración de justicia y al debido proceso.

En los casos en que se había presentado un escenario de múltiple afiliación, también se confirmó la decisión de tutela que amparaba el derecho al debido proceso de los actores. Esto por las mismas razones contenidas en el párrafo anterior. De cualquier modo, se indicó que solo en el remoto caso en que no se declare la *ineficacia* de los traslados surtidos por los accionantes, el Tribunal accionado deberá identificar en qué escenario de *múltiple afiliación* se encontraron estos y si la solución adoptada por las administradoras de pensiones, al asignarlos al RAIS, fue la adecuada de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 692 de 1994 y en el Decreto 3995 de 2008.

Por lo demás: (i) en el expediente T-7.981.335, no se amparó el derecho al debido proceso de la actora, porque se advirtió que la decisión censurada se había fundado en los elementos materiales de prueba que habían sido aportados al proceso. (ii) En el expediente T-8.319.475, se ampararon los derechos a la seguridad social, a la igualdad, al acceso a la administración de justicia y al debido proceso de la accionante, tras advertir que el Tribunal accionado había incurrido en un defecto sustantivo en tanto que fundó su decisión en una normatividad que no era aplicable al contexto debatido. (iii) En el expediente T-8.484.811, se amparó el derecho al debido proceso porque se advirtió que la autoridad judicial accionada había incurrido, no en un defecto por el desconocimiento del precedente, sino en un defecto sustantivo. Y (iv) dentro del expediente T-7.867.632, no se amparó el derecho al debido

---

<sup>11</sup> Expedientes T-7.930.563, T-7.940.054, T-7.946.315, T-8.224.223, T-8.235.289, T-8.261.557, T-8.322.441, T-8.255.677, T-7.936.682, T-7.938.558, T-7.944.741 y T-8.256.424.

proceso de Colpensiones, pero se advirtió que todas sus consideraciones relacionadas con el desconocimiento del criterio orientador de la sostenibilidad financiera, habían sido tenidas en cuenta para establecer la regla probatoria fijada en esta providencia. Regla que, como se ha dicho, aplicará a futuro.

#### 4. Salvamentos parciales de voto

Los magistrados **José Fernando Reyes Cuartas, Juan Carlos Cortés González y Vladimir Fernández Andrade** se apartaron parcialmente de la decisión adoptada.

Los magistrados **José Fernando Reyes Cuartas y Juan Carlos Cortés González salvaron parcialmente su voto** respecto de la Sentencia SU-107 de 2024. Si bien acompañaron las órdenes relacionadas con los expedientes de tutela estudiados, se apartaron de la modificación aprobada sobre el precedente de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia y que fue materializada en el numeral octavo de la resolutive. Su postura estuvo fundada en las siguientes razones principales:

1. *La modulación del precedente de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia no estuvo suficiente justificada.* La postura de la mayoría de la Sala estuvo fundada en que el precedente de esa alta Corte: i) afecta la autonomía e independencia de los jueces porque le impone una determinada manera de razonar al momento de resolver estos casos; ii) compromete la imparcialidad de dichos funcionarios porque exige siempre y en todo caso que las administradoras demuestren, más allá de toda duda, si informaron al afiliado y iii) muchas personas pasan al régimen pensional de prima media y se genera la afectación de la sostenibilidad financiera. Los magistrados que salvaron parcialmente el voto consideraron que estas razones son insuficientes para modificar las reglas jurisprudenciales de la Corte Suprema de Justicia porque:

- El precedente de esa corporación, luego de 16 años de construcción pacífica y reiterada, no se advertía desproporcionado e irrazonable, evidenciándose maximizador de garantías procesales para quienes asumieron un régimen pensional sin el conocimiento y la información debidos.
- Se desconoce la labor de la Corte Suprema de Justicia como juez de casación y su función de unificación de jurisprudencia.

- Desactiva los efectos del precedente vertical derivado del máximo órgano de la jurisdicción ordinaria.
- El cambio de precedente implica, en la práctica, trasladarle la carga probatoria al afiliado, lo que configura una modulación que impone cargas procesales desproporcionadas y regresivas a los beneficiarios del sistema pensional.
- No hay certeza sobre la afectación de la sostenibilidad financiera y de que aquella tenga como causa directa y efectiva el precedente de la Corte Suprema de Justicia.

2. *Las reglas jurisprudenciales de modulación del precedente.* La postura mayoritaria desarrolló las nuevas reglas jurisprudenciales para resolver judicialmente asuntos relacionados con la ineficacia del traslado de régimen con base en que: i) no se deben imponer cargas probatorias imposibles de cumplir para ninguna de las partes; ii) la identificación del deber de la información; iii) el uso de los medios de prueba (documentales-necesidad de considerar el formulario, interrogatorios, testimonios, las actitudes de los demandantes-cambio de AFP, el conocimiento sobre la legislación de pensiones). Luego precisó que iv) la inversión de la carga de la prueba no puede ser una regla de obligatorio uso en este tipo de procesos como lo ordena la Sala de Casación Laboral.

Los magistrados disidentes no acompañaron el establecimiento de nuevas reglas jurisprudenciales sobre esta materia, con fundamento entre otras, en las siguientes consideraciones:

- Imponen una única forma de actuación para el decreto, la práctica y la valoración probatoria a los jueces. Tal aspecto, en su sentir, constituye una afectación de los principios de autonomía, independencia e imparcialidad judicial, porque impone el uso de medios probatorios, sin considerar que el juez como director del proceso puede aplicar la inversión de la carga de la prueba, considerando las particularidades del caso y las condiciones de las partes. De esta manera, la libertad probatoria que se anuncia queda vaciada de contenido por el alcance de las reglas propuestas. Paradójicamente, el que se establecieran reglas probatorias para los casos de ineficacia de traslados fue la razón para sustentar la necesidad de cambiar el precedente de la Corte Suprema de Justicia.

- Se trata de una exhaustiva labor conceptual y dogmática de derecho procesal y probatorio, que tiende a cerrar cualquier discusión posterior por parte de la jurisdicción especializada y con la fuerza de cosa juzgada constitucional. Esta situación limita injustificadamente las competencias de los jueces ordinarios y la labor de unificación de jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia.
- No se demostró la necesidad de un tratamiento igualitario de dos partes que tienen una relación asimétrica. En ese sentido, se reconoce la asimetría sustancial pero aquella se anula en el proceso judicial. La postura mayoritaria desconoció que el principio de igualdad también se materializa con acciones afirmativas procesales, como lo que ha hecho la Corte Suprema de Justicia en esta materia.

3. *Los efectos de la modulación del precedente.* Aquellos incluyen la reapertura de fases probatorias precluidas, así como retrotraer etapas de los procesos judiciales. La postura mayoritaria no justificó las implicaciones de las nuevas reglas jurisprudenciales en la materia. En ese sentido, surgen los siguientes interrogantes: i) ¿Por qué deben aplicarlas los jueces de tutela si aquellos tienen mayores poderes y deberes oficiosos en materia probatoria?; ii) ¿se afectan procesos terminados y vigentes; iii) ¿de qué forma se garantizan los principios de seguridad y certeza jurídica?; y iv) ¿cuáles son las implicaciones de esta decisión en el escenario democrático en el que justamente se debate sobre la posibilidad de traslado entre regímenes (artículo 77 de las ponencias mayoritaria y alternativa para segundo debate dentro del proyecto de ley 293 de 2023 Senado). Sobre estos aspectos, la decisión guardó silencio.

Aun cuando el magistrado **Fernández Andrade** acompañó las decisiones que se adoptaron en relación con la procedencia del caso, tanto aquellas que llevaron a no dar por acreditado el requisito de inmediatez, como las que supusieron flexibilizar el examen sobre la subsidiaridad y otorgar el amparo concreto a cada accionante, por haber incurrido las autoridades demandadas en una violación al debido proceso por el desconocimiento del precedente construido por la Corte Suprema de Justicia, sin mediar, para ello, razones de suficiencia; **salvó parcialmente su voto** en lo concerniente a varias de las consideraciones formuladas y respecto del cumplimiento inmediato de las reglas adoptadas en esta

providencia, frente a las cuales se otorgó los efectos *inter partes* en el resolutivo octavo.

En efecto, a juicio del magistrado Fernández Andrade, la decisión debió limitarse a admitir el desconocimiento de la regla de la carga estática de la prueba, por lo que siempre que un demandante sostenga que no fue informado al momento de su traslado al RAIS deberá presentar los materiales probatorios con que cuente para demostrar su dicho. Si las pruebas aportadas por el actor no son concluyentes, el juez podrá activar sus poderes oficiosos, decretando todas las pruebas que estime necesarias para llegar al pleno convencimiento de los hechos. Y si tampoco así se logra la adecuada reconstrucción de lo alegado, se podría acudir a la teoría de la carga dinámica de la prueba.

Sin embargo, en lo referente a los traslados comprendidos en el periodo que va de 1993 a 2009, la sentencia prácticamente limita los aspectos que podrán ser objeto de prueba, en contravía de la autonomía e independencia de los jueces laborales en la administración de justicia, pues se incorporan estándares sobre lo que debe ser objeto de discusión en los procesos, afectando el principio de libre formación del convencimiento del juez (CPTSS, art. 61), sobre todo cuando en la regulación de este tema no existe una solemnidad *ad substantiam actus*.

Por lo demás, en criterio del magistrado Fernández Andrade, no le compete a la Corte realizar un decálogo probatorio sobre la materia, en el sentido de especificar qué tipo de pruebas se deben practicar y con qué alcance, pues esa es una labor propia del juez laboral, que exterioriza la garantía de la autonomía judicial, que opera sobre la base de lo dispuesto por el Legislador. Sin ir más lejos, en la sentencia se señala que la carga dinámica de la prueba solo aplica cuando el demandante “(...) se encuentra en la imposibilidad de demostrar sus dichos, y en un proceso donde no haya sido posible desentrañar por completo la verdad a pesar de los esfuerzos oficiosos”, cuando el uso de esta figura depende de lo que previsto en la ley (CGP art. 167)<sup>12</sup> y de lo que es objeto de interpretación por parte de los jueces ordinarios laborales.

---

<sup>12</sup> “**Artículo 167. Carga de la prueba.** Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen. // No obstante, según las particularidades del caso, el juez podrá, de oficio o a petición de parte, distribuir, la carga al decretar las pruebas, durante su práctica o en cualquier momento del proceso antes de fallar, exigiendo probar determinado hecho a la parte que se encuentre en una situación más favorable para aportar las evidencias o esclarecer los hechos controvertidos. La parte se considerará en mejor posición para probar en virtud de su cercanía con el material probatorio, por tener en su poder el objeto de prueba, por circunstancias técnicas especiales, por haber intervenido directamente en los hechos que dieron lugar al litigio, o por estado de indefensión o de incapacidad en la cual se encuentre la contraparte, entre otras circunstancias similares. (...)”.



En últimas, para el magistrado Fernández Andrade, la consagración de un sistema judicial compuesto por varias jurisdicciones debe ser especialmente prudente y ponderado frente a la preservación de la independencia de cada autoridad judicial, y no intervenir en aquello que puede considerarse soporte básico de su autonomía, de ahí que no comparta lo relativo a la fijación del tipo de pruebas que se practican, y lo concerniente a los hechos que efectivamente se deben probar.



**José Fernando Reyes Cuartas**  
**Presidente**  
**Corte Constitucional de Colombia**

1-15

## EMPALME

### Feria de contratos en fin de año

El contador general de la Nación, Jairo Alberto Cano, indicó ayer que aunque el cuponeo contable de fin de año fue inefectivo en el 60 por ciento de las entidades públicas, así como en las alcaldías y gobernaciones la entidad encontró dificultades en Medellín y en los departamentos del Valle y Cundinamarca.



Alfonso Gudiño, presidente del gremio que reúne a las casas de cambio, dijo que la aclaración de la Duan pone en igualdad de condiciones a los dos intermediarios.

En estos tres casos se detectó que si bien se hizo un corte de cuentas al 24 de diciembre del 2003, en la semana siguiente

"Los compromisos que adquirieron en las tres entidades generaron un déficit de 50.000 millones en el Valle, de 80.000 millones en Cundinamarca y de 100.000 millones de pesos en Medellín", dijo Cano Palón.

Con respecto al caso de la capital antioqueña el nuevo alcalde tuvo que recurrir a préstamos de Tesorería para hacerle frente a la situación de liquidez.

Sobre la posición de Duan en torno a quién debía pagar el tributo comentó que ese es un tema jurídico que hay que analizar con

que hay que analizar con más detenimiento. Sin embargo, hay que a la fin que le debe interesar es que alguien lo termine.

Según los cálculos de Garzón, con el cuatro por mil por cada dólar enviado e una remesa, al usuario se le descuentan 13 pesos.

El lunes pasado, las cas-  
de cambio dijeron que e-  
pezaron a cobrar este l-  
puesto desde el primero

erario, pero los bancos expresaron que no lo cobrarán porque lo asumirán ellos totalmente.

Sin embargo, ayer la D. aseguró que en un concejo de noviembre del 2003 explicó que en la operación de otros familiares se cau-

tra el dinero de una cuenta para entregárselo al beneficiario de la remesa. La segunda se presiona en el momento en que la persona re-

Los bancos o las casas de cambio pueden estar exentos del tributo siempre que

cuentas identificables. La cuenta que usan para recibir los recursos para el pago de giros (tal como ocurre con las personas naturales que mantienen las cuentas de

**IGMC**  
Bolsa de Campinas em pontos e volume

Ano	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995
Pontos	2.331,70	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	2.464,10

**DOW JONES**  
Bolsa de Nova York em pontos e volume

Ano	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995
Pontos	10.000,00	10.500,00	11.000,00	11.500,00	12.000,00	12.500,00	13.000,00	13.500,00	14.000,00	14.500,00	15.000,00	15.500,00	16.000,00	16.563,70

Fonte: Bolsa de São Paulo

Fonte: Bolsa de Nova York

## CONDOS

Page	Page LHS	Page RHS	ADDRESS/NAME	INDEX
			(11/11/11)	
Supervisors	100	100	Marques das Caldeiras - Area 1000	130
Ar. Carlos de Almeida	101	101	Ar. Carlos de Almeida - Area 1000	131
Ar. Carlos de Almeida	102	102	Ar. Carlos de Almeida - Area 1000	132
Ar. Carlos de Almeida	103	103	Ar. Carlos de Almeida - Area 1000	133
Ar. Carlos de Almeida	104	104	Ar. Carlos de Almeida - Area 1000	134
Ar. Carlos de Almeida	105	105	Ar. Carlos de Almeida - Area 1000	135
Ar. Carlos de Almeida	106	106	Ar. Carlos de Almeida - Area 1000	136
Ar. Carlos de Almeida	107	107	Ar. Carlos de Almeida - Area 1000	137
Ar. Carlos de Almeida	108	108	Ar. Carlos de Almeida - Area 1000	138
Ar. Carlos de Almeida	109	109	Ar. Carlos de Almeida - Area 1000	139
Ar. Carlos de Almeida	110	110	Ar. Carlos de Almeida - Area 1000	140
Ar. Carlos de Almeida	111	111	Ar. Carlos de Almeida - Area 1000	141
Ar. Carlos de Almeida	112	112	Ar. Carlos de Almeida - Area 1000	142
Ar. Carlos de Almeida	113	113	Ar. Carlos de Almeida - Area 1000	143
Ar. Carlos de Almeida	114	114	Ar. Carlos de Almeida - Area 1000	144
Ar. Carlos de Almeida	115	115	Ar. Carlos de Almeida - Area 1000	145
Ar. Carlos de Almeida	116	116	Ar. Carlos de Almeida - Area 1000	146
Ar. Carlos de Almeida	117	117	Ar. Carlos de Almeida - Area 1000	147
Ar. Carlos de Almeida	118	118	Ar. Carlos de Almeida - Area 1000	148
Ar. Carlos de Almeida	119	119	Ar. Carlos de Almeida - Area 1000	149
Ar. Carlos de Almeida	120	120	Ar. Carlos de Almeida - Area 1000	150
Ar. Carlos de Almeida	121	121	Ar. Carlos de Almeida - Area 1000	151
Ar. Carlos de Almeida	122	122	Ar. Carlos de Almeida - Area 1000	152
Ar. Carlos de Almeida	123	123	Ar. Carlos de Almeida - Area 1000	153
Ar. Carlos de Almeida	124	124	Ar. Carlos de Almeida - Area 1000	154
Ar. Carlos de Almeida	125	125	Ar. Carlos de Almeida - Area 1000	155
Ar. Carlos de Almeida	126	126	Ar. Carlos de Almeida - Area 1000	156
Ar. Carlos de Almeida	127	127	Ar. Carlos de Almeida - Area 1000	157
Ar. Carlos de Almeida	128	128	Ar. Carlos de Almeida - Area 1000	158
Ar. Carlos de Almeida	129	129	Ar. Carlos de Almeida - Area 1000	159
Ar. Carlos de Almeida	130	130	Ar. Carlos de Almeida - Area 1000	160
Ar. Carlos de Almeida	131	131	Ar. Carlos de Almeida - Area 1000	161
Ar. Carlos de Almeida	132	132	Ar. Carlos de Almeida - Area 1000	162
Ar. Carlos de Almeida	133	133	Ar. Carlos de Almeida - Area 1000	163
Ar. Carlos de Almeida	134	134	Ar. Carlos de Almeida - Area 1000	164
Ar. Carlos de Almeida	135	135	Ar. Carlos de Almeida - Area 1000	165
Ar. Carlos de Almeida	136	136	Ar. Carlos de Almeida - Area 1000	166
Ar. Carlos de Almeida	137	137	Ar. Carlos de Almeida - Area 1000	167
Ar. Carlos de Almeida	138	138	Ar. Carlos de Almeida - Area 1000	168
Ar. Carlos de Almeida	139	139	Ar. Carlos de Almeida - Area 1000	169
Ar. Carlos de Almeida	140	140	Ar. Carlos de Almeida - Area 1000	170
Ar. Carlos de Almeida	141	141	Ar. Carlos de Almeida - Area 1000	171
Ar. Carlos de Almeida	142	142	Ar. Carlos de Almeida - Area 1000	172
Ar. Carlos de Almeida	143	143	Ar. Carlos de Almeida - Area 1000	173
Ar. Carlos de Almeida	144	144	Ar. Carlos de Almeida - Area 1000	174
Ar. Carlos de Almeida	145	145	Ar. Carlos de Almeida - Area 1000	175
Ar. Carlos de Almeida	146	146	Ar. Carlos de Almeida - Area 1000	176
Ar. Carlos de Almeida	147	147	Ar. Carlos de Almeida - Area 1000	177
Ar. Carlos de Almeida	148	148	Ar. Carlos de Almeida - Area 1000	178
Ar. Carlos de Almeida	149	149	Ar. Carlos de Almeida - Area 1000	179
Ar. Carlos de Almeida	150	150	Ar. Carlos de Almeida - Area 1000	180
Ar. Carlos de Almeida	151	151	Ar. Carlos de Almeida - Area 1000	181
Ar. Carlos de Almeida	152	152	Ar. Carlos de Almeida - Area 1000	182
Ar. Carlos de Almeida	153	153	Ar. Carlos de Almeida - Area 1000	183
Ar. Carlos de Almeida	154	154	Ar. Carlos de Almeida - Area 1000	184
Ar. Carlos de Almeida	155	155	Ar. Carlos de Almeida - Area 1000	185
Ar. Carlos de Almeida	156	156	Ar. Carlos de Almeida - Area 1000	186
Ar. Carlos de Almeida	157	157	Ar. Carlos de Almeida - Area 1000	187
Ar. Carlos de Almeida	158	158	Ar. Carlos de Almeida - Area 1000	188
Ar. Carlos de Almeida	159	159	Ar. Carlos de Almeida - Area 1000	189
Ar. Carlos de Almeida	160	160	Ar. Carlos de Almeida - Area 1000	190
Ar. Carlos de Almeida	161	161	Ar. Carlos de Almeida - Area 1000	191
Ar. Carlos de Almeida	162	162	Ar. Carlos de Almeida - Area 1000	192
Ar. Carlos de Almeida	163	163	Ar. Carlos de Almeida - Area 1000	193
Ar. Carlos de Almeida	164	164	Ar. Carlos de Almeida - Area 1000	194
Ar. Carlos de Almeida	165	165	Ar. Carlos de Almeida - Area 1000	195
Ar. Carlos de Almeida	166	166	Ar. Carlos de Almeida - Area 1000	196
Ar. Carlos de Almeida	167	167	Ar. Carlos de Almeida - Area 1000	197
Ar. Carlos de Almeida	168	168	Ar. Carlos de Almeida - Area 1000	198
Ar. Carlos de Almeida	169	169	Ar. Carlos de Almeida - Area 1000	199
Ar. Carlos de Almeida	170	170	Ar. Carlos de Almeida - Area 1000	200
Ar. Carlos de Almeida	171	171	Ar. Carlos de Almeida - Area 1000	201
Ar. Carlos de Almeida	172	172	Ar. Carlos de Almeida - Area 1000	202
Ar. Carlos de Almeida	173	173	Ar. Carlos de Almeida - Area 1000	203
Ar. Carlos de Almeida	174	174	Ar. Carlos de Almeida - Area 1000	204
Ar. Carlos de Almeida	175	175	Ar. Carlos de Almeida - Area 1000	205
Ar. Carlos de Almeida	176	176	Ar. Carlos de Almeida - Area 1000	206
Ar. Carlos de Almeida	177	177	Ar. Carlos de Almeida - Area 1000	207
Ar. Carlos de Almeida	178	178	Ar. Carlos de Almeida - Area 1000	208
Ar. Carlos de Almeida	179	179	Ar. Carlos de Almeida - Area 1000	209
Ar. Carlos de Almeida	180	180	Ar. Carlos de Almeida - Area 1000	210
Ar. Carlos de Almeida	181	181	Ar. Carlos de Almeida - Area 1000	211
Ar. Carlos de Almeida	182	182	Ar. Carlos de Almeida - Area 1000	212
Ar. Carlos de Almeida	183	183	Ar. Carlos de Almeida - Area 1000	213
Ar. Carlos de Almeida	184	184	Ar. Carlos de Almeida - Area 1000	214
Ar. Carlos de Almeida	185	185	Ar. Carlos de Almeida - Area 1000	215
Ar. Carlos de Almeida	186	186	Ar. Carlos de Almeida - Area 1000	216
Ar. Carlos de Almeida	187	187	Ar. Carlos de Almeida - Area 1000	217
Ar. Carlos de Almeida	188	188	Ar. Carlos de Almeida - Area 1000	218
Ar. Carlos de Almeida	189	189	Ar. Carlos de Almeida - Area 1000	219
Ar. Carlos de Almeida	190	190	Ar. Carlos de Almeida - Area 1000	220
Ar. Carlos de Almeida	191	191	Ar. Carlos de Almeida - Area 1000	221
Ar. Carlos de Almeida	192	192	Ar. Carlos de Almeida - Area 1000	222
Ar. Carlos de Almeida	193	193	Ar. Carlos de Almeida - Area 1000	223
Ar. Carlos de Almeida	194	194	Ar. Carlos de Almeida - Area 1000	224
Ar. Carlos de Almeida	195	195	Ar. Carlos de Almeida - Area 1000	225
Ar. Carlos de Almeida	196	196	Ar. Carlos de Almeida - Area 1000	226
Ar. Carlos de Almeida	197	197	Ar. Carlos de Almeida - Area 1000	227
Ar. Carlos de Almeida	198	198	Ar. Carlos de Almeida - Area 1000	228
Ar. Carlos de Almeida	199	199	Ar. Carlos de Almeida - Area 1000	229
Ar. Carlos de Almeida	200	200	Ar. Carlos de Almeida - Area 1000	230
Ar. Carlos de Almeida	201	201	Ar. Carlos de Almeida - Area 1000	231
Ar. Carlos de Almeida	202	202	Ar. Carlos de Almeida - Area 1000	232
Ar. Carlos de Almeida	203	203	Ar. Carlos de Almeida - Area 1000	233
Ar. Carlos de Almeida	204	204	Ar. Carlos de Almeida - Area 1000	234
Ar. Carlos de Almeida	205	205	Ar. Carlos de Almeida - Area 1000	235
Ar. Carlos de Almeida	206	206	Ar. Carlos de Almeida - Area 1000	236
Ar. Carlos de Almeida	207	207	Ar. Carlos de Almeida - Area 1000	237
Ar. Carlos de Almeida	208	208	Ar. Carlos de Almeida - Area 1000	238
Ar. Carlos de Almeida	209	209	Ar. Carlos de Almeida - Area 1000	239
Ar. Carlos de Almeida	210	210	Ar. Carlos de Almeida - Area 1000	240
Ar. Carlos de Almeida	211	211	Ar. Carlos de Almeida - Area 1000	241
Ar. Carlos de Almeida	212	212	Ar. Carlos de Almeida - Area 1000	242
Ar. Carlos de Almeida	213	213	Ar. Carlos de Almeida - Area 1000	243
Ar. Carlos de Almeida	214	214	Ar. Carlos de Almeida - Area 1000	244
Ar. Carlos de Almeida	215	215	Ar. Carlos de Almeida - Area 1000	245
Ar. Carlos de Almeida	216	216	Ar. Carlos de Almeida - Area 1000	246
Ar. Carlos de Almeida	217	217	Ar. Carlos de Almeida - Area 1000	247
Ar. Carlos de Almeida	218	218	Ar. Carlos de Almeida - Area 1000	248
Ar. Carlos de Almeida	219	219	Ar. Carlos de Almeida - Area 1000	249
Ar. Carlos de Almeida	220	220	Ar. Carlos de Almeida - Area 1000	250
Ar. Carlos de Almeida	221	221	Ar. Carlos de Almeida - Area 1000	251
Ar. Carlos de Almeida	222	222	Ar. Carlos de Almeida - Area 1000	252
Ar. Carlos de Almeida	223	223	Ar. Carlos de Almeida - Area 1000	253
Ar. Carlos de Almeida	224	224	Ar. Carlos de Almeida - Area 1000	254
Ar. Carlos de Almeida	225	225	Ar. Carlos de Almeida - Area 1000	255
Ar. Carlos de Almeida	226	226	Ar. Carlos de Almeida - Area 1000	256
Ar. Carlos de Almeida	227	227	Ar. Carlos de Almeida - Area 1000	257
Ar. Carlos de Almeida	228	228	Ar. Carlos de Almeida - Area 1000	258
Ar. Carlos de Almeida	229	229	Ar. Carlos de Almeida - Area 1000	259
Ar. Carlos de Almeida	230	230	Ar. Carlos de Almeida - Area 1000	260
Ar. Carlos de Almeida	231	231	Ar. Carlos de Almeida - Area 1000	261
Ar. Carlos de Almeida	232	232	Ar. Carlos de Almeida - Area 1000	262
Ar. Carlos de Almeida	233	233	Ar. Carlos de Almeida - Area 1000	263
Ar. Carlos de Almeida	234	234	Ar. Carlos de Almeida - Area 1000	264
Ar. Carlos de Almeida	235	235	Ar. Carlos de Almeida - Area 1000	265
Ar. Carlos de Almeida	236	236	Ar. Carlos de Almeida - Area 1000	266
Ar. Carlos de Almeida	237	237	Ar. Carlos de Almeida - Area 1000	267
Ar. Carlos de Almeida	238	238	Ar. Carlos de Almeida - Area 1000	268
Ar. Carlos de Almeida	239	239	Ar. Carlos de Almeida - Area 1000	269
Ar. Carlos de Almeida	240	240	Ar. Carlos de Almeida - Area 1000	270
Ar. Carlos de Almeida	241	241	Ar. Carlos de Almeida - Area 1000	271
Ar. Carlos de Almeida	242	242	Ar. Carlos de Almeida - Area 1000	272
Ar. Carlos de Almeida	243	243	Ar. Carlos de Almeida - Area 1000	273
Ar. Carlos de Almeida	244	244	Ar. Carlos de Almeida - Area 1000	274
Ar. Carlos de Almeida	245	245	Ar. Carlos de Almeida - Area 1000	275
Ar. Carlos de Almeida	246	246	Ar. Carlos de Almeida - Area 1000	276
Ar. Carlos de Almeida	247	247	Ar. Carlos de Almeida - Area 1000	277
Ar. Carlos de Almeida	248	248	Ar. Carlos de Almeida - Area 1000	278
Ar. Carlos de Almeida	249	249	Ar. Carlos de Almeida - Area 1000	279
Ar. Carlos de Almeida	250	250	Ar. Carlos de Almeida - Area 1000	280
Ar. Carlos de Almeida	251	251	Ar. Carlos de Almeida - Area 1000	281
Ar. Carlos de Almeida	252	252	Ar. Carlos de Almeida - Area 1000	282
Ar. Carlos de Almeida	253	253	Ar. Carlos de Almeida - Area 1000	283
Ar. Carlos de Almeida	254	254	Ar. Carlos de Almeida - Area 1000	284
Ar. Carlos de Almeida	255	255	Ar. Carlos de Almeida - Area 1000	285
Ar. Carlos de Almeida	256	256	Ar. Carlos de Almeida - Area 1000	286
Ar. Carlos de Almeida	257	257	Ar. Carlos de Almeida - Area 1000	287
Ar. Carlos de Almeida	258	258	Ar. Carlos de Almeida - Area 1000	288
Ar. Carlos de Almeida	259	259	Ar. Carlos de Almeida - Area 1000	289
Ar. Carlos de Almeida	260	260	Ar. Carlos de Almeida - Area 1000	290
Ar. Carlos de Almeida	261	261	Ar. Carlos de Almeida - Area 1000	291
Ar. Carlos de Almeida	262	262	Ar. Carlos de Almeida - Area 1000	292
Ar. Carlos de Almeida	263	263	Ar. Carlos de Almeida - Area 1000	293
Ar. Carlos de Almeida	264	264	Ar. Carlos de Almeida - Area 1000	294
Ar. Carlos de Almeida	265	265	Ar. Carlos de Almeida - Area 1000	295
Ar. Carlos de Almeida	266	266	Ar. Carlos de Almeida - Area 1000	296
Ar. Carlos de Almeida	267	267	Ar. Carlos de Almeida - Area 1000	297
Ar. Carlos de Almeida	268	268	Ar. Carlos de Almeida - Area 1000	298
Ar. Carlos de Almeida	269	269	Ar. Carlos de Almeida - Area 1000	299
Ar. Carlos de Almeida	270	270	Ar. Carlos de Almeida - Area 1000	300
Ar. Carlos de Almeida	271	271	Ar. Carlos de Almeida - Area 1000	301
Ar. Carlos de Almeida	272	272	Ar. Carlos de Almeida - Area 1000	302
Ar. Carlos de Almeida	273	273	Ar. Carlos de Almeida - Area 1000	303
Ar. Carlos de Almeida	274	274	Ar. Carlos de Almeida - Area 1000	304
Ar. Carlos de Almeida	275	275	Ar. Carlos de Almeida - Area 1000	305
Ar. Carlos de Almeida	276	276	Ar. Carlos de Almeida - Area 1000	306
Ar. Carlos de Almeida	277	277	Ar. Carlos de Almeida - Area 1000	307
Ar. Carlos de Almeida	278	278	Ar. Carlos de Almeida - Area 1000	308
Ar. Carlos de Almeida	279	279	Ar. Carlos de Almeida - Area 1000	309
Ar. Carlos de Almeida	280	280	Ar. Carlos de Almeida - Area 1000	310
Ar. Carlos de Almeida	281	281	Ar. Carlos de Almeida - Area 1000	311
Ar. Carlos de Almeida	282	282	Ar. Carlos de Almeida - Area 1000	312
Ar. Carlos de Almeida	283	283	Ar. Carlos de Almeida - Area 1000	313
Ar. Carlos de Almeida	284	284	Ar. Carlos de Almeida - Area 1000	314
Ar. Carlos de Almeida	285	285	Ar. Carlos de Almeida - Area 1000	315
Ar. Carlos de Almeida	286	286	Ar. Carlos de Almeida - Area 1000	316
Ar. Carlos de Almeida	287	287	Ar. Carlos de Almeida - Area 1000	317
Ar. Carlos de Almeida	288	288	Ar. Carlos de Almeida - Area 1000	318
Ar. Carlos de Almeida	289	289	Ar. Carlos de Almeida - Area 1000	319
Ar. Carlos de Almeida	290	290	Ar. Carlos de Almeida - Area 1000	320
Ar. Carlos de Almeida	291	291	Ar. Carlos de Almeida - Area 1000	321
Ar. Carlos de Almeida	292	292	Ar. Carlos de Almeida - Area 1000	322
Ar. Carlos de Almeida	293	293	Ar. Carlos de Almeida - Area 1000	323
Ar. Carlos de Almeida	294	294	Ar. Carlos de Almeida - Area 1000	324
Ar. Carlos de Almeida	295	295	Ar. Carlos de Almeida - Area 1000	325
Ar. Carlos de Almeida	296	296	Ar. Carlos de Almeida - Area 1000	326
Ar. Carlos de Almeida	297	297	Ar. Carlos de Almeida - Area 1000	327
Ar. Carlos de Almeida	298	298	Ar. Carlos de Almeida - Area 1000	328
Ar. Carlos de Almeida	299	299	Ar. Carlos de Almeida - Area 1000	329
Ar. Carlos de Almeida	300	300	Ar. Carlos de Almeida - Area 1000	330
Ar. Carlos de Almeida	301	301	Ar. Carlos de Almeida - Area 1000	331
Ar. Carlos de Almeida	302	302	Ar. Carlos de Almeida - Area 1000	332
Ar. Carlos de Almeida	303	303	Ar. Carlos de Almeida - Area 1000	333
Ar. Carlos de Almeida	304	304	Ar. Carlos de Almeida - Area 1000	334
Ar. Carlos de Almeida	305	305	Ar. Carlos de Almeida - Area 1000	335
Ar. Carlos de Almeida	306	306	Ar. Carlos de Almeida - Area 1000	336
Ar. Carlos de Almeida	307	307	Ar. Carlos de Almeida - Area 1000	337
Ar. Carlos de Almeida	308	308	Ar. Carlos de Almeida - Area 1000	338
Ar. Carlos de Almeida	309	309	Ar. Carlos de Almeida - Area 1000	339
Ar. Carlos de Almeida	310	310	Ar. Carlos de Almeida - Area 1000	340
Ar. Carlos de Almeida	311	311	Ar. Carlos de Almeida - Area 1000	341
Ar. Carlos de Almeida	312	312	Ar. Carlos de Almeida - Area 1000	342
Ar. Carlos de Almeida	313	313	Ar. Carlos de Almeida - Area 1000	343
Ar. Carlos de Almeida	314	314	Ar. Carlos de Almeida - Area 1000	344
Ar. Carlos de Almeida	315	315	Ar. Carlos de Almeida - Area 1000	345
Ar. Carlos de Almeida	316	316	Ar. Carlos de Almeida - Area 1000	346
Ar. Carlos de Almeida	317	317	Ar. Carlos de Almeida - Area 1000	347
Ar. Carlos de Almeida	318	318	Ar. Carlos de Almeida - Area 1000	348
Ar. Carlos de Almeida	319	319	Ar. Carlos de Almeida - Area 1000	349
Ar. Carlos de Almeida	320	320	Ar. Carlos de Almeida - Area 1000	350
Ar. Carlos de Almeida	321	321	Ar. Carlos de Almeida - Area 1000	351
Ar. Carlos de Almeida	322	322	Ar. Carlos de Almeida - Area 1000	352
Ar. Carlos de Almeida	323	323	Ar. Carlos de Almeida - Area 1000	

Friedrich			Muller		
Market	ROI	Turn	Market	ROI	Turn
Aluminum	10.21%	1.07	Aluminum	10.21%	1.07
Chemical	10.21%	1.07	Chemical	10.21%	1.07
Electronics	10.21%	1.07	Electronics	10.21%	1.07
Food	10.21%	1.07	Food	10.21%	1.07
Healthcare	10.21%	1.07	Healthcare	10.21%	1.07
Industrials	10.21%	1.07	Industrials	10.21%	1.07
Technology	10.21%	1.07	Technology	10.21%	1.07
Telecom	10.21%	1.07	Telecom	10.21%	1.07
Transportation	10.21%	1.07	Transportation	10.21%	1.07
Utilities	10.21%	1.07	Utilities	10.21%	1.07
Other	10.21%	1.07	Other	10.21%	1.07
<b>Total</b>	<b>10.21%</b>	<b>1.07</b>	<b>Total</b>	<b>10.21%</b>	<b>1.07</b>

Source: Data from the authors' survey of 100 U.S. firms.

Que, en cumplimiento de lo establecido en la Resolución 11.6 de 1993 expedida por la Comisión de Regulación de Energía Gas, se sanciona un programa de limitación del suministro de energía eléctrica a partir del día 17 de enero de 2004, en el horario comprendido entre las 10:00 y las 11:00 a.m., a los usuarios atendidos en el ámbito nacional por la EMPRESA DE ENERGÍA DE APALUCA S. E. S. P., entidad que actualmente se encuentra en mora de pago del incremento del 1.4 por ciento de 2003 a 2004 al Mercado de Energía Mayorista.

Los sistemas por turnos son a los circuitos no democratizables y los que son democratizables por consenso y técnicas que no están en marcha no serán afectados por el programa de limitación de suministro.

Los honorarios en que se realizó el programa de limitación de  
suministro se encuentran en los siguientes hechos:

[illegible]

Si la empresa tiene vigente un programa de limitación de números, los honorarios por corte de energía publicados en este caso quedarán incluidos en el programa anterior.

Así mismo, informo a todos los usuarios y a los terceros afectados por la limitación de suministro de energía eléctrica que los daños y perjuicios ocasionados serán responsabilidad de la empresa misma.

Las Sociedades Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías abajo firmantes, atendiendo las normas vigentes y la disposición por la Superintendencia Bancaria se permite informar a sus afiliados que:

1. El literal e) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 2º de la Ley 797 de 2003, estableció que los afiliados al Sistema General de Pensiones pueden trasladarse entre los regímenes que lo integran cada cinco (5) años, salvo que le faltan diez años o menos para cumplir la edad para tener derecho a una pensión de vejez.

Asimismo, y sin perjuicio de lo anterior, señaló período de gracia para aquellos a quienes el 28 de enero de 2004 les faltan diez (10) años o menos para cumplir la edad para tener derecho a la pensión de vejez, según el cual les autoriza a trasladarse por una única vez entre los regímenes del Sistema General de Pensiones, y así cumplir el plazo anulado, derecho que pueden ejercer hasta dicha fecha.

2. El Gobierno Nacional expidió el Decreto 3800 del 29 de diciembre de 2003, mediante el cual reglamentó el derecho sufragante en el caso de los menores que se encuentran en la situación de edad desahogada.

3. La Superintendencia Rancaria expuso la Circular Externa 001 del 8 de enero de 2004 mediante la cual emitió instrucciones para el cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia de la cual se publica este libro.

En consideración de lo anterior, se informa

a. Sujetos beneficiarios de la norma. A quienes al 28 de enero de 2004 les faltaren diez (10) años o menos para cumplir edad de 55 años si son mujeres, ó 60 años si son hombres, - y sin perjuicio de lo que expresamente consigne normativas especiales en relación con la edad de pensión - podrán trasladarse por una única vez entre el Régimen de Prima Media de Prestación Dedicada administrado por el IPS y el Régimen de Ahorro Individual gestionado por alguna AFP o viceversa. A hereafter, Italia dejó de aplicar la norma.

El derecho de traslado a que se refieren las normas señaladas se aplica, igualmente, a toda persona que a la fecha de solicitud cuente con más de 55 años, si es mujer, ó 60 años, si es hombre, en la medida en que no tengan la calidad pensionaria; no hayan solicitado la referida pensión, o respecto de los mismos no se haya presentado un sustrato que haga inoperante la aplicación de las disposiciones del Sistema General de Pensiones.

Igualmente, al ejercer el traslado dentro del plazo indicado, puede ser ejercido por toda persona en las condiciones de señaladas, que se encuentren en situación de multiple vinculación, eligiendo el régimen al que prefieren estar vinculados.

b). Ejercicio del derecho a trasladarse a un régimen. Para efectos de ejercer el citado derecho, los afiliados podrán vanificar sus empleadores a que administradora y a quien se realice el pago de la ilímite cotización a pensiones con el fin de vanificar el mismo conforme con ese hecho.

Verificada la información anterior y evaluada la decisión que corresponda, los afiliados que opten por seleccionar un reglamento al cual se haya colgado en el último periodo, deberán proceder a suscribir los formularios de traslado que corresponden a la nueva administración y régimen elegidos, hasta el 28 de enero de 2004.

c. Consecuencias del silencio del afiliado. En caso de que el afiliado opte por no tomar acción alguna y guardar silencio entendido de conformidad con lo establecido en el artículo 2º del Decreto 3800 de 2003, que su decisión es permanente y vinculada a la administración y régimen a la que se reconociera cotizando a 28 de enero de 2004 y a aquella que resulte de cualquier otro evento para pensiones antes de dicha fecha.

d. Requisitos adicionales para los beneficiarios del régimen de transición. Transíndase de los afiliados en las condiciones antes indicadas, que tengan la cantidad de beneficiarios del régimen de transición previsto en el artículo 35 de la Ley 10.1993, es decir, aquellos personas que al 17 de abril de 1994 hubieran cumplido 155 días de servicio prestado o conculcadas que se hubieran trasladado hacia el Régimen de Ahorro Individual, sin haberse cambiado de régimen y recuperado los años de servicio derecho hasta el 28 de enero de 2004.

Para hacer uso del derecho a trasladarse hacia el Régimen de Prima Media con Prestación Definida administrado por el Caja Costarricense de Seguro Social, el afiliado debe cumplir con los requisitos señalados en el artículo 31 del Decreto 3000 de 2003, esto es que el saldo en la cuenta de ahorro individual se transfiera al ISS, y que este ahorro sea inferior al monto total del aporte que debió efectuarse en el Régimen de Prima Media.

IMPUESTOS / SE ABRANAN DOS PUNTOS DE LA TARIFA DEL IVA

## En tres meses comienza la devolución del IVA

La Dyan espera en solo un mes comenzar a dar ventajas con el nuevo plástico sino combatir la evasión mediante el cruce de cuentas con el comercio.

La Dirección General de Aduanas de la Dyan espera en solo un mes comenzar a dar ventajas con el nuevo plástico sino combatir la evasión mediante el cruce de cuentas con el comercio.



A QUÉ PUNTOS COMIENZAN LOS PUNTOS DE LA TARIFA DEL IVA...

La devolución del IVA...

Mayor control...

Los comerciantes...

Para la Dyan...

## SEGURO SOCIAL PENSIONES

INFORMA A SU AFILIADOS Y A LOS VINCULADOS A LOS FONDOS PRIVADOS DE PENSIONES-AFP

Personas en conflicto de multivinculación hombres mayores de 50 años y mujeres mayores de 45 años.

Las personas que cumplan 50 años o más de edad hombres...

La manifestación de la selección de Régimen deberá ser...

Personas en conflicto de multivinculación hombres mayores de 50 años y mujeres mayores de 45 años.

Las personas que se encuentran en situación de...

Información general sobre el Régimen de Transición y...

Los afiliados que son beneficiarios del Régimen de Transición...

No son objeto de traslado las siguientes personas...

Para mayor información comuníquese desde cualquier lugar...

La atención de información de afiliados en cumplimiento a lo...

AVANZA / AVANZAN LAS NEGOCIACIONES

## 35 pilotos solicitan retiro

A finales de este año...

El Director de la...

Los 35 pilotos...

El año pasado...

A finales del 2003...

Los pilotos...

El Director...

Los 35 pilotos...

El año pasado...

A finales del 2003...

LIMA directo, con el mejor horario y en Flota más Nueva de América

Además gana Doble Millas DISTANCIA



Compañía Internacional de Líneas Aéreas, S.A. (TACA)...

SEGURO SOCIAL PENSIONES

Valores de Cuotas Modernizadoras vigentes a partir del 15 de Enero de 2004

Afiliados con BIC (Programa Base de Cotización) menor a 2 salarios mínimos (Novel 1)	11,200
Afiliados con BIC entre 2 y 3 salarios mínimos (Novel 2)	14,500
Afiliados con BIC mayor de 3 salarios mínimos (Novel 3)	18,800

cafesalud EPS

Cruz Blanca E.P.S.

Afiliados a sus afiliados las tarifas de Cuotas Modernizadoras vigentes a partir del 15 de Enero de 2004

Afiliados con BIC (Programa Base de Cotización) menor a 2 salarios mínimos (Novel 1)	11,200
Afiliados con BIC entre 2 y 3 salarios mínimos (Novel 2)	14,500
Afiliados con BIC mayor de 3 salarios mínimos (Novel 3)	18,800



# COMUNICADO DE PRENSA

Las Sociedades Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías abajo firmantes, atendiendo las normas vigentes y lo dispuesto por la Superintendencia Bancaria se permiten informar a sus afiliados que:

1. El literal e) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 2º de la Ley 797 de 2003, estableció que los afiliados al Sistema General de Pensiones pueden trasladarse entre los regímenes que lo integran cada cinco (5) años, salvo que le falten diez años o menos para cumplir la edad para tener derecho a una pensión de vejez;

Así mismo, y sin perjuicio de lo anterior, señaló período de gracia para aquellos a quienes al 28 de enero de 2004 les faltan diez (10) años o menos para cumplir la edad para tener derecho a la pensión de vejez, según el cual les autoriza a trasladarse por una única vez entre los regímenes del Sistema General de Pensiones, y sin cumplir el plazo anotado, derecho que pueden ejercer hasta dicha fecha;

2. El Gobierno Nacional expidió el Decreto 3800 del 29 de diciembre de 2003, mediante el cual reglamentó el derecho a trasladarse en el caso de los afiliados que se encuentren en la situación de edad descrita;

3. La Superintendencia Bancaria expidió la Circular Externa 001 del 8 de enero de 2004, mediante la cual impartió instrucciones a las administradoras de pensiones del Sistema General de Pensiones y en virtud de la cual se publica este aviso;

En consideración de lo anterior, se informa:

a. Sujetos beneficiarios de la norma. A quienes al 28 de enero de 2004 les faltaren diez (10) años o menos para cumplir la edad de 55 años, si son mujeres, ó 60 años, si son hombres, - y sin perjuicio de lo que expresamente consagren normas especiales en relación con la edad de pensión - podrán trasladarse por una única vez entre el Régimen de Prima Media con Prestación Definida administrado por el ISS y el Régimen de Ahorro Individual gestionado por alguna AFP o viceversa, a su libre elección, hasta dicha fecha;

El derecho de traslado a que se refieren las normas señaladas se aplica, igualmente, a toda persona que a la fecha de la solicitud cuente con más de 55 años, si es mujer, ó 60 años, si es hombre; en la medida en que no tengan la calidad de pensionados, no hayan solicitado la referida pensión, o respecto de los mismos no se haya presentado un siniestro que haya dado o dé lugar al reclamo de las prestaciones del Sistema General de Pensiones.

Igualmente, el derecho de traslado dentro del plazo indicado, puede ser ejercido por toda persona en las condiciones de edad señaladas, que se encuentre en situación de múltiple vinculación, eligiendo el régimen al que prefieren estar vinculados, en los términos del artículo 2º del decreto 3800 de 2003 y la Circular Externa 001 de 2004 de la Superintendencia Bancaria.

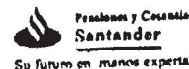
b. Ejercicio del derecho a trasladarse de régimen. Para efectos de ejercer el citado derecho, los afiliados podrán verificar con sus empleadores a qué administradora y régimen se realizó el pago de la última cotización a pensiones con el fin de verificar si están conformes con ese hecho.

Verificada la información anterior y evaluada la decisión que corresponda, los afiliados que opten por seleccionar un régimen diferente al cual se haya cotizado en el último período, deberán proceder a suscribir los formularios de traslado que correspondan ante la nueva administradora y régimen elegidos, hasta el 28 de enero de 2004.

c. Consecuencias del silencio del afiliado. En caso de que el afiliado opte por no tomar acción alguna y guardar silencio, se entenderá de conformidad con lo establecido en el artículo 2º del Decreto 3800 de 2003, que su decisión es permanecer vinculado a la administradora y régimen a la que se encontrará cotizando a 28 de enero de 2004 ó a aquella que recibió la última cotización para pensiones antes de dicha fecha;

d. Requisitos adicionales para los beneficiarios del régimen de transición. Tratándose de los afiliados en las condiciones de edad indicadas, que tengan la calidad de beneficiarios del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, esto es, aquellas personas que al 1º de abril de 1994 hubieran cumplido 15 ó más años de servicios prestados o semanas cotizadas, que se hubieran trasladado hacia el Régimen de Ahorro Individual, si deciden cambiarse de régimen y recuperar los efectos de la transición, podrán ejercer ese derecho hasta el 28 de enero de 2004.

Para hacer uso del derecho a trasladarse hacia el Régimen de Prima Media con Prestación Definida administrado por el ISS, deberán cumplir con los requisitos señalados en el artículo 3º del Decreto 3800 de 2003; esto es que el saldo en la cuenta de ahorro individual se traslade al ISS, y que este ahorro no sea inferior al monto total del aporte que debió efectuarse en caso de que hubiere permanecido en el Régimen de Prima Media.



## PENSIONES, TRASLADO DE RECURSOS ENTRE RÉGIMENES

Concepto 2019152169-003 del 15 de enero de 2020

**Síntesis:** El Sistema General de Pensiones integra dos regímenes pensionales excluyentes entre sí pero que coexisten, estableciendo la posibilidad de trasladarse libremente entre estos atendiendo unos términos mínimos de permanencia y edad, así como la de sumar las cotizaciones hechas en ambos para efectos de reunir las condiciones requeridas para tener derecho a las prestaciones que este sistema otorga a sus afiliados. Para el traslado de recursos entre los dos regímenes se debe atender lo dispuesto en el artículo 7° del Decreto 3995 de 2008.

«(...) comunicación en la cual, después de realizar una breve alusión al marco normativo que regula lo concerniente a la declaratoria de nulidad o ineficacia de la afiliación pensional, plantea tres interrogantes sobre el trato que debe darse a los aportes pensionales cuando se configuran las situaciones reseñadas.

Al respecto, previo a dar respuesta a los interrogantes que se relacionan en su escrito este Despacho encuentra oportuno hacer las siguientes consideraciones en relación con la declaratoria de nulidad o ineficacia de la afiliación pensional, así:

El Sistema General de Pensiones (SGP), creado por la Ley 100 de 1993, integra dos regímenes pensionales excluyentes entre sí pero que coexisten, estableciendo, entre otras características, la posibilidad de trasladarse libremente entre estos atendiendo unos términos mínimos de permanencia y edad, así como la de sumar de las cotizaciones hechas en ambos para efectos de reunir las condiciones que dan derecho a las prestaciones que este Sistema otorga a sus afiliados.

No obstante, en cuanto a las prestaciones que se reconocen en uno y otro régimen, el legislador dispone reglas que no permiten que su resultado sea comparable, si bien su finalidad es en ambos casos la *“garantizar a la población, el amparo contra las contingencias derivadas de la vejez, la invalidez y la muerte, mediante el reconocimiento de las pensiones y prestaciones”*<sup>1</sup>, en el Régimen Solidario de Prima Media con Prestación Definida (RPM), los afiliados obtienen prestaciones cuyas condiciones y montos se encuentran definidos en la ley y en el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS) las pensiones y prestaciones que se reconocen dependen directamente de los valores ahorrados en la cuenta individual de los afiliados<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Artículo 10 de la Ley 100 de 1993

<sup>2</sup> Sobre el tema, la Corte Constitucional en Sentencia C-538 del 16 de octubre de 1996, destacó como principales diferencias las siguientes:

“En el régimen de prima media con prestación definida los afiliados o sus beneficiarios obtienen una pensión de vejez, invalidez o de sobrevivientes o una indemnización previamente definidas en la ley.

En este régimen son aplicables disposiciones vigentes para los sistemas de invalidez, vejez y muerte a cargo del I.S.S. y además las disposiciones sobre las materias contenidas en la Ley 100/93 (art. 31).

Dicho régimen se caracteriza porque los aportes de los afiliados y empleadores y sus rendimientos integran un fondo común de naturaleza pública, mediante el cual se garantiza el pago de las prestaciones a cargo de los recursos de dicho fondo, los gastos administrativos y las reservas, de acuerdo con la ley.

El administrador exclusivo de dicho régimen es el Instituto de Seguros Sociales, pues fue la única entidad que quedó autorizada para continuar afiliando trabajadores en lo sucesivo; por lo tanto, quedó planteada la competitividad entre dicha entidad y los administradores -fondos de pensiones- del sistema de ahorro individual de pensiones.

En el sistema de ahorro individual con solidaridad se incorporan y administran recursos privados y públicos destinados a pagar las pensiones y prestaciones que deban reconocerse a sus afiliados. Está basado en los recursos del ahorro, administrados en cuentas de propiedad individual de los afiliados, proveniente de las cotizaciones hechas por los empleadores y trabajadores, más los rendimientos financieros generados por su inversión y, eventualmente, de los subsidios del Estado.

Es importante considerar que el legislador en el diseño de la estructura de este Sistema tuvo en cuenta razones como *la viabilidad financiera, la falta de equidad y la baja cobertura del mismo*, las deficiencias administrativas, pero también se optó por un sistema que estimulara la libre competencia entre Regímenes y el ejercicio del derecho a elegir el régimen pensional y la administradora por parte de los afiliados, según sus intereses.

Sin embargo, las diferencias de origen legal entre los regímenes pensionales que pueden derivar en prestaciones de distintas cuantías generan inconformidades entre los afiliados que, después de cumplidos los años para pensionarse, encuentran un mejor beneficio en el régimen contrario, por lo que tienden a solicitar el traslado por fuera del término legal o la anulación de la afiliación.

En ese sentido, debe decirse que el marco legal<sup>3</sup> para la procedencia de los traslados entre regímenes es claro y no da lugar a interpretaciones diferentes más allá del cumplimiento de los requisitos establecidos en las normas. Resulta evidente además que, en aras de salvaguardar los derechos de los afiliados, en distintas épocas desde la vigencia del Sistema General de Pensiones, se ha dado la posibilidad de regresar al régimen del cual se habían trasladado, sin contar que desde el inicio del SGP, una vez decidido el traslado, el afiliado tiene derecho al retracto.

El sistema dual acogido en el sistema pensional colombiano, es desarrollo de lo dispuesto en la Constitución Política, de allí que el legislador dentro de su libertad de creación normativa hubiese proferido la Ley 100 de 1993 para generar un correcto funcionamiento de la seguridad social con solidaridad, entendido este como un servicio público de carácter obligatorio, que se encuentra bajo la dirección y responsabilidad del Estado y que a su vez cuenta con la participación de los particulares, para de esta forma atender las prestaciones que se derivan de los riesgos del trabajo y de la necesidad de otorgar a las personas los medios para una subsistencia digna, cuando en razón de la edad ya no disponen de una adecuada capacidad de trabajo.

Quiere ello decir que no se podría a través de la Ley 100 de 1993 ni de sus decretos reglamentarios menoscabar las libertades individuales de las personas, entre ellas, la libertad de escogencia (libertad contractual), para lo cual es preciso revisar lo dispuesto en el artículo 1502 del Código Civil, el cual reza:

---

(...) Evidentemente al comparar los dos sistemas de pensiones, encuentra la Corte las siguientes diferencias:

- Los requisitos para obtener la pensión de vejez en el sistema de prima media (art. 33) son: haber cumplido 55 años de edad si es mujer, o 60 años de edad si es hombre y haber cotizado un mínimo de 1000 semanas en cualquier tiempo. El monto mensual de la pensión de vejez se determina así: por las primeras 1000 semanas de cotización, será equivalente al 65% del ingreso base de liquidación; por cada 50 semanas adicionales a las 1000 hasta las 1200 semanas, este porcentaje se incrementará en un 2% llegando a este tiempo de cotización al 73% del ingreso base de liquidación. Por cada 50 semanas adicionales a las 1200 hasta las 1400, este porcentaje se incrementará en 3% en lugar del 2% hasta completar un monto máximo del 85% del ingreso base de liquidación. El valor total de la pensión no podrá ser superior al 85% del ingreso base de liquidación, ni inferior a la pensión mínima de que trata el artículo siguiente (art. 34), que no podrá ser inferior al valor del salario mínimo mensual vigente y que tiene la garantía estatal a que alude el art. 138.

- En el sistema de ahorro individual con solidaridad, el derecho a la pensión de vejez, en las diferentes modalidades (renta vitalicia inmediata, retiro programado o retiro programado con renta vitalicia o cualesquiera otras autorizadas) se causa en favor del afiliado a la edad que cada uno de ellos escoge, siempre y cuando el capital acumulado en su cuenta de ahorro individual le permita obtener una pensión mensual, superior al 110% del salario mínimo mensual legal vigente a la fecha de expedición de la ley, o reajustado según el índice de precios al consumidor, certificado por el DANE, o cuando opte por seguir cotizando, en las circunstancias descritas por el art. 64." (Subraya fuera de texto)

<sup>3</sup> literales b y e del artículo 13 de la Ley 100 de 1993, Artículo 2.2.2.1. del Decreto 1833 de 2016 que incorpora el artículo 3° del Decreto 1161 de 1994. Parágrafo del artículo 2° del Decreto 1642 de 1995, Artículo 12 del Decreto 3995 de 2008

*“ARTICULO 1502. <REQUISITOS PARA OBLIGARSE>. Para que una persona se obligue a otra por un acto o declaración de voluntad, es necesario:*

*1o.) que sea legalmente capaz.*

*2o.) que consienta en dicho acto o declaración y su consentimiento no adolezca de vicio.*

*3o.) que recaiga sobre un objeto lícito.*

*4o.) que tenga una causa lícita.*

*La capacidad legal de una persona consiste en poderse obligar por sí misma, sin el ministerio o la autorización de otra.”*

En consonancia con lo anterior, podría decirse que dentro de lo que aquí se analiza, no es materia de discusión que el objeto y la causa en el traslado entre regímenes sean lícitas (existe todo un marco legal que así lo determina), ahora bien, en cuanto a que la persona sea considerada capaz debe verificarse que se den los presupuestos normativos dispuestos en los artículos 1503 y 1504 *ibídem*.

Respecto del consentimiento para obligarse al momento de suscribir el contrato de afiliación a los distintos regímenes, el numeral 2 del artículo 1502 señala que dicho consentimiento no debe adolecer de vicio alguno, los cuales son determinados en el artículo 1508 *ibídem* como error, fuerza y dolo, este, es sin dudas el punto crítico y de mayor problemática actualmente.

En relación con el consentimiento informado y libre, es decir, exento de vicios, considera este Despacho que se trata de un asunto meramente probatorio, que debe ser analizado y debatido en juicio, y que a su paso son los jueces de la república los responsables de valorar concienzudamente las pruebas aportadas tanto por administradoras como por afiliados, revisando además las posibles implicaciones financieras que conllevaría para el sistema, ordenar la nulidad de una afiliación, así como el traslado de regímenes.

Así mismo, la Corte Constitucional en Sentencia SU 062 de 2010 desarrolla la importancia de la prevalencia del orden económico, y al respecto indica: *“La efectividad del derecho a cambiar de régimen pensional dentro del marco constitucional y legal vigente depende de que éste pueda ser ejercido sin trabas insalvables. Uno de estos obstáculos es precisamente impedir que el interesado aporte voluntariamente los recursos adicionales en el evento de que su ahorro en el régimen de ahorro individual sea inferior al monto del aporte legal correspondiente en caso de que hubiere permanecido en el régimen de prima media con prestación definida. Esta barrera es salvable si el interesado aporta los recursos necesarios para evitar que el monto de su ahorro, al ser inferior en razón a rendimientos diferentes o a otras causas, sea inferior al exigido. Esto no sólo es necesario dentro del régimen general, sino también en los regímenes especiales con el fin de conciliar el ejercicio del derecho del interesado en acceder a la pensión y el objetivo constitucional de asegurar la sostenibilidad del sistema pensional.”* (subraya fuera de texto)

Como precedente de la anterior Sentencia de Unificación, el Alto Tribunal indicó en la Sentencia C-1024 de 2004, que *“(…) el objetivo perseguido con el señalamiento del período de carencia en la norma acusada, consiste en evitar la descapitalización del fondo común del Régimen Solidario de Prima Media con Prestación Definida, que se produciría si se permitiera que las personas que no han contribuido al fondo común y que, por lo mismo, no fueron tenidas en consideración en la realización del cálculo actuarial para determinar las sumas que representarán en el futuro el pago de sus pensiones y su reajuste periódico; pudiesen trasladarse de régimen, cuando llegasen a estar próximos al cumplimiento de los requisitos para acceder a la pensión de vejez, lo que contribuiría a desfinanciar el sistema y, por ende, a poner en riesgo la garantía del derecho irrenunciable a la pensión del resto de cotizantes (…)* Desde esta perspectiva, si dicho régimen se sostiene sobre las cotizaciones efectivamente realizadas en la vida laboral de los afiliados, para que una vez cumplidos los requisitos de edad y número de semanas, puedan obtener una pensión mínima independientemente de las sumas efectivamente cotizadas. Permitir que una persona

próxima a la edad de pensionarse se beneficie y resulte subsidiada por las cotizaciones de los demás, resulta contrario no sólo al concepto constitucional de equidad (C.P. art. 95), sino también al principio de eficiencia pensional, cuyo propósito consiste en obtener la mejor utilización económica de los recursos administrativos y financieros disponibles para asegurar el reconocimiento y pago en forma adecuada, oportuna y suficiente de los beneficios a que da derecho la seguridad social (...) (Subraya fuera de texto)

En línea con lo dispuesto por la Honorable Corte Constitucional, esta Superintendencia considera que, al momento de evaluarse las solicitudes y demandas de traslado de régimen pensional, debe adoptarse por los operadores administrativos y judiciales criterios tales como: i) el objetivo constitucional de estabilidad y sostenibilidad del sistema pensional en el que con miras a proteger el orden económico del sistema no es viable efectuar traslados sin el monto de aportes necesarios en cada régimen. y ii) el mantenimiento del orden legal, que puede verse afectado al autorizar o conceder solicitudes de traslados sin el cumplimiento de los requisitos legales toda vez que se dejaría sin piso los criterios de interpretación a la normativa aplicable.

En ese sentido, en consideración de este Despacho, la revisión que se hace a las solicitudes de traslado de régimen por vía judicial, debiera apoyarse en criterios técnicos en los que se determine que no se generará una afectación al Sistema General de Pensiones, atendiendo para ello los principios constitucionales de universalidad y eficiencia.

Respecto de los tres interrogantes, esta Superintendencia estima importante además señalar que la declaratoria de nulidad o ineficacia de la afiliación al Sistema General de Pensiones que se resuelva judicialmente, debe ser atendida por los actores en los términos que se disponga en los fallos judiciales correspondientes, teniendo en cuenta que, conforme a lo señalado en el artículo 57 de la Ley 1480 de 2011, esta Superintendencia no puede en desarrollo de sus funciones jurisdiccionales conocer de ningún asunto de carácter laboral.

Precisado lo anterior, teniendo en cuenta la relevancia del asunto consultado y las posibles implicaciones que tiene para el Sistema General de Pensiones, se emite el siguiente concepto con el alcance indicado en el artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

#### **a. Vinculación al Sistema General de Pensiones y destinación de los aportes.**

Es necesario precisar que la vinculación al Sistema General de Pensiones se realiza a través de la suscripción del formulario de afiliación, este formulario hace las veces de contrato, en el que ambas partes se obligan de manera recíproca. Entre las principales obligaciones tenemos, por un lado, la de efectuar los aportes que correspondan legalmente y, por otro, recibir, administrar y conceder (ante el cumplimiento de los requisitos normativos) las prestaciones a que haya lugar.

Específicamente, en relación con las cotizaciones efectuadas en el Sistema General de Pensiones, el artículo 20 de la Ley 100 de 1993, determina la distribución que deben efectuar las administradoras del mismo, tanto en el Régimen de Prima Media con Solidaridad –RPM- como en el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad-RAIS-, señalando entre otros lo siguiente:

*“Artículo 20. La tasa de cotización continuará en el 13.5%\* del ingreso base de cotización.*

*En el régimen de prima media con prestación definida el 10.5% del ingreso base de cotización se destinará a financiar la pensión de vejez y la constitución de reservas para tal efecto. El 3% restante sobre el ingreso base de cotización se destinará a financiar los gastos de administración y la pensión de invalidez y sobrevivientes.*



En el régimen de ahorro individual con solidaridad el 10% del ingreso base de cotización se destinará a las cuentas individuales de ahorro pensional. Un 0.5% del ingreso base de cotización se destinará al Fondo de Garantía de Pensión Mínima del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad y el 3% restante se destinará a financiar los gastos de administración, la prima de reaseguros de Fogafin, y las primas de los seguros de invalidez y sobrevivientes.

A partir del 1o. de enero del año 2004 la cotización se incrementará en un uno por ciento (1%) sobre el ingreso base de cotización. Adicionalmente, a partir del 1o. de enero del año 2005 la cotización se incrementará en medio por ciento (0.5%) y otro medio punto (0.5%) en el año 2006. A partir del 1o. de enero del año 2008, el Gobierno Nacional podrá incrementar en un (1%) punto adicional la cotización por una sola vez, siempre y cuando el crecimiento del producto interno bruto sea igual o superior al 4% en promedio durante los dos (2) años anteriores.

(...) Los afiliados que tengan un ingreso mensual igual o superior a cuatro (4) salarios mínimos mensuales legales vigentes, tendrán a su cargo un aporte adicional de un uno por ciento (1%) sobre el ingreso base de cotización, destinado al fondo de solidaridad pensional, de conformidad con lo previsto en la presente ley en los artículos 25 y siguientes de la Ley 100 de 1993.”

De allí, que el 3% de la cotización de los aportantes se destina a financiar los gastos de administración, la prima de reaseguros de Fogafin, y las primas de los seguros de invalidez y sobrevivientes.

Ahora bien, en cuanto al funcionamiento de los recursos pensionales en el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad –RAIS-el literal d) del artículo 60 de la mencionada Ley 100, se establece que el conjunto de las cuentas individuales de ahorro pensional constituye un patrimonio autónomo de propiedad de los afiliados, denominado fondo de pensiones, el cual es independiente del patrimonio de la Administradora.

De la misma manera, en el artículo 100 de la Ley 1003 se establece que, con el fin de garantizar la seguridad, rentabilidad y liquidez de los recursos del sistema, las administradoras invertirán los recursos de los fondos en las condiciones y con sujeción a los límites que para el efecto establezca el Gobierno Nacional, que hoy se encuentra recogido en el Decreto 2555 de 2010.

Corresponde en este punto precisar que, en el Régimen de Ahorro Individual, los aportes de los afiliados que ingresan al fondo deben cumplir con los requisitos mínimos e invertirse en papeles y activos permitidos, tales como TES, bonos, CDT y acciones, entre otros. Es decir, el dinero que aporta un afiliado para su cuenta individual se encuentra representado en las inversiones que realiza el fondo, donde cada afiliado tiene una cuenta de ahorro individual que se ve representada en unidades de participación del fondo. Dichas inversiones deben ser valoradas diariamente por los Fondos de Pensiones y de Cesantía, en cumplimiento de lo establecido en el Capítulo I de la Circular Externa 100 de 1995 expedida por esta Superintendencia.

Por lo tanto, las cuentas individuales de los afiliados varían no solo con los aportes y retiros que estos realizan, sino también, por las variaciones en el valor de mercado de las inversiones que conforman los portafolios, las cuales cambian de forma diaria como consecuencia de los cambios en las tasas de interés y de los precios de los diferentes títulos que conforman los citados portafolios; situaciones propias del mercado de valores que fluctúan por factores tanto internos como externos que originan caídas o subidas en los precios de los títulos y demás inversiones y que no dependen del control y gestión de las Administradoras de los Fondos de Pensiones y de Cesantía.

Ahora bien, tal y como se observa en el artículo 101 de la Ley 100 de 1993, las Sociedades Administradoras deben garantizar a los afiliados una rentabilidad mínima en el manejo de los fondos que administran y, en caso de haber

un incumplimiento a esta rentabilidad, la misma se garantiza con el patrimonio de dichas sociedades y con la reserva de estabilización. Esta reserva corresponde al 1% del valor del fondo administrado (pensiones obligatorias o cesantías) y debe estar invertida en las mismas condiciones que el correspondiente fondo.

Así mismo, en relación con el porcentaje destinado las primas de los seguros de invalidez y sobrevivientes, se encuentra que dichos recursos son sufragados mensualmente, y destinados como lo ordena la norma a la aseguradora contratada, de esta forma el citado porcentaje como bien lo menciona en su oficio, permite a la aseguradora mantener la cobertura respecto del afiliado en relación con los riesgos asegurados (invalidez y muerte) durante la vigencia del seguro.

#### **b. Traslado de recursos entre regímenes del Sistema General de Pensiones SGP**

Vale la pena resaltar lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto 3995 de 2008 en el cual, respecto del traslado de recursos entre regímenes del SGP, se establece lo siguiente:

*“Artículo 7º. Traslado de recursos. El traslado de recursos pensionales entre regímenes, incluyendo los contemplados en este decreto, así como de la historia laboral en estos casos, deberá realizarse en los términos señalados a continuación y en el artículo siguiente:*

*Cuando se trate de una administradora del RAIS, deberá trasladar el saldo en unidades de los aportes efectuados a nombre del trabajador, destinados a la respectiva cuenta individual y al fondo de garantía de pensión mínima del RAIS, multiplicado por el valor de la unidad vigente para las operaciones del día en que se efectúe el traslado.*

*Para todos los efectos de traslado de cotizaciones se deberá incluir el porcentaje correspondiente al Fondo de Garantía de Pensión Mínima del RAIS.*

*Tratándose del Régimen de Prima Media con Prestación Definida, RPM, la devolución se efectuará por el valor equivalente a las cotizaciones para financiar la pensión de vejez, que se hubieren efectuado actualizadas con la rentabilidad acumulada durante el respectivo período de las reservas para pensión de vejez del ISS, o en su defecto la informada por la Superintendencia Financiera para los períodos respectivos.*

**Parágrafo.** *Con ocasión de la definición de la múltiple vinculación de sus afiliados y la determinación de las sumas a trasladar, las entidades administradoras del Sistema General de Pensiones quedan facultadas para compensar, total o parcialmente, los saldos respectivos”* (Subraya fuera de texto).

De esta manera, la normatividad existente permite inferir, que, en caso de resultar necesario un traslado de recursos del Régimen de Ahorro Individual al Régimen de Prima Media, lo procedente, además del traslado de la información correspondiente a la historia laboral del afiliado, es el traslado del valor de la cuenta de ahorro individual, sus rendimientos y lo correspondiente a la garantía de pensión mínima con sus rendimientos.

Conforme con lo expuesto, de decretarse la ineficacia del acto jurídico de cambio de régimen pensional y/o la nulidad de la afiliación alguno de los regímenes pensionales del SGP, lo que implica el traslado de recursos y de información de un régimen a otro, debe darse la aplicación de lo dispuesto en la norma atrás citada, respetando la destinación de los aportes pensionales realizados y la gestión de administración desarrollada por la administradora que genera los rendimientos que se trasladan a la administradora de destino.

En ese orden de ideas, frente a los interrogantes tenemos:

1. ***¿Al decretarse la nulidad de la afiliación o ineficacia del traslado y ordenar la devolución de recursos, se deben respetar las restituciones mutuas y reconocer los gastos de administración a la administradora de pensiones, tal como establece el artículo 1746 del Código Civil, y solo se debe girar el valor de la cuenta de ahorro individual, con sus rendimientos y lo correspondiente a la garantía de pensión mínima con sus rendimientos?***

Teniendo en cuenta los argumentos atrás planteados, y sin perjuicio de lo que se haya ordenado en algunos de los fallos judiciales correspondientes, este Despacho considera que, al decretarse la nulidad e ineficacia de la afiliación procede el traslado de los saldos de la cuenta de ahorro individual del afiliado, que incluye lo correspondiente a los rendimientos generados como consecuencia de la administración de los recursos efectuada por la administradora, así como los porcentajes destinados a la garantía de la pensión mínima y sus respectivos rendimientos.

2. ***¿Al decretarse la nulidad de la afiliación o ineficacia del traslado y ordenar la devolución de recursos, se deben respetar las restituciones mutuas y excluir las sumas que por concepto de prima de seguro previsional fueron sufragadas a favor del afiliado mientras estuvo vigente su afiliación, dado que la compañía aseguradora mantuvo la cobertura de los riesgos de invalidez y muerte de su asegurado durante la vigencia del seguro, y además por cuanto operó la figura de la prima devengada?***

En igual sentido, en atención a que el porcentaje de la prima del seguro previsional ya fue sufragado y la compañía aseguradora cumplió con su deber contractual de mantener la cobertura durante la vigencia de la póliza, este Despacho no considera viable el traslado de dichos recursos en el caso consultado; sin perjuicio de la vinculación que a este tipo de procesos se haga a las aseguradoras que han sido contratadas para dichos fines, para que puedan ejercer la defensa de sus intereses.

3. ***Conforme al marco normativo vigente, ¿sería válido el siguiente tratamiento legal que han de recibir los aportes recibidos, cuando por virtud de la declaratoria judicial de nulidad de la afiliación o ineficacia del traslado, el afiliado debe retornar al RPM?***

<b>Concepto</b>	<b>Devolución</b>
<i>Cuenta de Ahorro Individual (Aportes y Rendimientos)</i>	<i>Si</i>
<i>FGPM (aportes y rendimientos)</i>	<i>Si</i>
<i>Prima de Seguro Previsional</i>	<i>No</i>
<i>Comisión Administración</i>	<i>No</i>

Este Despacho estima válido el tratamiento legal que se plantea en este interrogante, lo anterior, sin perjuicio de las decisiones adoptadas por los tribunales e inclusive por la Corte Suprema de Justicia como órgano de cierre judicial, quienes cuentan las facultades legales para adoptar la posición que en derecho encuentren pertinente.

(...).»

Bogotá, D.C., tres (3) de agosto de dos mil veintidós (2022)

**Radicación interna: 2476**

**Número único:** 11001030600020220006200

**Referencia:** Giro de recursos del Fondo de Garantía de Pensión Mínima del Régimen de Ahorro individual con Solidaridad al Régimen de Prima Media con Prestación Definida, con ocasión del traslado de los afiliados

El Gobierno Nacional, por conducto del ministro del Trabajo, consulta al Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, sobre el «giro de los recursos del fondo de garantía de pensión mínima al régimen de prima media, con ocasión del traslado de los afiliados del régimen de ahorro individual».

## **I. ANTECEDENTES**

El ministro del Trabajo, en la solicitud de concepto elevada ante la Sala, expuso:

El numeral 2° del artículo 2.2.2.3.1 del Decreto Único Reglamentario 1833 de 2016, «[p]or medio del cual se compilan las normas del Sistema General de Pensiones», respecto del *traslado de régimen pensional*, dispone:

Artículo 2.2.2.3.1. Traslado de régimen pensional. Una vez efectuada la selección de cualquiera de los regímenes pensionales mediante el diligenciamiento del formulario, los afiliados no podrán trasladarse de régimen, antes de que hayan transcurrido cinco años contados desde la fecha de la selección anterior.

Para el traslado del régimen solidario de prima media al régimen de ahorro individual con solidaridad y de éste al de prima media se aplicará lo siguiente:

1. Si el traslado se produce del régimen de prima media con prestación definida al de ahorro individual con solidaridad, habrá lugar al reconocimiento de bonos pensionales.

2. Si el traslado se produce del régimen de ahorro individual con solidaridad al régimen de prima media con prestación definida se le acreditarán en éste último el número de semanas cotizadas en el primero y se transferirá el saldo de la cuenta individual, incluidos los rendimientos y el bono pensional cuando sea del caso.

Las cotizaciones voluntarias cuyo retiro no se haya efectuado al momento del traslado se devolverán al afiliado, previa solicitud efectuada seis (6) meses antes del traslado. [Se enfatiza].

A juicio del consultante, lo anterior significa que, desde la fecha de entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 hasta la de entrada en vigencia de la Ley 797 de 2003 (29 de enero de 2003), el traslado del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (en adelante RAIS) al Régimen de Prima Media (en adelante RPM) implicó: *i)* trasladar a «Colpensiones» el saldo que «exista» en la cuenta de ahorro individual del afiliado, por parte de la *administradora del fondo de pensiones*, y *ii)* que el ISS acreditara el número total de semanas cotizadas en el Régimen de Ahorro Individual que le hubieran sido reportadas por la *administradora de fondo de pensiones*.

La Ley 797 de 2003 creó el Fondo de Garantía de Pensión Mínima del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, el cual «se alimenta» de un porcentaje de los aportes que hacen los afiliados a las administradoras de dicho régimen, así:

Artículo 7°. El artículo 20 de la Ley 100 de 1993 quedará así:

Artículo 20. Monto de las cotizaciones. La tasa de cotización continuará en el 13.5% del ingreso base de cotización.

En el régimen de prima media con prestación definida el 10.5% del ingreso base de cotización se destinará a financiar la pensión de vejez y la constitución de reservas para tal efecto. El 3% restante sobre el ingreso base de cotización se destinará a financiar los gastos de administración y la pensión de invalidez y sobrevivientes.

En el régimen de ahorro individual con solidaridad el 10% del ingreso base de cotización se destinará a las cuentas individuales de ahorro pensional. Un 0.5% del ingreso base de cotización se destinará al Fondo de Garantía de Pensión Mínima del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad y el 3% restante se destinará a financiar los gastos de administración, la prima de reaseguros de Fogafín, y las primas de los seguros de invalidez y sobrevivientes.

Sin embargo, afirma el consultante, que el precitado artículo 7 (modificatorio del artículo 20 de la Ley 100 de 1993) *no fue reglamentado* oportunamente y, por tal razón, no se sabe cuáles son los recursos que debían «remitir» las administradoras de fondos de pensiones cuando los afiliados al Régimen de Ahorro Individual solicitaban su traslado al Régimen de Prima Media, durante el periodo comprendido entre el 29 de enero de 2003 y el 16 de octubre de 2008.

Agrega que, por la falta de reglamentación del artículo 7 de la Ley 797 de 2003, en aquellos casos en que el cotizante solicitó traslado de régimen pensional durante el periodo comprendido entre el 29 de enero de 2003 y el 16 de octubre de 2008 (fecha de expedición del Decreto 3995 de ese año), las administradoras de fondos privados de pensiones trasladaron a «Colpensiones» los saldos registrados en la cuenta de ahorro individual de los afiliados, sin incluir los aportes que estaban destinados al Fondo de Garantía de Pensión Mínima.

Como consecuencia de lo anterior, manifiesta el consultante, se han generado inconsistencias en las historias laborales de quienes se trasladaron del RAIS al RPM en el periodo señalado, toda vez que existe una diferencia entre las semanas acreditadas con los aportes efectuados al régimen privado y las que han debido acreditarse en el evento de haber cotizado al régimen público.

Por lo tanto, Colpensiones «acreditó en semanas solo el número que correspondía al valor trasladado y no el total de semanas totales cotizadas por el trabajador».

En todo caso, relata el ministerio del Trabajo, las administradoras del RAIS, pese a que destinaron al Fondo de Garantía de Pensión Mínima los porcentajes correspondientes de las cotizaciones de sus afiliados, al hacer los traslados del RPM en el periodo comprendido entre la fecha de promulgación de la Ley 797 de 2003 y la de expedición del Decreto 3995 de 2008, reportaron a Colpensiones la totalidad de las semanas por las cuales se hicieron aportes a pensión.

No obstante, el consultante cita que el artículo 7 del Decreto 3995 de 16 de octubre de 2008, compilado en el artículo 2.2.2.4.7 del Decreto Único Reglamentario 1833 de 2016, es la norma que precisa que los traslados del RAIS al RPM deben incluir los aportes efectuados al fondo de garantía de pensión mínima, a nombre del trabajador, pero no cobija a quienes se trasladaron previo a su expedición:

**Artículo 7°. Traslado de recursos. [...]**

[...]

Cuando se trate de una administradora del RAIS, deberá trasladar el saldo en unidades de los aportes efectuados a nombre del trabajador, destinados a la respectiva cuenta individual y al fondo de garantía de pensión mínima del RAIS, multiplicado por el valor de la unidad vigente para las operaciones del día en que se efectúe el traslado.

[...]

Por otro lado, en la consulta se hace mención del Acto Legislativo 01 de 2005, el cual establece «que para la liquidación de las pensiones reconocidas por el Sistema General de Pensiones solo se pueden tener en cuenta los factores sobre los cuales cada persona hubiese efectuado cotizaciones».

Por último, explica el ministro la finalidad por la cual acude a la Sala, así:

[...] solicitamos concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado con el fin de establecer la procedencia de la inclusión de los aportes realizados al Fondo de Garantía de Pensión Mínima al realizar el traslado de los recursos de la cuenta de ahorro individual del afiliado trasladado del RAIS al RPM, al igual que el número de semanas a acreditar con o sin el traslado de dichos aportes.

En atención a los argumentos, los hechos y las consideraciones expuestas, el ministro del Trabajo formula a la Sala las siguientes

### **PREGUNTAS:**

1. «¿Para las personas que se trasladaron entre el 29 de enero de 2003 (entrada en vigencia de la Ley 797) y el 16 de octubre de 2008 (entrada en vigencia del Decreto 3995) del RAIS al RPM, se debe dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 692 de 1994, en el sentido de indicar, si la Administradora del Régimen de Ahorro Individual debe trasladar a Colpensiones el saldo existente en la cuenta de ahorro individual del afiliado únicamente, sin incluir el porcentaje que del valor de los aportes realizados fue girado al Fondo de Garantía de Pensión Mínima (FGPM), a pesar de, como quedó dicho anteriormente, que el registro muestra una notoria diferencia en el número de semanas acreditadas en el RPM frente a las reportadas en el RAIS?».
2. «¿Para las personas que se trasladaron entre el 29 de enero de 2003 (entrada en vigencia de la Ley 797) y el 16 de octubre de 2008 (entrada en vigencia del Decreto 3995) del RAIS al RPM, se debe dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 692 de 1994, en el sentido de indicar, si la Administradora del Régimen de Ahorro Individual debe trasladar a Colpensiones el saldo existente en la cuenta de ahorro individual del afiliado, sin incluir los aportes realizados con destino al Fondo de Garantía de Pensión Mínima (FGPM), y que en el Régimen de Prima Media RPM se acredite el número total de semanas cotizadas en el RAIS, sin que se perciba una diferencia entre los dos registros y sin que sea necesario solicitar el giro del porcentaje correspondiente al aporte remitido al FGPM?».
3. «En virtud de lo establecido en el Acto Legislativo 01 de 2005, ¿Para las personas que se trasladaron entre el 29 de enero de 2003 (entrada en vigencia de la Ley 797) y el 16 de octubre de 2008 (entrada en vigencia del

Decreto 3995) del RAIS al RPM, las Administradoras del Régimen de Ahorro Individual deben remitir a Colpensiones la totalidad de los recursos pagados por el afiliado incluidos los acreditados en el Fondo de Garantía de Pensión Mínima, y por consiguiente Colpensiones debe acreditar la totalidad de semanas registradas en el RAIS por el mismo periodo cotizado sin que se presente diferencia alguna?

## **II. CONSIDERACIONES**

### **1. Problema jurídico de la consulta**

De acuerdo con lo expuesto por el ministro del Trabajo, el problema jurídico de la consulta es:

¿El traslado del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad al Régimen de Prima Media con Prestación Definida, en el lapso comprendido entre el 29 de enero de 2003 (entrada en vigencia de la Ley 797) y el 16 de octubre de 2008 (entrada en vigencia del Decreto 3995), implica el traslado de todos los aportes efectuados a nombre del cotizante, incluyendo aquellos destinados al Fondo de Garantía de Pensión Mínima?

Como cuestión derivada de lo anterior, debe establecerse si ¿al generarse el traslado de régimen pensional, en los términos señalados en el párrafo precedente, deben acreditarse en el RPM el número total de semanas cotizadas en el RAIS, sin que se perciba una diferencia entre los dos registros? O si, como consecuencia de la diferencia que exista en el monto trasladado, ¿es posible registrar en el RPM un número menor de semanas cotizadas?

Para solucionar tales problemas jurídicos, la Sala abordará el estudio de los siguientes temas: *i)* el Sistema de Seguridad Social Integral en materia pensional; *ii)* los regímenes pensionales de la Ley 100 de 1993 -principales características y diferencias-; *iii)* la forma como se reparten los aportes en ambos regímenes pensionales; *iv)* el Fondo de Garantía de Pensión Mínima; *v)* el traslado de régimen pensional y los inconvenientes generados por la Ley 797 de 2003; *vi)* la tesis de la Corte Suprema de Justicia cuando se declara la nulidad del traslado del Régimen de Prima Media con Prestación Definida al de ahorro individual con solidaridad; *vii)* la naturaleza de los recursos destinados a pagar las pensiones; y *viii)* el principio de favorabilidad como criterio de interpretación en el análisis de casos que involucren la protección del derecho a la seguridad social.

Con base en lo anterior, la Sala procederá al análisis y solución de los problemas jurídicos expuestos.



### 1.1. El Sistema de Seguridad Social Integral en materia pensional

El artículo 48 de la Constitución Política regula a la Seguridad Social como un instituto jurídico de doble naturaleza o condición: derecho fundamental irrenunciable y servicio público de carácter obligatorio, que puede ser prestado, bajo la dirección, coordinación y control del Estado, por entidades públicas o privadas, con sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad.

En desarrollo del mandato constitucional contenido en el artículo 48 constitucional, la Ley 100 de 1993 organizó *el sistema de seguridad social integral* y lo definió como el conjunto armónico de entidades públicas y privadas, así como de normas y procedimientos que tienen por objeto «garantizar los derechos irrenunciables de la persona y la comunidad para obtener la calidad de vida acorde con la dignidad humana, mediante la protección de las contingencias que la afecten», cuya dirección, coordinación y control está a cargo del Estado.

La Corte Constitucional señala que el concepto de *seguridad social* hace referencia a la totalidad de las medidas que propenden por el bienestar general de la población en relación con la protección y cobertura de unas necesidades socialmente reconocidas. Para esa Corporación, el carácter fundamental de esta institución «encuentra sustento en el principio de dignidad humana y en la satisfacción real de los derechos humanos, pues, a través de este, resulta posible que las personas afronten con dignidad [...] las circunstancias difíciles que les obstaculizan o impiden el normal desarrollo de sus actividades laborales y la consecuente recepción de los recursos que les permitan ejercer sus derechos subjetivos».

Recién expedida la Ley 100 de 1993, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado se pronunció sobre el concepto de seguridad social integral, así:

La Seguridad Social Integral es el conjunto de instituciones, normas y procedimientos, de que dispone la persona y la comunidad para gozar de una calidad de vida, mediante el cumplimiento progresivo de los planes y programas que el Estado y la sociedad desarrollen para proporcionar la cobertura integral de las contingencias, especialmente las que menoscaban la salud y la capacidad económica, de los habitantes del territorio nacional, con el fin de lograr el bienestar individual y la integración de la comunidad.

El sistema de seguridad social integral comprende las obligaciones del Estado y la sociedad, las instituciones y los recursos destinados a garantizar la cobertura de las prestaciones de carácter económico, de salud y servicios complementarios, materia de esta ley, u otras que se incorporen

normativamente en el futuro (artículo 1º inciso 2º Ley 100 de 1993).

Ahora bien, el artículo 8 de la Ley 100 de 1993 señala que el sistema social de seguridad social integral está conformado, principalmente, por los regímenes generales establecidos para pensiones, salud y riesgos laborales.

Respecto del *sistema general de pensiones*, tema que ocupa la atención de la Sala, el artículo 10 de la Ley 100 de 1993 lo define como aquel que tiene por objeto «garantizar a la población, el amparo contra las contingencias derivadas de la vejez, la invalidez y la muerte, mediante el reconocimiento de las pensiones y prestaciones que se determinan en la presente ley, así como propender por la ampliación progresiva de cobertura a los segmentos de población no cubiertos con un sistema de pensiones».

## **1.2. Los regímenes pensionales de la Ley 100 de 1993 -principales características y diferencias-**

La Ley 100 de 1993 instituyó dos regímenes pensionales, que son excluyentes, pero que coexisten, los cuales se denominan: Régimen Solidario de Prima Media con Prestación Definida (RPM) y Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS).

En términos generales, el RPM se caracteriza por ser aquel mediante el cual los afiliados o sus beneficiarios obtienen una pensión o una indemnización, previamente definidas, independientemente del monto de las cotizaciones acumuladas, siempre que se cumpla con los requisitos legales. El RAIS está basado en el ahorro proveniente de las cotizaciones y sus respectivos rendimientos financieros, así como en la solidaridad, a través de las garantías de pensión mínima y aportes al fondo de solidaridad.

Para la Corte Constitucional, la coexistencia de los dos regímenes pensionales responde al interés del Legislador en establecer un sistema dual, conformado por subsistemas que operen cada uno en forma autónoma, independiente y, además excluyente; en el que se permita la competencia entre el sector público y privado, en pro de la materialización del derecho fundamental comprometido, y de la eficacia y la eficiencia de los servicios asociados a la seguridad social en materia pensional.

Las características comunes a estos los dos regímenes del Sistema General de Seguridad Social en Pensiones, según el artículo 13 de la Ley 100 de 1993, son:

i) Obligatoriedad de la afiliación y de efectuar los aportes correspondientes;

ii) Libertad del afiliado para seleccionar el régimen pensional al cual quiere vincularse y la posibilidad de traslado por una sola vez cada tres años, contados a partir de la selección inicial o del cambio;

iii) Igualdad de trato para trabajadores dependientes e independientes, y

iv) Derecho al reconocimiento y pago de pensiones de invalidez, vejez y sobrevivientes, y las demás prestaciones establecidas, una cumplidos los requisitos previstos en la ley.

Por su parte, las principales características de cada régimen son:

#### 1.2.1. El Régimen de Prima Media con Prestación Definida (RPM)

El régimen solidario de prima media con prestación definida es aquel «mediante el cual los afiliados o sus beneficiarios obtienen una pensión de vejez, de invalidez o de sobrevivientes, o una indemnización, previamente definidas».

En este régimen, los aportes de los trabajadores y empleadores constituyen un fondo común, del cual se extraen los recursos necesarios para cubrir la pensión de todos los afiliados, prestación a la cual se accede siempre y cuando el afiliado cumpla con unos requisitos preestablecidos, los cuales están expresados en edad y tiempo o semanas cotizadas. Su administración corresponde, hoy en día, a Colpensiones y, excepcionalmente, a las cajas, fondos o entidades de seguridad social preexistentes a la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993, que subsistan (artículo 52 *ibidem*).

La doctrina ha identificado las características principales del RPM, así:

a) Las cotizaciones se asemejan a un seguro que garantiza la pensión.

b) Como sistema de aseguramiento, el régimen solo garantiza la pensión si se cumplen los requisitos legales. Ello implica la presencia simultánea de las condiciones de cotización y de edad del afiliado.

c) De no acreditarse los requisitos legales para obtener la pensión, el sistema no devuelve primas o cotizaciones. Quien no cumpla dichos requisitos tendrá derecho a una indemnización sustitutiva.

d) El derecho a la pensión no depende de la cantidad de dinero depositada en el fondo ni de sus rendimientos, sino del cumplimiento de los requisitos de

edad y tiempo de servicios o número de semanas cotizadas.

### 1.2.2. El Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS)

Respecto del RAIS, el artículo 59 de la Ley 100 de 1993 prescribe:

Artículo 59. Concepto. El Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad es el conjunto de entidades, normas y procedimientos, mediante los cuales se administran los recursos privados y públicos destinados a pagar las pensiones y prestaciones que deban reconocerse a sus afiliados, de acuerdo con lo previsto en este Título.

Este régimen está basado en el ahorro proveniente de las cotizaciones y sus respectivos rendimientos financieros, la solidaridad a través de garantías de pensión mínima y aportes al Fondo de Solidaridad, y propende por la competencia entre las diferentes entidades administradoras del sector privado, sector público y sector social solidario, que libremente escojan los afiliados [...]. [Destaca la Sala].

La doctrina define al RAIS como un sistema de capitalización individual administrado por particulares, que se caracteriza, como todo esquema de capitalización, por unas condiciones que dependen de: *i)* la acumulación de los aportes o cotizaciones que realice el afiliado y el empleador, los cuales se administran en una cuenta individual para cada persona; *ii)* el capital ahorrado, y *iii)* la rentabilidad que produzca dicho capital.

El RAIS se caracteriza, principalmente, por lo siguiente:

- a) Los aportes o cotizaciones no se destinan a un fondo común, sino que se depositan en una cuenta pensional de ahorro individual. La sumatoria de dichos recursos conforman los fondos de pensiones que manejan las entidades administradoras, pero son independientes de su propio patrimonio. Con el saldo de los aportes depositados en la cuenta y sus rendimientos financieros, se financia cada pensión.
- b) Como sistema de capitalización, el derecho a obtener la pensión no depende del tiempo de cotizaciones ni de la edad del afiliado, sino de la cantidad de dinero acumulada en la cuenta de ahorro individual.
- c) En caso de no obtenerse la pensión, por insuficiencia del capital acumulado, el sistema prevé mecanismos para la devolución de saldos, pues el único titular del capital es el afiliado.
- d) Una parte de los aportes mencionados en el literal anterior se capitaliza en la cuenta individual de ahorro pensional de cada afiliado. Otra parte se destina al

pago de las primas de seguros para atender las pensiones de invalidez y de sobrevivientes, a la asesoría para la contratación de una renta vitalicia, financiar el Fondo de Solidaridad Pensional y a cubrir el costo de administración del régimen.

Visto lo anterior, es claro que entre el RPM y RAIS existen notorias diferencias, respecto de lo cual la Corte Constitucional se ha expresado así:

El primero de ellos [RPM], hace referencia al sistema de financiación de pensiones administrado por [Colpensiones], en el que los aportes de cada afiliado integran un fondo común con el cual se financian todas las pensiones. En este régimen el derecho a la pensión se obtiene únicamente cuando el afiliado cumple los requisitos de edad y tiempo de cotizaciones previsto en la ley. El segundo [RAIS], a diferente [sic] del anterior, corresponde a un sistema en el que las pensiones se financian a través de una cuenta de ahorro individual, administrada por la AFP a la cual se encuentre afiliado el usuario, y el derecho a dicha prestación se obtiene con base en el capital depositado en la respectiva cuenta, sin que para ello sea exigible el requisito de edad o determinado número de semanas de cotización. Cabe destacar que, hecha la selección inicial a cualquiera de estos regímenes, los afiliados tienen la posibilidad de trasladarse de uno a otro, en los términos del literal e) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 2° de la Ley 797 de 2003.

De lo anterior, se entiende que la intención del Legislador con la expedición de la Ley 100 de 1993, en el tema relativo a las pensiones, fue establecer dos regímenes de características singulares y diferentes, para ofrecerle al afiliado la posibilidad de escoger libremente el subsistema que más se ajuste a sus necesidades [RAIS o RPM], lo cual, como lo señala la Corte Constitucional, es coherente con los principios de igualdad y solidaridad que consagran los artículos 13 y 48 del texto superior.

En suma, el RPM y el RAIS fueron instituidos con unos rasgos específicos y unas características singulares, de modo tal que el afiliado pueda distinguirlos con facilidad y optar de manera libre e informada por vincularse a uno o a otro, según estime conveniente.

### **1.3. La forma como se reparten los aportes en ambos regímenes pensionales**

El originario artículo 20 de la Ley 100 de 1993, respecto de la tasa de cotización para la pensión de vejez, estipulaba:

Artículo 20. La tasa de cotización para la pensión de vejez, será del 8% en 1994, 9% en 1995 y del 10% a partir de 1996, calculado sobre el ingreso base

y se abonarán en las cuentas de ahorro pensional en el caso de los fondos de pensiones. En el caso del ISS, dichos porcentajes se utilizarán para el pago de pensiones de vejez y capitalización de reservas, mediante la constitución de un patrimonio autónomo destinado exclusivamente a dichos efectos.

Para pagar la pensión de invalidez, la pensión de sobrevivientes y los gastos de administración del sistema, incluida la prima del reaseguro con el fondo de garantías, la tasa será, tanto en el ISS como en los fondos de pensiones, del 3.5%.

Sin embargo, en la medida en que los costos de administración y las primas de los seguros se disminuyan, dichas reducciones deberán abonarse como un mayor valor en las cuentas de ahorro de los trabajadores o de las reservas en el ISS, según el caso.

La cotización total será el equivalente a la suma del porcentaje de cotización para pensión de vejez y la tasa de que trata el inciso anterior.

Los empleadores pagarán el 75% de la cotización total y los trabajadores, el 25% restante [...].

Obsérvese que la tasa de cotización pensional era igual para ambos regímenes, a pesar de la regla de aumento progresivo. También señala la disposición citada que, tanto en el ISS como en los fondos de pensiones, el 3,5% de dicha tasa debía destinarse para pagar la pensión de invalidez, la pensión de sobrevivientes y los gastos de administración del sistema, incluida la prima del reaseguro con el fondo de garantías.

Posteriormente, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 692 de 1994, por el cual reglamentó parcialmente la Ley 100 de 1993, cuyo artículo 21 establece un criterio de aumento progresivo del monto de las cotizaciones pensionales, las cuales, a partir del 1° de enero de 1996, debían ser del 13.5% del ingreso base de cotización del afiliado, porcentaje que aplicaba, sin distinción alguna, al RPM y al RAIS:

Artículo 21. Monto de las cotizaciones. El monto de las cotizaciones causadas hasta el 31 de marzo de 1994, se continuará rigiendo por las disposiciones vigentes con anterioridad a la expedición de la Ley 100 de 1993.

A partir del 1° de abril de 1994, la tasa de cotización para el sistema general de pensiones, tanto para el régimen solidario de prima media con prestación definida, como para el régimen de ahorro individual con solidaridad, será del 11.5%, calculado sobre el ingreso base de cotización.

A partir del 1° de enero de 1995, la cotización a que se refiere el inciso anterior, será del 12,5% y a partir del 1° de enero de 1996 será del 13,5%. [Se destaca].

Según el precitado artículo 21, desde el 1° de enero de 1996 la tasa de cotización pensional en los dos regímenes pensionales era del 13,5%, y su distribución no tenía diferencia alguna, toda vez que el porcentaje para pagar la pensión de invalidez, la pensión de sobrevivientes y los gastos de administración del sistema, incluida la prima del reaseguro con el fondo de garantías, tanto en el Instituto de Seguros Sociales como en los fondos de pensiones era de 3.5%, y el porcentaje restante se destinaba para el pago de la pensión de vejez, esto es, el 10%.

Ahora bien, el Legislador, consciente de las diferencias existentes entre los dos regímenes pensionales instituidos por la Ley 100 de 1993, y con el propósito de «lograr un Estado Comunitario que dedique sus recursos a erradicar la pobreza, a construir equidad y confianza, ampliar y mejorar la seguridad social y la justicia social», expidió la Ley 797 de 2003, mediante la cual, para efectos de lo que estudia la Sala en el presente asunto, aumentó la tasa de cotización de los aportes a pensión. En este sentido, estableció una regla progresiva, según la cual el porcentaje del 13,5% que señalaba el Decreto 692 de 1996 debía incrementarse año tras año, hasta llegar al 16%, en el 2006, y modificó los criterios de distribución del monto de las cotizaciones pensionales del RAIS, como a continuación se observa:

Artículo 7°. El artículo 20 de la Ley 100 de 1993 quedará así:

Artículo 20. Monto de las cotizaciones. La tasa de cotización continuará en el 13.5% del ingreso base de cotización.

En el Régimen de Prima Media con Prestación Definida el 10.5% del ingreso base de cotización se destinará a financiar la pensión de vejez y la constitución de reservas para tal efecto. El 3% restante sobre el ingreso base de cotización se destinará a financiar los gastos de administración y la pensión de invalidez y sobrevivientes.

En el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad el 10% del ingreso base de cotización se destinará a las cuentas individuales de ahorro pensional. Un 0.5% del ingreso base de cotización se destinará al Fondo de Garantía de Pensión Mínima del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad y el 3% restante se destinará a financiar los gastos de administración, la prima de reaseguros de Fogafín, y las primas de los seguros de invalidez y sobrevivientes.

A partir del 1o. de enero del año 2004 la cotización se incrementará en un uno por ciento (1%) sobre el ingreso base de cotización. Adicionalmente, a partir del 1o. de enero del año 2005 la cotización se incrementará en medio por ciento (0.5%) y otro medio punto (0.5%) en el año 2006. A partir del 1o. de enero del año 2008, el Gobierno Nacional podrá incrementar en un (1%) punto adicional la cotización por una sola vez, siempre y cuando el crecimiento del producto interno bruto sea igual o superior al 4% en promedio durante los dos (2) años anteriores.

El incremento de la cotización se destinará en el régimen de prima media al pago de pensiones y a la capitalización de reservas pensionales.

En el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad el incremento que se realice en el año 2004 se destinará al Fondo de Garantía de Pensión Mínima del régimen de ahorro individual. Los incrementos que se realicen a partir del 2005 se destinarán a las cuentas individuales de ahorro pensional. Quinquenalmente y con base en los estudios financieros y actuariales que se realicen para tal fin, el gobierno redistribuirá los incrementos de cotización previstos en este artículo entre el Fondo de Garantía de la Pensión Mínima del Régimen de Ahorro Individual y las cuentas de ahorro pensional [...]. [Se destaca].

Como la Ley 797 de 2003 estableció un aumento progresivo del monto de la tasa de cotización pensional, con límite en el 16%, se observa que las reglas de distribución de este monto, que fueron objeto de modificaciones, deben analizarse dependiendo del momento de causación, pues el panorama cambia si se trata de los años 2003, 2004, 2005, 2006, y del 2008, en adelante, así:

a) Año 2003

La tasa de cotización era del 13,5%, la cual se repartía así: en el RPM, el 10,5% se destinaba a financiar la pensión de vejez y la constitución de reservas para tal efecto, y el 3% restante, a financiar los gastos de administración y la pensión de invalidez y sobrevivientes. En el RAIS, el 10% alimentaba las cuentas individuales de ahorro pensional; el 3% cubría gastos de administración, la prima de reaseguros de Fogafín y las primas de los seguros de invalidez y sobrevivientes, y el 0,5% restante se destinaba al Fondo de Garantía de Pensión Mínima.

b) Año 2004

La tasa de cotización fue del 14,5%, la cual se repartía así: en el RPM, el 11,5% se destinan a financiar la pensión de vejez y la constitución de reservas para tal efecto, y el 3% restante, a financiar los gastos de administración y la pensión de invalidez y sobrevivientes. En el RAIS, el 10% alimentaba las cuentas individuales de ahorro pensional; el 3% cubría los gastos de administración, la prima de reaseguros de Fogafín y las primas de los seguros de invalidez y sobrevivientes, y el 1,5% restante se destinaba al Fondo de Garantía de Pensión Mínima.

c) Año 2005

En este año, la tasa de cotización fue del 15%, la cual se repartía así: en el



RPM, el 12% se destina a financiar la pensión de vejez y la constitución de reservas para tal efecto, y el 3% restante a financiar los gastos de administración y la pensión de invalidez y sobrevivientes. En el RAIS, el 10,5% alimentaba las cuentas individuales de ahorro pensional; el 3% cubría los gastos de administración, la prima de reaseguros de Fogafín y las primas de los seguros de invalidez y sobrevivientes, y el 1,5% restante se destina al Fondo de Garantía de Pensión Mínima.

d) Año 2006

La tasa de cotización era del 15,5%, y se repartía así: en el RPM, el 12,5% se destina a financiar la pensión de vejez y la constitución de reservas para tal efecto, y el 3% restante, a financiar los gastos de administración y la pensión de invalidez y sobrevivientes. En el RAIS, el 11% alimentaba las cuentas individuales de ahorro pensional; el 3% cubría gastos de administración, la prima de reaseguros de Fogafín y las primas de los seguros de invalidez y sobrevivientes, y el 1,5% restante se destina al Fondo de Garantía de Pensión Mínima.

e) Desde al 2008 en adelante

La tasa de cotización es del 16%, la cual se reparte así: en RPM, el 13% se destina a financiar la pensión de vejez y la constitución de reservas para tal efecto, y el 3% restante, a financiar los gastos de administración y la pensión de invalidez y sobrevivientes. En el RAIS, el 11,5% alimenta las cuentas individuales de ahorro pensional; el 3% cubre gastos de administración, la prima de reaseguros de Fogafín y las primas de los seguros de invalidez y sobrevivientes, y el 1,5% restante se destina al Fondo de Garantía de Pensión Mínima.

Es claro para la Sala que desde el año 2003 hay una diferencia en la forma de distribución de la tasa de cotización pensional entre ambos regímenes, toda vez que dicho porcentaje, como se vio, en el caso del RPM se suma a la financiación de la pensión de vejez y la constitución de reservas para tal efecto, mientras que en el RAIS se destina al Fondo de Garantía de Pensión Mínima. Esta diferencia se aumentó, al 1,5%, a partir del año 2004, y se mantiene, en la actualidad.

La diferencia del 1,5% advertida significa que tiende a ser mayor el porcentaje destinado para la financiación de la pensión de vejez en el régimen de prima media que en el de ahorro individual, lo cual, como lo señala el consultante, ha generado inconvenientes cuando se producen cambios del régimen privado al público, aspecto sobre el cual se ahondará más adelante.

Sobre el punto, la Corte Constitucional, en la Sentencia T-670 de 2012, indicó:

Posteriormente, se expidió la Ley 797 de 2003, la cual, en su artículo 7º, modificó la disposición anterior, cambiando la distribución del aporte en el régimen de ahorro individual. Por consiguiente, en aplicación a la nueva legislación, el 1.5% de la cotización del régimen de prima media con prestación definida se debía destinar a la financiación de la pensión de vejez del afiliado, mientras que en el régimen de ahorro individual ese porcentaje se debía abonar al fondo de garantía de pensión mínima. Por ende, el porcentaje designado para la pensión de vejez en el régimen de prima media siempre sería mayor al porcentaje destinado para este efecto en el régimen de ahorro individual. [Énfasis propio].

#### **1.4. El Fondo de Garantía de Pensión Mínima del RAIS**

De conformidad con lo establecido en el artículo 65 de la Ley 100 de 1993, aquellas personas afiliadas al RAIS que no hayan acumulado suficiente capital para financiarse, al menos, una pensión equivalente a un salario mínimo y hubiesen cotizado como mínimo 1.150 semanas, tendrán derecho a una pensión mínima en desarrollo del principio de solidaridad:

Artículo 65. Garantía de pensión mínima de vejez. Los afiliados que a los sesenta y dos (62) años de edad si son hombres y cincuenta y siete (57) si son mujeres, no hayan alcanzado a generar la pensión mínima de que trata el artículo 35 de la presente Ley, y hubiesen cotizado por lo menos mil ciento cincuenta semanas (1.150), tendrán derecho a que el Gobierno Nacional, en desarrollo del principio de solidaridad, les complete la parte que haga falta para obtener dicha pensión.

Para garantizar la pensión mínima, el artículo 14 de la Ley 797 de 2003 (modificatorio del artículo 65 de la Ley 100 de 1993) ordenó la creación del Fondo de Garantía de Pensión Mínima, el cual se alimenta actualmente del 1.5% que del ingreso base de cotización.

Es importante precisar que la Corte Constitucional, en Sentencia C-797 de 2004, declaró inexecutable el artículo 14 de la Ley 797 de 2003 por «haberse demostrado la existencia de un vicio insubsanable en el proceso de formación del texto normativo acusado consistente en la violación del límite material de competencia de la comisión accidental de conciliación»:

Nótese, entonces, como el querer de las Plenarias era: i) crear el Fondo de Garantía de Pensión Mínima del Régimen de Ahorro individual con Solidaridad, ii) que los beneficiarios de la norma fueran los afiliados que no hayan

completado los aportes para pensionarse con un salario mínimo y que cumplieran los requisitos tanto de edad (hombres 62 y mujeres 57) como de semanas cotizadas (1.150), iii) que a partir del año 2009 el requisito referente a las semanas de cotización variara incrementándose en veinticinco (25) semanas cada año hasta alcanzar 1.325 semanas de cotización en el 2015, y, iv) que a partir del año 2018 el requisito referente a la edad variara aumentando a 62 años en las mujeres y a 65 en los hombres.

Estos cuatro elementos, como se ha demostrado fueron aprobados por ambas Cámaras, lo cual implica que sobre los mismos no podía afirmarse que existían discrepancias que otorgaran a la comisión accidental de conciliación (Art. 161 C.P.) competencia para modificar el inciso tercero de la norma acusada, eliminando el cuarto aspecto antes reseñado, es decir, la modificación de edad a partir del año 2018.

En estas condiciones la comisión accidental integrada por Senadores y Representantes a la Cámara desbordó el límite constitucional que le fue impuesto por la Carta Política, puesto que a pesar de no existir discrepancia respecto del inciso tercero del artículo 14 aprobado por las plenarias, ésta excediendo su competencia suprimió parte de ese texto normativo, no estando habilitada para ello, afectando con dicha determinación la norma en su integridad, puesto que fue todo el artículo demandado el que fue objeto de análisis por dicha comisión.

Si bien podría afirmarse que el vicio al que se ha aludido fue subsanado al haberse aprobado con posterioridad el informe de conciliación en las condiciones anotadas por las plenarias de cada cámara y que por lo tanto, el defecto detectado no permite declarar la inexequibilidad de la disposición normativa objeto de control, la Sala precisa que dicha interpretación transgrede los principios que informan el proceso de formación de la ley e impide siquiera aplicando, en el presente caso, el principio de instrumentalidad de las formas llegar a esa conclusión.

Lo anterior, por cuanto del artículo 161 y de las demás normas que reglan el trámite legislativo contenidas en la Carta Política y en la Ley Orgánica 5ª de 1992 no se desprende, conforme a las consideraciones precedentes, que la decisión final sobre el informe de conciliación que deben adoptar las plenarias permita convalidar la extralimitación de la competencia material asignada a las comisiones accidentales, que se reitera, sólo pueden actuar sobre los textos de los proyectos de ley respecto de los cuales existan discrepancias, lo cual no acaeció en el presente caso.

De esta manera, al haberse demostrado la existencia de un vicio insubsanable en el proceso de formación del texto normativo acusado consistente en la violación del límite material de competencia de la comisión accidental de conciliación, se declarará su inexequibilidad.

Sin embargo, pese a que la Corte Constitucional declaró la inexequibilidad del artículo 14 de la Ley 797 de 2003 por asuntos formales, lo cierto es que dicha

decisión no compromete la existencia del Fondo de Garantía de Pensión Mínima, toda vez que su existencia quedó prevista en los artículos 7 de esta misma ley, y 46 y 57 de la Ley 1328 de 2009, normas que, en lo pertinente, no han sido objeto de cuestionamiento alguno ni control por parte de la Corte y, por lo tanto, existe sustento normativo vigente que mantienen su existencia en el ordenamiento jurídico.

Mediante el Decreto 510 de 2003, el Gobierno Nacional reglamentó parcialmente los artículos 3, 5, 7, 8, 9, 10 y 14 de la Ley 797 de 2003. En relación con el Fondo de Garantía de Pensión Mínima, el artículo 8 del referido decreto establece:

Artículo 8°. Las entidades administradoras del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad recaudarán, conjuntamente con las cotizaciones, la parte de las mismas destinada al Fondo de Garantía de Pensión Mínima del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad y la mantendrán en una cuenta separada representada en unidades del respectivo fondo de pensiones, hasta la fecha en que estos recursos deban trasladarse con sus rendimientos a dicho Fondo de Garantía de acuerdo con la reglamentación que expida para el efecto del Gobierno Nacional.

Obsérvese que se trata de una reglamentación de los recursos con los cuales se financia la garantía de pensión mínima, pero no, en estricto sentido, de la organización y administración del Fondo de Garantía de Pensión Mínima.

Como lo señala la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia y la doctrina, no existe norma que reglamente de forma expresa y concreta el funcionamiento del Fondo de Garantía de Pensión Mínima, de tal manera que, desde enero de 2003 hasta la fecha, los recursos correspondientes son recaudados y administrados por los fondos privados, quienes los mantienen en una cuenta destinada para los fines pertinentes, hasta que la Oficina de Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito autorice que se utilicen para los pagos a los cuales fueron destinados por el Legislador, tal como lo ordena el artículo 4 del Decreto 832 de 1996.

Así, lo cierto es que el Fondo de Garantía de Pensión Mínima fue concebido con el propósito de completar los recursos necesarios para financiar las pensiones de aquellas personas que no cuenten con el capital suficiente para acceder a una pensión de un salario mínimo, y se alimenta con el porcentaje del 1,5% de las cotizaciones pensionales, pero su administración y organización carece de reglamentación concreta. Por lo tanto, son los fondos privados de pensiones quienes se encargan de ello, para lo cual deben mantener los recursos destinados a este en cuentas separadas de los demás rubros que conforman los ahorros pensionales.

Por último, es importante advertir que el recaudo de los recursos destinados al Fondo de Garantía de Pensión Mínima, asunto al que se refiere el precitado Decreto 510 de 2003, así como su administración y gestión, respecto de lo cual -se itera- no existe reglamentación específica, son cuestiones distintas al giro de los recursos que deben efectuar las administradoras de los fondos privados de pensiones, cuando un afiliado decide cambiarse del RAIS al RPM, especialmente si dicho traslado ocurrió en el periodo comprendido entre el 29 de enero de 2003 y el 16 de octubre de 2008, de lo cual se encargará la Sala en otro acápite.

### **1.5. El traslado de régimen pensional y los inconvenientes generados por la Ley 797 de 2003**

Una de las características principales del sistema de seguridad social en pensiones es la libertad de selección por parte del afiliado de uno de los dos regímenes pensionales que contempla la Ley 100 de 1993, así como la posibilidad de trasladarse de un régimen a otro, lo cual, en todo caso, se sujeta al cumplimiento de ciertas condiciones.

La libertad de selección por parte del afiliado de uno de los dos regímenes pensionales ha sido reconocida por la Corte Constitucional como un derecho de rango legal, conexo al derecho constitucional a la seguridad social, que se vulnera cuando se impone o exige la afiliación obligatoria a una entidad prestadora de la seguridad social, como son las administradoras de fondos de pensiones.

El artículo 113 de la Ley 100 de 1993 establece las reglas que deben observarse en caso de traslado del régimen privado al público y viceversa. Concretamente, si el traslado es del RPM al RAIS, habrá lugar al reconocimiento de bonos pensionales, los cuales serán depositados en la cuenta individual del afiliado; mientras que, si es del RAIS al RPM, se transferirá a este último el saldo de la cuenta individual, incluidos los rendimientos, y el bono pensional, cuando sea el caso, y se acreditarán las semanas cotizadas en el RAIS, de acuerdo con el salario base de cotización.

Mediante el Decreto 692 de 1994, el Gobierno Nacional reglamentó algunas de las disposiciones contenidas en la Ley 100 de 1993. Específicamente, en materia de traslados de régimen pensional, el decreto reiteró que los afiliados solo podían trasladarse de uno a otro cada tres años, y estableció, casi en los mismos términos que la ley, el procedimiento a seguir en caso de traslado, así:

Artículo 15. Traslado de régimen pensional. Una vez efectuada la selección de

uno cualquiera de los regímenes pensionales, mediante el diligenciamiento del formulario, los afiliados no podrán trasladarse de régimen, antes de que hayan transcurrido tres años contados desde la fecha de la selección anterior.

Para el traslado del régimen solidario de prima media al régimen de ahorro individual con solidaridad y de éste al de prima media, se aplicará lo siguiente:

a) Si el traslado se produce del régimen de prima media con prestación definida al de ahorro individual con solidaridad, habrá lugar al reconocimiento de bonos pensionales. La expedición de los bonos se regirá por lo dispuesto en el artículo 18 del presente Decreto y la reglamentación que al efecto se expida en uso de las facultades extraordinarias de que trata el numeral 5 del artículo 139 de la Ley 100 de 1993;

b) Si el traslado se produce del régimen de ahorro individual con solidaridad al régimen de prima media con prestación definida, se le acreditarán en éste último el número de semanas cotizadas en el primero y se transferirá el saldo de la cuenta individual, incluidos los rendimientos y el bono pensional cuando sea del caso. Las cotizaciones voluntarias cuyo retiro no se haya efectuado al momento del traslado, se devolverán al afiliado, previa solicitud efectuada seis (6) meses antes del traslado.

Un aspecto adicional por resaltar del Decreto 692 de 1994, tiene que ver con el tratamiento que debe darse a los aportes voluntarios realizados por el afiliado al RAIS, en el sentido de que no deben ser trasladados al RPM, sino que deben ser devueltos al cotizante.

Los aportes voluntarios en materia de pensión, según lo previsto por el artículo 17 de la Ley 100 de 1993, solo tienen cabida en el RAIS, y son aquellos que superan el porcentaje que obligatoriamente debe ser cotizado al sistema pensional por los afiliados y los empleados, según el caso. Fueron concebidos con la finalidad de incrementar los saldos de las cuentas individuales de ahorro pensional para optar por una pensión mayor o un retiro anticipado.

Así las cosas, para la Sala, es claro que, en vigencia del texto originario de la Ley 100 de 1993 y del Decreto 692 de 1994, las reglas aplicables a los traslados suponen, si es del RPM al RAIS, la conversión de las semanas cotizadas en dinero, lo cual se hace a través de la emisión de bonos pensionales; y si es del RAIS al RPM, el traslado del dinero ahorrado a la administradora del fondo público, lo que incluye el saldo de la cuenta individual, los rendimientos y el bono pensional, cuando sea del caso, y el registro de las semanas cotizadas en el RAIS.

Ahora bien, como la distribución del monto de las cotizaciones, inicialmente, se hacía de la misma forma y en los mismos porcentajes en ambos regímenes, los traslados que se produjeron en vigencia del texto originario de la Ley 100

de 1993 no significaron diferencias o inconsistencias en las historias laborales de los afiliados, pues tanto el dinero del RAIS, convertido a semanas, como el número de semanas cotizadas en el RPM transformadas a bonos pensionales, y posteriormente depositados en una cuenta individual, debían de ser equivalentes y simétricos, y permitían, por lo tanto, conservar los derechos pensionales de los cotizantes, sin variación o alteración alguna, por el paso del sistema público al privado, o viceversa.

En relación con la similitud del reparto del monto cotizado por los afiliados a ambos regímenes pensionales y el impacto de dicha situación en materia de traslados, la Corte Constitucional, en ejercicio del control abstracto de constitucionalidad, dispuso:

Como se vio, la sentencia C-789 de 2002 señaló que al cambiarse al régimen de prima media, las personas debían trasladar todo el ahorro que habían efectuado en el régimen de ahorro individual con solidaridad y que dicho ahorro “no podía ser inferior al monto total del aporte legal correspondiente en caso que hubieren permanecido en el régimen de prima media”. Precisamente en el cumplimiento de éste último requisito reside uno de los problemas jurídicos de la sentencia T-818 de 2007, pues en ella se sostuvo que debido a un cambio de legislación tal exigencia devino en imposible de cumplir.

En efecto, en el 2002, cuando se expidió la sentencia de constitucionalidad anteriormente mencionada, la distribución del aporte en los dos regímenes pensionales de la ley 100 de 1993 era igual: según la redacción original del artículo 20 la cotización se repartía en un 3.5% para pagar los gastos de administración y una prima para un seguro de pensión de invalidez y sobrevivientes y lo restante se destinaba para el pago de la pensión de vejez.

Sin embargo, un panorama distinto surgió a partir de la aprobación de la Ley 797 de 2003, la cual, aunque no modificó directamente las reglas relativas a los traslados pensionales, desencadenó una asimetría en el monto de los traslados del RAIS al RPM que afectó las historias laborales de los afiliados quienes, en vigencia de esta norma, pidieron ser trasladados de los fondos privados a Colpensiones, como pasa a explicarse.

La asimetría en las historias laborales de quienes se trasladaron de régimen pensional, una vez entró en vigencia la Ley 797 de 2003, consistió específicamente en que aquellas personas que se cambiaron del RAIS al RPM notaron que, en sus historias laborales que se generaban a partir del traslado, el número de semanas cotizadas no eran equivalentes al tiempo por el cual habían aportado al fondo privado de pensiones. Esta falta de equivalencia fue vista como un obstáculo, *ex ante*, para obtener el derecho a la pensión en condiciones igualitarias.

Dicha asimetría se ocasionaba, no directamente por un cambio normativo en materia de traslados, sino por la diferencia de reglas en materia de distribución de la cotización pensional que introdujo el artículo 7 de la Ley 797 de 2003, toda vez que, al destinarse en el RAIS un 1,5% del monto cotizado para el Fondo de Garantía de Pensión Mínima, misma cantidad que en el RPM se destina a financiar, en conjunto con las otras cotizaciones, la pensión de vejez, siempre era mayor el porcentaje destinado para la pensión de vejez en el régimen de prima media que en el de ahorro individual.

De tal manera que quien acudía al traslado del RAIS al RPM terminaba afrontado una disminución de los aportes efectuados al sistema, porque el 1,5% que se destina al Fondo de Garantía de Pensión Mínima en el primero de los señalados regímenes, no se reflejaba de la misma manera, puesto que, al no ser un ítem destinado a la financiación de la pensión de vejez, mediante la capitalización de las cuentas individuales, se quedaba en poder de las fondos del sistema privado, los cuales, además, según lo señala el consultante, no lo giraban al sistema público debido a que, a su juicio, no existía un sustento normativo para ello.

Este problema se hizo patente cuando la Corte Constitucional revisó unos casos relacionados con traslados del RAIS al RPM, de personas beneficiarias del régimen de transición en pensiones. De tales casos, se destaca el que dio lugar a la Sentencia T-818 de 2007, cuyo problema jurídico fue, en lo que interesa a este concepto, si «PORVENIR AFP, al rechazar el traslado que el accionante solicitaba al ISS, transgredió los derechos a la igualdad, seguridad social y a la libre escogencia de régimen pensional del afiliado».

El argumento de Porvenir, para rechazar el traslado, fue «que el monto de los aportes efectuados por el actor ante la Administradora son inferiores a los que habría cotizado de haber permanecido en Régimen de Prima con Prestación Definida».

En la sentencia T-818 de 2007, la Corte amparó el derecho del accionante a la seguridad social y a la libre escogencia de régimen pensional, con base en lo siguiente:

Por tanto, aquellas personas que, al momento de entrar a regir el artículo 36 de la ley 100 de 1993, hubiesen cotizado quince años o cumplieran con los requisitos de edad, adquirieron el derecho a pensionarse bajo los parámetros definidos en el sistema anterior. Lo que acarrea como consecuencia lógica el derecho a trasladarse del régimen de ahorro individual al régimen de prima media con prestación definida en cualquier momento para hacer efectivo dicho derecho, **con la única condición de que al cambiarse de régimen nuevamente se traslade a él todo el ahorro que habían efectuado al**



**régimen de ahorro individual con solidaridad.** [Se destaca].

Lo anterior, se comprendió por la Corte en razón a la equivalencia en el ahorro pensional.

Sin embargo, en procura de mayor claridad sobre el traslado de *todo el ahorro*, integrando el porcentaje del 1,5% destinado, en el RAIS, al Fondo de Garantía de Pensión Mínima, el Gobierno Nacional, a través del Decreto 3995 de 2008, expedido con el propósito de evitar la vinculación simultánea de los afiliados a los dos regímenes pensionales creados por la Ley 100 de 1993, instituyó una regla aplicable a los traslados del RAIS al RPM, en aras de que se garantizara la equivalencia de los aportes de los afiliados.

El artículo 7 del Decreto 3995 de 2008 estatuye:

Artículo 7°. Traslado de recursos. El traslado de recursos pensionales entre regímenes, incluyendo los contemplados en este decreto, así como de la historia laboral en estos casos, deberá realizarse en los términos señalados a continuación y en el artículo siguiente:

Cuando se trate de una administradora del RAIS, deberá trasladar el saldo en unidades de los aportes efectuados a nombre del trabajador, destinados a la respectiva cuenta individual y al fondo de garantía de pensión mínima del RAIS, multiplicado por el valor de la unidad vigente para las operaciones del día en que se efectúe el traslado.

**Para todos los efectos de traslado de cotizaciones se deberá incluir el porcentaje correspondiente al Fondo de Garantía de Pensión Mínima del RAIS.**

Tratándose del Régimen de Prima Media con Prestación Definida, RPM, la devolución se efectuará por el valor equivalente a las cotizaciones para financiar la pensión de vejez, que se hubieren efectuado actualizadas con la rentabilidad acumulada durante el respectivo período de las reservas para pensión de vejez del ISS, o en su defecto la informada por la Superintendencia Financiera para los períodos respectivos [...]. [Se destaca].

Se observa que, con la expedición del referido decreto, se integró una regla expresa en el ordenamiento jurídico, con los traslados del RAIS al RPM deben incluir el giro, no solo de los montos que alimentan las cuotas personales de los afiliados, sino, además e inexcusablemente, el porcentaje correspondiente al fondo de garantía de pensión mínima, el cual, como se explicó, era lo que generaba los problemas de equivalencia, en tanto que se trataba de un 1,5% que permanecía en el fondo privado correspondiente, aun cuando el afiliado se hubiese desvinculado de él.

La Corte Constitucional reconoció que, en efecto, la expedición del Decreto 3995 de 2008 constituyó una solución al problema, y que, a partir de este, las únicas diferencias en materia de aportes a pensión son las que se originan en la rentabilidad que lleguen a producir los fondos privados, o producto de cotizaciones voluntarias. En efecto, en la Sentencia T-1061 de 2011, esa Corporación manifestó lo siguiente:

**29.- Ese problema detectado en la sentencia T-818 de 2007, consistente en la imposibilidad de cumplir con el requisito de la equivalencia del ahorro** impuesto por la Sala Plena en la sentencia C-789 de 2002 a raíz de la reforma introducida por la ley 797 de 2003, ha sido solucionado por el decreto reglamentario 3995 expedido el 16 de octubre de 2008.

El decreto 3995 de 2008, que tiene como fin solucionar una situación generalizada de multifiliación pensional que se ha estado presentando (personas que resultan afiliadas a los dos regímenes existentes) y que no está permitida, señala las reglas para escoger uno de los dos regímenes y trasladar allí el ahorro efectuado en el otro. Así, en el artículo final del decreto se prescribió que las reglas para traslado de recursos descritas en el artículo 7 se aplicarían no sólo en los casos de multifiliación pensional sino también en los casos de las personas beneficiarias del régimen de transición que solicitaran regresar al régimen de prima media en los términos de las sentencias C-789 de 2002 y C-1024 de 2004.

**El artículo 7, entonces, soluciona el impedimento al que alude la sentencia T-818 de 2007 pues estipula que cuando se realice traslado de recursos del régimen de ahorro individual al régimen de prima media se debe incluir lo que la persona ha aportado al Fondo de Garantía de Pensión Mínima. Recuérdese que la imposibilidad de satisfacer la exigencia de equivalencia del ahorro provenía, precisamente, de que en el régimen de ahorro individual el afiliado destina 1.5% de su cotización mensual al Fondo de Garantía de Pensión Mínima, mientras que en el régimen de prima media ese 1.5% se dedica, junto con otro porcentaje del aporte mensual, a financiar la pensión de vejez; pero si al trasladarse de régimen al afiliado le devuelven lo que ha contribuido al mencionado fondo, la distribución del aporte contemplada en la ley 797 de 2003 ya no obstaculiza el cumplimiento de la exigencia impuesta en la sentencia C-789 de 2002 por la Sala Plena. [Resaltado fuera del texto original].**

Cabe señalar que la precitada sentencia constituye una decisión clave en pro de la consolidación de una línea jurisprudencial según la cual los traslados del RAIS al RPM deben incluir el porcentaje destinado al Fondo de Garantía de Pensión Mínima, toda vez que, previamente, en la Sentencia T-324 de 2010, la misma Corte Constitucional había expuesto, con contundencia, que la diferencia generada por no trasladar el 1,5% que se destina al referido fondo, podía reducir el monto total del ahorro:

Sumado a lo anterior, quienes son acreedores del traslado pensional, deberán

trasladar todo el ahorro que hayan efectuado en el régimen de ahorro individual con solidaridad, **lo cual incluye el saldo en unidades de los aportes efectuados a nombre del trabajador en la respectiva cuenta individual y en el fondo de garantía de pensión mínima del RAIS.** Dicho ahorro no puede ser inferior al monto total del aporte legal correspondiente en caso de que hubiere permanecido bajo la administración del Seguro Social. [Negritas fuera del texto original].

Así entonces, la Sala evidencia que, con la expedición de la Ley 797 de 2003, se generaron algunos inconvenientes en los traslados del RAIS al RPM, debido a que los aportes efectuados al primero no resultaban equivalentes o análogos, cuando el trabajador optaba por cambiarse de régimen. También, destaca que dichos inconvenientes, tal como lo advirtió la Corte Constitucional, encontraron solución con la expedición del Decreto 3995 de 2008, el cual ordenó expresamente que los traslados del sistema privado de pensiones al público deben incluir el porcentaje destinado al Fondo de Garantía de Pensión Mínima.

No obstante, el ministerio consultante parece entender que el Decreto 3995 de 2008 se aplica para todo aquello que ocurrió y ocurra a partir de su *publicación*, tal como lo señala el artículo 14, lo cual significaría que su observancia y obligatoriedad no se predicaría de los traslados ocurridos antes de su expedición.

Entonces, cabe preguntarse: ¿cuál es la regla que se debe aplicar a los traslados ocurridos entre la fecha de entrada en vigor de la Ley 797 de 2003 y la de publicación del Decreto 3995 de 2008? Es decir, ¿qué sucede con los aportes que fueron materializados en ese interregno?

La Corte Constitucional, en la Sentencia SU-062 de 2010, al analizar situaciones relacionadas con el traslado de personas beneficiarias del régimen de transición en pensiones, proporcionó una respuesta *parcial* al problema. Para el máximo tribunal de la jurisdicción Constitucional, las reglas contenidas en el Decreto 3995 de 2008, en materia de traslados, se aplican cuando los fondos deban ser traspasados del RAIS al RPM con posterioridad a su entrada en vigencia.

Por ende, para esa Corporación, al identificar el alcance del decreto, no resultan relevantes aspectos como la fecha de la solicitud de traslado ni aquella en que las cotizaciones pensionales se efectuaron. Lo relevante, para los traslados realizados **después** de la publicación del decreto, es el momento mismo en que los recursos deban ser trasladados.

Puntualmente, la Corte explicó, en la Sentencia SU-062 de 2010, lo siguiente:

Finalmente, es necesario aclarar que la orden de traslado del señor [...] está supeditada a la confirmación del cumplimiento del requisito de la equivalencia del ahorro porque el decreto 3995 del 16 de octubre de 2008 le es aplicable. **Aunque este acto administrativo no existía cuando el actor efectuó su solicitud de traspaso al Instituto de Seguros Sociales y ni cuando se estudió su procedencia por parte del Instituto de Seguros Sociales y de ING Pensiones y Cesantías, se debe aplicar a todo traslado de recursos que se efectúe en este tipo de casos después de su entrada en vigencia.** En ese sentido, el momento determinante para saber si el decreto mencionado resulta o no aplicable no es el de la petición ni el del análisis de su procedencia sino aquel en el cual se procede a entregar los dineros al régimen de prima media administrado por el ISS pues ésta es la situación que se regula. [Se destaca].

Así entonces, los traslados del RAIS al RPM que se hagan con posterioridad a la entrada en vigencia del Decreto 3995 de 2008 implican que se movilice, además del saldo en las cuentas individuales del afiliado y sus rendimientos, el porcentaje del 1,5% que se haya destinado o estuviera destinado al Fondo de Garantía de Pensión Mínima, sin importar la fecha en la que se realizó la solicitud, o si los aportes fueron efectuados antes de la expedición del referido decreto.

Comparte plenamente la Sala la tesis de la Corte Constitucional, en el sentido de otorgarle primacía a la fecha en la que debe efectuarse el traslado y no a la fecha de la solicitud o de la realización. Lo anterior, debido a que el Decreto 3995 de 2008 impone el deber de trasladar tales aportes, sin hacer mención ni distinción respecto del momento en que fueron efectuadas las cotizaciones respectivas, por parte del afiliado y/o de su empleador.

Ahora bien, hasta aquí podría responderse al cuestionamiento sobre qué sucede con los traslados efectuados **después** del Decreto 3995 de 2008, ya sea porque (i) las cotizaciones se adelantaron antes de su entrada en vigencia; o porque (ii) el traslado se solicitó antes o después de su entrada en vigencia. La respuesta dada por la Corte Constitucional consiste en que los recursos deben trasladarse en su integridad. Con este lineamiento la Sala responderá a la pregunta sobre los traslados efectuados **antes** del decreto.

En efecto, es razonable que la totalidad del ahorro depositado en el fondo de ahorro individual sea equivalente al monto total que se traslade al régimen de prima media, de lo contrario, se afectaría el principio de equivalencia del ahorro pensional y la diferencia generada por no trasladar el monto destinado al Fondo de Garantía de Pensión Mínima, puede incluso reducir el monto total del mismo.

Debe tenerse presente que los aportes que hacen los afiliados del régimen

pensional, aun cuando hacen parte del sistema de seguridad social en materia de pensiones, no pertenecen a las sociedades administradoras de fondos de pensiones ni al Estado, sino al propio sistema.

Las anteriores consideraciones se fuerzan con la postura sentada por el máximo tribunal en materia laboral, como se ve a continuación.

#### **1.6. La tesis de la Corte Suprema de Justicia cuando se declara la ineficacia del traslado del Régimen de Prima Media con Prestación Definida al de ahorro individual con solidaridad**

La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha venido consolidado una tesis jurisprudencial que ha servido de fundamento para declarar la ineficacia de traslados de los afiliados del RPM al RAIS, por vicios del consentimiento, derivado de la falta de información suficiente que tuvieron los afiliados al sistema pensional, acerca de las características, ventajas y desventajas que suponía para ellos el cambio del régimen pensional.

Las decisiones de la Corte Suprema de Justicia parten de la premisa de que las administradoras de pensiones tienen el deber de proporcionar a sus interesados una información y explicación completa y comprensible de las consecuencias de este cambio de régimen. Con fundamento en dicha premisa, se ha llegado a la conclusión de que muchos traslados del RPM al RAIS se originaron en una inducción al error contra los afiliados, a quienes les plantearon que si se trasladaban al régimen privado obtendrían mejores beneficios para su situación pensional individual, y, entre otras cuestiones adicionales, no serían cobijados por las reformas pensionales que se encontraban *ad- portas* de aprobar en el régimen público.

Sin embargo, llegado el momento de la pensión, algunos afiliados se percataron de que los beneficios planteados por las sociedades administradoras de fondos de pensiones, o sus intermediarios, no eran tales y que, por el contrario, el cambio al régimen privado se había traducido para ellos, en realidad, en mayores exigencias para obtener la pensión y menores beneficios que los que hubiesen obtenido de haber permanecido en el RPM. De hecho, a muchos de los que se trasladaron a los fondos privados les negaron el reconocimiento y pago de la pensión de vejez, por no tener el capital acumulado establecido en la ley para que se pudiese cumplir con dicha prestación.

Para corregir esta situación, y en aras de salvaguardar ciertas garantías fundamentales de los afiliados, la Corte Suprema de Justicia ha declarado la *ineficacia* de varios traslados del RPM al RAIS, lo cual supone que las

personas retornen al sistema público, sin perder los derechos o expectativas que hubiesen adquirido, de haber permanecido en dicho régimen, incluso si ya no se encuentran dentro del término de diez años en el que, según la Ley 100 de 1993 (modificada por la Ley 797 de 2003), está vedado el traslado entre un subsistema y otro, o si no han transcurrido los cinco años de permanencia en un mismo régimen, exigidos para los mismos efectos.

Entre las primeras sentencias en las que la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia se pronunció, se encuentra la del 9 de septiembre de 2008, expediente 31989, en la cual se precisó lo siguiente:

La administradora tiene el deber de devolver al sistema todos los valores que hubiere recibido con motivo de la afiliación del actor, como cotizaciones, bonos pensionales, sumas adicionales de la aseguradora, con todos sus frutos e intereses como los dispone el artículo 1746 del C.C., esto es, con los rendimientos que se hubieren causado.

Como la nulidad fue conducta indebida de la administradora ésta debe asumir a su cargo los deterioros sufridos por el bien administrado, esto es, las mermas sufridas en el capital destinado a la financiación de la pensión de vejez, ya por pago de mesadas pensionales en el sistema de ahorro individual, ora por los gastos de administración en que hubiere incurrido, los cuales serán asumidos por la Administradora a cargo de su propio patrimonio, siguiendo para el efecto las reglas del artículo 963 del C.C.

Se observa que, para la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, la decisión que deja sin efectos un traslado del RAIS al RPM implica la devolución al sistema de todos los valores que hubieran recibido con motivo de la afiliación del actor, cualquiera que sea su denominación, lo cual incluye los frutos y rendimientos obtenidos.

Pese a que esta tesis la han aplicado de forma pacífica los juzgados y las salas laborales de los tribunales superiores, así como la misma Corte Suprema de Justicia, la casuística ha generado ciertas dudas frente a algunos componentes de las cotizaciones de los trabajadores. Estas dudas condujeron a que el alto tribunal, en providencias de reciente data, efectuara unas precisiones adicionales, en aras de que este tipo de decisiones no resultaran nugatorias.

Las precisiones de la Sala de Casación Laboral que importan al *sub examine* están relacionadas con las consecuencias retroactivas o *ex tunc*, en palabras de esta autoridad, que comporta la declaratoria de ineficacia de los traslados del RPM al RAIS y el tratamiento de los aportes efectuados por el afiliado al fondo privado, especialmente lo que corresponde al Fondo de Garantía de Pensión Mínima, sobre lo cual se hicieron unas explicaciones que es relevante mencionar, al constituir un punto medular del tema consultado.

Sobre este asunto, la Corte Suprema de Justicia manifestó:

En el *sub lite*, la devolución de todos los recursos acumulados en la cuenta de ahorro individual en el RAIS debe ser plena y con efectos retroactivos, porque los mismos serán utilizados para la financiación de la pensión de vejez a que tiene derecho el demandante en el régimen de prima media con prestación definida. Ello, incluye el reintegro a Colpensiones de los valores que cobraron los fondos privados a título de cuotas de administración y comisiones, incluidos los aportes para garantía de pensión mínima, pues será aquella entidad la encargada del manejo de esos recursos y del reconocimiento del derecho pensional.

[...]

Conforme lo anterior, el Tribunal acertó en cuanto estableció que los fondos privados accionados deben retornar a Colpensiones la totalidad de los valores recibidos por concepto de «aportes, frutos, rendimientos financieros y bonos pensionales que se encuentran en la cuenta de ahorro individual», sin descontar valor alguno por «cuotas de administración, comisiones y aportes al fondo de garantía de pensión mínima». [Énfasis añadido].

Para la Sala de Consulta, el alcance de la precitada decisión que interesa a este concepto no es el de las consecuencias de la ineficacia, en los términos previstos por el Derecho Privado, sino la premisa según la cual no existe razón alguna para considerar que los aportes destinados al Fondo de Garantía de Pensión Mínima deben estar en un régimen distinto de aquel en el que se encuentre el afiliado, lo cual significa que, si acontece un traslado del régimen privado al público, la misma suerte deben correr los recursos que alimentan el mencionado fondo, porque, con ellos, se financia la pensión de vejez.

El caso analizado en la última sentencia transcrita de la Corte Suprema de Justicia tiene una relevancia mayúscula, si se considera el problema jurídico de esta consulta, toda vez que analiza la situación de un afiliado que estuvo vinculado al sistema público hasta el año 2001, fecha en la cual se trasladó al RAIS, en donde permaneció hasta julio de 2020, cuando se expidió la decisión en sede de casación.

Resulta claro que el 100% del monto de las cotizaciones que hizo el trabajador al RAIS, entre 2001 y 2020, estuvo administrado por el fondo privado correspondiente. También es claro que de las cotizaciones que hizo el trabajador al sistema privado, en el referido periodo, un porcentaje correspondiente al 1,5% se destinó al Fondo de Garantía de Pensión Mínima y, tal como lo ordena la ley y el reglamento, permaneció ahí hasta que la Corte Suprema de Justicia expidió la sentencia que ordenó devolver ese porcentaje

al RPM.

En este orden de ideas, el argumento según el cual la falta de regulación taxativa, respecto de que el traslado de los aportes del RAIS al RPM debe incluir aquellos depositados en el Fondo de Garantía de Pensión Mínima, que se recaudaron en vigencia de la Ley 797 de 2003, pero con antelación al Decreto 3995 de 2008, que establece que, en el «traslado de cotizaciones [del RAIS al RPM] se deberá incluir el porcentaje correspondiente al Fondo de Garantía de Pensión Mínima del RAIS», no tiene la fortaleza suficiente para impedir que estos recursos fueran trasladados e imponer que quedaran en las arcas del régimen privado.

En armonía con este planteamiento, la Corte Suprema de Justicia, de manera precisa, ordenó que todos los aportes efectuados por el trabajador para la obtención de la pensión de vejez debían ser transferidos al régimen que de manera libre escogiera el afiliado.

Es decir, para la Corte Suprema de Justicia, lo relevante es cerciorarse de que en el régimen pensional en que se encuentre el cotizante estén también sus aportes pensionales. En consecuencia, si aquel opta por un cambio de régimen, lo propio debe ocurrirles a los aportes, sin salvedad ni excepción alguna.

En adición, uno de los fundamentos constitucionales por los cuales la Corte Suprema de Justicia considera que los aportes pensionales deben estar en el régimen al que se encuentra vinculado el cotizante, está relacionado con el principio superior de sostenibilidad fiscal, previsto en el artículo 48 de la Carta, aspecto sobre el cual la Sentencia SL1512-2022, radicación núm. 822881, del 3 de mayo de 2022, prescribió:

De igual modo y en virtud del grado jurisdiccional de consulta que opera en favor de Colpensiones, en desarrollo del principio de sostenibilidad financiera del RPM previsto en el artículo 48 de la CP, la AFP Porvenir S.A., deberá devolver a Colpensiones, el porcentaje correspondiente a los gastos de administración y primas de seguros previsionales de invalidez y sobrevivencia, y el porcentaje destinado al fondo de garantía de pensión mínima, debidamente indexados, y comisiones, con cargo a sus propios recursos, pues estos conceptos, desde el nacimiento del acto ineficaz, debieron ingresar al régimen de prima media con prestación definida administrado por esta última (CSJ SL, 9 sep. 2008, rad. 31989, CSJ SL4964-2018, CSJ SL4989-2018, CSJ SL1421-2019, CSJ SL1688-2019, SL4062-2021).

En esa medida, habrá de adicionarse el fallo de primer grado, en el sentido de condenar a la AFP Porvenir S.A. a devolver a Colpensiones el porcentaje correspondiente a los gastos de administración y primas de seguros



previsionales de invalidez y sobrevivencia, y el porcentaje destinado al fondo de garantía de pensión mínima, debidamente indexados y las comisiones, con cargo a sus propios recursos. Al momento de cumplirse esta orden, los conceptos deberán aparecer discriminados con sus respectivos valores, junto con el detalle pormenorizado de los ciclos, IBC, aportes y demás información relevante que los justifiquen.

Quiere decir lo anterior, parafraseando a la Corte Suprema de Justicia, que la decisión que ordena trasladar los recursos pensionales al régimen al que esté vinculado el cotizante no lesiona el principio de sostenibilidad fiscal del Sistema General de Pensiones, puesto que los recursos que deben reintegrar los fondos privados a Colpensiones serán utilizados para el reconocimiento del derecho pensional.

### **1.7. Naturaleza de los recursos destinados a pagar las pensiones**

Los recursos del Sistema General de Pensiones, en los dos regímenes, provienen de tres fuentes: *i)* los aportes que hacen los afiliados y empleadores para que los primeros puedan obtener una pensión, en cualquiera de sus modalidades; *ii)* los aportes del Estado que sean necesarios para garantizar el pago de pensiones mínimas, en los casos que establece el ordenamiento legal; y *iii)* los rendimientos que generen los aportes.

Las normas no definen, en forma clara y expresa, cuál es la naturaleza de los recursos del Sistema General de Pensiones. No obstante, por una parte, la Constitución Política de 1991, en el artículo 48, dispone que no se podrán destinar ni utilizar los recursos de las instituciones de la Seguridad Social para fines *diferentes* a ella, y por otra, los artículos 9 y 13 de la Ley 100 de 1993 señalan que dichos recursos no pertenecen a la Nación ni a las entidades que los administran, y no pueden ser destinados para fines *diferentes* a ella.

Ahora bien, el hecho de que la Ley 100 de 1993 no defina expresamente la naturaleza de los recursos con los cuales se pagan las pensiones, no quiere decir que sea imposible inferir su naturaleza jurídica, ya que la normativa en mención establece algunas características, tales como su destinación específica (artículo 9), su inembargabilidad (artículo 134) y su tratamiento tributario (artículo 135), a partir de las cuales el Consejo de Estado, tanto en sede consultiva como jurisdiccional, ha efectuado unas interpretaciones, que vale la pena traer a colación, para ratificar que los recursos del sistema pensional no son, en estricto sentido, de quienes los aportan ni de quienes los administran.

Esta Sala, en ejercicio de la función consultiva, tuvo la oportunidad de referirse a los recursos del sistema pensional, como a continuación se observa:

Es claro, entonces, que hoy y dentro del Sistema General de Pensiones, no se puede afirmar que las pensiones reconocidas por los fondos de pensiones o por el ISS, financiadas en todo o en parte con los aportes o cotizaciones **de índole parafiscal** obligatoria pagados por entes públicos a dichos fondos o al ISS, constituyen asignaciones provenientes del tesoro público, pues **una vez pagadas dichas cotizaciones patronales en cumplimiento de ese deber legal, los recursos son del Sistema y no pertenecen ni a la Nación ni a las entidades que los administran. Con tales aportes, las entidades públicas satisfacen un deber legal respecto de sus servidores y, por consiguiente, los recursos salen de su patrimonio e ingresan al sistema general de pensiones, refundiéndose con todos los demás recursos del mismo sistema, los cuales si bien tienen naturaleza pública por provenir de una contribución parafiscal, no son propiedad de ninguna entidad estatal ni pertenecen al tesoro público.**

[...]

De esta forma, una vez que la entidad estatal u oficial realiza el pago de sus aportes al sistema general de pensiones en cumplimiento de su deber legal como patronos (arts. 20 , 22 y 23 ley 100, el primero modificado por el artículo 7º ley 797) - recursos parafiscales -, o efectúa el pago del bono pensional a que está obligado en las hipótesis de los artículos 113 y siguientes de la ley 100, en concordancia con los artículos 13, 33 y 67 de la misma, los dineros así entregados dejan de tener la naturaleza de recursos del tesoro y se convierten en recursos del sistema general de pensiones, los cuales, a la luz de las normas de la ley 100 (arts 32 literal b) 59 y 60), ratificadas por las de la ley 797 (arts.2º literal m) y 7) no pertenecen a la Nación ni a las entidades que los administran y no pueden destinarse ni utilizarse para fines distintos de los propios a la seguridad social (art. 9 L.100). [Negrillas fuera del texto original].

El concepto citado hace referencia a que los recursos pensionales no son de quienes los aportan, de quienes los administran, ni tampoco del tesoro público, y agrega que están comprendidos dentro del concepto de *contribuciones parafiscales*, los cuales, de conformidad con lo establecido por el artículo 29 del Estatuto Orgánico de Presupuesto, se definen como aquellos que afectan a un determinado y único grupo social y económico y se utilizan para beneficio del propio sector:

Artículo 29. Son contribuciones parafiscales los gravámenes establecidos con carácter obligatorio por la ley, que afectan a un determinado y único grupo social y económico y se utilizan para beneficio del propio sector. El manejo, administración y ejecución de estos recursos se hará exclusivamente en forma dispuesta en la ley que los crea y se destinarán sólo al objeto previsto en ella, lo mismo que los rendimientos y excedentes financieros que resulten al cierre del ejercicio contable [...].

Posteriormente, la Corte Constitucional ratificó lo dicho por la Sala de Consulta,

en el sentido de que los recursos del sistema pensional son de carácter parafiscal, y que no son de propiedad de la Nación ni de quienes los administran:

3.1.2 Esta Corporación de manera reiterada ha precisado en efecto que los recursos que ingresan al Sistema de Seguridad Social, tanto en Salud como en pensiones, llámense cotizaciones, aportes, cuotas moderadoras, pagos compartidos, copagos, tarifas, deducibles o bonificaciones, son en realidad contribuciones parafiscales de destinación específica, en cuanto constituyen un gravamen, fruto de la soberanía fiscal del Estado, que se cobra obligatoriamente a determinadas personas para satisfacer sus necesidades de salud y pensiones y que, al no comportar una contraprestación equivalente al monto de la tarifa fijada, se destinan también a la financiación global bien del Sistema General de Seguridad Social en Salud, bien del Sistema General de Seguridad Social en Pensiones.

La Sección Cuarta del Consejo de Estado también hizo un análisis sobre la naturaleza parafiscal de los recursos del sistema pensional, desde una óptica eminentemente tributaria, para concluir que dichos recursos no están gravados con impuesto alguno, debido a la aludida naturaleza. Empero, la sentencia citada deja claro que no todos los recursos relacionados con la seguridad social deben ser percibidos bajo un mismo racero, debido a que no todos se usan para pagar prestaciones pensionales.

A esta conclusión arribó la Sección Cuarta, por vía de la interpretación del artículo 4 del Decreto 841 de 1998, el cual señala que «gozarán de exención de impuestos, tasas y contribuciones del orden nacional, los recursos de los Fondos de Pensiones del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, de los fondos de reparto del Régimen de Prima Media con Prestación Definida, de los fondos para el pago de los bonos y cuotas partes de bonos pensionales, del fondo de solidaridad pensional, de los fondos de pensiones de que trata el Decreto 2513 de 1987, y las reservas matemáticas de los seguros de pensiones de jubilación o vejez, invalidez y sobrevivientes, así como sus rendimientos».

Los términos exactos de la sentencia de la Sección Cuarta son:

El artículo 135 de la Ley 100 de 1993 dispone que los recursos de los Fondos de Pensiones del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, los recursos de los Fondos de Reparto del Régimen de Prima Media con Prestación Definida, los recursos de los Fondos para el pago de los bonos y cuotas partes de los bonos pensionales y los recursos del Fondo de Solidaridad Pensional, gozan de exención de toda clase de impuestos del orden nacional.

Lo anterior significa que los aportes obligatorios para pensión tienen naturaleza parafiscal y, en consecuencia, no pueden ser gravados con ningún impuesto.

[...]

Bajo el criterio expuesto, la exención se aplica solo para los recursos a los que se refiere el Decreto 841 de 1998, por ser los afectos al Sistema General de Pensiones ya que, como antes se anotó, los recursos de la reserva de estabilización de rendimientos son de propiedad de las Sociedades Administradoras debido a que se conforman con recursos propios de ellas y, por consiguiente, los rendimientos generados por dicha reserva, contrario a lo afirmado por el accionante, se consideran ingresos ordinarios gravables del respectivo año, en la medida que no fueron excluidos por el legislador.

La Sala sintetiza los pronunciamientos citados, así: *i)* los recursos del sistema pensional son de naturaleza parafiscal y, en tal virtud, no son de la Nación, de las entidades que los administran, de los empleados ni de los empleadores; *ii)* tienen una destinación específica, que consiste en financiar las pensiones y demás prestaciones cubiertas por el sistema, cuando se cumplan los requisitos fijados por el Legislador; y *iii)* no son embargables ni susceptibles de ser gravados con tributos.

### **1.8. El principio de favorabilidad como criterio de interpretación en el análisis de casos que involucren la protección del derecho a la seguridad social**

El artículo 53 de la Constitución establece, como uno de los principios mínimos fundamentales del trabajo, el de favorabilidad laboral, consistente en el deber de aplicar la consecuencia más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación o interpretación de las fuentes formales del derecho:

Artículo 53. El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley correspondiente tendrá en cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales:

Igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales; facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho; primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales; garantía a la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario; protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad.

El Código Sustantivo del Trabajo también se refiere al principio constitucional de favorabilidad previsto en el artículo 53 de la Carta, en los siguientes términos:

Artículo 21. Normas más favorables. **En caso de conflicto o duda sobre la aplicación de normas vigentes de trabajo, prevalece la más favorable al trabajador.** La norma que se adopte debe aplicarse en su integridad. [Énfasis añadido].

Según lo establecido en el precitado artículo 21, el principio de favorabilidad es aquel que permite aplicar la norma de trabajo más favorable al trabajador, cuando su aplicación genere conflicto o dudas.

La Corte Constitucional ha precisado el alcance, definición y contenido del principio de favorabilidad laboral, en los siguientes términos:

De otra parte, considera la Corte que la "condición más beneficiosa" para el trabajador, se encuentra plenamente garantizada mediante la aplicación del principio de favorabilidad que se consagra en materia laboral, no sólo a nivel constitucional sino también legal, y a quien corresponde determinar en cada caso concreto cuál norma es más ventajosa o benéfica para el trabajador es a quien ha de aplicarla o interpretarla. En nuestro Ordenamiento Superior el principio de favorabilidad se halla regulado en los siguientes términos: "situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho", precepto que debe incluirse en el estatuto del trabajo que expida el Congreso.

De conformidad con este mandato, cuando una misma situación jurídica se halla regulada en distintas fuentes formales del derecho (ley, costumbre, convención colectiva, etc), o en una misma, es deber de quien ha de aplicar o interpretar las normas escoger aquella que resulte más beneficiosa o favorezca al trabajador. **La favorabilidad opera, entonces, no sólo cuando existe conflicto entre dos normas de distinta fuente formal, o entre dos normas de idéntica fuente, sino también cuando existe una sola norma que admite varias interpretaciones; la norma así escogida debe ser aplicada en su integridad,** ya que no le está permitido al juez elegir de cada norma lo más ventajoso y crear una tercera, pues se estaría convirtiendo en legislador. [Negritas por fuera del texto original].

A partir de lo anterior, la Corte Constitucional edificó una robusta línea jurisprudencial sobre el principio de favorabilidad en materia de derecho del trabajo. La Sentencia SU-138 de 2021 condensa las principales características de dicho principio, así:

- i) Opera como un mecanismo de solución para los conflictos entre normas o interpretaciones vigentes sobre las fuentes formales del derecho del trabajo.
- ii) Su aplicación no es potestativa sino obligatoria.
- iii) Tanto los jueces como las autoridades administrativas están vinculadas con su aplicación.

iv) Obra en dos escenarios: cuando se presentan diversas fuentes de derecho que se contraponen en sus consecuencias jurídicas o cuando concurren distintas interpretaciones de una misma disposición que llevan a consecuencias igualmente diferentes.

v) Debe preferirse aquella disposición o interpretación, según el caso, que otorga un mayor grado de protección a los derechos del trabajador.

### **1.9. Análisis de la Sala y solución al problema jurídico**

Afirma el ministro consultante que, con la Ley 797 de 2003 se creó en el RAIS el Fondo de Garantía de Pensión Mínima y se precisó el porcentaje que debía destinarse a su financiación. Sin embargo, en este cuerpo normativo no se especificó si, ante el trasladado de los afiliados al RPM, debía incluirse dicho porcentaje. Solamente hasta el Decreto 3995 de 2008, el Gobierno Nacional, precisó que los traslados del régimen privado al público debían incluir dichos recursos.

Según indica, por la ausencia de esa regla expresa, respecto de los traslados efectuados entre 2003 y 2008, las administradoras del RAIS transfirieron al RPM los aportes de los afiliados que solicitaron el cambio de régimen, **sin** incluir el monto que de sus cotizaciones se había destinado al Fondo de Garantía de Pensión Mínima. Tal situación, además, alteró las historias laborales registradas en el sistema público, pues Colpensiones no acreditó la totalidad de cotizaciones reportadas en el RAIS por la vinculación al sistema privado.

Como pasa a explicar la Sala, los traslados del RAIS al RPM, incluidos los efectuados entre la Ley 797 de 2003 y la expedición del Decreto 3995 de 2008, deben comprender los aportes pensionales del afiliado, integrando el porcentaje que de sus cotizaciones fue destinado al Fondo de Garantía de Pensión Mínima. En cualquier caso, en el RPM debe acreditarse la totalidad de las semanas reportadas, y ante la ausencia de pago total, Colpensiones cuenta con las facultades pertinentes para el cobro.

En efecto, como señala el ministro, una vez creado el Fondo de Garantía de Pensión Mínima, mediante la Ley 797 de 2003, la regla expresa consistente en que el traslado del RAIS al RPM comprendía el porcentaje de las cotizaciones destinado a su financiación no se positivizó en el ordenamiento jurídico.

Sin embargo, cualquier duda al respecto se despejó con el Decreto 3995 de 2008, mediante el cual el Gobierno Nacional dispuso, en que:

Para todos los efectos de traslado de cotizaciones se deberá incluir el porcentaje correspondiente al Fondo de Garantía de Pensión Mínima del RAIS.

Es importante señalar que, en modo alguno, puede interpretarse el Decreto 3995 de 2008 por fuera del contexto del marco pensional creado por la Ley 100 de 1993, ni como una norma que estatuye situaciones diferentes a las de la referida ley y sus reformas, cuyo *telos* aboga por permitirle a los trabajadores que se pensionen con el producto de todo lo que ahorraron, bajo el principio de equivalencia del ahorro pensional.

De hecho, el Decreto 3995 de 2008, sin hacer alusión a limitante, excepción o salvedad alguna, relativa a, entre otros, la fecha, el monto o la distribución de las cotizaciones, dispone que «Para todos los efectos de traslado de cotizaciones se deberá incluir el porcentaje correspondiente al Fondo de Garantía de Pensión Mínima del RAIS».

Ahora bien, sobre los traslados del RAIS al RPM materializados entre 2003 y 2008, la jurisprudencia de la Corte Constitucional y de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha fijado unas reglas jurisprudenciales que sirven como parámetro y que vale reiterar.

La Corte Constitucional, en armonía con el principio de equivalencia del ahorro pensional, ha sostenido que, el traslado pensional implica traspasar todo lo que hayan ahorrado los trabajadores en el RAIS, lo cual incluye el saldo, en unidades, de los aportes efectuados a nombre del cotizante, en la respectiva cuenta individual y en el Fondo de Garantía de Pensión Mínima. En concordancia, ha sostenido que el ahorro no puede ser inferior al monto total del aporte legal correspondiente.

Por su parte, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha señalado que si se reconoce que un trabajador que se cambió del RPM al RAIS tiene derecho a devolverse al RPM, dicha devolución incluye que se trasladen *todos* los recursos acumulados en la cuenta de ahorro individual, incluso con efectos retroactivos, e incluye los rendimientos correspondientes, porque dichos recursos serán utilizados para la financiación de la pensión de vejez a que tiene derecho el demandante en el Régimen de Prima Media con Prestación Definida.

Además del principio de equivalencia de ahorro pensional, en el que enfatiza la jurisprudencia, vale señalar que la sostenibilidad fiscal del RPM también podría resultar comprometida, en caso de que los traslados del sistema privado al público no incluyan la parte del ahorro que se destina al Fondo de Garantía de

Pensión Mínima, toda vez que, en el RPM, Colpensiones, para no desconocer el monto y el tiempo por el cual se han efectuado cotizaciones, tendría que pagar las pensiones de sus afiliados sin contar con la totalidad de los recursos derivados de los ahorros pensionales. Y, en contraste, los fondos privados de pensiones conservarían los recursos depositados el mentado fondo, sin que el afiliado que los cotizó se encuentre vinculado al RAIS.

Lo anterior, sumado al principio de favorabilidad al que se refiere el artículo 53 de la Carta Política y 21 del Código Sustantivo del Trabajo, según el cual entre dos o más posibles soluciones a una situación, debe preferirse aquella que resulte más favorable para el trabajador, es decir, la que permita la aplicación más amplia y efectiva del derecho fundamental.

En este caso, cabría interpretar, como lo hicieron algunas administradoras del RAIS, que, por no haber un acto administrativo expreso, no era necesario el traslado de las cotizaciones del trabajador, que internamente destinaron al Fondo de Garantía de Pensión Mínima. La otra interpretación consiste en que, como de ordinario se venía haciendo, los recursos pagados por el afiliado debían trasladarse al RPM, sin perjuicio de lo destinado a gastos de administración y primas de seguros y reaseguros. Debido a que la segunda es la interpretación más favorable, por permitirle al cotizante conservar la equivalencia de ahorro pensional y al sistema de seguridad social la sostenibilidad financiera, es esta última la procedente en el ordenamiento jurídico colombiano.

La interpretación de los principios señalados conduce a la Sala a aseverar que los traslados del RAIS al RPM, cualquiera que sea el momento en que se presenten, contienen la implícita e indivisible obligación de que se giren todos los aportes cotizados por el afiliado, sin distinción ni salvedad alguna, puesto que dichos recursos no pertenecen a los fondos privados de pensiones.

En tal medida, los fondos privados de pensiones no pueden fraccionar los aportes pensionales, y decidir cuál rubro se traslada y cuál no, puesto que la obligación que nace, a partir de la voluntad del afiliado, de cambiarse de régimen, incluye el traslado de la porción que se destina al Fondo de Garantía de Pensión Mínima, en tanto que así lo señalan el reglamento y la jurisprudencia.

Así, los aportes pensionales deben estar en el régimen en el que se encuentre el trabajador o cotizante. Esta respuesta surge de una lectura del ordenamiento jurídico que comprende el marco constitucional, legal, reglamentario y jurisprudencial, así como la interpretación del principio de equivalencia del ahorro pensional, de sostenibilidad fiscal, y de favorabilidad.



Entonces, si una persona se trasladó del RAIS al RPM, en vigencia del Decreto 3995 de 2008, o antes, pero, en este último caso, los recursos del fondo de garantía de pensión mínima no se han transferido, dicho traslado sí procedía, sin importar la fecha en la que se solicitó el traslado o aquella en que la administradora del fondo de pensiones recibió las cotizaciones respectivas.

Cabe mencionar que, para la Sala no resulta razonable ni acorde con los principios sobre los que se edifica la seguridad social, que un cotizante, para efectos de poner a salvo un derecho de rango constitucional, como la pensión, deba agotar una formalidad, como sería, por ejemplo, la de presentar una petición a la sociedad administradora del fondo privado en el que hayan permanecido sus aportes, entre el 29 de enero de 2003 y el 16 de octubre de 2008, para lograr que sean trasladados al RPM la totalidad de sus aportes y, especialmente, aquella parte destinada al Fondo de Garantía de Pensión Mínima, obligación que, de suyo, deben cumplir las administradoras de pensiones.

Ahora bien, la historia laboral de un trabajador, así como los aportes obligatorios al sistema no deben ser desconocidos o sufrir variación alguna por el hecho de que se presente un traslado del régimen privado al público, toda vez que, los aportes que se giren al RPM, luego de que el trabajador haya decidido desvincularse del RAIS, no pueden ser inferiores al monto total del aporte legal efectuado.

De acuerdo con lo expuesto, para la Sala, cualquier circunstancia que se vislumbre como una desmejora de los ahorros de los afiliados, o de sus expectativas de jubilación, sea por el hecho del reglamento o de una interpretación de este, no tiene viabilidad jurídica, puesto que desconoce los pilares del Estado social y democrático de derecho.

Sin perjuicio de lo anterior, se pone de relieve que una cosa son las semanas cotizadas por una persona en el Sistema General de Pensiones, o, en general el tiempo laborado, y otra distinta, es el valor de los aportes efectuados en su nombre, o el monto de los ahorros que tenga en su cuenta individual (en el caso del RAIS), y que deban trasladarse al RPM.

En consecuencia, cuando una persona se traslada del RAIS al RPM, la primera obligación de Colpensiones es registrar el tiempo, en semanas, que esa persona cotizó efectivamente en el RAIS, de acuerdo con la información que le reporte la correspondiente administradora, sin que pueda hacer ningún recorte, alteración o modificación en dicha información, toda vez que la ley no la autoriza para ello. La segunda, consiste en recibir los recursos que la persona

tuviera en su cuenta de ahorro individual, y el bono pensional, incluyendo o no, según el caso, el porcentaje destinado para el Fondo de Garantía de Pensión Mínima, conforme con lo explicado.

Así, si Colpensiones advierte que el monto traslado por la administradora del RAIS no corresponde a las semanas cotizadas, y que, por lo tanto, debe ser mayor, está facultada para reclamar a dicha administradora el valor faltante, sin que ello signifique trasladar al afiliado las consecuencias económicas de la discrepancia que pueda existir, a este respecto, entre dicha entidad y un fondo privado, la cual debe ser solucionada entre ellas.

Por último, es importante para la Sala indicar, por un lado, que los derechos pensionales son imprescriptibles, y por otro, que el giro al RPM del porcentaje de las pensiones que se deposita en el Fondo de Garantía de Pensión Mínima no es una operación que, en principio, desde el punto de vista operativo, sea susceptible de ser considerada como una cuestión compleja, puesto que los fondos privados deben mantener separados los ahorros de los trabajadores, de sus propias cuentas, así como también los recursos que se destinan a financiar la garantía de pensión mínima.

### **1.9. Conclusiones**

a) El Fondo de Garantía de Pensión Mínima, como su nombre lo indica, es un fondo constituido con los aportes que hacen todos los afiliados al RAIS, cuyo propósito es completar los recursos necesarios para financiar las pensiones de aquellas personas que no cuentan con el capital suficiente para acceder a una pensión de un salario mínimo, que, actualmente, se alimenta con el porcentaje del 1,5% de las cotizaciones de los trabajadores.

b) El traslado de régimen pensional contiene la implícita e indivisible obligación de que se giren todos los aportes cotizados por cuenta del afiliado, sin distinción ni salvedad alguna, puesto que dichos recursos son del sistema, no de los fondos privados de pensiones, a excepción del porcentaje destinado para gastos de administración y primas de seguros y reaseguros. Esta regla aplica también a los traslados efectuados o materializados entre el año de creación del Fondo de Garantía de Pensión Mínima, mediante la Ley 797 de 2003, y el Decreto 3995 de 2008.

c) Las reglas contenidas en el Decreto 3995 de 2008 no están limitadas a condiciones como la fecha, el monto o la distribución de las cotizaciones. Por ende, la disposición conforme con la cual «Para todos los efectos de traslado de cotizaciones se deberá incluir el porcentaje correspondiente al Fondo de

Garantía de Pensión Mínima del RAIS», resulta aplicable a todas las transferencias de recursos que se efectúen en virtud de un traslado.

d) Cada afiliado al RAIS tiene una cuenta individual de ahorro pensional, que está conformada por subcuentas que incorporan lo abonado. En una de esas subcuentas están depositados los recursos destinados a financiar la garantía de pensión mínima.

e) Los traslados del RAIS al RPM no pueden afectar el principio de equivalencia del ahorro pensional. En tal virtud, dichos traslados implican, por un lado, que Colpensiones registre el mismo número de semanas que tenía el trabajador en el RAIS, y por otro, que se giren todos los ahorros.

f) En vista del principio de sostenibilidad financiera, los aportes que se giren al RPM, luego de que el trabajador haya decidido desvincularse del RAIS y trasladarse a aquel, no pueden ser inferiores al monto total del aporte legal correspondiente. De lo contrario, Colpensiones, tendría que pagar las pensiones de sus afiliados sin contar con la totalidad de los ahorros pensionales

g) En virtud del principio de favorabilidad, las normas en materia de seguridad social deben ser interpretadas de la forma que resulte más favorable al trabajador, en cuanto a la eficacia, amplitud y protección de sus derechos fundamentales y legales.

h) Los recursos que ingresan al sistema pensional no pertenecen a los fondos privados de pensiones, salvo el porcentaje que corresponda a su administración y al pago de las primas de seguros y reaseguros. Esos recursos son de carácter parafiscal, y forman parte del Sistema General de Pensiones.

i) En razón de todo lo anterior, el giro de todos los ahorros del RAIS al RPM debe incluir el saldo total de los aportes efectuados a nombre del trabajador en su respectiva cuenta individual, incluyendo lo que se haya destinado al Fondo de Garantía de Pensión Mínima y sin perjuicio de que el traslado se hubiera efectuado entre 2003 y 2008.

En atención a las consideraciones anteriores,

### **III. La Sala RESPONDE:**

Debido a su similitud, la Sala responderá las preguntas 1 y 2 en una sola respuesta:

1. *¿Para las personas que se trasladaron entre el 29 de enero de 2003 (entrada en vigencia de la Ley 797) y el 16 de octubre de 2008 (entrada en vigencia del Decreto 3995) del RAIS al RPM, se debe dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 692 de 1994, en el sentido de indicar, si la Administradora del Régimen de Ahorro Individual debe trasladar a Colpensiones el saldo existente en la cuenta de ahorro individual del afiliado únicamente, sin incluir el porcentaje que del valor de los aportes realizados fue girado al Fondo de Garantía de Pensión Mínima (FGPM), a pesar de, como quedó dicho anteriormente, que el registro muestra una notoria diferencia en el número de semanas acreditadas en el RPM frente a las reportadas en el RAIS?*

2. *¿Para las personas que se trasladaron entre el 29 de enero de 2003 (entrada en vigencia de la Ley 797) y el 16 de octubre de 2008 (entrada en vigencia del Decreto 3995) del RAIS al RPM, se debe dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 692 de 1994, en el sentido de indicar, si la Administradora del Régimen de Ahorro Individual debe trasladar a Colpensiones el saldo existente en la cuenta de ahorro individual del afiliado, sin incluir los aportes realizados con destino al Fondo de Garantía de Pensión Mínima (FGPM), y que en el Régimen de Prima Media RPM se acredite el número total de semanas cotizadas en el RAIS, sin que se perciba una diferencia entre los dos registros y sin que sea necesario solicitar el giro del porcentaje correspondiente al aporte remitido al FGPM?*

Conforme con lo establecido en el artículo 7 del Decreto 3995 de 2008, todos los traslados del RAIS al RPM deben incluir el porcentaje que del valor de los aportes realizados por el cotizante haya sido girado con destino al Fondo de Garantía de Pensión Mínima, independientemente de la fecha en la que dichos aportes se hayan causado o de la fecha de solicitud del traslado.

En cualquier caso, las semanas de cotización que se deben reflejar en el RPM, luego del traslado, no pueden ser inferiores a las que el mismo afiliado tenía reportadas en el RAIS (a través de la respectiva sociedad administradora).

3. *En virtud de lo establecido en el Acto Legislativo 01 de 2005, ¿Para las personas que se trasladaron entre el 29 de enero de 2003 (entrada en vigencia de la Ley 797) y el 16 de octubre de 2018 (entrada en vigencia del Decreto 3995) del RAIS al RPM, las Administradoras del Régimen de Ahorro Individual deben remitir a Colpensiones la totalidad de los recursos pagados por el afiliado incluidos los acreditados en el Fondo de Garantía de Pensión Mínima, y por consiguiente Colpensiones debe acreditar la totalidad de semanas registradas en el RAIS por el mismo periodo cotizado sin que se presente*

*diferencia alguna?*

Sí, para las personas que se trasladaron entre el 29 de enero de 2003 y el 16 de octubre de 2008, del RAIS al RPM, y cuyos aportes no se transfirieron, en su totalidad, antes de la última fecha indicada, las administradoras del régimen de ahorro individual deben remitir a Colpensiones la totalidad de los recursos pagados por cuenta del afiliado, incluidos los acreditados en el Fondo de Garantía de Pensión Mínima.

Por su parte, Colpensiones debe acreditar la totalidad de semanas registradas en el RAIS por el mismo periodo cotizado, sin que se presente diferencia alguna respecto de las semanas reportadas a nombre del trabajador, en el régimen privado.

Lo anterior, con fundamento en el principio de equivalencia del ahorro pensional.

Remítase a la ministra del Trabajo y a la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República.

**ANA MARÍA CHARRY GAITÁN**  
Presidenta de la Sala

**ÓSCAR DARÍO AMAYA NAVAS**  
Consejero de Estado

**MARÍA DEL PILAR BAHAMÓN FALLA**  
Consejera de Estado

**ÉDGAR GONZÁLEZ LÓPEZ**  
Consejero de Estado

**REINA CAROLINA SOLÓRZANO HERNÁNDEZ**  
Secretaria de la Sala

Bogotá D.C,



Radicado: 2-2021-059078

Bogotá D.C., 8 de noviembre de 2021 12:37

Señores Magistrados  
**Corte Constitucional**  
Honorables Magistrados  
Sala Plena  
Ciudad.

Referencia: Respuesta a las preguntas remitidas a través del Auto 583 de 2021.

Honorables Magistrados:

**JOSE MANUEL RESTREPO ABONDANO** en mi condición de Ministro de Hacienda y Crédito Público, respetuosamente me permito dar repuesta a los interrogantes remitidos por la H. Corte Constitucional mediante Auto 583 de 2021; explicaciones que corresponden a lo expuesto en la audiencia que ante ese honorable Sala se adelantó el pasado 28 de octubre del año en curso.

**PRIMER EJE TEMÁTICO**

- a. *¿Cuál es el monto y la destinación de los aportes que mensualmente los afiliados del Sistema General de Pensiones realizan a las diferentes administradoras de los dos regímenes de pensiones, y las diferencias relevantes en la administración de los recursos así obtenidos entre cada uno de dichos regímenes?*

El Sistema General de Pensiones contempla dos regímenes excluyentes entre sí, pero que coexisten. En este sistema dual, tanto los trabajadores del sector público como los del sector privado pueden elegir libremente entre cualquiera de estos dos regímenes según lo consideren más conveniente.

Ahora bien, como primera diferencia encontramos que, en la etapa de cotización, los aportes realizados tienen un destino diferente en cada uno de los regímenes, como se puede apreciar en el siguiente cuadro comparativo:

IBC	Cotización RPM	Fondo Común de vejez	% administración y aseguramiento	FSP**	IBC	Cotización RAIS	Cuenta de Ahorro individual	% administración y seguro Previsional	FGP*	FSP**
< 4 SM	16%	13%	3.0%	0%	< 4 SM	16%	11.5%	3.0%	1.5%	0%
4 SM a 16 SM	17%	13%	3.0%	1%	4 SM a 16 SM	17%	11.5%	3.0%	1.5%	1%
16SM A 20 SM	17% - 18%	13%	3.0%	1.2% - 2%	16SM A 20 SM	17% - 18%	11.5%	3.0%	1.5%	1.2% - 2%

Carrera 8 No. 6 C 38 Bogotá D.C. Colombia  
Código Postal 111711  
Conmutador (57 1) 381 1700  
www.minhacienda.gov.co



\*FGP. Fondo de Garantía de Pensión Mínima  
\*\*FSP. Fondo de Solidaridad Pensional

Así las cosas, en un caso típico en donde el afiliado no devenga más de 4 salarios mínimos, se puede observar que en el Régimen de Prima Media (en adelante RPMPD o RPM, indistintamente), del 16% de la cotización, el 13% de la misma se acredita en el fondo Común de Colpensiones, en tanto el 3% restante sirve para pagar a Colpensiones la comisión que recibe por la administración del régimen y para abonar a los fondos comunes de invalidez y sobrevivencia.

Por el contrario, en el Régimen de Ahorro Individual (en adelante RAIS), del 16% de cotización, el 11.5% se destina a la cuenta de ahorro individual pensional del afiliado, un 1.5% es destinado a alimentar el Fondo de Garantía de Pensión Mínima, en tanto el 3% restante se emplea para pagarles a las administradoras de pensiones los costos de administración del régimen y para pagar los seguros previsionales de los afiliados, que los cubren a ellos y a sus familias contra las contingencias derivadas de la invalidez y la muerte.

En este punto es preciso recordar que, mientras los recursos recaudados en el Régimen de Prima Media alimentan los fondos comunes de vejez, de invalidez y de sobrevivencia de Colpensiones, y sirven para el pago de las prestaciones de los actuales pensionados del Régimen de Prima Media, los recursos que recibe cada afiliado de Régimen de Ahorro Individual se acreditan en una cuenta que le pertenece exclusivamente al afiliado y cuyos recursos serán los que se tengan en cuenta para determinar valor de la pensión de vejez en ese régimen.

Ahora bien, cada uno de los Regímenes del Sistema General de Pensiones cuenta con sus propias condiciones, requisitos y beneficios, lo cual implica que las prestaciones a las que pueden acceder los afiliados pueden variar según la elección del régimen al cual cotizan y por el cual se pensionan, tal como se presenta, de forma general, en el siguiente cuadro:

CARACTERÍSTICA	SISTEMA GENERAL DE PENSIONES																								
	RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL																							
Destino de los aportes	El 13% de la cotización se destina al fondo de naturaleza común, en el cual se reciben las cotizaciones y con esos recursos se financian las pensiones de todos los pensionados del Régimen de Prima Media y sus beneficiarios.	El 11.5% de la cotización se destina a la cuenta de ahorro individual del afiliado. Con estos recursos se financia exclusivamente la pensión del afiliado y sus beneficiarios.																							
Costos de Administración y coberturas de invalidez y muerte	3% de la cotización para gastos de administración y fondos comunes de invalidez y sobrevivencia. De este 3%, Colpensiones tiene una cuota de administración de 1.09% y un 1.91% se destina a capitalizar los fondos de invalidez y sobrevivientes, pues con ellos se financian las pensiones de invalidez y sobrevivencia de los afiliados que incurran en alguna de estas contingencias, siempre que cumplan las 50 semanas de cotización en los tres años anteriores a la fecha del siniestro y demás requisitos legales.	3% de la cotización se emplea para el pago de la cuota de administración y de la prima del seguro previsional. Este porcentaje se distribuye de forma diferente en cada administradora, así:																							
	<table><tr><th>Administradora</th><th>% Administración</th><th>% Reservas invalidez /Sobrevivencia</th></tr><tr><td>Colpensiones</td><td>1.09%</td><td>1.91%</td></tr></table>	Administradora	% Administración	% Reservas invalidez /Sobrevivencia	Colpensiones	1.09%	1.91%	<table><tr><th>Administradora</th><th>% Administración</th><th>% Aseguramiento</th></tr><tr><td>Old Mutual</td><td>0.90%</td><td>2.10%</td></tr><tr><td>Protección</td><td>0.97%</td><td>2.03%</td></tr><tr><td>Porvenir</td><td>1.03%</td><td>1.97%</td></tr><tr><td>Colfondos</td><td>0.80%</td><td>2.20%</td></tr><tr><td>Colpensiones</td><td>1.09%</td><td>1.91%</td></tr></table> <p>En el RAIS los pagos del seguro previsional garantizan al afiliado que haya cumplido las 50 semanas de cobertura en los tres años anteriores a la fecha de siniestro y demás requisitos legales, que la aseguradora COMPLETE el</p>	Administradora	% Administración	% Aseguramiento	Old Mutual	0.90%	2.10%	Protección	0.97%	2.03%	Porvenir	1.03%	1.97%	Colfondos	0.80%	2.20%	Colpensiones	1.09%
Administradora	% Administración	% Reservas invalidez /Sobrevivencia																							
Colpensiones	1.09%	1.91%																							
Administradora	% Administración	% Aseguramiento																							
Old Mutual	0.90%	2.10%																							
Protección	0.97%	2.03%																							
Porvenir	1.03%	1.97%																							
Colfondos	0.80%	2.20%																							
Colpensiones	1.09%	1.91%																							

<sup>1</sup> El porcentaje máximo del 3% destinado a los gastos de administración y al pago del seguro previsional, va variando en el tiempo, sin exceder del 3%, según el valor de mercado que las compañías de seguros asignan al seguro previsional. La información presentada en el cuadro corresponde a la información del año 2021. Al respecto, es pertinente indicar que la información sobre los costos de administración y pago de la prima del seguro previsional son publicados de manera periódica por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia.

		capital que sea necesario para financiar su pensión o la de sus beneficiarios de invalidez o sobrevivencia.
Requisitos para obtener la pensión de Vejez	1300 semanas cotizadas	Contar con el capital suficiente para financiar una pensión de por lo menos el 110 % de una renta vitalicia de un SMLMV, que cubra al afiliado y su núcleo familiar.
Edad de Pensión de Vejez	62 Hombres - 57 Mujeres	62 Hombres - 57 Mujeres o antes si cuenta con el capital suficiente para pensionarse anticipadamente.
Requisitos para obtener la Garantía de pensión mínima de vejez.	1300 semanas cotizadas y contar con la edad mínima de 57 años y 62 años según el caso.	1150 semanas cotizadas, y contar con la edad mínima de 57 o 62 años según el caso.
Monto de la pensión	Corresponde a un monto fijo establecido en la norma según formula porcentual, que se calcula sobre el promedio del ingreso base de cotización de los últimos 10 años.	El valor de la pensión no es fijo y depende del capital ahorrado, de tal manera que la mesada corresponderá al valor del ahorro realizado con sus respectivos rendimientos, más el bono pensional si a él hay lugar, dividido por el número de meses que vivirán el afiliado y sus beneficiarios.
Requisitos para obtener la pensión de invalidez y sobrevivencia, monto y financiación.	<p><b>Invalidez:</b> Tener una pérdida de capacidad laboral superior al 50% de origen común y tener 50 semanas cotizadas, en los tres años anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez.</p> <p><b>Sobrevivencia:</b> Fallecer por causas de origen común y tener 50 semanas cotizadas, en los tres años anteriores a la fecha de la muerte.</p> <p><b>Monto:</b> Entre el 45% - 75% del promedio de las cotizaciones de los últimos 10 años, según grado de invalidez y número de semanas cotizadas.</p> <p><b>Financiación:</b> Esta pensión se financia con el Fondo común de invalidez o sobrevivencia, según corresponda, administrado por Colpensiones.</p>	<p><b>Invalidez:</b> Tener una pérdida de capacidad laboral superior al 50% de origen común y tener 50 semanas cotizadas, en los tres años anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez.</p> <p><b>Sobrevivencia:</b> Fallecer por causas de origen común y tener 50 semanas cotizadas, en los tres años anteriores a la fecha de la muerte.</p> <p><b>Monto:</b> Entre el 45% - 75% del promedio de las cotizaciones de los últimos 10 años, según grado de invalidez y número de semanas cotizadas.</p> <p><b>Financiación:</b> Estas pensiones se financian con los recursos acreditados en la cuenta del afiliado, y el capital que aporta la Aseguradora Previsional, para COMPLETAR el capital que sea necesario para financiar una pensión al afiliado y sus beneficiarios.</p>
Prestaciones sustitutivas, en caso de no cumplir requisitos de pensión.	<p>Indemnización sustitutiva:</p> <p>Corresponde a los aportes ajustados por inflación.</p>	<p>Devolución de saldos:</p> <p>Corresponde a los aportes ajustados por inflación + rendimientos reales.</p>
Administradora	Colpensiones (Entidad pública).	Porvenir, Protección, Skandia y Colfondos (Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantía de naturaleza privada).

Fuente: DGRESS – MHCP.

Como se puede observar, en el Sistema General de Pensiones existen diferencias sustanciales entre los dos regímenes pensionales, tanto en la etapa de cotización, como en la etapa de reconocimiento pensional. Así las cosas, el Régimen de Prima Media con Prestación Definida (RPMPD), es un sistema en el que los afiliados o eventuales beneficiarios obtienen un beneficio pensional del sistema (pensión de vejez, de invalidez o de sobrevivientes o una indemnización sustitutiva) cuyo monto se encuentra previamente definido por la Ley. En este régimen, los aportes y los rendimientos constituyen un fondo común de naturaleza pública, con el cual se pagan las prestaciones de los pensionados y sus beneficiarios.

Por otra parte, encontramos el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS), en el cual los aportes efectuados por los afiliados durante su vida laboral y los rendimientos generados por las cotizaciones se capitalizan en una cuenta de ahorro individual del afiliado; estos dineros le permiten al afiliado obtener el pago





de la prestación que corresponderá al valor ahorrado en su cuenta pensional. **En el RAIS, el monto de la prestación por vejez es variable** a partir de una cotización definida. En el monto de la prestación inciden aspectos como: los recursos acumulados en la cuenta, la edad a la cual el afiliado desea pensionarse, la modalidad de la pensión elegida, las semanas cotizadas y la rentabilidad de los ahorros acumulados en la cuenta pensional.

- b. Cuál ha sido la evolución de la legislación en materia de traslados de un régimen de pensiones a otro? ¿Cuáles son las razones de (i) política económica y (ii) garantía del derecho constitucional a la seguridad social en pensiones que determinaron las reglas vigentes sobre traslados de un régimen a otro?**

Inicialmente, en la Ley 100 de 1993<sup>2</sup>, se estableció que los afiliados al Sistema General de Pensiones podían escoger libremente el régimen de pensiones que prefiriesen. Sin embargo, una vez efectuada la selección, sólo podrían trasladarse de régimen cada tres (3) años.

Es de señalar que esta disposición fue regulada a través del Decreto 692 de 1994, en el que expresamente se indicó: (i) la selección del régimen implica la aceptación de las condiciones propias del régimen elegido (artículo 11), (ii) la selección de uno cualquiera de los regímenes es libre y voluntaria por parte del afiliado (artículo 11), (iii) cuando se trate de trabajadores con vinculación contractual, legal o reglamentaria, la selección efectuada deberá ser informada por escrito al empleador al momento de la vinculación o cuando se traslade de régimen o de administradora, con el objeto de que éste efectúe las cotizaciones a que haya lugar (artículo 11), (iv) **las personas que decidan afiliarse voluntariamente al sistema, manifestarán su decisión al momento de vincularse a una determinada administradora** (artículo 11), (v) **si el afiliado se traslada por primera vez del Régimen de Prima Media con Prestación Definida al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, en el formulario debe quedar consignado que la decisión de trasladarse al régimen seleccionado se ha tomado de manera libre, espontánea y sin presiones, para tal efecto el formulario puede contener la leyenda pre-impresa en este sentido** (artículo 11) y (vi) efectuada la selección de uno cualquiera de los regímenes pensionales, mediante el diligenciamiento del formulario, los afiliados no podrán trasladarse de régimen, antes de que hayan transcurrido tres años contados desde la fecha de la selección anterior (artículo 15).

Así mismo, por el mismo año de 1994, se expidió el Decreto 1161, hoy compilado en el Decreto 1833 de 2016, en el que se consagra el derecho que tienen los afiliados de retractarse de su decisión o elección de régimen pensional en los 5 días siguientes a la suscripción del formulario.

Posteriormente, el literal e) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993 fue modificado por el artículo 2 de la Ley 797 de 2003 (norma que se encuentra vigente en nuestro ordenamiento jurídico), siendo regulado a través del Decreto 3800 de 2003, indicando que los afiliados al Sistema General de Pensiones pueden escoger el régimen de pensiones que prefieran. Sin embargo, una vez efectuada la selección, sólo pueden trasladarse de régimen por una sola vez cada cinco (5) años, contados a partir de la selección inicial.

También, establece esta disposición, que desde el 29 de enero de 2003 y hasta el 28 de enero de 2004, los afiliados podían trasladarse en cualquier momento, dándoles un periodo de gracia de un año. Sin embargo, indicó la norma que, a partir del 29 de enero del 2004, ningún afiliado puede trasladarse de régimen cuando se encuentre a diez (10) años o menos para cumplir la edad de pensión de vejez.<sup>3</sup>

Ahora bien, con el fin de dar claridad sobre las razones de garantía del derecho constitucional a la seguridad social en pensiones que determinaron las reglas vigentes sobre traslados de un régimen a otro, es preciso indicar que el periodo de carencia de los últimos 10 años introducido con la Ley 797 de 2003, no vulnera el

<sup>2</sup> Literal e) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993.

<sup>3</sup> e. Literal modificado por el artículo 2 de la Ley 797 de 2003. Los afiliados al Sistema General de Pensiones podrán escoger el régimen de pensiones que prefieran. Una vez efectuada la selección inicial, estos sólo podrán trasladarse de régimen por una sola vez cada cinco (5) años, contados a partir de la selección inicial. Después de un (1) año de la vigencia de la presente ley, el afiliado no podrá trasladarse de régimen cuando le faltaren diez (10) años o menos para cumplir la edad para tener derecho a la pensión de vejez.



derecho pensional de ningún afiliado, en la medida que: (i) si bien, en ambos regímenes las prestaciones a obtener tienen parámetros diferentes, por ejemplo, en el RAIS, la garantía de pensión mínima de pensión se obtiene con 1150 semanas de cotización, mientras que en Colpensiones se obtiene con 1300 semanas cotizadas), los dos regímenes garantizan a quien cumpla los requisitos allí establecidos la obtención de las prestaciones que permitan la cobertura de las contingencias de vejez, invalidez y muerte; (ii) no atenta contra el derecho de selección del afiliado de someterse a uno u otro régimen porque esa decisión es libre y voluntaria hasta que empiezan los 10 años de restricción, (iii) genera como efecto positivo incentivar la responsabilidad individual y social en cabeza de los afiliados de escoger oportunamente el régimen que deseen, (iv) la modificación normativa, que impulsó dicha restricción, contempló un periodo de gracia de un año para que los afiliados pudieran trasladarse en caso de haberse visto perjudicados por la disposición y (v) fue inaplicable para las personas que reunían las condiciones del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y que, habiéndose trasladado al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, no se hayan regresado al Régimen de Prima Media con Prestación Definida, quienes pueden regresar a éste -en cualquier tiempo-.

Adicionalmente, frente a las razones de política económica, se observa que la norma tiene como objeto: (i) garantizar la estabilidad y sostenibilidad del sistema general de pensiones, al controlar el fenómeno denominado "riesgo moral" de los afiliados que, con decisiones oportunistas (es decir a menos de 10 años de pensionarse), generan un impacto negativo en la sostenibilidad financiera del Régimen de Prima Media, (ii) lograr una adecuada planeación financiera y presupuestal del sistema pensional, en esta medida se debe tener una fecha de corte para poder hacer las estimaciones actuariales y financieras del sistema, pues si se permitiera el traslado en el último año antes de pensionarse, es posible que en vez de pagar por 1.500.000 pensionados en un año, el régimen administrado por Colpensiones tuviese que pagar 1.700.000 pensionados, sin que se hubieran efectuado las provisiones presupuestales para tal efecto; y por último (iii) adecuar los pagos del sistema pensional a cargo de la Nación conforme al marco fiscal de mediano plazo que también se proyecta a 10 años, permitiendo que el sistema guarde su equilibrio financiero y la Nación su equilibrio fiscal, al poder determinar cuáles son las obligaciones futuras tanto de Colpensiones como del Estado para este periodo de tiempo.

De igual manera, como complemento de la respuesta anterior, es preciso tener en cuenta las consideraciones de la Honorable Corte Constitucional que, al estudiar la exequibilidad del periodo de carencia, concluyó, mediante Sentencia C-1024 del 20 de octubre de 2004, emitida por el Magistrado Ponente Dr. Rodrigo Escobar Gil, lo siguiente:

1. El periodo de carencia previsto en la norma no vulnera el derecho a la igualdad, ni ningún otro principio o derecho fundamental que emane de las relaciones de trabajo, en la medida en que ***“... el derecho a la libre elección entre los distintos regímenes pensionales previstos en la ley, no constituye un derecho absoluto, por el contrario, admite el señalamiento de algunas excepciones que, por su misma esencia, pueden conducir al establecimiento de una diversidad de trato entre sujetos puestos aparentemente en igualdad de condiciones, tales como, el señalamiento de límites para hacer efectivo el derecho legal de traslado entre regímenes pensionales.”*** (negrilla fuera de texto)
2. El periodo de carencia, conforme al cual el afiliado no puede trasladarse de régimen cuando le faltaren diez (10) años o menos para cumplir la edad para tener derecho a la pensión de vejez, es razonable y proporcional, en la medida en que ***“... el objetivo perseguido por la disposición demandada consiste en evitar la descapitalización del fondo común del Régimen Solidario de Prima Media con Prestación Definida, y simultáneamente, defender la equidad en el reconocimiento de las pensiones del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad...”*** (negrilla fuera de texto)
3. El objetivo perseguido con el señalamiento del periodo de carencia es el de ***“... evitar la descapitalización del fondo común del Régimen Solidario de Prima Media con Prestación Definida, que se produciría si se permitiera que las personas que no han contribuido al fondo común y que, por lo mismo, no fueron tenidas en consideración en la realización del cálculo actuarial para determinar las sumas que representarán en el futuro el pago de sus pensiones y***





*su reajuste periódico; pudiesen trasladarse de régimen, cuando llegasen a estar próximos al cumplimiento de los requisitos para acceder a la pensión de vejez, lo que contribuiría a desfinanciar el sistema y, por ende, a poner en riesgo la garantía del derecho irrenunciable a la pensión del resto de cotizantes. No sobra mencionar en este punto, que el sustento actuarial es el que permite asumir los riesgos que se encuentran involucrados con el sistema y que, en ese orden de ideas, su falta de ajuste con la realidad económica del país, simplemente podría llegar a poner en riesgo la garantía del derecho pensional para los actuales y futuros pensionados. (negrilla fuera de texto)*

4. En la medida en que el Régimen de Prima Media se sostiene sobre las cotizaciones efectivamente realizadas en la vida laboral de los afiliados, permitir que una persona próxima a la edad de pensionarse arbitre el sistema y se beneficie y resulte subsidiada por las cotizaciones de los demás, **“... resulta contrario al concepto constitucional de equidad (C.P. art. 95), y al principio de eficiencia pensional, cuyo propósito consiste en: obtener la mejor utilización económica de los recursos administrativos y financieros disponibles para asegurar el reconocimiento y pago en forma adecuada, oportuna y suficiente de los beneficios a que da derecho la seguridad social. Este principio en materia pensional se manifiesta en el logro de la sostenibilidad financiera autónoma del sistema integral de seguridad social en pensiones, en aras de garantizar ‘el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones legales’, en los términos previstos en el artículo 53 del Texto Superior”.** (negrilla fuera de texto)
  5. El periodo de carencia evita que se impongan otros mecanismos legales más gravosos para los afiliados para conservar la sostenibilidad financiera del sistema, tales **“... como, por ejemplo, la reducción del número de mesadas pensionales pagaderas en un año o la imposición de un porcentaje que reduzca el valor de la pensión a cancelar”.**
  6. La norma NO puede ser aplicada a las personas que reúnen **las condiciones del régimen de transición** previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y que, habiéndose trasladado al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, no se hayan regresado al Régimen de Prima Media con Prestación Definida, quienes pueden regresar a éste -en cualquier tiempo-, siempre que cumplan con los requisitos establecidos en la Sentencia SU-062 de 2010, esto es que: (i) el afiliado tenga a la fecha de entrada en vigencia del Sistema General de Pensiones, es decir el 1º de abril de 1994, quince (15) años de servicios cotizados para la pensión de vejez, equivalentes a setecientos cincuenta (750) semanas, (ii) se traslade a Colpensiones todos los aportes pensionales (ahorro) que haya acumulado en su cuenta de ahorro individual, (iii) el ahorro efectuado en el Régimen de Ahorro Individual, incluidos sus rendimientos y el valor correspondiente del Fondo de Garantía de Pensión Mínima del referido régimen, no sea inferior al monto total que habría obtenido en caso que hubiere permanecido en el Régimen de Prima Media, (iv) en caso de que el valor a trasladar del RAIS al RMPD sea inferior al que se hubiera efectuado en Colpensiones, el afiliado deberá pagar con sus propios recursos el valor diferencial, para poder completar el traslado.
- c. **¿Cuándo se materializa un traslado del Régimen de Ahorro Individual al de Prima Media, ¿qué valores se trasladan de la cuenta de cada afiliado, o qué montos son los que se entregan a la nueva administradora? ¿Estos valores son equivalentes a lo que se hubieren aportado o generado en caso de haber estado afiliado siempre al RPM? En caso negativo, ¿cómo se explica esa diferencia?**

Como se indicó en el literal a) del presente cuestionario, para los afiliados a un Fondo de Pensiones, el aporte mensual para acrecentar el ahorro pensional corresponde al 16% del salario (para los dependientes el 12% lo asume el empleador y el 4% lo aporta el afiliado). Si el salario es mayor o igual a 4 SMMLV el afiliado realiza un

aporte adicional al Fondo de Solidaridad Pensional, este porcentaje depende del salario y va desde 1% al 2% (del salario).

IBC	Cotización RAIS	Cuenta de Ahorro individual	% administración y seguro Previsional	FGP	FSP
< 4 SM	16%	11.5%	3.0%	1.5%	0%
4 SM a 16 SM	17%	11.5%	3.0%	1.5%	1%
16SM A 20 SM	17% - 18%	11.5%	3.0%	1.5%	1.2% - 2%

En este punto es de recordar que, el valor límite de los costos de administración y el pago del aseguramiento de invalidez y sobrevivencia es del 3% para todas las administradoras del sistema, el cual, en todo caso puede distribuirse internamente en cada administradora de forma diferente, como se puede observar en el siguiente cuadro:

Administradora	% Administración	% Aseguramiento
Old Mutual	0.90%	2.10%
Protección	0.97%	2.03%
Porvenir	1.03%	1.97%
Colfondos	0.80%	2.20%
Colpensiones	1.09%	1.91%

Ahora bien, en un traslado normal los valores que se entregan a la nueva administradora (en este caso, Colpensiones), corresponden a: (i) el capital ahorrado en la cuenta individual más los rendimientos generados, (ii) los aportes realizados al Fondo de Garantía de Pensión Mínima también con sus rendimientos.

No es objeto de traslado el valor del bono pensional, en la medida en que no se ha efectuado su pago o con el bono pensional tipo A pagado al RAIS no se financian las pensiones del RPMPD, pues el fundamento normativo que da lugar a la expedición del bono, resulta ser precisamente la pertenencia a uno u otro régimen. Tampoco se traslada el valor de los costos de administración, en la medida en que se consumieron en las actividades de la administradora como son la creación de la cuenta, la acreditación de los aportes, los cobros de aportes en mora, la administración financiera de recursos, la atención al cliente, el reconocimiento de pensiones y los pagos de la nómina de pensionados, entre otros.

Tampoco es objeto de traslado el porcentaje de los recursos destinados al pago de los seguros previsionales, pues con ellos se le pagó a la aseguradora la prima que protege al afiliado y sus beneficiarios, por el periodo de cobertura, de las contingencias derivadas de la invalidez y la sobrevivencia. En este punto es de recordar, que, si una persona se traslada de régimen, posteriormente es calificada por la nueva administradora, y la Fecha de Estructuración de la Invalidez (FEI) es anterior a la fecha de traslado, corresponderá conocer del trámite de pensión de invalidez a la administradora de pensiones en la que se encontraba afiliada dicha persona al momento en que ocurre el siniestro, pues fue esa entidad la que recibió el pago del aseguramiento.

Por otra parte, en un traslado por recuperación de régimen de transición, el traslado es diferente en la medida en que, si el ahorro en el RAIS no fuera equivalente al que se hubiera efectuado en el RPMPD, el afiliado debe pagar la diferencia entre lo ahorrado entre el Régimen de Ahorro Individual y el monto total del aporte legal correspondiente, en caso que hubiera permanecido en el Régimen de Prima Media, lo anterior, en cumplimiento de lo ordenado por la jurisprudencia constitucional ya reseñada. Además de lo anterior, debe efectuarse el



traslado del capital ahorrado y del aporte al Fondo de Garantía de Pensión Mínima, con sus respectivos rendimientos.

Finalmente, frente a la pregunta de si los valores trasladados del RAIS al RPMPD son equivalentes a los que se hubieren aportado o generado en caso de haber estado afiliado siempre al Régimen de Prima Media, es necesario aclarar que esta regla solo se aplica por mandato particular de la Corte Constitucional, frente a los beneficiarios del régimen de transición, para quienes si es posible que en un periodo determinado de tiempo, los recursos cotizados en el RAIS no sean equivalentes a lo que hubieran ahorrado en el RPMPD, debido a las fluctuaciones del mercado, evento en el cual debe hacerse uso de la regla consagrada en la Sentencia SU-062 de 2010.

**d. ¿En qué tipo de gastos de administración o asociados, -de seguros, por ejemplo-, incurre una entidad administradora de cada uno de los regímenes a lo largo de la permanencia de un afiliado y/o pensionado, que deban ser considerados al momento de ordenar un traslado?**

La distribución del 3% de los gastos de administración y aseguramiento actual en las administradoras del RAIS y Colpensiones, es la siguiente:

Administradora	% Administración	% Aseguramiento
Old Mutual	0.90%	2.10%
Protección	0.97%	2.03%
Porvenir	1.03%	1.97%
Colfondos	0.80%	2.20%
Colpensiones	1.09%	1.91%

Como se indicó en la repuesta anterior, con el porcentaje establecido para los costos de administración, las administradoras de pensiones, incluida Colpensiones, pagan la creación de la cuenta, la acreditación de los aportes, los cobros de aportes en mora, la reconstrucción de la historia laboral para bono pensional, la administración financiera de recursos (mesa de dinero o mesa de inversión), la atención al cliente, el reconocimiento de pensiones y los pagos de la nómina de pensionados, entre otros,

Por otra parte, el porcentaje destinado al aseguramiento del afiliado frente a los riesgos derivados de la invalidez y la sobrevivencia, que en Colpensiones corresponde a un 1.91%, se destina a capitalizar los fondos de invalidez y sobrevivientes, pues con ellos se financian las pensiones de invalidez y sobrevivencia de los afiliados que incurran en alguna de estas contingencias, siempre que cumplen las 50 semanas de cotización en los tres años anteriores a la fecha del siniestro y demás requisitos legales. Mientras que en el Régimen de Ahorro Individual ese porcentaje se emplea para pagar a las aseguradoras del mercado, la prima del seguro previsional, mediante el cual se garantiza al afiliado que haya cumplido las 50 semanas de cobertura en los tres años anteriores a la fecha de siniestro y demás requisitos legales, que la aseguradora COMPLETE el capital que sea necesario para financiar su pensión de invalidez o sobrevivencia.

Ahora bien, al momento del traslado, los valores relacionados con los seguros (que ya fueron cubiertos) y gastos por administración (por los periodos transcurridos), no forman parte del monto ahorrado para la pensión, y, por tanto, estos valores no deben considerarse recursos a trasladar, pues tuvieron como objeto sustentar la operación de las administradoras y la financiación de las pensiones de invalidez y muerte.

**SEGUNDO EJE TEMÁTICO**



- a. ***¿Cuáles son los datos de litigiosidad judicial en materia de anulación de traslado de régimen pensional para obtener la pensión de vejez? Tener en cuenta como criterios relevantes (i) casos iniciados antes de pensionarse y después de haberse pensionado; (ii) caracterización del sujeto que pretende el traslado -edad, género, diferencia estimada en el monto de la pensión, y acceso a la pensión en cada régimen (por ej. beneficiarse de régimen de transición, entre otras)-; y (iii) casos en los que el litigio se inició faltando 10 años o menos para pensionarse y aquellos en los que restaba un lapso superior para adquirir la pensión.***

Conforme a los datos remitidos por Colpensiones, a esta cartera ministerial, encontramos, con corte a agosto de 2021, alrededor de 43.277 demandas de afiliados por nulidad de traslado, de las cuales han finalizado aproximadamente 11.104 procesos, con un porcentaje de sentencia desfavorable para Colpensiones del 92.3% (10.248). Sin embargo, conforme a los datos de las AFPS, los procesos llegan a ser poco más de 50.000, de los cuales miles de ellos no le han sido notificados a Colpensiones.

Con respecto a las demandas de pensionados, teníamos entendido que ascendían a 1200 aproximadamente, que han venido creciendo exponencialmente (1900), como consecuencia de las nuevas sentencias emitidas por la Corte Suprema de Justicia y de algunos tribunales y jueces de instancia.

Es importante señalar en este punto que esta cartera ministerial conoce los datos generales de litigiosidad reportados por Colpensiones. Sin embargo, los datos exactos de edad, género, diferencia estimada en el monto de la pensión entre regímenes, régimen de transición y los casos en los que el litigio se inició faltando 10 años o menos para pensionarse, y aquellos en los que restaba un lapso superior para adquirir la pensión, deben ser suministrados por las administradoras de pensiones directamente.

No obstante lo anterior, de las bases de datos con las que fueron realizadas las proyecciones del efecto fiscal, se encuentra que no todos los afiliados son afiliados lego<sup>4</sup>. La gran mayoría de los afiliados que hoy están demandando, devengan entre 4 y 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes, y son los que generan el 82.2% del déficit fiscal de la nulidad de afiliación, es decir, aproximadamente 29 billones de pesos del total de 35 billones.

De otra parte, al estudiar algunas casuísticas de la solicitud de ineficacia y nulidad de afiliación, se encuentra que la mayoría de demandantes son personas con cargos importantes en la empresa privada o en el sector público, quienes difícilmente pueden alegar la falta de información como excusa para no haberse traslado antes del periodo de carencia. En este punto es preciso recordar que, entre los demandantes hay congresistas, secretarios generales de entidades públicas, jueces, funcionarios públicos de nivel directivo del sector nacional, gerentes y trabajadores de los fondos de pensiones, agentes comerciales de las AFP, gerentes de bancos, entre otros.

Por lo anterior, resulta inequitativo que se haya trasladado la carga de la prueba al Fondo de Pensiones, en la medida en que los afiliados no son afiliados lego, pero además pudieron haber solicitado la información necesaria para efectuar su traslado de régimen en tiempo, y no lo hicieron, haciendo creer que toda la responsabilidad recae en el fondo de pensiones, cuando en realidad no hicieron el menor esfuerzo para informarse de un régimen u otro, y esperaron el último momento para saber cuál era la opción que más les beneficiaba, poniendo en riesgo la estabilidad financiera del fondo común de Colpensiones.

- b. ***Teniendo en cuenta las anteriores cifras, (i) ¿cuáles son las valoraciones de impacto fiscal y de sostenibilidad financiera del Sistema General de Seguridad Social en Pensiones que se estiman frente al eventual traslado de régimen pensional, por anulaciones judiciales decretadas en favor de personas a las que les resta menos de 10 años para pensionarse y de aquellas que ya están gozando de la pensión? Explicar las fuentes, formulas y demás criterios relevantes para la comprensión del diagnóstico; y (ii) ¿cuál es el efecto diferencial***

<sup>4</sup> Entiéndase por afiliado lego la caracterización de aquellas personas que no tienen conocimiento ni experiencia sobre un tema particular.



que el impacto fiscal podría tener sobre grupos económica o socialmente vulnerables (por ejemplo, efecto diferenciado por rangos salariales y género)?

1. Impacto por procesos judiciales en curso vs sffiados a los que les falta menos de 10 años para cumplir la edad mínima

En el siguiente cuadro se presenta una proyección del impacto por efecto de los procesos judiciales en curso, a partir de la información reportada por Colpensiones, con corte a agosto de 2021, versus el impacto estimado si la jurisprudencia vigente se extendiera a un porcentaje de la población que está afiliada al RAIS y que le faltan menos de 10 años para pensionarse.

	Impacto estimado 43.277 procesos	Total de la población afiliados al RAIS que les faltan menos de 10 años para pensionarse: 478.000	Efecto fiscal
Número de demandas	43.277 presentadas	223.306 Proyectadas que se presentarían	
Número demandas con sentencia desfavorable, ordenado nulidad de afiliación al RAIS	39.941 (Porcentaje de pérdida 92.4%)	223.306 (Porcentaje de pérdida es del 100%)	
Número de personas que se trasladan por efecto de la sentencia, que se pensionarían en Colpensiones	23.565	131.751	
Valor de los ingresos a Colpensiones por trasladado de las cuentas individuales (\$Billones)	5,3	29,4	Disminuye el déficit de la Nación
Valor del menor pasivo por bonos pensionales Tipo A anulados netos por los traslados (\$Billones)	1,8	9,9	Disminuye el déficit de la Nación
Valor del pasivo pensional de las pensiones reconocidas en el RPM, por efecto de los traslados (\$ Billones)	12,8	71,8	Aumenta el déficit de la Nación
Valor de las indemnizaciones sustitutivas de afiliados trasladados al RPM (\$ Billones)	0,4	2,5	Aumenta el déficit de la Nación
Valor del impacto fiscal neto (\$ Billones)	6,3	35,0	Total del déficit para la Nación

Elaborado por MHCP, DGRESS. Fuentes: Colpensiones, Superintendencia Financiera.

El impacto fiscal neto estimado por efecto de los procesos judiciales en curso es de \$6,3 billones en valor presente de 2021 y representa un 18% del impacto total estimado que puede llegar a ser de \$35,0 billones de considerarse un aproximado de223.305 demandantes.

También es de anotar que el impacto fiscal de estos traslados está altamente concentrado en los rangos salariales más altos, como resultado de los mayores subsidios que estos grupos reciben, en la medida en que, en el escenario presentado, el conjunto de los afiliados con aportes de más de 4 SML hasta 25 SML, que representan el 25,5% de la población demandante, es decir alrededor de 55.826 de un total de demandantes de 223.305, recibirían el 82,8% de los subsidios, esto es 29 billones del total del déficit de la Nación aquí calculado.

A continuación, se hace una explicación de las fuentes, las fórmulas y los principales criterios y variables aplicados:

Fuentes

La fuente de estadísticas de afiliados y pensionados del RAIS y de Colpensiones es la Superintendencia Financiera de Colombia, a partir de la información anonimizada de las entidades que supervisa.

La fuente de la información estadística de procesos judiciales en curso es Colpensiones.

### Fórmulas

Las siguientes fórmulas fueron utilizadas para la estimación del impacto del traslado de afiliados. .

En particular, la siguiente fórmula se utiliza para estimar el pasivo total por efecto de la pensión de un **afiliado** que se traslada a Colpensiones y se proyecta que va a reunir los requisitos para pensión:

$$\text{Pasivo total} = \text{Ingreso Base} * \text{Tasa de remplazo proyectada} * \text{Factor actuarial}$$

Ahora bien, el traslado extemporáneo implica a su vez la anulación del bono pensional si el afiliado tenía derecho al mismo y al traslado del valor acumulado de la cuenta de ahorro individual hacia Colpensiones, incluyendo, además, los aportes efectuados al Fondo de Garantía de Pensión Mínima, de manera que para obtener el pasivo neto a cargo de Colpensiones al pasivo total deben restársele estos conceptos:

#### *Pasivo Neto pensión*

$$= \text{Pasivo total} - \text{Bono pensional anulado} - \text{Saldo de la cuenta individual}$$

En donde el saldo positivo del pasivo neto es el subsidio a cargo de Colpensiones. Es importante precisar que todos estos montos se presentan en valor presente al momento de cumplir la edad mínima para obtener la pensión.

En el caso de una persona que se traslada y no alcanza a reunir las semanas para pensionarse, Colpensiones reconoce una indemnización sustitutiva, de manera que el efecto fiscal es:

#### *Pasivo Neto indemnización*

$$= \text{Devolución de saldos} - \text{Bono pensional anulado} \\ - \text{Saldo de la cuenta individual}$$

En este caso de la indemnización, el pasivo neto puede ser negativo, lo que significaría un efecto fiscal a favor de Colpensiones.

La suma de los valores individuales de pasivo neto así obtenidos corresponde al impacto fiscal de las personas incluidas en la estimación.

Por otra parte, en el caso de los **pensionados** que se trasladan del RAIS a Colpensiones, en las respuestas a las tutelas se utiliza la información reportada en los antecedentes presentados para estimar los subsidios generados de cada caso individual. Para el cálculo global del traslado de pensionados, al no contarse con información individualizada, el impacto se calcula de manera global y aplicando promedios a partir de las estadísticas publicadas por la Superintendencia Financiera de Colombia. En este caso el subsidio a cargo de Colpensiones por las mesadas posteriores al traslado se calcula de la siguiente forma:

$$\text{Subsidio pensionado} = (\text{Mesada Colpensiones} - \text{Mesada RAIS}) * \text{Factor actuarial}$$

En donde el saldo positivo representa el subsidio a cargo de Colpensiones. Si se aplica lo dispuesto en un fallo reciente del Juzgado 3° Laboral del Circuito de Cali, a este subsidio habría que restarle los valores de las mesadas ya pagadas, el valor adicional que hubiera tenido la pensión al ser reconocida en Colpensiones y el traslado del saldo disponible en la cuenta individual del pensionado en el RAIS, de manera que se aplicaría la siguiente fórmula:

$$\text{Subsidio neto} = \text{Subsidio pensionado} - \text{traslado de saldo cuenta} - \text{mesadas anteriores}$$



En donde el saldo positivo representaría el subsidio a cargo de Colpensiones y los valores se presentan en valor presente a la fecha en que se hace efectivo el traslado de la pensión. Por tanto, el contenido de esta fórmula puede variar dependiendo de las exigencias de los fallos presentados.

### **Criterios y/o variables aplicados o tenidos en cuenta**

Como puede verse en las fórmulas anteriormente expuestas, las variables aplicadas incluyen:

Ingreso Base: Se toma la información disponible de ingreso de los últimos 10 años reportada en la base de datos.

Tasa de remplazo proyectada: Se estima a partir del número de semanas cotizadas reportado en la base de datos y del número de semanas que se espera aporte en adelante la persona, a partir de su comportamiento histórico de cotización. Se aplica la fórmula de tasa de remplazo que corresponda de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 100 de 1993.

Factor actuarial: Se puede entender como capital necesario, medido en número de mesadas, que con los rendimientos a la tasa proyectada alcanza a cubrir los pagos de la pensión durante la vida esperada de los beneficiarios. En este caso se calcula a partir de las tablas de mortalidad de la Superintendencia Financiera de Colombia, suponiendo que al morir cada pensionado tiene un cónyuge que lo sustituye en el disfrute de la pensión. Para los hombres el cónyuge se supone 5 años menor y para las mujeres se supone 5 años mayor.

Bono pensional anulado: El valor del bono pensional reportado en la base de datos es actualizado hasta la fecha esperada de corte del cálculo y se supone que es un valor inicialmente previsto que la Nación ya no debe pagar por efecto del traslado del afiliado a Colpensiones.

Saldo de la cuenta individual: Corresponde al monto acumulado en la cuenta individual del afiliado por efecto de los aportes que ha efectuado al RAIS y sus respectivos rendimientos financieros, además de los recursos aportados al Fondo de Garantía de Pensión Mínima. El total de estos recursos es trasladado a Colpensiones al hacerse efectivo el traslado del afiliado.

Finalmente, en cuanto a los criterios aplicados para definir la población que se incluye en la estimación del impacto por los traslados, cabe referirse a las premisas expuestas en el literal a) del eje temático 2. **Impacto fiscal por el traslado de afiliados que ya se han pensionado en el RAIS**

En el caso de los pensionados hay cuatro diferentes casuísticas, de las cuales se procede a hacer un breve resumen y exponer sus efectos sobre el Sistema General de Pensiones y su equilibrio:

1. Mediante providencia número SL373-2021, la Corte Suprema indica que no procede la nulidad de traslado, en la medida en que *el pensionado se encuentra en una situación jurídica consolidada y a un hecho consumado, cuyos intentos de revertir podría afectar derechos, deberes, relaciones jurídicas e intereses de un gran número de actores del sistema y, en especial, tener un efecto financiero desfavorable en el sistema público de pensiones. (...).*

Sin embargo, acto seguido el Alto Tribunal indica que, en todo caso, *“... el pensionado que se considere lesionado en su derecho no pueda obtener su reparación. Es un principio general del derecho aquel según el cual quien comete un daño por culpa, está obligado a repararlo (art. 2341 CC). Por consiguiente, si un pensionado considera que la administradora incumplió su deber de información (culpa) y, por ello, sufrió un perjuicio en la cuantía de su pensión, tiene derecho a demandar la indemnización total de perjuicios a cargo de la administradora.”*

Con lo anterior, la Corte Suprema desconoce el precedente de la Corte Constitucional contenido en la Sentencia C-086 de 2002, mediante la cual indica, que *“no puede haber desconocimiento del derecho*



*a la igualdad en el caso de las normas acusadas pues la Ley 100 de 1993 contiene una regulación diferente para cada uno de los regímenes pensionales, apoyada en el principio de la libre elección que permite a los afiliados escoger el subsistema que más se ajuste a sus necesidades, de tal suerte que el futuro pensionado se somete por su propia voluntad a un conjunto de reglas diferentes para uno y otro régimen, y **simplemente se hará acreedor a los beneficios y consecuencias que reporte su opción.*** (negrilla fuera de texto)

Ahora bien, en la medida en que mediante la sentencia anteriormente referenciada se generaliza la idea de que la falta de información genera un daño por culpa, desconoce por una parte la máxima según la que la Ley es de público conocimiento y por otra parte, el deber de diligencia y responsabilidad propia del afiliado, así como la normatividad vigente para la época del traslado sobre la información a entregar por parte de las administradoras en relación con el sistema, ignorando el hecho de que los demandantes en la mayoría de los casos no corresponden a afiliados o pensionados lego, sino profesionales con altos cargos en la empresa privada o en el sector público, incluso asesores del sector pensional, que mal pueden alegar la falta de información como excusa para no haberse trasladado antes del periodo de carencia.

Como consecuencia se puede observar que los pensionados y los afiliados, con base en esta sentencia, han iniciado una cantidad considerable de demandas buscando la indemnización por daños y perjuicios, con el agravante de que el hecho causante no debe probarse, pues conforme con la decisión del Alto Tribunal, el solo hecho de no haber recibido asesoría en las condiciones normativas actuales, y no bajo las normas vigentes en su momento, resulta prueba suficiente de la culpa de la Administradora de Pensiones, desconociendo que el afiliado en razón de sus libertades individuales pudo haber acudido, antes del inicio del periodo de carencia, a cualquier instancia dentro de la AFP, como el defensor de consumidor financiero, o fuera de ella (por ejemplo al Ministerio de Trabajo o la Superintendencia Financiera de Colombia), para informarse de las condiciones pensionales en uno u otro régimen o pudo haber empleado herramientas diferentes como la opción de retracto o incluso el propio traslado antes de ingresar en el periodo de carencia.

Ahora bien, en caso de generalizarse esta práctica, se pondría en riesgo la estabilidad del Sistema General de pensiones, pues, en el caso hipotético de la liquidación de las AFP estaríamos ante un sistema puramente de prestación definida, lo que llevaría a la Nación a niveles de endeudamiento similares a los que tenía antes de la Ley 100 de 1993, además de amparar un sistema pensional inequitativo, en donde las personas de mayores ingresos reciben la mayor parte de los subsidios, como se verá más adelante.

2. En la segunda casuística que hemos conocido, se puede observar que el juez ordena a la AFP que pague el valor de la mesada pensional que el afiliado hubiera tenido en el RPPD, de haberse pensionado en ese régimen.

Esta sentencia, desconoce que los regímenes pensionales son diferentes y las prestaciones son diferentes, vulnerando el precedente contenido en la sentencia C 086 de 2002, ignorando las diferencias en la construcción financiera y actuarial de la prestación, y los postulados legales establecidos en la Ley 100 de 1993.

Ahora bien, dado que en la cuenta de ahorro individual del pensionado solo se encuentran los saldos para reconocer la pensión que le fue reconocida, el resto de recursos para pagar la pensión que hubiera tenido en el RPMPD, deberán provenir de la administradora, lo que generará la posible liquidación y quiebra de las AFP, y, por tanto, el desequilibrio total del Sistema General de Pensiones, en la medida en que, como se indicó anteriormente, con la desaparición de los Fondos de Pensiones, la Nación volvería a niveles de endeudamiento similares a los de antes de Ley 100 de 1993.



- Como tercera casuística, encontramos reciente sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali - Sala de Decisión Laboral<sup>5</sup>, en la que, en el caso de una pensionada bajo la modalidad de renta vitalicia, el fallo indica que la aseguradora previsional debe devolver a Colpensiones el total de la suma que la fue trasferida para pagar la pensión reconocida en el RAIS, con el fin de que Colpensiones asuma la nueva pensión. Lo anterior, desconociendo la jurisprudencia vigente sobre régimen de transición y sobre la sentencia de la Corte Suprema en la que indica que las personas que están pensionadas ya no pueden ser objeto de nulidad de afiliación, dado que el pensionado se encuentra en "*...una situación jurídica consolidada y a un hecho consumado, cuyos intentos de revertir podría afectar derechos, deberes, relaciones jurídicas e intereses de un gran número de actores del sistema y, en especial, tener un efecto financiero desfavorable en el sistema público de pensiones.*", e igualmente, desconociendo las normas propias de los esquemas de aseguramiento y la forma en la que se diseña el amparo y cobertura de los riesgos, obligando a la devolución de unos recursos que ya fueron entregados a título de prima, y, que, por lo tanto, fueron invertidos por la aseguradora en la constitución de las reservas propias del sector asegurador.
- Finalmente, encontramos la cuarta sentencia en la que el Juzgado Laboral N°3 del Circuito de Cali, mediante fallo de enero de 2020, ordena: (i) que la AFP devuelva a Colpensiones el valor de las mesadas pagadas en el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS); (ii) que se traslade a Colpensiones del saldo de la cuenta de ahorro individual (CAI) del pensionado; (iii) que Colpensiones pague retroactivamente la diferencia entre la pensión otorgada en el RAIS y la pensión que se estima hubiera obtenido el afiliado en caso de pensionarse en el Régimen de Prima Media con Prestación Definida (RPMPD) administrado por Colpensiones; y (iv) que Colpensiones asuma el costo futuro de la pensión que se debe reconocer el RPMPD y por ende de los subsidios que se requerirían para hacer efectivo el pago de estas pensiones en ese régimen.

Ahora bien, si se aplican las sentencias de las casuísticas 3 y 4 a la totalidad de las pensiones de Retiro Programado y de Rentas Vitalicias reconocidas en el RAIS, se evidencia que la población potencial que podría demandar es de 55.587 personas pensionadas en Retiro Programado y 9.315 personas pensionadas en Renta Vitalicia.

En ese sentido, de "normalizarse" la jurisprudencia que permite la nulidad de afiliación de los pensionados en las Modalidades de Retiro Programado y Renta Vitalicia, se puede observar los siguientes efectos sobre el Sistema General de Pensiones:

		Retiros programados	Rentas vitalicias	Total	Efectos sobre el Sistema General del Pensiones
1	Número estimado de demandas	55.587	9.315	64.902	
2	Número de demandas con sentencia desfavorable, ordenando nulidad de afiliación al RAIS	55.587	9.315	64.902	Por la evolución de la Jurisprudencia actual, asumimos que el porcentaje de pérdida es del 100% de los procesos.

<sup>5</sup> RADICACIÓN 76001310501720170003501.



3	Valor de los ingresos a Colpensiones por el pago que deben hacer las AFP a Colpensiones de las mesadas pensionales que ya le fueron pagadas al pensionado	\$10,8 Billones	\$1,6 Billones	\$12,4 Billones	<ul style="list-style-type: none"><li>• La liquidación y quiebra de las AFP y aseguradoras, con las consecuencias que esto puede traer para la marcha y la estabilidad del Sistema General de Pensiones, que regresaría a niveles de endeudamiento similares a los de antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993.</li><li>• El precedente que representaría para el sistema financiero y el sector empresarial colombiano.</li></ul>
4	Valor de los ingresos a Colpensiones por el traslado del saldo de las cuentas individuales	\$17,6 Billones	\$2,7 Billones	\$20,3 Billones	En el corto plazo aliviaría la presión fiscal actual del fondo común de Colpensiones.
5	Valor del pasivo pensional de las pensiones inicialmente reconocidas en el RAIS, por efecto de las mesadas retroactivas que debe reconocer Colpensiones frente a esos pensionados	\$10,4 Billones	\$1,6 Billones	\$12,0 Billones	Déficit a cargo de la Nación.
6	Valor del pasivo pensional de las pensiones futuras en el RPM, por efecto de los traslados	\$23,6 Billones	\$3,2 Billones	\$26,8 Billones	Déficit a cargo de la Nación.
7	Valor del impacto fiscal neto (Sin incluir el punto 3.)	\$16,4 Billones	\$2,1 Billones	\$18,5 Billones	

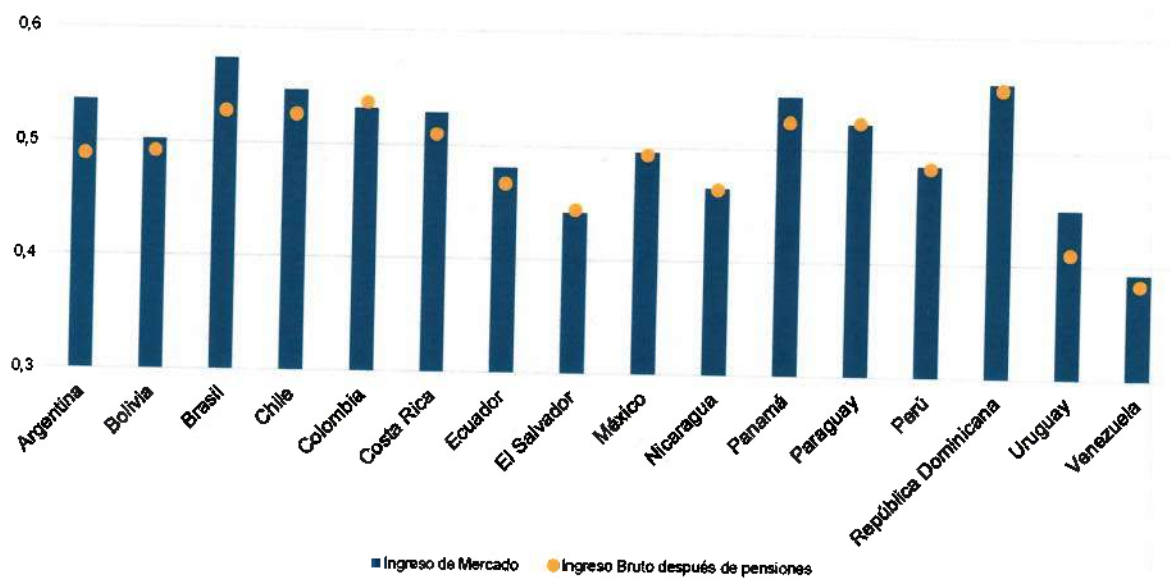
Es de señalar que el valor actualizado de \$10,8 billones de pesos que deberían pagar las AFP y los \$1,6 billones que deberían pagar las aseguradoras, a Colpensiones, por las mesadas pensionales que ya le fueron pagadas al pensionado en el RAIS, no fue incluido como alivio al déficit de la Nación, en la medida en que no van a poder pagarlo e implicaría la quiebra de las AFP, con las consecuencias que esto puede traer para la marcha y la estabilidad del Sistema General de Pensiones y el precedente que representaría para el sistema financiero y el sector empresarial colombiano.

Ahora bien, debe considerarse que estas proyecciones no toman en consideración las pensiones en la modalidad de retiro programado causadas con posterioridad a 2020, ni las reconocidas en la modalidad de renta vitalicia a las que hace referencia la tercera casuística antes mencionada, las cuales, dependiendo de la evolución que tenga la jurisprudencia, podrían también generar un impacto adicional muy significativo, sobre las finanzas del estado, las administradoras de Fondos de Pensiones y las aseguradoras de rentas vitalicias.

**(ii) ¿cuál es el efecto diferencial que el impacto fiscal podría tener sobre grupos económica o socialmente vulnerables (por ejemplo, efecto diferenciado por rangos salariales y género)?**

Para contestar este punto cabe considerar que en Colombia la desigualdad en la distribución de los ingresos golpea de manera importante a la población en edad de pensión. En efecto, debido al diseño legal e institucional actual del Sistema Pensional, la distribución de subsidios no contribuye a mejorar este problema. Al respecto en el siguiente gráfico, elaborado por la CEPAL, puede verse una comparación del caso colombiano con respecto a otros países de Latinoamérica:

Gráfico - Coeficiente Gini antes y después de transferencias pensionales



Fuente: CEPAL

Al respecto, Colombia y el Salvador son los únicos países en los que la distribución del ingreso, medida a partir del coeficiente Gini, se hace más desigual después del pago pensiones, en la medida en que la redistribución favorece a las personas de más altos ingresos al obtener mayores subsidios implícitos en las pensiones reconocidas en el RPMPD:



Cálculos DGRESS-MHCP

Lo anterior, se puede ver de manera más detallada en el siguiente cuadro, que muestra cómo los subsidios que constituyen cerca del 45% del Presupuesto General de la Nación, no están correctamente focalizados en algunos sectores. En especial, en el sector pensional, los subsidios benefician a los grupos de mayores ingresos, agravando la desigualdad en lugar de disminuirla, incluso al incluir los beneficiarios del Programa Colombia Mayor, que actualmente tiene una cobertura cercana a 1,7 millones de adultos mayores de menores ingresos:

Cuadro - Distribución de subsidios sociales por quintil de ingreso



Sector	Magnitud subsidio (% PIB)	Focalización				
		1	2	3	4	5
Educación	2,97%	25,7%	23,4%	21,4%	18,1%	11,4%
Pensiones (Con Colombia Mayor)	2,31%	4,3%	7,8%	13,7%	23,4%	50,8%
Salud	1,85%	33,7%	23,6%	19,7%	15,1%	8,0%
Servicios públicos	0,66%	21,8%	23,2%	22,9%	20,4%	11,7%
Atención a la pobreza	0,46%	33,4%	23,0%	15,0%	17,2%	11,5%
Atención a la primera infancia	0,42%	32,0%	27,2%	22,1%	15,4%	3,22%
Vivienda	0,22%	11,3%	22,5%	29,6%	26,6%	10,0%
Otros	0,16%	48,7%	35,7%	7,5%	5,4%	2,6%
Distribución total	9,0%	22,4%	19,9%	18,8%	18,8%	20,2%

Fuente: MHCP; DNP; 2015

Como puede verse, con las normas actuales, el 50,8% de los subsidios transferidos por parte del Sistema Pensional está focalizado al quintil 5, es decir, que beneficia al 20% de la población con mayores ingresos de personas en edad de pensión, en tanto que el quintil 1, que es el de menores ingresos, recibe apenas el 4,3% de los subsidios, siendo en su mayoría un subsidio de menor valor como los del programa Colombia Mayor.

Ahora bien, volviendo al tema de los traslados extemporáneos, cabe anotar que, con la jurisprudencia emitida por la Corte Suprema de Justicia, se agrava el problema de la focalización regresiva de los subsidios de la Nación a la población en edad de pensión. Entonces, la pregunta que debemos planteamos en este punto es: ¿A qué población le conviene la nulidad o ineficacia de afiliación?

Así las cosas, la posibilidad de efectuar traslados extemporáneos **no favorece a los afiliados que tienen la expectativa de pensionarse con una mesada de un salario mínimo**, ya que ellos obtendrán el mismo monto de mesada en cualquier régimen. De hecho, a estos afiliados, les conviene pensionarse en el RAIS con 1150 semanas y no con 1300 semanas exigidas en el RPMPD.

Tampoco **favorece, al grupo de afiliados sin expectativa de pensionarse**, pues en el RAIS obtendrán una devolución de ahorro con rendimientos, mientras que en el RMPPD recibirán una indemnización sustitutiva que es la devolución de cotizaciones indexadas con el IPC, siendo, por tanto, una indemnización de menor valor.

Por el contrario, **favorece a los afiliados que en Colpensiones recibirán un subsidio implícito en sus pensiones, en especial a los afiliados con salarios superiores a 4 millones pesos**, quienes recibirían el 82,8% de los subsidios, esto es, \$29 billones del total de \$35 billones de déficit fiscal de la Nación.

Es importante anotar que el sesgo regresivo de los subsidios se replica también al interior de la población que se traslada. Para ilustrar este punto se muestra el impacto fiscal estimado y los respectivos subsidios ocasionados por estos traslados extemporáneos, tal como se presentan al separar los beneficiarios por nivel de ingresos:

Rango Salarial	Valor Presente pensiones e indemnizaciones	Saldos trasladados hacia Colpensiones	Flujo Neto de Bonos pensionales	Valor Presente Impacto fiscal	Distribución % de los subsidios	N° estimado de traslados con expectativa de pensión	N° estimado de traslados sin expectativa de pensión	N° estimado Total de traslados	Distribución % de las personas trasladadas
	(\$Bills)	(\$Bills)	(\$Bills)	(\$Bills)					
1 a 2 SML	11,7	-7,7	-3,2	0,8	2,3%	53.496	62.259	115.755	51,8%
2 a 3 SML	7,2	-3,4	-1,1	2,8	7,9%	22.928	10.169	33.097	14,8%
3 a 4 SML	5,4	-2,3	-0,7	2,4	6,9%	12.239	5.173	17.412	7,8%
4 a 5 SML	4,8	-1,9	-0,6	2,3	6,4%	8.358	3.277	11.635	5,2%
5 a 10 SML	19,1	-6,7	-2,1	10,2	29,1%	21.147	7.092	28.239	12,6%
10 a 25 SML	26,2	-7,4	-2,2	16,5	47,3%	13.583	3.585	17.168	7,7%
TOTAL	74,4	-29,4	-9,9	35,0	100%	131.751	91.555	223.306	100%

En este sentido, se reitera que en el escenario presentado, el conjunto de los afiliados con aportes entre 1 SML y 4 SML, que son el 74,5% del total (223.306), solo reciben el 17,2% de los subsidios que generan el impacto fiscal proyectado por este ministerio (35 billones), es decir, recibirán solo \$6.0 billones; en tanto que los afiliados con aportes entre 4 y 25 SML, que son el restante 25,5% de los afiliados (es decir unos 55.826 de un total de demandantes de 223.305), recibirían el 82,8% de los subsidios, esto es \$29 billones del déficit fiscal de la Nación.

Lo anterior, demuestra la regresividad de los subsidios generados por la ineficacia o nulidad de afiliación<sup>6</sup>, considerando adicionalmente que las personas que se pretenden trasladar no han contribuido a la financiación y estabilidad del régimen del que ahora pretenden beneficiarse.

Finalmente, pero no menos importante, la ineficacia o nulidad de afiliación **desfavorece a las personas que van a ser más vulnerables en la edad de pensión**, porque con el déficit creado por la nulidad de traslados de **\$53.5 billones de pesos** (costo fiscal por afiliados y pensionados) **se podrían cubrir a 733.000 nuevos beneficiarios de Colombia Mayor** (adicionales a los 1.700.000 beneficiarios actuales) y el valor para todos los beneficiarios se incrementaría de **\$80.000 a \$145.000** que corresponde a la línea de pobreza extrema definida por el DANE para el año 2020.

Así las cosas, a los afiliados que les conviene un traslado al RPMPD, es a los afiliados que en Colpensiones obtendrán un subsidio implícito en sus pensiones, siendo los más beneficiados las personas de mayores ingresos y no los afiliados que pertenecen a las poblaciones que van a ser más vulnerables en la edad de pensión.

c. *¿Existe un impacto fiscal y financiero diferencial entre las anulaciones de traslados que operan sobre las personas a las que les falta menos de 10 años para pensión y las que se encuentran pensionadas?*

<sup>6</sup> Cabe anotar que este escenario supone que se trasladan hacia Colpensiones:  
 -El 90% de los afiliados con salario mayor a 1,6 SML.  
 -El 45% de los afiliados con salario inferior a 1,6 SML.  
 -El 30% de los afiliados que tienen salario a 1 SML y no tiene expectativa de pensión.



	Procesos de Pensionados	Procesos de afiliados
Número de demandas proyectadas	64.902	223.306
Número de demandas con sentencia desfavorable	64.902	223.306
Déficit fiscal	\$18,5 billones	\$35 billones
Pago anual promedio a en los primeros 5 años	\$739,000 millones	\$250.000 millones

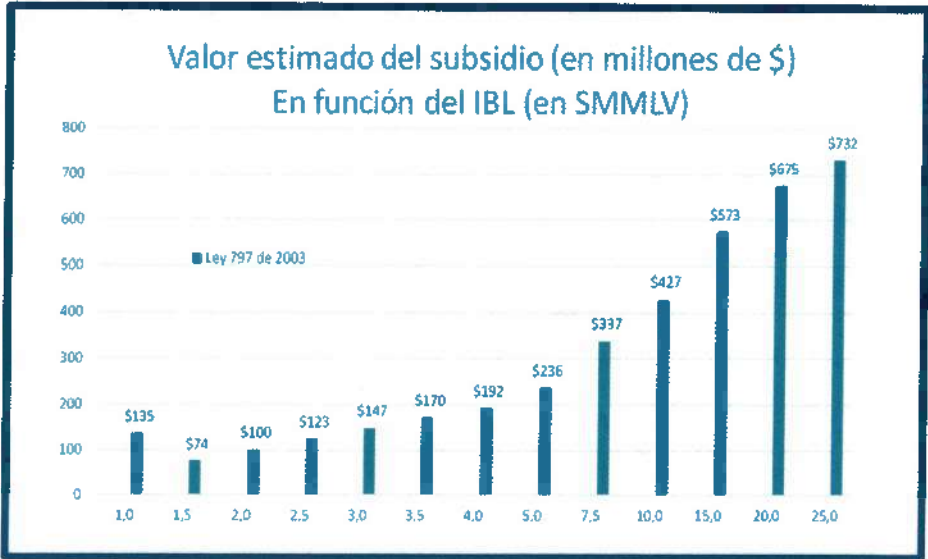
La diferencia en el flujo de pagos a partir del 2022 se debe al momento en que se hace efectivo el pago de las mesadas en cada uno de los dos casos. Al respecto, el impacto financiero y fiscal del traslado de personas ya pensionadas, tiene un efecto fiscal mediato, precisamente en la medida en que se trata de pensiones cuyas mesadas pasarían a pagarse inmediatamente en el Régimen de Prima Media.

Por el contrario, en el caso de las personas a las que les faltan menos de 10 años, los pagos de mesadas van ocurriendo solo a medida que se cumplen las edades de pensión y se completan las semanas requeridas, lo que da un plazo cercano a 10 años para llegar al nivel máximo de pagos pensionales de este grupo.

En todo caso, ambos grupos generarían a partir del 2022 una presión adicional sobre el fondo común de Colpensiones, de \$990 mil millones de pesos adicionales.

d. *¿Cómo valora la anulación judicial de traslados de régimen objeto de discusión, en términos de accesibilidad y adecuación del derecho a la pensión de vejez?*

- La restricción de los últimos 10 años antes de la edad de pensión para trasladarse de régimen, es una disposición que ya ha sido evaluada por la Corte Constitucional, que no afecta el derecho pensional, ni la libertad de elección de los afiliados, enmarcándose en la amplia potestad de configuración legislativa que le asiste al legislador en la materia y que fue expedida en defensa del equilibrio financiero del Sistema General de Pensiones.
- Ahora bien, con respecto a la población que le conviene la nulidad o ineficacia de afiliación, es necesario reiterar que la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia no favorece a la población que en la vejez será más vulnerable, sino que beneficia a las personas que devengan más de 4 salarios mínimos, lo cual genera mayor inequidad en el sistema, en la medida en que esa población obtendrá mayores subsidios implícitos en sus pensiones, sin haber contribuido en los últimos 10 años a la financiación del régimen de prima media del que pretenden beneficiarse, veamos:







En ese sentido, como se puede observar en las repuestas de este cuestionario, el conjunto de los afiliados con aportes entre 1 SML y 4 SML, que son el 74,5% del total, solo reciben el 17,2% de los subsidios que generan el impacto fiscal proyectado por este ministerio (35 billones), es decir recibirán solo 6.02 billones, en tanto que los afiliados con aportes entre 4 y 25 SML, que son el restante 25,5% de los afiliados, recibirían el 82,8% de los subsidios, esto es 29 billones. Esto demuestra la regresividad de los subsidios generados por la nulidad de afiliación, agravada por el hecho de beneficiar a personas que al no haber estado afiliadas en los últimos 10 años antes de pensionarse al RPM, no han contribuido a su financiación ni sostenibilidad, pero si pretenden beneficiarse de dicho régimen.

3. Ahora bien, si bien, en virtud del reparto de cargas públicas, la Nación tiene unas responsabilidades como lo son emitir las normas, los reglamentos y las circulares para el adecuado comportamiento de los actores del sistema, así como asumir el pasivo pensional que le sea asignado por Ley, los afiliados también tienen la responsabilidad de mantenerse informados en virtud de las libertades individuales y del artículo 95 de la Constitución Política que establece que el ejercicio de los derechos y libertades reconocidos por la Constitución **implica responsabilidades**, por lo cual los afiliados al Sistema General de Pensiones deben asumir las consecuencias de sus actos u omisiones.

En ese sentido, si el afiliado al RAIS por 15 años o más, en todo el tiempo que tuvo para madurar su decisión, no hizo lo posible por informarse acerca de las diferencias entre un régimen u otro, a través de los diferentes canales que tenía a su disposición, como por ejemplo, el defensor del consumidor financiero, la Superintendencia Financiera de Colombia, los Ministerios de Trabajo o Hacienda, ni ejerció el derecho a retractarse de la afiliación, ni intentó devolverse en los 5, 10 o 15 años siguientes a la afiliación, ni hizo uso del periodo de gracia otorgado por la Ley 797 de 2003, no es posible que corresponda a la Nación, que generó reglas claras y comprensibles del sistema, asumir las consecuencias de las decisiones adoptadas por los afiliados ni responder por sus omisiones o inacción.

Entonces, en la medida en que cada afiliado es responsable de mantenerse informado, no le es dable alegar el desconocimiento de las normas como excusa para iniciar un litigio que le permita incumplirlas. Tal afirmación riñe con la presunción legal *juris ignorantia non prodest* consagrada en el artículo 1509 del Código Civil y con lo prescrito en el artículo 9 ibídem según el cual la ignorancia de la ley no sirve de excusa.

4. Conforme con lo anterior, la inversión de la carga de la prueba que exonera al afiliado del deber de probar sus afirmaciones, no tiene justificación cuando el afiliado si está en posibilidad de probar (i) que buscó asesoría y no se la brindaron, o (ii) que la asesoría no fue suficiente para tomar una decisión acertada, pues dirimir la discusión jurídica sin que el afiliado que alega la ineficacia o la nulidad compruebe por lo menos que hizo uso los recursos a su alcance para poderse informar debidamente resulta inequitativo, máxime si se tiene en cuenta que no todos los afiliados son legos; por el contrario, la gran mayoría de los afiliados que hoy están demandando, devengan más de 4 salarios mínimos mensuales legales vigentes, son profesionales e incluso ejercen altos cargos en la empresa privada o en el sector público, entre ellos hay congresistas, secretarios generales de entidades públicas, magistrados, jueces, funcionarios públicos de nivel directivo del sector nacional, y de los fondos de pensiones, funcionarios de organismos de supervisión, agentes comerciales de las AFP, gerentes de bancos, entre otros, de quienes se puede suponer un nivel educativo e intelectual suficiente para comprender los efectos de las decisiones adoptadas.



En este sentido, la inversión de la carga de la prueba que obliga a la administradora a probar que no lo engañó, siendo insuficiente probar que otorgó la información correspondiente según las exigencias de la normativa vigente para la época del traslado, viola el derecho a la tutela efectiva que tiene la demandada, toda vez que le impone una carga excesiva, además, porque son deberes de la persona y del ciudadano según lo prescribe la Constitución Política, *“colaborar con el buen funcionamiento de la administración de justicia”*.

En razón de lo anterior, en los procesos de anulación o ineficacia de afiliación, se debe lograr, en razón de la dinamización de la carga de la prueba, que cada uno de los contendientes contribuya a que el juez conozca la verdad de los hechos debatidos aportando las pruebas a su alcance, con lo cual el afiliado debe demostrar que buscó asesoría y no se la brindaron, que la asesoría no fue suficiente para tomar una decisión o que en la misma se entregó información falsa o errónea. El afiliado, también debería estar en capacidad de demostrar que hizo uso de los servicios del Defensor del Consumidor Financiero o que elevó derechos de petición ante las AFP, Colpensiones, la Superintendencia Financiera o los Ministerios de Trabajo o de Hacienda, con el fin de conocer las diferencias entre régimen, pero no obtuvo respuesta, pues eso permitirá a los jueces y tribunales laborales, estudiar los casos con base en las pruebas que obren en el expediente..

5. Ahora bien, no puede descartarse que, a pesar de la diligencia del afiliado, pudo no haber sido debidamente asesorado en su traslado al Régimen de Ahorro Individual, que ningún beneficio podía ofrecerle, como es el caso de quien tenía derecho al régimen de transición, o había reunido los requisitos para la pensión o estaba muy cerca de obtenerla por haber cotizado en el RPM el 75% (975 semanas) o más de las semanas necesarias para obtener una pensión en dicho régimen, pues, estos afiliados tenían la expectativa legítima de pensionarse en él, por lo cual nunca debieron trasladarse al Régimen de Ahorro Individual, casos que deben ser analizados a la luz de la jurisprudencia existente en materia de régimen de transición y otros pronunciamientos aplicables.
6. Con respecto a los pensionados bajo cualquier modalidad, ya sea en retiro programado o a través de renta vitalicia, se estima adecuada la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia en el sentido de indicar que los pensionados ***“...se encuentran en una situación jurídica consolidada y a un hecho consumado, los intentos de revertir podría afectar derechos, deberes, relaciones jurídicas e intereses de un gran número de actores del sistema y, en especial, tener un efecto financiero desfavorable en el sistema público de pensiones...”***. Por ello, bajo ninguna circunstancia debería operar la nulidad o ineficacia de la afiliación en ninguna de las dos modalidades de pensión.

Sin embargo, nos apartamos de sus consideraciones sobre la posibilidad de iniciar procesos indemnizatorios por daños y perjuicios en contra de las AFP, en la medida en que las pensiones fueron reconocidas por solicitud propia del afiliado, quien antes de pensionarse firmó su historia laboral, negoció su bono pensional, escogió la modalidad de pensión y desplegó otra serie de acciones que no permitían inferir que en aquel momento estuviera inconforme con la pensión otorgada por el RAIS o que estuviera desinformado, pues todas sus acciones conducían a lograr la pensión en aquel régimen.

7. Finalmente, en materia de la orden de devolución de recursos que imparte el juez como consecuencia de la declaratoria de nulidad o ineficacia del traslado, en concepto de este Ministerio solo cabe trasladar los recursos acreditados en la cuenta de ahorro individual del afiliado más sus rendimientos y el 1,5% de cotización al Fondo de Garantía de Pensión Mínima, más sus rendimientos.

No deben ser objeto de traslado el valor de los bonos pensionales que se encuentren acreditados en la cuenta de ahorro pensional del afiliado, porque éstos deben ser reintegrados a sus emisores





conforme las disposiciones que rigen la materia, por dos motivos: (i) porque con bonos A se financian pensiones del RAIS no del RPMPD y (ii) de darse lugar a la nulidad o ineficacia del traslado, tampoco se produce el fundamento fáctico del bono pensiona tipo A<sup>7</sup>, esto es la afiliación al RAIS.

Tampoco pueden ser objeto de traslado los recursos de los gastos de administración porque esos fueron utilizados para la operación normal de la administradora, y son los que hacen posible que los saldos devueltos por el RAIS al RPMPD, incluyan rendimientos. En el mismo sentido, no pueden ser trasladados los recursos empleados para el pago de las primas del seguro previsional, porque ellas ya fueron entregadas a las aseguradoras del mercado y no se encuentran en poder de la AFP, siendo destinadas al cubrimiento del riesgo asegurado.

Téngase en cuenta que las prestaciones que se deriven del acaecimiento de los riesgos de invalidez y muerte deben ser solicitadas ante la entidad administradora a la cual se encontraba afiliado el solicitante a la fecha de ocurrencia de la muerte o de la estructuración de la invalidez. Y en este evento la entidad administradora de pensiones de la cual queda retirada la persona y la compañía de seguros del previsional, tienen a su cargo la prestación de los servicios y el reconocimiento de las prestaciones derivadas de la invalidez y muerte por el periodo pagado, siempre que el afiliado cumpla con los requisitos de semanas cotizadas antes de la fecha siniestro (50 semanas en los tres años anteriores) y demás requisitos legales correspondientes.

#### CUARTO EJE TEMÁTICO

- a. **Desde la entrada en vigencia del Sistema General de Seguridad Social en Pensiones (Ley 100 de 1993): (i) ¿ha existido una política pública para garantizar el derecho a la información en la afiliación y traslado de régimen pensional?; (ii) ¿cuáles han sido sus etapas de acuerdo con la legislación vigente en cada momento?; y (iii) ¿cuáles han sido las responsabilidades y/o competencias asumidas por parte del Ministerio de Hacienda, el Ministerio del Trabajo y la Superintendencia Financiera (antes Superintendencia Bancaria), en esta materia?**

##### **Política pública para garantizar el derecho a la información en la afiliación y traslado de régimen pensional y etapas de acuerdo con la legislación vigente en cada momento**

El deber de brindar información a los afiliados o usuarios del sistema pensional, a fin de que éstos puedan adoptar una decisión libre sobre su futuro pensional, ha tenido una progresiva evolución desde la expedición de la Ley 100 de 1993, como resultado de una política tendiente a intensificar los deberes de las administradoras del Sistema Pensional para facilitar al afiliado o usuario la toma de una decisión responsable. En esta evolución se pueden distinguir varias etapas según la legislación aplicable.

1. **La primera etapa** se enmarca en lo dispuesto por los artículos 13, literal b), y 271, de la Ley 100 de 1993.

En esta etapa la legislación del Sistema General de Pensiones dispuso que "[l]a selección de uno cualquiera de los regímenes previstos por el artículo anterior es libre y voluntaria por parte del afiliado, quien para tal efecto manifestará por escrito su elección al momento de la vinculación o del traslado".

Indicando igualmente, que, el empleador, y, en general, cualquier persona natural o jurídica, que impidiese o atentara en cualquier forma contra el derecho del trabajador a su afiliación y selección de organismos e

<sup>7</sup> Definiciones del artículo 1 del Decreto 1748 de 1994:

"Tipo A (Bonos Pensionales): Designación dada a los bonos regulados por el Decreto ley 1299 de 1994 que se expiden a aquellas personas que se trasladen al régimen de Ahorro Individual con Solidaridad."

"Tipo B (Bonos Pensionales): Designación dada a los regulados por el Decreto ley 1314 de 1994 que se expiden a servidores públicos que se trasladen al ISS en o después de la fecha de entrada en vigencia del Sistema General de Pensiones."



instituciones del sistema de seguridad social integral, *"se hará acreedor, en cada caso y por cada afiliado, a una multa impuesta por las autoridades del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social o del Ministerio de Salud en cada caso, que no podrá ser inferior a un salario mínimo mensual vigente ni exceder cincuenta veces dicho salario."*

Por su parte, no se dispuso en la ley medida alguna referente a la obligación de las administradoras de suministrar información a usuarios y afiliados para facilitar la escogencia del régimen de sus preferencias, ni relativa a la realización de simulaciones pensionales.

Sin embargo, dada la naturaleza de las administradoras de fondos de pensiones, como entidades que hacen parte del sector financiero, es importante indicar que estas se encuentran sometidas a las disposiciones del Decreto 663 de 1993, *«Estatuto Orgánico del Sistema Financiero»*, que, para la fecha, imponía a las entidades vigiladas el deber de *"suministrar a los usuarios de los servicios que prestan la información necesaria para lograr la mayor transparencia en las operaciones que realicen, de suerte que les permita, a través de elementos de juicio claros y objetivos, escoger las mejores opciones del mercado"*.

Al respecto, cabe anotar que el Decreto 663 de 1993 si bien no es una norma que regule específicamente las administradoras de pensiones, cubre a la totalidad de entidades financieras, por lo que los deberes de información impuestos en el citado artículo son deberes generales para garantizar la transparencia de las operaciones financieras de las entidades vigiladas, incluidas dichas entidades administradoras.

Atendiendo el significado de las palabras utilizadas, *"suministrar a los usuarios de los servicios que prestan la información necesaria para lograr la mayor transparencia en las operaciones que realicen, de suerte que les permita, a través de elementos de juicio claros y objetivos, escoger las mejores opciones del mercado"*, se puede evidenciar que, tratándose de administradoras de pensiones en el RAIS, el deber que les asistía contemplaba comunicar al afiliado que buscaba un traslado de régimen, entre otros aspectos, el esquema y características del Régimen de Ahorro Individual, su funcionamiento, y las obligaciones y derechos que adquirirían con su afiliación, las ventajas generales que ofrece este Sistema, la posibilidad que tienen de optar por una pensión a una edad anticipada siempre y cuando cuenten con capital suficiente que les permita financiar una pensión superior al 110% de un salario mínimo legal mensual vigente al año de 1993, tal como lo establece el artículo 64 de la Ley 100 de 1993; la figura de la Garantía de Pensión Mínima de Vejez a la que tienen derecho en el evento de no cumplir con el capital requerido para acceder a la pensión de vejez, siempre y cuando cumpliera con los requisitos de edad y semanas exigidos en el artículo 65 de la Ley 100 de 1993 (1150 semanas de cotización); la posibilidad de obtener unos excedentes de libre disponibilidad; el factor herencia del capital acumulado en su cuenta de ahorro individual a falta de beneficiarios de Ley, que son los elementos de juicio objetivos y generales que pueden determinar la decisión de optar por la selección del RAIS. A su turno, la conveniencia de la decisión no era para entonces del resorte de la administradora sino responsabilidad del cliente quien, de acuerdo con sus circunstancias, sopesaba, a la luz de la información recibida, la mejor decisión. No le era exigible entonces a la administradora hacer predicciones sobre el futuro pensional del interesado y mucho menos cuantificar el monto definitivo de la pensión, pues ello no solamente excedía el deber de información, sino que en todos los casos dependía de variables aleatorias según las circunstancias del afiliado, ajenas a la administradora.

Por su parte, en el año 1994 se expide el Decreto 692, que regula el derecho de información para las afiliaciones al RAIS, en cuyo artículo 11 dispone cómo debe diligenciarse la selección y vinculación a este régimen; cuál debe ser el contenido del formulario previsto para el efecto por la entonces Superintendencia Bancaria, so pena de no tener validez; y la exigencia de que *"Quienes decidan afiliarse voluntariamente al sistema, manifestarán su decisión al momento de vincularse a una determinada administradora"* y que *"Cuando el afiliado se traslade por primera vez del régimen solidario de prima media con prestación definida al régimen de ahorro individual con solidaridad en el formulario deberá consignarse que la decisión de trasladarse al régimen seleccionado se ha tomado de manera libre, espontánea y sin presiones. El formulario puede contener la leyenda pre-impresa en este sentido."*





En el mismo año se expide el Decreto 1161 que, en materia de traslado de regímenes, con el objeto de proteger la libertad de escogencia dentro del Sistema General de Pensiones, permitió el retracto del afiliado en todos los casos de selección, de una administradora de cualquiera de los regímenes o de un plan o fondo de pensiones, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha en la cual haya manifestado por escrito la correspondiente selección, dándole espacio a las personas que, con anterioridad a la entrada en vigor del Decreto, hubieren seleccionado expresamente un régimen de pensiones, quienes podrían ejercer el derecho de retracto dentro de los quince (15) días hábiles a partir de la vigencia de éste.

Se impuso igualmente el deber de las administradoras de que cuando efectúen procesos de promoción, informen de manera clara y por escrito a los potenciales afiliados el derecho a retractarse.

De manera que, antes del 2009 se encontraban vigentes las disposiciones del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, la Ley 100 de 1993, el Decreto 692 de 1994 y el Decreto 1161 de 1994, que reglamentaron lo referente a la selección del régimen pensional y afiliación en el sistema general de pensiones, y que en momento alguno previeron la realización de una proyección pensional en la que se exhibiera el monto de la pensión de vejez en cada uno de los regímenes como requisito para efectuar el traslado, ni como componente de la información mínima a entregar por parte de las Administradoras. Estas disposiciones tampoco contemplaban que la asesoría debía estar orientada a indicar al interesado la conveniencia o inconveniencia del traslado según una valoración de su situación personal y particular, ni que existiera obligación de guardar los soportes de la información entregada, diferente a los formularios que debía suscribir el afiliado, y en los que la normatividad permitió la existencia de leyendas pre-impresas para validar la voluntariedad de la afiliación.

De forma tal que la evaluación sobre la conveniencia del traslado era responsabilidad del interesado, quien tenía el deber de informarse a sí mismo en la medida de sus capacidades, y valorar adecuadamente según su situación personal actual y proyecciones laborales futuras, cual resultaba ser el régimen que mejor respondía a sus intereses.

Es incuestionable que este sistema de información bien pudo dar lugar a decisiones equivocadas, como en los eventos de aquellas personas que, sin advertirlo, perdieron el régimen de transición, o que ya contaban con los requisitos para tener acceso al derecho pensional en el marco del régimen de transición o estaban próximos a cumplirlos, eventos que ya han sido solventados por la jurisprudencia constitucional, al establecer que las personas cobijadas por el régimen de transición pueden en cualquier momento optar por retornar al Régimen de Prima Media, cumpliendo los requisitos ya mencionados.

Por otra parte, en todo caso, es importante considerar que, a juicio de esta cartera, a menos que se determine probatoriamente que la situación era evidente para la administradora y que esta indujo en error o vicio al afiliado, se tendría que probar la falla en la actuación de la administradora, el vicio del consentimiento por parte del afiliado, y/o la información errónea que se le suministro y que el afiliado con el conocimiento propio de la Ley y las alternativas de protección previstas por la norma, para ese momento, como la misma posibilidad de traslado o el retracto, no pudo enfrentar, y que generó lesiones injustificadas en el derecho pensional del afiliado, para poder alegar que fue engañado o inducido a error por la omisión en la información que era relevante, pues esto pondría en práctica la dinamización de la carga de la prueba.

**2. La segunda etapa** se inicia con Ley 795 de 2003, continúa con la Ley 1328 de 2009 y el Decreto 2241 de 2010.

Es preciso recordar que, desde la Ley 795 de 2003 se formalizó la figura del defensor del consumidor y se estableció de forma obligatoria para todas las entidades vigiladas por la entonces Superintendencia Bancaria, y se modificó la redacción del EOSF en cuanto a la información a los usuarios, norma que fue desarrollada por el Decreto 690 de 2003.

Ahora bien, la Ley 1328 de 2009 y el Decreto 2241 de 2010, expedidos en protección de los consumidores financieros, reglamentan ampliamente los derechos de los consumidores, señalan los principios y el contenido básico de la información y establecen expresamente el deber de asesoría y buen consejo a cargo de las administradoras de pensiones, lo que evidencia la intención del legislador de fortalecer el deber de información, y de darle un alcance diferente, profundizándolo y estableciendo nuevos requerimientos frente a su alcance y forma de asesoría.

Al respecto, en la exposición de motivos de la Ley 1328, se expresó:

*“La consagración de un régimen especial dentro del proyecto de reforma financiera, obedece al propósito claro de consolidar la protección al consumidor financiero, entendiendo por este toda persona natural o jurídica que accede a cualquiera de los productos y servicios ofrecidos por las instituciones vigiladas por la Superintendencia Financiera. (...) “En tal sentido, efectuada la revisión de las disposiciones que consagran el mencionado régimen, se considera que si bien se ha avanzado, es necesario desarrollar aún más una cultura de protección al consumidor financiero adoptando a nivel legal una compilación breve, pero concisa, de derechos de los consumidores y de los deberes de las entidades. “El régimen propuesto se basa en tres pilares esenciales: El suministro de información, que debe ser entendido como el primer nivel de una verdadera protección ya que propicia la adecuada selección y manejo de servicios financieros, la debida diligencia en la prestación de servicios y la consolidación de la Defensoría del Cliente como institución orientada a la protección del consumidor financiero”.*

En desarrollo de la Ley 1328 de 2009, se expidió el Decreto 2241 de 2010, por el cual se reglamentó el Régimen de Protección al Consumidor Financiero del Sistema General de Pensiones. En sus considerandos se señaló:

*“Que para la protección de los afiliados al Régimen General de Pensiones, tanto en el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad como en el de Prima Media con Prestación Definida, es fundamental definir claramente sus derechos y deberes para su ejercicio” y “Que las administradoras de los dos regímenes del Sistema General de Pensiones deben actuar con profesionalismo para la promoción y prestación de sus servicios, brindando para el efecto la asesoría e información suficiente que permita a los consumidores tomar decisiones”.*

Desde entonces se impuso a las administradoras la obligación de realizar una asesoría, bajo el presupuesto de la “información clara, cierta, comprensible y oportuna respecto de las condiciones de su afiliación, de manera tal que el consumidor financiero pueda tomar la decisión informada de vincularse a dicho régimen o de trasladarse entre administradoras (...). Este deber fue expresamente consagrado a partir del 1º de julio de 2010, fecha de entrada en vigencia del Decreto 2241 de 2010, y, en consecuencia, solo a partir de ese momento se hace exigible tal información a las Administradoras de Fondos de Pensiones, pues anterior a ello, aunque les asistía el deber de información no era bajo esas premisas.

El deber de asesoría y buen consejo, con el alcance indicado, nace entonces con la legislación del 2010 y es distinta a la anterior obligación de informar. Así, la obligación de informar impone el deber de comunicar objetivamente los datos relevantes del régimen con el objeto de que el afiliado decida sopesando sus circunstancias cual es la mejor opción; el deber de asesoría y consejo va más allá, porque impone la orientación sobre la conveniencia de la decisión exponiéndole al interesado las ventajas y beneficios, los riesgos, desventajas y consecuencias de una u otra selección, según las circunstancias subjetivas del afiliado. La selección del afiliado sigue siendo libre y voluntaria, pero se toma previo un asesoramiento subjetivo, calificado e imparcial de su conveniencia o inconveniencia, sin que ello implique que se elimina la responsabilidad en cabeza del afiliado, de seleccionar de manera libre y voluntaria, como el único sujeto que conoce la totalidad de las condiciones y preferencias personales, que lo llevan a optar por uno u otro régimen pensional.



En este sentido, la distinción entre un deber y otro consiste en que, mientras el deber de información se cumple suministrando a la parte interesada los datos y circunstancias necesarios para que tome una decisión libre y voluntaria, el deber de consejo implica orientarlo y asesorarlo sobre la conveniencia o inconveniencia del negocio jurídico, valorando los riesgos y beneficios y explicándole las alternativas que tiene para elegir entre un sistema u otro. La decisión sigue siendo completamente libre del afiliado, pero es una decisión orientada mediante la opinión motivada del asesor que puede llegar a ser incluso una advertencia disuasiva, dadas las eventuales consecuencias que podría afrontar el afiliado.

3. La tercera etapa surge con la expedición de la Ley 1748 de 2014, el Decreto 2071 de 2015, el Decreto 1813 de 2020 que adicionó el artículo 2.2.2.1.18. al Decreto 1833 de 2016 y las Circulares Externas Nos. 016 de 2016 y 024 de 2018 de la Superintendencia Financiera.

En esta nueva etapa el derecho a la información se intensificó en aras de lograr un asesoramiento imparcial y objetivo de los actores del Sistema. Hoy el afiliado que esté interesado en trasladarse de régimen puede obtener *“asesoría de representantes de ambos regímenes, como condición previa para que proceda el traslado entre regímenes. Lo anterior de conformidad con las instrucciones que para el efecto imparta la Superintendencia Financiera de Colombia”*. Es decir que recibe una doble asesoría por parte tanto del RPMPD como del RAIS, lo cual le permite conocer de parte y parte cuáles son, en su caso particular, las ventajas y desventajas de una selección u otra, y cuáles son las consecuencias jurídicas del traslado de uno de los regímenes pensionales al otro.

La Ley 1748 de 2014, adiciona la Ley 1328 de 2009, prescribiendo que las Administradoras del Sistema General de Pensiones deben garantizar que los clientes que quieran trasladarse entre regímenes pensionales *reciban asesoría de representantes de ambos regímenes, como condición previa para que proceda el traslado entre regímenes*.

El Decreto 2071 de 2015 reitera el deber del buen consejo que tienen las administradoras del Sistema General de Pensiones, y dispone que las administradoras de los dos regímenes del Sistema General de Pensiones *deberán garantizar que los afiliados que quieran trasladarse entre regímenes pensionales, esto es del Régimen de Ahorro Individual al Régimen de Prima Media y viceversa, reciban asesoría de representantes de ambos regímenes, como condición previa para que proceda el traslado*.

Señala adicionalmente que, como mínimo, la información conforme a la competencia de cada administradora del Sistema General de Pensiones debe contener: 1. *Probabilidad de pensionarse en cada régimen*. 2. *Proyección del valor de la indemnización sustitutiva o devolución de saldos, lo anterior frente a la posibilidad de no cumplir los requisitos de ley para acceder a la pensión de vejez a la edad prevista en la normatividad vigente*. 3. *Proyección del valor de la pensión en cada régimen*. 4. *Requisitos para acceder a la garantía de pensión mínima en cada régimen*. 5. *Información sobre otros mecanismos de protección a la vejez vigentes dentro de la legislación*. 6. *Las demás que la Superintendencia Financiera de Colombia establezca*.

Por otra parte, a partir de la Circular Externa 016 de 2016, las administradoras deben mantener a disposición de la Superintendencia Financiera los documentos que soporten las solicitudes de traslado presentadas *con el propósito de que en cualquier momento se pueda verificar el cumplimiento del deber de asesoría, así como las instrucciones que en tal sentido se encuentran contenidas en la citada circular*.

Es relevante anotar que antes de la expedición de la Circular Externa 016 de 2016, a pesar de existir el deber de información y asesoría a cargo de las Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, no existía norma alguna que estableciera esta obligación de preservación de la documentación relacionada con la asesoría, cuya firma por parte del afiliado en el respectivo formulario de afiliación asegura que sí recibió la información y la asesoría y que comprendió los efectos legales así como los potenciales riesgos y beneficios de su decisión.



**En resumen**, solo a partir de la Ley 1328 de 2009, el Decreto 2241 de 2010 y más tarde de la Ley 1748 de 2014 y el Decreto 2071 de 2015, las Administradoras de Fondos de Pensiones tienen el deber de realizar, con el alcance indicado en cada una de las disposiciones reseñadas, el análisis previo, calificado y global de los antecedentes del afiliado y los pormenores de los regímenes pensionales, a fin de que el asesor o promotor pueda emitir un consejo, sugerencia o recomendación al afiliado acerca de lo que más le conviene y, por tanto, lo que podría perjudicarlo, sin perjuicio de que, en todo caso, la decisión continua recayendo en cabeza del afiliado.

Pero también es importante señalar que esta evolución legal del entendimiento y alcance que debe tener el deber de informar, no implica que de manera previa existiera una vulneración del derecho pensional ni una desprotección absoluta del afiliado, pues es claro que desde la vigencia de la Ley 100 de 1993 los afiliados tenían otros esquemas y con ello tuvieron varias oportunidades para regresar al Régimen de Prima Media haciendo uso, por ejemplo, de la facultad de retracto consagrada en el Decreto 1161 de 1994, que establece el derecho que tienen los afiliados de retractarse de su decisión o elección de régimen pensional en los 5 días siguientes a la suscripción del formulario, o haciendo uso de la facultad establecida en el artículo 13 de la Ley 100 de 1993, que permitía trasladarse de régimen pensional cuando se hubiese permanecido en el mismo durante 3 años, sin la existencia de un periodo de carencia alguno relacionado con la edad de pensión (periodo señalado antes de la modificación de la Ley 797 de 2003, disposición original de la Ley 100 de 1993 que no incorporaba la restricción de los 10 años o menos de la edad de pensión).

Adicionalmente, también pudieron optar por regresar al RPMPD en el periodo o año de gracia otorgado por el artículo 1 del Decreto 3800 de 2003, que dispuso que *"las personas a las que a 28 de enero de 2004, les faltaren diez (10) años o menos para cumplir la edad para tener derecho a la pensión de vejez, podrán trasladarse por una única vez, entre el Régimen de Prima Media con Prestación Definida y el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, hasta dicha fecha, prerrogativa ampliamente publicitada por las Administradoras de Fondos de Pensiones."*

También, pudieron haber efectuado un traslado voluntario, en su periodo de afiliación al RAIS, de manera previa a entrar en la restricción ya mencionada, de forma tal que en los aproximadamente más de 20 años de vigencia del nuevo sistema pensional, el afiliado ha contado con un sinnúmero de oportunidades para ejercer la libre elección de régimen pensional, antes de entrar en la restricción de los 10 años mencionada anteriormente.

Finalmente, todos los afiliados tuvieron acceso en cualquier momento al servicio del Consumidor Financiero, o pudieron hacer uso del derecho de petición para indagar ante la propia administradora, la Superintendencia Financiera de Colombia, los Ministerios de Trabajo (antiguo Protección Social) o el Ministerio de Hacienda los efectos de sus decisiones de selección de régimen.

#### **Responsabilidades y/o competencias asumidas por parte del Ministerio de Hacienda, el Ministerio del Trabajo y la Superintendencia Financiera (antes Superintendencia Bancaria), en esta materia**

La responsabilidad y competencias en materia de información en el Sistema General de Pensiones, puede verse desde dos puntos de vista. Por una parte, el diseño de políticas públicas, y por otra, la vigilancia y control de las administradoras sobre el cumplimiento de sus obligaciones.

Desde el primer punto de vista, corresponde a los Ministerios de Trabajo y de Hacienda y Crédito Público formular las políticas públicas en materia de seguridad social en pensiones, y el derecho a la información de afiliados y usuarios, en el marco de los parámetros dados por el legislador, a quien por voluntad constitucional corresponde el diseño y pautas de funcionamiento del sistema.

En este sentido, a partir de la vigencia de la Ley 100 de 1993, los mencionados Ministerios han cumplido con esta función y han promovido una profundización y mejora constante de los deberes de información de las administradoras, a través de la colaboración en la expedición de leyes en este sentido, y de la expedición de





decretos reglamentarios que desarrollaron en cada una de las etapas normativas ya referidas este derecho de los ciudadanos.

Los regímenes pensionales diseñados por la Ley 100 de 1993 son diferentes, cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas y esa dualidad, como lo ha considerado la Corte Constitucional,<sup>8</sup> estimula la competencia entre los administradores de los sectores público y privado, y genera responsabilidad individual y social en cabeza de los afiliados de escoger el régimen que mayores ventajas les represente, así como la oportunidad para trasladarse dentro de las limitaciones que imponen las leyes, siendo ello un reflejo de otros postulados constitucionales, como el respecto al libre desarrollo de la personalidad y el reconocimiento de la autonomía personal.

Gracias a las políticas progresivas diseñadas, hoy el consumidor financiero del Régimen General de Pensiones no solamente tiene el derecho de recibir información general, sino también de obtener la asesoría del buen consejo, y adicionalmente de recibir una doble asesoría de los representantes de las administradoras de ambos regímenes, como condición previa para que proceda el traslado, lo cual, sin dejar de preservar la libre elección, le facilita al afiliado información para que pueda tomar una decisión acerca del régimen pensional al cual quiere pertenecer. Sin que esta evolución del derecho a la información desconozca en momento alguno, que en todo caso, las disposiciones del sistema están establecidas en normas de rango legal, y, que, por ende, resultan de público conocimiento.

Desde el segundo punto de vista, la vigilancia y control de las administradoras del Régimen General de Pensiones, compete a la Superintendencia Financiera de Colombia (antes Superintendencia Bancaria) autoridad que tenía la supervisión y vigilancia del desaparecido ISS y hoy como autoridad de supervisión de la actividad financiera y aseguradora es el organismo vigilante de Colpensiones y de los Fondos de Pensiones y Cesantías, instituciones pertenecientes al sistema financiero. De manera que es su responsabilidad velar por el adecuado cumplimiento de sus obligaciones, entre ellas, lo referente al derecho de información del consumidor financiero.

***b. Particularmente desde la implementación del Sistema General de Seguridad Social en Pensiones (Ley 100 de 1993) y el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, hasta la entrada en vigencia de las leyes 1328 de 2009 y 1748 de 2014, ¿qué acciones en concreto desplegaron las administradoras de pensiones y qué tipo de información suministraban a la persona interesada, para garantizar el derecho a la información en la afiliación y traslado de régimen pensional? Explicar el alcance de sus actuaciones y precisar si, a partir de las modificaciones normativas, desde 1993, han existido variaciones en la rigurosidad de este deber.***

Como se indicó en la respuesta al punto anterior, antes del 2009 se encontraban vigentes las disposiciones del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, la Ley 100 de 1993, el Decreto 692 de 1994 y el Decreto 1161 de 1994, que reglamentaron lo referente a la selección del régimen pensional y afiliación en el sistema general de pensiones, y que en momento alguno previeron la realización de una proyección pensional en la que se exhibiera el monto de la pensión de vejez en cada uno de los regímenes, como requisito para efectuar el traslado, ni como componente de la información mínima a entregar por parte de las Administradoras. Estas disposiciones tampoco contemplaban que la asesoría debía estar documentada, ni que existiera obligación de guardar los soportes de la información entregada.

De esta manera, las distintas administradoras de pensiones realizaron una asesoría bajo el presupuesto de la información clara, cierta, comprensible y oportuna respecto de las condiciones de su afiliación, de manera tal que, bajo estos elementos, los consumidores financieros tomaron la decisión de vincularse a dicho régimen o de trasladarse entre administradoras.

Es así como podemos observar que el deber de asesoría e información de parte de las Administradoras de Fondos de Pensiones ha tenido un desarrollo en la normatividad durante las últimas dos décadas de

<sup>8</sup> Sentencia C -1024 de 2004.

funcionamiento del sistema, no siendo razonable ni jurídicamente válido que de manera alguna se les imponga a las administradoras deberes de información que no estaban previstos en el ordenamiento jurídico vigente al momento en que se generó el traslado de régimen, pues exigir el cumplimiento de normas aun no promulgadas desvirtuaría el principio de confianza legítima, seguridad jurídica y las normas propias de la aplicación de las leyes en el tiempo.

Como se mencionó anteriormente, desde la vigencia de la Ley 100 de 1993, se entregaba información general del funcionamiento del sistema y las particularidades propias del régimen pensional en el que se pretendía afiliarse el ciudadano y los afiliados tuvieron varias oportunidades y diferentes herramientas para modificar su decisión y regresar al Régimen de Prima Media haciendo uso de la facultad con que contaban para hacerlo en virtud de lo establecido en el Decreto 1161 de 1994, que consagra el derecho que tienen los afiliados de retractarse de su decisión o elección de régimen pensional en los 5 días siguientes a la suscripción del formulario, o también haciendo uso de la facultad establecida en el artículo 13 de la Ley 100 de 1993, que permitió trasladarse de régimen pensional cuando ha permanecido en el mismo durante 3 años<sup>9</sup>, sin limitación de edad.

De la misma manera, también pudieron optar por regresar al RPMPD en el periodo o año de gracia otorgado por el artículo 1° del Decreto 3800 de 2003, que dispuso que *“las personas a las que a 28 de enero de 2004, les faltaren diez (10) años o menos para cumplir la edad para tener derecho a la pensión de vejez, podrán trasladarse por una única vez, entre el Régimen de Prima Media con Prestación Definida y el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, hasta dicha fecha...”*, prerrogativa ampliamente publicitada por las Administradoras de Fondos de Pensiones, en medios de amplia circulación.

Adicionalmente, es de señalar que las AFPS han adelantado campañas de comunicación para darles a conocer a sus afiliados las características del Régimen de Ahorro Individual y sus diferencias con el Régimen de Prima Media, incluso en el caso de una AFP en particular, se tiene conocimiento de un trabajo desarrollado mediante el cual, contactaban a los afiliados y les explicaban, antes de que cumplieran 47 o 52 años de edad, cuales eran las diferencias entre las prestaciones reconocidas en cada régimen, informándole que una vez cumplida esa edad entraban en el periodo de carencia de los últimos 10 años y no podían trasladarse de nuevo al RPMPD.

Finalmente, es de recordar que durante todo el tiempo de existencia de las Administradoras de Fondos de Pensiones ha existido la figura del Defensor del Cliente (artículo 98 del EOF), conocida desde la Ley 795 de 2003 como defensor del Consumidor Financiero, al que cualquier afiliado pudo acudir si hubiese considerado que la entidad financiera no le prestó el servicio adecuadamente, no cumplió con lo acordado en la prestación de un servicio o proporcionó información que le resultara insuficiente para tomar una decisión.

Así las cosas, la teoría desarrollada por la Corte Suprema de Justicia, en la que indica que la información entregada por las AFP conforme a las normas que regían la materia en su momento (antes de la Ley 1748 de 2014), es insuficiente y ello *per se*, se constituye en una causal válida para declarar la ineficacia o nulidad de afiliación, no es congruente con los principios de irretroactividad de ley y de confianza legítima de las administradoras de Pensiones y de la Nación.

Cordial saludo,

**JOSÉ MANUEL RESTREPO ABONDANO**  
Ministro de Hacienda y Crédito Público

Revisó: OAJ/ Subdirección Jurídica  
Elaboró: Natalia Guevara Rivera/Gonzalo Casas Monsegny

<sup>9</sup> Período señalado antes de la modificación de la Ley 797 de 2003.





Ca4524503

**República de Colombia**  
N° 3064



Aa089777008 1

**NOTARÍA DIECIOCHO (18) DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C.**

**ESCRITURA PÚBLICA:**

TRES MIL SESENTA Y CUATRO (3064)

N° 3064

**FECHA OTORGAMIENTO: DICIEMBRE QUINCE (15) DEL AÑO DOS MIL VEINTITRÉS (2023)**

PRIMER ACTO

REVOCATORIA DE PODER ESPECIAL

**PODERDANTE:**

**SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S.A. con NIT. 800.144.331-3 debidamente representada por SILVIA LUCÍA REYES ACEVEDO identificado(a) con C.C. No. 37.893.544 expedida en San Gil- Santander.**

**APODERADOS:**

NOMBRE	CEDULA ó NIT
ADOLFO TOUS SALGADO	8285008
ADRIANA MARIA CUBAQUE CAÑAVERA	39777477
ALBA JANNETH MORENO BAQUERO	53077586
ALEJANDRO ARGOTI NARANJO	1018447580
ALEJANDRO CASTELLANOS LOPEZ	79985203
ANA MARIA ROMERO LAGOS	1019119578
ANA MARIA VALENCIA BOTERO	42162378
ANA XIMENA TAMAYO	36286470
ANDREA AYALA GOMEZ	1140887859
ANDREA DEL TORO BOCANEGRA	52253673
ANDREA PATRICIA ROLONG AVELLA	1045685857
ANDRES FELIPE ANGARITA ARCINIEGAS	1140857122
ANDRES FELIPE FERNANDEZ CARDONA	1069582580
ANDRES FELIPE TREJOS ATEHORTUA	1053844786
ANDRES GONZALES HENAO	10004318
ANDRES LALINDE CERON	1037641903

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

1136JANVPAAZ3D3

09-10-23

Cadena S.A. Manos Seguras

Cadena S.A. NIT. 800.144.331-3

11373G4DDY9CC



3064

2

ANDRES VALENCIA GUTIERREZ	84451973
ANGELA MARCELA RODRIGUEZ BECERRA	1012388263
ANGELICA MARIA DIAZ RODRIGUEZ	1057592591
ANGIE ANDREA CARRASQUILLA TORRES	1214737580
ANGIE MELISA ARCINIEGAS BOHORQUEZ	1098814116
ASTRID VERÓNICA VIDAL CAMPO	34325896
AURA MANUELA SUAREZ MARULANDA	1039473845
BEATRIZ LALINDE GOMEZ	32305840
BELLA LIDA MONTAÑA PERDOMO	52033898
BLANCA ALCIRA BOHORQUEZ DE DIAZ	41421981
CAMILA ALEJANDRA ABELLA GARCIA	1018467943
CAMILO ANDRES GARCIA SALAS	1033679797
CARLA SANTA FE FIGUERO	1130608527
CARLO GUSTAVO GARCIA MENDEZ	91475103
CARLOS ANDRES HERNANDEZ ESCOBAR	79955080
CARLOS JACINTO VALEGA PUELLO	8752361
CARLOS MANUEL RAMIREZ ACOSTA	79693893
CARLOS VALEGA ABOGADOS SAS	NIT: 901128523-1
CARMEN ROCIO ACEVEDO BERMUDEZ	37726059
CATALINA CORTES VIÑA	1010224930
CATALINA MARIA SOLANO CAUSIL	51960087
CÉSAR MAURICIO HEREDIA QUECÁN	79795447
CLAUDIA ELENA ORTEGA MURCIA	43511802
CLAUDIA LUCIA BEDOYA MORENO	43730160
DAGOBERTO RAMIREZ TENORIO	1088306242
DANIEL FERNANDEZ FLORES	1017170491
DANIELA ARIAS OROZCO	1053812490
DANIELA GARCIA VELEZ	1088023743
DANIELA GUERRERO ORDOÑEZ	1018458983
DANIELA PELAEZ RODAS	1090399073
DIANA MARCELA BAUTISTA RUIZ	1032360605
DIANA MARGARITA BERROCAL LENGUA	1067874002
DIANA MARTINEZ CUBIDES	52264480
DIEGO FELIPE ORTIZ GUTIERREZ	84451268
DIEGO SEBASTIAN ALVAREZ URREGO	1152459617
EDUARDO JOSE GIL GONZALES	16613428

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario





Ca 4524503

# República de Colombia

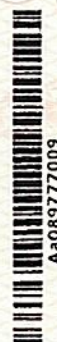
cadena 3064



Aa089777009 3

ELIZABETH MIRA HERNÁNDEZ	43868037
ELIZABETH MOJICA CHACON	52794871
ERIKA ISABEL ARRIETA RUIZ	32779976
FANNY GUTIERREZ LOZADA	41469144
FEDERICO URDINOLA LENIS	94309563
FELIPE ALFONSO DIAZ GUZMAN	79324734
FERNANDO ENRIQUE ARRIETA LORA	19499248
FERNANDO JOSE CARDENAS GUERRERO	12971749
FREDDY QUINTERO LOPEZ	79581111
GIANCARLO VALEGA BUSTAMANTE	1140838086
GINNA TATIANA DÍAZ MAHECHA	1030532562
GLORIA ESPERANZA MOJICA	40023522
GODOY CORDOBA ABOGADOS S.A.S.	NIT: 830515294-0
GRETEL PAOLA ALEMAN TORRENEGRA	1129580678
GUILLERMO LEON CHAVEZ	13011276
GUSTAVO VILLEGAS YEPES	1144054635
ISMAEL ORLANDO BABATIVA HILARION	79889501
IVONNE AMIRA TORRENTE SHULTZ	32737160
JAIME ANDRÉS CARREÑO GONZÁLEZ	1010185094
JAIME ANDRÉS RUIZ GALVIS	1098738053
JAIRO ALBERTO RESTREPO NOHAVA	80879894
JESSICA MARIA LONDOÑO RIOS	1053801795
JOHANA ANDREA LESMES MENDIETA	1015401438
JOHANA GISEL BRAVO SANCHEZ	1110479285
JOHNATAN DAVID RAMIREZ BORJA	1144127106
JORGE EDUARDO MONTAÑEZ CORTES	79443280
JORGE ENRIQUE MARTINEZ SIERRA	79914477
JORGE ENRIQUE RIVERO RUBIO	91534199
JOSE ALFREDO ACOSTA ACEVEDO	1140880274
JOSE BAIRON RAMIREZ PARRA	10097139
JUAN DAVID RIOS TAMAYO	1130676848
JUAN FRANCISCO HERNANDEZ ROA	19248144
JUAN GABRIEL CHINCHILLA CASTRO	72255168
JUAN JOSE JARAMILLO SANCHEZ	1035877468
JUAN MARTIN GALEANO JARAMILLO	1036623986
JUANA LUCIA VARGAS ORTIZ	1017227899

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario



Aa089777009



11364ADADPPAAJ3

09-10-23

Cadena S.A. No. 090935340

02-11-23

11374EAG4DYY9



KELLY JOHANNA GUERRERO HERNANDEZ	22731988
KEREN MARIA PAEZ HOYOS	1045675899
LAURA DANIELA PEÑA GUEVARA	1094967852
LAURA LUCIA MUÑOZ POSADA	1037595474
LAURA MARCELA RAMIREZ ROJAS	53905165
LAURA XIMENA FLOREZ GONZALEZ	1098797771
LINA MARIA VARGAS LIBERATO	1049639055
LIZ WENDY PEREZ MATOS	1143165172
LOPEZ Y ASOCIADOS S.A.S.	NIT: 830118372-4
LUIS CARLOS GEBAUER MORALES	77191671
LUIS FELIPE ARANA MADRIÑAN	79157258
LUIS FERNEY GONZALEZ PARRA	10020115
LUIS GUILLERMO IGLESIAS BERMEO	1082930759
LUIS MIGUEL MUÑOZ BUENO	94540769
LUISA FERNANDA CURREA FRANCO	1072709498
LUZ DARY CUERVO DUARTE	52966520
LUZ FABIOLA GARCIA CARRILLO	52647144
LUZ HELENA CATALINA HERRERA MANCIPE	51768337
LUZ MARYURY GIRALDO CIFUENTES	1094890026
MANUELA MOLINA VALENCIA	1152212193
MANUELA QUEVEDO CARDONA	1152467457
MARIA ALEJANDRA MEDINA LUNA	1020810201
MARIA ALEJANDRA PLATA ACEVEDO	1098778782
MARIA AMALIA CARDENAS LUNA	1085291493
MARIA CRISTINA BUCHELI FIERRO	52431353
MARÍA DEL PILAR VALENCIA GUTIERREZ	57463554
MARIA FERNANDA RUIZ LOAIZA	67013937
MARIA TERESA GONZALEZ SOLEDAD	40043858
MARIA XIMENA MEDINA RAMIREZ	37393314
MARIA YORLADYS ZAPATA GALVIS	42011709
MARISOL ARISTIZABAL GIRALDO	1017186779
MARTHA LUCIA ALMEIDA CARVAJAL	34546611
MARTHA MARIÑO CASTAÑEDA	52517325
MAYCOL RAFAEL SANCHEZ VELEZ	1143150933
MELISSA LOZANO HINCAPIE	1088332294
MIGUEL ÁNGEL SERNA ARISTIZABAL	75104922

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario





Ca 4524503

cadena

República de Colombia



Aa089777010 5

3064

MIGUEL JOSE GREGORY VILLEGAS CASTAÑEDA	1110464235
MIRIAM TATIANA PEÑA MOLANO	1026274345
NATALIA GOMEZ CASTAÑO	1053768706
NAURO RAFAEL CABALLERO GARCIA	73080145
NAVI GUILLERMO LAMK CASTRO	88212852
NAYROBY DIAZ REINO	34946544
NEFTALI VASQUEZ VARGAS	12106814
NELSON RICARDO ARCOS MORENO	7167913
ORLIN GAVIRIS CAICEDO HURTADO	12919935
OSCAR ANDRES BLANCO RIVERA	19090427
PAOLA ANDREA VENCE COLLAZOS	52703449
PATRICIA CERON SANCHEZ	34545617
PAULA ALEJANDRA QUINTERO BUSTOS	1016089697
PAULINA TOUS GAVIRIA	42137888
PROCEDER S.A.S	NIT: 901.289.080-9
RAFAEL GARCIA MENDEZ	13719501
RITA MERCEDEZ SIERRA GONZALES	45441500
SANDRA LILIANA SIERRA CHAPARRO	46386722
SAUL ENRIQUE VEGA MENDOZA	5162675
SAUL ENRIQUE VEGA NUÑEZ	92642437
SEBASTIAN FERNANDEZ BONILLA	80875529
SEBASTIAN RAMIREZ VALLEJO	1088023149
SHIRLY MARCELA VANEGAS TREJOS	1126598781
SHULY ROXANA GOMEZ FANG	1050957682
TANIA ISABEL ZAPATA LORA	1152694649
TOUS ABOGADOS ASOCIADOS SAS	NIT: 00411483-2
UGALBIS ENRIQUE RODRIGUEZ BOLAÑOS	17970755
VALENTINA LONDOÑO CUARTAS	1037612924
VALENTINA SANCHEZ GONZALEZ	1070022343
VANESSA GIRALDO CIFUENTES	1088271844
VANESSA LICETH BELLO SALCEDO	1140855245
VANESSA PRINCE GARCIA MEJIA	40945070
VICTORIA ISABEL TOUS GAVIRIA	42128976
VLADIMIR MONTOYA MORALES	1128276094
WALTER GIOVANY ROCHA ARIAS	1014217682
WENDY ALEJANDRA SANDOVAL RAMIREZ	1026293434

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario



Aa089777010



09-10-23 • 1136572ADA9PPAA

Cadena SA

Cadena SA

11375aGEAG4D4



WILLIAM ARTURO TRONCOSO REYES	1082926236
WILLIAM TRUJILLO CHAVARRIAGA	16783965
YEUDI VALLEJO SANCHEZ	79963537
YOLIVETH ESTHER CASTAÑO AVILA	22539744
YULIETH ARIAS ALVAREZ	1088276477

VALOR DEL ACTO: SIN CUANTÍA.-----

-----SEGUNDO ACTO-----

-----PODER ESPECIAL-----

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO: -----

PODERDANTE: -----

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS  
PORVENIR S.A. con NIT. 800.144.331-3 debidamente representada por SILVIA  
LUCÍA REYES ACEVEDO identificado(a) con C.C. No. 37.893.544 expedida en  
San Gil – Santander.-----

APODERADOS:-----

NOMBRE	CEDULA ó NIT
ADOLFO TOUS SALGADO	8285008
ADRIANA MARIA CUBAQUE CAÑAVERA	39777477
ALBA JANNETH MORENO BAQUERO	53077586
ALEJANDRO CASTELLANOS LOPEZ	79985203
ANA MARIA ROMERO LAGOS	1019119578
ANA MARIA VALENCIA BOTERO	42162378
ANA XIMENA TAMAYO	36286470
ANDREA DEL TORO BOCANEGRA	52253673
ANDRES FELIPE FERNANDEZ CARDONA	1069582580
ANDRES FELIPE TREJOS ATEHORTUA	1053844786
ANDRES GONZALES HENAO	10004318
ANDRES LALINDE CERON	1037641903
ANDRES VALENCIA GUTIERREZ	84451973
ANGELA MARCELA RODRIGUEZ BECERRA	1012388263
ANGELICA MARIA DIAZ RODRIGUEZ	1057592591





Ca4524503

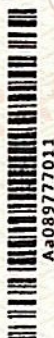
**República de Colombia**  
**cadena** **Nº 3064**



Aa089777011 7

ANGIE ANDREA CARRASQUILLA TORRES	1214737580
ANGIE MELISA ARCINIEGAS BOHORQUEZ	1098814116
ASTRID VERÓNICA VIDAL CAMPO	34325896
AURA MANUELA SUAREZ MARULANDA	1039473845
BEATRIZ LALINDE GOMEZ	32305840
BELLA LIDA MONTAÑA PERDOMO	52033898
BLANCA ALCIRA BOHORQUEZ DE DIAZ	41421981
BRENDA ZULGEY MERCADO FERREIRA	1098663314
CAMILA ALEJANDRA ABELLA GARCIA	1018467943
CAMILO ANDRES GARCIA SALAS	1033679797
CAMILO ANDRES POVEDA VILLANOVA	1102549082
CARLA SANTAFE FIGUERO	1130608527
CARLO GUSTAVO GARCIA MENDEZ	91475103
CARLOS ANDRES HERNANDEZ ESCOBAR	79955080
CARLOS ANDRES VIUCHE FONSECA	1144027236
CARLOS JACINTO VALEGA PUELLO	8752361
CARLOS MANUEL RAMIREZ ACOSTA	79693893
CARLOS VALEGA ABOGADOS SAS	NIT: 901128523-1
CARMEN ROCIO ACEVEDO BERMUDEZ	37726059
CARMEN YOJANA RAMIREZ VILLEGAS	43209298
CAROLD JULIANA MONRROY MORENO	52456659
CATALINA CORTES VIÑA	1010224930
CATALINA MARIA SOLANO CAUSIL	51960087
CÉSAR MAURICIO HEREDIA QUECÁN	79795447
CLAUDIA ELENA ORTEGA MURCIA	43511802
DAGOBERTO RAMIREZ TENORIO	1088306242
DANA VALENTINA CORTES CIFUENTES	1069266048
DANIELA ARIAS OROZCO	1053812490
DANIELA GARCIA VELEZ	1088023743
DANIELA GUERRERO ORDOÑEZ	1018458983
DANIELA PELAEZ RODAS	1090399073
DANYELA KATHERINE MONTES BENITEZ	1001914904
DIANA MARCELA BAUTISTA RUIZ	1032360605
DIANA MARTINEZ CUBIDES	52264480
DIEGO FELIPE ORTIZ GUTIERREZ	84451268
DIEGO SEBASTIAN ALVAREZ URREGO	1152459617

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario



Aa089777011



11361PAAZO-AAP

09-10-23

Cadena SA No. 894935340

02-11-23

11371YACG8AE4



EDUARDO JOSE GIL GONZALES	16613428
ELIZABETH MIRA HERNÁNDEZ	43868037
ELIZABETH MOJICA CHACON	52794871
ERIKA ISABEL ARRIETA RUIZ	32779976
FANNY GUTIERREZ LOZADA	41469144
FEDERICO URDINOLA LENIS	94309563
FELIPE ALFONSO DIAZ GUZMAN	79324734
FERNANDO ENRIQUE ARRIETA LORA	19499248
FERNANDO JOSE CARDENAS GUERRERO	12971749
GIANCARLO VALEGA BUSTAMANTE	1140838086
GINNA TATIANA DÍAZ MAHECHA	1030532562
GLORIA ESPERANZA MOJICA	40023522
GODOY CORDOBA ABOGADOS S.A.S.	NIT: 830515294-0
GRETEL PAOLA ALEMAN TORRENEGRA	1129580678
GUILLERMO LEON CHAVEZ	13011276
GUSTAVO VILLEGAS YEPES	1144054635
HECTOR JOSE BONILLA LIZCANO	7715904
ISMAEL ORLANDO BABATIVA HILARION	79889501
IVONNE AMIRA TORRENTE SHULTZ	32737160
JAIME ANDRÉS CARREÑO GONZÁLEZ	1010185094
JAIME ANDRÉS RUIZ GALVIS	1098738053
JAIRO ALBERTO RESTREPO NOHAVA	80879894
JESSICA MARIA LONDOÑO RIOS	1053801795
JESUS HUMBERTO GAITAN LEAL	19441758
JHON ALEXANDER PABON MORALES	80744875
JOHANA ANDREA LESMES MENDIETA	1015401438
JOHANA GISEL BRAVO SANCHEZ	1110479285
JOHNATAN DAVID RAMIREZ BORJA	1144127106
JORGE EDUARDO MONTAÑEZ CORTES	79443280
JORGE ENRIQUE MARTINEZ SIERRA	79914477
JORGE ENRIQUE RIVERO RUBIO	91534199
JORGE LUIS FONTALVO CORREA	1045734875
JOSE ALFREDO ACOSTA ACEVEDO	1140880274
JOSE BAIRON RAMIREZ PARRA	10097139
JUAN DAVID RIOS TAMAYO	1130676848
JUAN FRANCISCO HERNANDEZ ROA	19248144





Ca 4524503

**República de Colombia**  
**cadena 3064**



Aa089777012 9

JUAN GABRIEL CHINCHILLA CASTRO	72255168
JUAN MARTIN GALEANO JARAMILLO	1036623986
KELLY JOHANNA GUERRERO HERNANDEZ	22731988
KEREN MARIA PAEZ HOYOS	1045675899
KIMBERLY ZARITH VILLANUEVA LÓPEZ	1045715327
LAURA DANIELA PEÑA GUEVARA	1094967852
LAURA LUCIA MUÑOZ POSADA	1037595474
LAURA MARCELA RAMIREZ ROJAS	53905165
LAURA XIMENA FLOREZ GONZALEZ	1098797771
LEIDY VICTORIA JARA MUÑOZ	53037192
LINA MARIA VARGAS LIBERATO	1049639055
LIZ WENDY PEREZ MATOS	1143165172
LIZETH ANGELICA RODRIGUEZ MARTINEZ	1022409921
LOPEZ Y ASOCIADOS S.A.S.	NIT: 830118372-4
LUIS CARLOS GEBAUER MORALES	77191671
LUIS FELIPE ARANA MADRIÑAN	79157258
LUIS FERNEY GONZALEZ PARRA	10020115
LUIS MIGUEL MUÑOZ BUENO	94540769
LUISA FERNANDA CURREA FRANCO	1072709498
LUZ DARY CUERVO DUARTE	52966520
LUZ FABIOLA GARCIA CARRILLO	52647144
LUZ HELENA CATALINA HERRERA MANCIPE	51768337
LUZ MARYURY GIRALDO CIFUENTES	1094890026
MALORY SALTAREN RAMIREZ	1083024582
MANUELA MOLINA VALENCIA	1152212193
MARIA ALEJANDRA MEDINA LUNA	1020810201
MARIA ALEJANDRA PLATA ACEVEDO	1098778782
MARIA ALEJANDRA QUINTERO MUÑOZ	1152217116
MARIA AMALIA CARDENAS LUNA	1085291493
MARIA ANDREA FLOREZ DAVID	1069501523
MARIA CRISTINA BUCHELI FIERRO	52431353
MARÍA DEL PILAR VALENCIA GUTIERREZ	57463554
MARIA FERNANDA RUIZ LOAIZA	67013937
MARIA TERESA GONZALEZ SOLEDAD	40043858
MARIA XIMENA MEDINA RAMIREZ	37393314
MARIA YORLADYS ZAPATA GALVIS	42011709

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario



Aa089777012



09-10-23 11362PPAAZZ091A

cadena.s.a. No. 99030534-0

02-11-23

11372DCYACGaA



MARISOL ARISTIZABAL GIRALDO	1017186779
MARTHA LUCIA ALMEIDA CARVAJAL	34546611
MARTHA MARIÑO CASTAÑEDA	52517325
MELISSA LOZANO HINCAPIE	1088332294
MIGUEL ANGEL MARQUEZ SERRANO	13839869
MIGUEL ÁNGEL SERNA ARISTIZABAL	75104922
MIGUEL JOSE GREGORY VILLEGAS CASTAÑEDA	1110464235
MIRIAM TATIANA PEÑA MOLANO	1026274345
MONICA ESPERANZA TASCO MUÑOZ	1018451024
NATALIA GOMEZ CASTAÑO	1053768706
NAURO RAFAEL CABALLERO GARCIA	73080145
NAVI GUILLERMO LAMK CASTRO	88212852
NAYROBY DIAZ REINO	34946544
NEFTALI VASQUEZ VARGAS	12106814
NELSON RICARDO ARCOS MORENO	7167913
OLGA MILENA MUNZA MOLANO	1016040173
ORLIN GAVIRIS CAICEDO HURTADO	12919935
OSCAR ANDRES BLANCO RIVERA	19090427
PAOLA ANDREA VENCE COLLAZOS	52703449
PATRICIA CERON SANCHEZ	34545617
PAULA ALEJANDRA QUINTERO BUSTOS	1016089697
PAULINA TOUS GAVIRIA	42137888
PROCEDER S.A.S	NIT: 901.289.080-9
RAFAEL GARCIA MENDEZ	13719501
RITA MERCEDEZ SIERRA GONZALES	45441500
SANDRA LILIANA SIERRA CHAPARRO	46386722
SANTIAGO CADENA MANTILLA	1018508615
SAUL ENRIQUE VEGA MENDOZA	5162675
SAUL ENRIQUE VEGA NUÑEZ	92642437
SEBASTIAN FERNANDEZ BONILLA	80875529
SEBASTIAN RAMIREZ VALLEJO	1088023149
SHIRLY MARCELA VANEGAS TREJOS	1126598781
TANIA ISABEL ZAPATA LORA	1152694649
TOUS ABOGADOS ASOCIADOS SAS	NIT: 900411483-2
UGALBIS ENRIQUE RODRIGUEZ BOLAÑOS	17970755
VALENTINA LONDOÑO CUARTAS	1037612924





Ca 4524503

 **República de Colombia**  
**cadena 3064**



Aa08977701311

VANESSA GIRALDO CIFUENTES	1088271844
VICTORIA ISABEL TOUS GAVIRIA	42128976
VLADIMIR MONTOYA MORALES	1128276094
WALTER GIOVANY ROCHA ARIAS	1014217682
WENDY ALEJANDRA SANDOVAL RAMIREZ	1026293434
WILLIAM ARTURO TRONCOSO REYES	1082926236
WILLIAM TRUJILLO CHAVARRIAGA	16783965
YEUDI VALLEJO SANCHEZ	79963537
YOLIVETH ESTHER CASTAÑO AVILA	22539744
YULIETH ARIAS ALVAREZ	1088276477

VALOR DEL ACTO: SIN CUANTÍA.

En la Ciudad de Bogotá Distrito Capital, Departamento de Cundinamarca, República de Colombia, a los QUINCE (15) días de DICIEMBRE de dos mil veintitrés (2023), en la Notaría Dieciocho (18) del Círculo de Bogotá, estando, fungiendo como Notario En Propiedad JOSÉ MIGUEL ROBAYO PIÑEROS, se otorgó Escritura Pública en los siguientes términos: -----

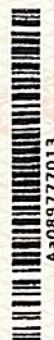
-----PRIMER ACTO-----

-----REVOCATORIA DE PODER ESPECIAL-----

-----COMPARECÍO CON MINUTA ESCRITA-----

SILVIA LUCIA REYES ACEVEDO, mayor de edad, domiciliada y residente en esta ciudad, identificada con la cédula de ciudadanía número 37.893.544 expedida en San Gil - Santander, quien en su calidad de Vicepresidente y por tanto Representante Legal obra en nombre y representación de **SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.**, identificada con NIT 800.144.331-3, sociedad de servicios financieros legalmente constituida por Escritura Pública número cinco mil trescientos siete (5307) de fecha veintidós (22) de octubre del año mil novecientos noventa y uno (1991), otorgada en la Notaría Veintitrés (23) del Círculo Notarial de Bogotá, con autorización de funcionamiento conferida por la Superintendencia Financiera de

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario



Aa089777013



11363APPAAZDA

09-10-23

Cadena S.A. No. 96935340

02-11-23

Cadena S.A. No. 96935340

11373G4DGYACC



Colombia mediante la Resolución S.F.C. 3970 del treinta (30) de octubre del año mil novecientos noventa y uno (1991) y domicilio principal en Bogotá D.C, según consta en el certificado de existencia y representación legal expedido por la Superintendencia Financiera de Colombia, que se anexa para su protocolización, y;--

-----**MANIFESTÓ**-----

**PRIMERO:** Que por medio del presente instrumento público se **REVOCA** los **PODERES ESPECIALES**, otorgados por medio de la Escritura Pública número mil doscientos ochenta y uno (1281) otorgada el dos (02) de junio del año dos mil veintidós (2023) en la Notaría Dieciocho (18) del Círculo de Bogotá D.C., a las personas a las cuales se les había conferido poder especial mediante dicha escritura, dejándola sin valor, ni efecto alguno. -----

-----**HASTA AQUÍ LA MINUTA PRESENTADA**-----

**NOTA UNO (1).** - Acude a este despacho a **REVOCAR** en todas y cada una de sus partes **EL PODER ESPECIAL** otorgado a:-----

<b>NOMBRE</b>	<b>CEDULA ó NIT</b>
<b>ADOLFO TOUS SALGADO</b>	<b>8285008</b>
<b>ADRIANA MARIA CUBAQUE CAÑAVERA</b>	<b>39777477</b>
<b>ALBA JANNETH MORENO BAQUERO</b>	<b>53077586</b>
<b>ALEJANDRO ARGOTI NARANJO</b>	<b>1018447580</b>
<b>ALEJANDRO CASTELLANOS LOPEZ</b>	<b>79985203</b>
<b>ANA MARIA ROMERO LAGOS</b>	<b>1019119578</b>
<b>ANA MARIA VALENCIA BOTERO</b>	<b>42162378</b>
<b>ANA XIMENA TAMAYO</b>	<b>36286470</b>
<b>ANDREA AYALA GOMEZ</b>	<b>1140887859</b>
<b>ANDREA DEL TORO BOCANEGRA</b>	<b>52253673</b>
<b>ANDREA PATRICIA ROLONG AVELLA</b>	<b>1045685857</b>
<b>ANDRES FELIPE ANGARITA ARCINIEGAS</b>	<b>1140857122</b>
<b>ANDRES FELIPE FERNANDEZ CARDONA</b>	<b>1069582580</b>
<b>ANDRES FELIPE TREJOS ATEHORTUA</b>	<b>1053844786</b>
<b>ANDRES GONZALES HENAO</b>	<b>10004318</b>
<b>ANDRES LALINDE CERON</b>	<b>1037641903</b>

**Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario**





Ca4524503

**República de Colombia**  
cadena #3064



Aa08977701413

ANDRES VALENCIA GUTIERREZ	84451973
ANGELA MARCELA RODRIGUEZ BECERRA	1012388263
ANGELICA MARIA DIAZ RODRIGUEZ	1057592591
ANGIE ANDREA CARRASQUILLA TORRES	1214737580
ANGIE MELISA ARCINIEGAS BOHORQUEZ	1098814116
ASTRID VERÓNICA VIDAL CAMPO	34325896
AURA MANUELA SUAREZ MARULANDA	1039473845
BEATRIZ LALINDE GOMEZ	32305840
BELLA LIDA MONTAÑA PERDOMO	52033898
BLANCA ALCIRA BOHORQUEZ DE DIAZ	41421981
CAMILA ALEJANDRA ABELLA GARCIA	1018467943
CAMILO ANDRES GARCIA SALAS	1033679797
CARLA SANTAFE FIGUEROA	1130608527
CARLO GUSTAVO GARCIA MENDEZ	91475103
CARLOS ANDRES HERNANDEZ ESCOBAR	79955080
CARLOS JACINTO VALEGA PUELLO	8752361
CARLOS MANUEL RAMIREZ ACOSTA	79693893
CARLOS VALEGA ABOGADOS SAS	NIT: 901128523-1
CARMEN ROCIO ACEVEDO BERMUDEZ	37726059
CATALINA CORTES VIÑA	1010224930
CATALINA MARIA SOLANO CAUSIL	51960087
CÉSAR MAURICIO HEREDIA QUECÁN	79795447
CLAUDIA ELENA ORTEGA MURCIA	43511802
CLAUDIA LUCIA BEDOYA MORENO	43730160
DAGOBERTO RAMIREZ TENORIO	1088306242
DANIEL FERNANDEZ FLORES	1017170491
DANIELA ARIAS OROZCO	1053812490
DANIELA GARCIA VELEZ	1088023743
DANIELA GUERRERO ORDOÑEZ	1018458983
DANIELA PELAEZ RODAS	1090399073
DIANA MARCELA BAUTISTA RUIZ	1032360605
DIANA MARGARITA BERROCAL LENGUA	1067874002
DIANA MARTINEZ CUBIDES	52264480
DIEGO FELIPE ORTIZ GUTIERREZ	84451268
DIEGO SEBASTIAN ALVAREZ URREGO	1152459617
EDUARDO JOSE GIL GONZALES	16613428

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario



Aa089777014

11364ADA3PPAAZ

09-10-23

Cadena SA. No. 090495340

Cadena SA. No. 090495340 02-11-23

11374EAG4DKYA



ELIZABETH MIRA HERNÁNDEZ	43868037
ELIZABETH MOJICA CHACON	52794871
ERIKA ISABEL ARRIETA RUIZ	32779976
FANNY GUTIERREZ LOZADA	41469144
FEDERICÓ URDINOLA LENIS	94309563
FELIPE ALFONSO DIAZ GUZMAN	79324734
FERNANDO ENRIQUE ARRIETA LORA	19499248
FERNANDO JOSE CARDENAS GUERRERO	12971749
FREDDY QUINTERO LOPEZ	79581111
GIANCARLO VALEGA BUSTAMANTE	1140838086
GINNA TATIANA DÍAZ MAHECHA	1030532562
GLORIA ESPERANZA MOJICA	40023522
GODOY CORDOBA ABOGADOS S.A.S.	NIT: 830515294-0
GRETEL PAOLA ALEMAN TORRENEGRA	1129580678
GUILLERMO LEON CHAVEZ	13011276
GUSTAVO VILLEGAS YEPES	1144054635
ISMAEL ORLANDO BABATIVA HILARION	79889501
IVONNE AMIRA TORRENTE SHULTZ	32737160
JAIME ANDRÉS CARREÑO GONZÁLEZ	1010185094
JAIME ANDRÉS RUIZ GALVIS	1098738053
JAIRO ALBERTO RESTREPO NOHAVA	80879894
JESSICA MARIA LONDOÑO RIOS	1053801795
JOHANA ANDREA LESMES MENDIETA	1015401438
JOHANA GISEL BRAVO SANCHEZ	1110479285
JOHNATAN DAVID RAMIREZ BORJA	1144127106
JORGE EDUARDO MONTAÑEZ CORTES	79443280
JORGE ENRIQUE MARTINEZ SIERRA	79914477
JORGE ENRIQUE RIVERO RUBIO	91534199
JOSE ALFREDO ACOSTA ACEVEDO	1140880274
JOSE BAIRON RAMIREZ PARRA	10097139
JUAN DAVID RIOS TAMAYO	1130676848
JUAN FRANCISCO HERNANDEZ ROA	19248144
JUAN GABRIEL CHINCHILLA CASTRO	72255168
JUAN JOSÉ JARAMILLO SANCHEZ	1035877468
JUAN MARTIN GALEANO JARAMILLO	1036623986
JUANA LUCIA VARGAS ORTIZ	1017227899





Ca4524503

**República de Colombia**  
**cadena** #3064

Aa089777015<sup>15</sup>

KELLY JOHANNA GUERRERO HERNANDEZ	22731988
KEREN MARIA PAEZ HOYOS	1045675899
LAURA DANIELA PEÑA GUEVARA	1094967852
LAURA LUCIA MUÑOZ POSADA	1037595474
LAURA MARCELA RAMIREZ ROJAS	53905165
LAURA XIMENA FLOREZ GONZALEZ	1098797771
LINA MARIA VARGAS LIBERATO	1049639055
LIZ WENDY PEREZ MATOS	1143165172
LOPEZ Y ASOCIADOS S.A.S.	NIT: 830118372-4
LUIS CARLOS GEBAUER MORALES	77191671
LUIS FELIPE ARANA MADRIÑAN	79157258
LUIS FERNEY GONZALEZ PARRA	10020115
LUIS GUILLERMO IGLESIAS BERMEO	1082930759
LUIS MIGUEL MUÑOZ BUENO	94540769
LUISA FERNANDA CURREA FRANCO	1072709498
LUZ DARY CUERVO DUARTE	52966520
LUZ FABIOLA GARCIA CARRILLO	52647144
LUZ HELENA CATALINA HERRERA MANCIPE	51768337
LUZ MARYURY GIRALDO CIFUENTES	1094890026
MANUELA MOLINA VALENCIA	1152212193
MANUELA QUEVEDO CARDONA	1152467457
MARIA ALEJANDRA MEDINA LUNA	1020810201
MARIA ALEJANDRA PLATA ACEVEDO	1098778782
MARIA AMALIA CARDENAS LUNA	1085291493
MARIA CRISTINA BUCHELI FIERRO	52431353
MARÍA DEL PILAR VALENCIA GUTIERREZ	57463554
MARIA FERNANDA RUIZ LOAIZA	67013937
MARIA TERESA GONZALEZ SOLEDAD	40043858
MARIA XIMENA MEDINA RAMIREZ	37393314
MARIA YORLADYS ZAPATA GALVIS	42011709
MARISOL ARISTIZABAL GIRALDO	1017186779
MARTHA LUCIA ALMEIDA CARVAJAL	34546611
MARTHA MARIÑO CASTAÑEDA	52517325
MAYCOL RAFAEL SANCHEZ VELEZ	1143150933
MELISSA LOZANO HINCAPIE	1088332294
MIGUEL ÁNGEL SERNA ARISTIZABAL	75104922

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario



Aa089777015



113652aDAZPPAA

09-10-23

cadena S.A. no pague

cadena S.A. no pague 09-11-23

11375aGEAG4D9



MIGUEL JOSE GREGORY VILLEGAS CASTAÑEDA	1110464235
MIRIAM TATIANA PEÑA MOLANO	1026274345
NATALIA GOMEZ CASTAÑO	1053768706
NAURO RAFAEL CABALLERO GARCIA	73080145
NAVI GUILLERMO LAMK CASTRO	88212852
NAYROBY DIAZ REINO	34946544
NEFTALI VASQUEZ VARGAS	12106814
NELSON RICARDO ARCOS MORENO	7167913
ORLIN GAVIRIS CAICEDO HURTADO	12919935
OSCAR ANDRES BLANCO RIVERA	19090427
PAOLA ANDREA VENCE COLLAZOS	52703449
PATRICIA CERON SANCHEZ	34545617
PAULA ALEJANDRA QUINTERO BUSTOS	1016089697
PAULINA TOUS GAVIRIA	42137888
PROCEDÉR S.A.S	NIT: 901.289.080-9
RAFAEL GARCIA MENDEZ	13719501
RITA MERCEDEZ SIERRA GONZALES	45441500
SANDRA LILIANA SIERRA CHAPARRO	46386722
SAUL ENRIQUE VEGA MENDOZA	5162675
SAUL ENRIQUE VEGA NUÑEZ	92642437
SEBASTIAN FERNANDEZ BONILLA	80875529
SEBASTIAN RAMIREZ VALLEJO	1088023149
SHIRLY MARCELA VANEGAS TREJOS	1126598781
SHULY ROXANA GÓMEZ FANG	1050957682
TANIA ISABEL ZAPATA LORA	1152694649
TOUS ABOGADOS ASOCIADOS SAS	NIT: 900411483-2
UGALBIS ENRIQUE RODRIGUEZ BOLAÑOS	17970755
VALENTINA LONDOÑO CUARTAS	1037612924
VALENTINA SANCHEZ GONZALEZ	1070022343
VANESSA GIRALDO CIFUENTES	1088271844
VANESSA LICETH BELLO SALCEDO	1140855245
VANESSA PRINCE GARCIA MEJIA	40945070
VICTORIA ISABEL TOUS GAVIRIA	42128976
VLADIMIR MONTOYA MORALES	1128276094
WALTER GIOVANY ROCHA ARIAS	1014217682
WENDY ALEJANDRA SANDOVAL RAMIREZ	1026293434





Ca4524503

**República de Colombia**  
**cadena** **Nº 3064**



Aa08977701617

WILLIAM ARTURO TRONCOSO REYES	1082926236
WILLIAM TRUJILLO CHAVARRIAGA	16783965
YEUDI VALLEJO SANCHEZ	79963537
YOLIVETH ESTHER CASTAÑO AVILA	22539744
YULIETH ARIAS ALVAREZ	1088276477



**NOTA DOS (2).**- Con esta revocación, SILVIA LUCIA REYES ACEVEDO, quien actúa en nombre y representación de la **SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.**, identificada con NIT. 800.144.331-3, declara **CANCELADA** la Escritura Publica número mil doscientos ochenta y uno (1281) otorgada el dos (02) de junio del año dos mil veintitrés (2023) en la Notaría Dieciocho (18) del Círculo de Bogotá D.C., en cuanto respecta al poder conferido por la entidad que representa.

**NOTA TRES (3).** - Teniendo en cuenta que la Escritura antes mencionada se encuentra en las dependencias de la Notaría Dieciocho (18) del Círculo de Bogotá D.C., el (la) Notario (a) impondrá la respectiva nota en el protocolo correspondiente del contenido del presente instrumento público.

**ACEPTACIÓN:** Presente (a) **EL (LA) (LOS) COMPARECIENTE (S)**, de las condiciones civiles anteriormente anotadas, manifestó (aron): -----  
Que acepta (n) la presente Escritura de Revocatoria de Poder por estar en todo de acuerdo con todo lo deseado por la entidad que representa.

-----**SEGUNDO ACTO**-----

-----**PODER ESPECIAL**-----

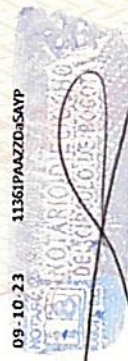
-----**COMPARECIÓ CON MINUTA ESCRITA**-----

**SILVIA LUCIA REYES ACEVEDO**, mayor de edad, domiciliada y residente en esta ciudad, identificada con la cédula de ciudadanía número **37.893.544** expedida en San Gil - Santander, quien en su calidad de Vicepresidente y por tanto Representante Legal obra en nombre y representación de **SOCIEDAD**

**Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario**



Aa089777016



09-10-23 11361PAAZD:SNTP  
Cadena SA No. 8935540

Nº 3064



**ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.**, identificada con NIT 800.144.331-3, sociedad de servicios financieros legalmente constituida por Escritura Pública número cinco mil trescientos siete (5307) de fecha veintidós (22) de octubre del año mil novecientos noventa y uno (1991), otorgada en la Notaría Veintitrés (23) del Círculo Notarial de Bogotá, con autorización de funcionamiento conferida por la Superintendencia Financiera de Colombia mediante la Resolución S.F.C. 3970 del treinta (30) de octubre del año mil novecientos noventa y uno (1991) y domicilio principal en Bogotá D.C, según consta en el certificado de existencia y representación legal expedido por la Superintendencia Financiera de Colombia, que se anexa para su protocolización, y;--

-----**MANIFESTÓ**-----

**PRIMERO:** Por medio de este instrumento, **CONFIERO PODER ESPECIAL**, a los siguientes Subgerentes de servicio de las sedes Regionales de la **SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.**, así como a los Abogados de planta y Externos de la **SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.**, para representarla ante las Autoridades Judiciales y Administrativas, con la facultad general para actuar bajo los parámetros del artículo 74 y 77 del Código General del Proceso, en las audiencias de conciliación y de trámite de que tratan los artículos 77 y 80 del Código de Procedimiento Laboral y de la Seguridad Social, en las audiencias de conciliación de que tratan los artículos 372 y 373 del Código General del Proceso y demás normas concordantes conforme a la normatividad vigente, las audiencias de conciliación extrajudiciales, así como para absolver interrogatorio de parte, asistir a funcionarios, notificarse de resoluciones, actos administrativos, demandas judiciales y providencias judiciales, exhibir documentos, confesar y conciliar en los procesos que se adelanten en contra de **SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.**, por sus funcionarios, ex funcionarios, afiliados a los Fondos de Pensiones Voluntarias, Obligatorias y Cesantías, así como por las personas que ostenten la calidad de beneficiarios de éstos, empleadores, o en todos aquellos en los que la **SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS**





Ca4524503

**República de Colombia**  
**cadena** 3064



Aa08977701719

PORVENIR S.A sea parte.

TERCERO: Otorgar poder amplio y suficiente a:

NOMBRE	CEDULA ó NIT
ADOLFO TOUS SALGADO	8285008
ADRIANA MARIA CUBAQUE CAÑAVERA	39777477
ALBA JANNETH MORENO BAQUERO	53077586
ALEJANDRO CASTELLANOS LOPEZ	79985203
ANA MARIA ROMERO LAGOS	1019119578
ANA MARIA VALENCIA BOTERO	42162378
ANA XIMENA TAMAYO	36286470
ANDREA DEL TORO BOCANEGRA	52253673
ANDRES FELIPE FERNANDEZ CARDONA	1069582580
ANDRES FELIPE TREJOS ATEHORTUA	1053844786
ANDRES GONZALES HENAO	10004318
ANDRES LALINDE CERON	1037641903
ANDRES VALENCIA GUTIERREZ	84451973
ANGELA MARCELA RODRIGUEZ BECERRA	1012388263
ANGELICA MARIA DIAZ RODRIGUEZ	1057592591
ANGIE ANDREA CARRASQUILLA TORRES	1214737580
ANGIE MELISA ARCINIEGAS BOHORQUEZ	1098814116
ASTRID VERÓNICA VIDAL CAMPO	34325896
AURA MANUELA SUAREZ MARULANDA	1039473845
BEATRIZ LALINDE GOMEZ	32305840
BELLA LIDA MONTAÑA PERDOMO	52033898
BLANCA ALCIRA BOHORQUEZ DE DIAZ	41421981
BRENDA ZULGEY MERCADO FERREIRA	1098663314
CAMILA ALEJANDRA ABELLA GARCIA	1018467943
CAMILO ANDRES GARCIA SALAS	1033679797
CAMILO ANDRES POVEDA VILLANOVA	1102549082
CARLA SANTAFE FIGUEREDO	1130608527
CARLO GUSTAVO GARCIA MENDEZ	91475103
CARLOS ANDRES HERNANDEZ ESCOBAR	79955080
CARLOS ANDRES VIUCHE FONSECA	1144027236
CARLOS JACINTO VALEGA PUELLO	8752361

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario



Aa089777017

09-10-23 11372PYPAAZDdLA

Cadena S.A. No. 896935340

02-11-23

11372DEYACgaA



CARLOS MANUEL RAMIREZ ACOSTA	79693893
CARLOS VALEGA ABOGADOS SAS	NIT: 901128523-1
CARMEN ROCIO ACEVEDO BERMUDEZ	37726059
CARMEN YOJANA RAMIREZ VILLEGAS	43209298
CAROLD JULIANA MONRROY MORENO	52456659
CATALINA CORTES VIÑA	1010224930
CATALINA MARIA SOLANO CAUSIL	51960087
CÉSAR MAURICIO HEREDIA QUECÁN	79795447
CLAUDIA ELENA ORTEGA MURCIA	43511802
DAGOBERTO RAMIREZ TENORIO	1088306242
DANA VALENTINA CORTES CIFUENTES	1069266048
DANIELA ARIAS OROZCO	1053812490
DANIELA GARCIA VELEZ	1088023743
DANIELA GUERRERO ORDOÑEZ	1018458983
DANIELA PELAEZ RODAS	1090399073
DANYELA KATHERINE MONTES BENITEZ	1001914904
DIANA MARCELA BAUTISTA RUIZ	1032360605
DIANA MARTINEZ CUBIDES	52264480
DIEGO FELIPE ORTIZ GUTIERREZ	84451268
DIEGO SEBASTIAN ALVAREZ URREGO	1152459617
EDUARDO JOSE GIL GONZALES	16613428
ELIZABETH MIRA HERNÁNDEZ	43868037
ELIZABETH MOJICA CHACON	52794871
ERIKA ISABEL ARRIETA RUIZ	32779976
FANNY GUTIERREZ LOZADA	41469144
FEDERICO URDINOLA LENIS	94309563
FELIPE ALFONSO DIAZ GUZMAN	79324734
FERNANDO ENRIQUE ARRIETA LORA	19499248
FERNANDO JOSE CARDENAS GUERRERO	12971749
GIANCARLO VALEGA BUSTAMANTE	1140838086
GINNA TATIANA DÍAZ MAHECHA	1030532562
GLORIA ESPERANZA MOJICA	40023522
GODOY CORDOBA ABOGADOS S.A.S.	NIT: 830515294-0
GRETEL PAOLA ALEMAN TORRENEGRA	1129580678
GUILLERMO LEON CHAVEZ	13011276
GUSTAVO VILLEGAS YEPES	1144054635





Ca 4524503

**República de Colombia**  
**cadena** <sup>no</sup> 3064



Aa08977701821

HECTOR JOSE BONILLA LIZCANO	7715904
ISMAEL ORLANDO BABATIVA HILARION	79889501
IVONNE AMIRA TORRENTE SHULTZ	32737160
JAIME ANDRÉS CARREÑO GONZÁLEZ	1010185094
JAIME ANDRÉS RUIZ GALVIS	1098738053
JAIRO ALBERTO RESTREPO NOHAVA	80879894
JESSICA MARIA LONDOÑO RIOS	1053801795
JESUS HUMBERTO GAITAN LEAL	19441758
JHON ALEXANDER PABON MORALES	80744875
JOHANA ANDREA LESMES MENDIETA	1015401438
JOHANA GISEL BRAVO SANCHEZ	1110479285
JOHNATAN DAVID RAMIREZ BORJA	1144127106
JORGE EDUARDO MONTAÑEZ CORTES	79443280
JORGE ENRIQUE MARTINEZ SIERRA	79914477
JORGE ENRIQUE RIVERO RUBIO	91534199
JORGE LUIS FONTALVO CORREA	1045734875
JOSE ALFREDO ACOSTA ACEVEDO	1140880274
JOSE BAIRON RAMIREZ PARRA	10097139
JUAN DAVID RIOS TAMAYO	1130676848
JUAN FRANCISCO HERNANDEZ ROA	19248144
JUAN GABRIEL CHINCHILLA CASTRO	72255168
JUAN MARTIN GALEANO JARAMILLO	1036623986
KELLY JOHANNA GUERRERO HERNANDEZ	22731988
KEREN MARIA PAEZ HOYOS	1045675899
KIMBERLY ZARITH VILLANUEVA LÓPEZ	1045715327
LAURA DANIELA PEÑA GUEVARA	1094967852
LAURA LUCIA MUÑOZ POSADA	1037595474
LAURA MARCELA RAMIREZ ROJAS	53905165
LAURA XIMENA FLOREZ GONZALEZ	1098797771
LEIDY VICTORIA JARA MUÑOZ	53037192
LINA MARIA VARGAS LIBERATO	1049639055
LIZ WENDY PEREZ MATOS	1143165172
LIZETH ANGELICA RODRIGUEZ MARTINEZ	1022409921
LOPEZ Y ASOCIADOS S.A.S.	NIT: 830118372-4
LUIS CARLOS GEBAUER MORALES	77191671
LUIS FELIPE ARANA MADRIÑAN	79157258

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario



Aa089777018

11363AVPAAZDZ

09-10-23

Cadena 17

Cadena S.A. NE. B00000046 02-11-23

11373G4DDYACC



LUIS FERNEY GONZALEZ PARRA	10020115
LUIS MIGUEL MUÑOZ BUENO	94540769
LUISA FERNANDA CURREA FRANCO	1072709498
LUZ DARY CUERVO DUARTE	52966520
LUZ FABIOLA GARCIA CARRILLO	52647144
LUZ HELENA CATALINA HERRERA MANCIPE	51768337
LUZ MARYURY GIRALDO CIFUENTES	1094890026
MALORY SALTAREN RAMIREZ	1083024582
MANUELA MOLINA VALENCIA	1152212193
MARIA ALEJANDRA MEDINA LUNA	1020810201
MARIA ALEJANDRA PLATA ACEVEDO	1098778782
MARIA ALEJANDRA QUINTERO MUÑOZ	1152217116
MARIA AMALIA CARDENAS LUNA	1085291493
MARIA ANDREA FLOREZ DAVID	1069501523
MARIA CRISTINA BUCHELI FIERRO	52431353
MARÍA DEL PILAR VALENCIA GUTIERREZ	57463554
MARIA FERNANDA RUIZ LOAIZA	67013937
MARIA TERESA GONZALEZ SOLEDAD	40043858
MARIA XIMENA MEDINA RAMIREZ	37393314
MARIA YORLADYS ZAPATA GALVIS	42011709
MARISOL ARISTIZABAL GIRALDO	1017186779
MARTHA LUCIA ALMEIDA CARVAJAL	34546611
MARTHA MARIÑO CASTAÑEDA	52517325
MELISSA LOZANO HINCAPIE	1088332294
MIGUEL ANGEL MARQUEZ SERRANO	13839869
MIGUEL ÁNGEL SERNA ARISTIZABAL	75104922
MIGUEL JOSE GREGORY VILLEGAS CASTAÑEDA	1110464235
MIRIAM TATIANA PEÑA MOLANO	1026274345
MONICA ESPERANZA TASCO MUÑOZ	1018451024
NATALIA GOMEZ CASTAÑO	1053768706
NAURO RAFAEL CABBALLERO GARCIA	73080145
NAVI GUILLERMO LAMK CASTRO	88212852
NAYROBY DIAZ REINO	34946544
NEFTALI VASQUEZ VARGAS	12106814
NELSON RICARDO ARCOS MORENO	7167913
OLGA MILENA MUNZA MOLANO	1016040173

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario





Ca4524503

**República de Colombia**  
**cadena** 3064



Aa08977701923

ORLIN GAVIRIS CAICEDO HURTADO	12919935
OSCAR ANDRES BLANCO RIVERA	19090427
PAOLA ANDREA VENCE COLLAZOS	52703449
PATRICIA CERON SANCHEZ	34545617
PAULA ALEJANDRA QUINTERO BUSTOS	1016089697
PAULINA TOUS GAVIRIA	42137888
PROCEDER S.A.S	NIT: 901.289.080-9
RAFAEL GARCIA MENDEZ	13719501
RITA MERCEDEZ SIERRA GONZALES	45441500
SANDRA LILIANA SIERRA CHAPARRO	46386722
SANTIAGO CADENA MANTILLA	1018508615
SAUL ENRIQUE VEGA MENDOZA	5162675
SAUL ENRIQUE VEGA NUÑEZ	92642437
SEBASTIAN FERNANDEZ BONILLA	80875529
SEBASTIAN RAMIREZ VALLEJO	1088023149
SHIRLY MARCELA VANEGAS TREJOS	1126598781
TANIA ISABEL ZAPATA LORA	1152694649
TOUS ABOGADOS ASOCIADOS SAS	NIT: 900411483-2
UGALBIS ENRIQUE RODRIGUEZ BOLAÑOS	17970755
VALENTINA LONDOÑO CUARTAS	1037612924
VANESSA GIRALDO CIFUENTES	1088271844
VICTORIA ISABEL TOUS GAVIRIA	42128976
VLADIMIR MONTOYA MORALES	1128276094
WALTER GIOVANY ROCHA ARIAS	1014217682
WENDY ALEJANDRA SANDOVAL RAMIREZ	1026293434
WILLIAM ARTURO TRONCOSO REYES	1082926236
WILLIAM TRUJILLO CHAVARRIAGA	16783965
YEUDI VALLEJO SANCHEZ	79963537
YOLIVETH ESTHER CASTAÑO AVILA	22539744
YULIETH ARIAS ALVAREZ	1088276477

Los nombrados podrán ejecutar los siguientes actos:-----

1. Representar a la **SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.**, en toda clase de actuaciones y procesos judiciales ante Juzgados, Tribunales de todo tipo, Corte Constitucional, Consejo Superior de la

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario



Aa089777019

09-10-23 11364DADPPYAAZZ

Cadena S.A. No. 09-11-73

Cadena S.A. No. 09-11-73

11374EAG4DYVA



Judicatura, Corte Suprema de Justicia y Consejo de Estado o ante cualquier autoridad del orden Nacional, Departamental, Municipal o del Distrito Capital de Bogotá y ante cualquier organismo descentralizado de derecho público del orden Nacional, Departamental, Municipal o del Distrito de Bogotá para realizar cualquier trámite ante estas entidades y atender los requerimientos y notificaciones provenientes de cualquiera de las oficinas de la Administración.-----

2. Notificarse de todo tipo de providencia Judicial o Administrativa, autos o decisiones judiciales o administrativas, absolver interrogatorio de parte, contestar demandas, renunciar a términos en los que haga parte la **SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.**-----

3. Asistir en nombre y representación de la **SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.** a las audiencias especiales de conciliación que se lleven a cabo dentro de los procesos laborales, civiles, administrativos y/o en cualquier tipo de proceso judicial, en los que haga parte la **SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.** en todo el país, con la facultad para conciliar o no de conformidad con los intereses de la Sociedad que Representa. Esta facultad también se extiende a actuaciones administrativas en el Ministerio del Trabajo y demás entidades de carácter administrativo, Centros de Conciliación, Cámaras de Comercio y Ministerio Público. -----

4. Actuar como Representante Legal de la **SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.** en las audiencias de Conciliación, de decisión de excepciones previas y saneamiento de Litigio (Ley 712 de 2001, modificada por la Ley 1149 de 2007) para conciliar, notificarse, desistir, transigir, y ejecutar todas las actuaciones necesarias o indispensables para el buen éxito del Mandato conferido y en fin todas las facultades de Ley. -----

5. En general el apoderado queda ampliamente facultado para actuar y para interponer cualquier recurso establecido en las leyes contra las decisiones judiciales o emanadas de los Funcionarios administrativos del poder Nacional, Departamental, Municipal o del Distrito Capital de Bogotá y entidades Descentralizadas del Mismo Orden. -----





**República de Colombia**  
cadena # 3064



Aa08977702025



Ca4524503

6. Igualmente quedan facultados expresamente para recibir, contestar demandas, desistir, conciliar, confesar, sustituir y transigir. -----

PARÁGRAFO: Finalmente, manifiesta el compareciente que este poder se confiere con base en lo preceptuado en los artículos 2156 y siguientes del Código Civil y el mandatario o apoderado queda advertido del alcance del artículo 2189 del Código Civil que dice: "DE LA TERMINACIÓN DEL MANDATO": El mandato termina: -----

1. Por el desempeño del negocio para que fue constituido: -----
2. Por la expiración del término o por el evento de la condición prefijados para la terminación del mandato. -----
3. Por la revocación del mandante. -----
4. Por la renuncia del mandatario. -----

-----HASTA AQUÍ LA MINUTA PRESENTADA-----

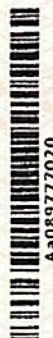
ACEPTACIÓN: Presente SILVIA LUCIA REYES ACEVEDO, quien en su calidad de vicepresidente y por tanto Representante Legal obra en nombre y representación de la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A., identificada con NIT 800.144.331-3, de las condiciones civiles y personales ya indicadas manifestó: -----

\*Que suscribe el presente documento público y que lo acepta en todas sus partes por hallarse ajustado en todo a la realidad.-----

EL (LA) (LOS) COMPARECIENTE (S) HACE (N) CONSTAR QUE: -----

1. Ha (n) verificado cuidadosamente sus nombres y apellidos, número correcto de sus documentos de identificación, y aprueba (n) este instrumento sin reserva alguna, en la forma como quedó redactado. -----
2. Las declaraciones consignadas en este instrumento corresponden a la verdad y el (la) (los) otorgante (s) la aprueba (n) totalmente, sin reserva alguna, en consecuencia, asume (n) la responsabilidad por cualquier inexactitud. -----
3. El Notario no puede dar fe sobre la voluntad real del (la) (los) compareciente (s) y beneficiario (s), salvo lo expresado en este instrumento, que fue aprobado sin

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario



Aa089777020

113652aDA9PYPAA

09-10-23

Cadena S.A. No. 89935340

Cadena S.A. No. 89935340 02-11-23



reserva alguna por el (la) (los) compareciente (s) y beneficiario (s) en la forma como quedó redactado. -----

4. Conoce (n) la Ley y sabe (n) que el Notario responde de la regularidad formal de los instrumentos que autoriza, pero no de la veracidad de las declaraciones del (la) (los) otorgante (s), ni de la autenticidad de los documentos que forman parte de este instrumento.-----

5. Será (n) responsable (s) civil, penal y fiscalmente, en caso de utilizarse esta escritura con fines ilegales. -----

6. Sólo solicitará (n) correcciones, aclaraciones, o modificaciones al texto de la presente escritura en la forma y en los casos previstos por la Ley. -----

**Política de Privacidad:** El (la) (los) otorgante (s) expresamente declara (n) que NO autoriza (n) la divulgación, ni comercialización, ni publicación por ningún medio, sin excepción alguna, de su imagen personal y/o fotografía tomada en la Notaría Dieciocho (18) del círculo Bogotá, ni su huella digital, ni de sus documentos de identidad, salvo con lo relacionado con el presente instrumento y demás actos notariales que personalmente o por medio de apoderado solicite (n) por escrito, conforme a la Ley.-----

#### -----ADVERTENCIAS NOTARIALES:-----

1. Cada vez que se pretenda hacer uso del presente poder y/o autorización, se deberá presentar a la autoridad o entidad ante quien se quiera hacer valer, una certificación original, expedida al día por la Notaría Dieciocho del Círculo de Bogotá, donde conste que el poder y/o autorización está vigente, pues no aparece anotación alguna que indique que fue revocado. -----

2. El suscrito Notario Dieciocho (18) encargado, del Círculo de Bogotá, advirtió al (los) compareciente (s), sobre la importancia y conveniencia que su (s) apoderado (s) comparezca (n) y firme (n) la presente escritura pública, para que quede enterado de la existencia del poder, y así el poderdante siempre este legal y debidamente representado. Hecha la advertencia y recomendación el (los) compareciente (s), **INSISTE (N)** en otorgar la presente escritura Pública. -----

3. EL NOTARIO ADVIRTIÓ AL (LOS) OTORGANTE (S), DE LA OBLIGACIÓN QUE





Ca 4524503

La veracidad de este documento puede verificarse en la página [www.superfinanciera.gov.co](http://www.superfinanciera.gov.co) con el número de rrv

Certificado Generado con el Pin No: 8203236093379185

N° 3064

Generado el 22 de noviembre de 2023 a las 09:54:57

**ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA ENTIDAD  
HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN****EL SECRETARIO GENERAL**

En ejercicio de las facultades y, en especial, de la prevista en el artículo 11.2.1.4.59 numeral 10 del decreto 2555 de 2010, modificado por el artículo 3 del decreto 1848 de 2016.

**CERTIFICA****RAZÓN SOCIAL: SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S.A.****NIT: 800144331-3****NATURALEZA JURÍDICA:** Sociedad Anónima De Nacionalidad Colombiana. Entidad sometida al control y vigilancia por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia.**CONSTITUCIÓN Y REFORMAS:** Escritura Pública No 5307 del 22 de octubre de 1991 de la Notaría 23 de BOGOTÁ D.C. (COLOMBIA).

Resolución S.F.C. No 0628 del 03 de abril de 2013 la Superintendencia Financiera de Colombia, no objeta la adquisición de BBVA Horizonte Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y de Cesantías S.A. por parte de la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A.

Resolución S.F.C. No 2134 del 22 de noviembre de 2013 La Superintendencia Financiera de Colombia no objeta la fusión por absorción de HORIZONTE Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías S.A. por parte de la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantía PORVENIR S.A., protocolizada mediante Escritura Pública 2250 del 26 de diciembre de 2013 Notaría 65 de Bogotá, produciéndose en consecuencia la disolución sin liquidación de la entidad absorbida.

Resolución S.F.C. No 0750 del 22 de junio de 2022 autoriza al Banco de Occidente (Panamá) S.A., sociedad con domicilio en la República de Panamá, para realizar actos de promoción y publicidad de los productos y servicios relacionados en el considerando quinto de esta Resolución, y al Occidental Bank (Barbados) Ltd., sociedad con domicilio en Barbados, para realizar actos de promoción y publicidad de los productos y servicios relacionados en el considerando sexto de esta Resolución, a través de la AFP Porvenir S.A.

**AUTORIZACIÓN DE FUNCIONAMIENTO:** Resolución S.B. 3970 del 30 de octubre de 1991

Resolución S.B. 3970 del 30 de octubre de 1991 Autorizó a la citada sociedad para desarrollar las actividades comprendidas dentro de su objeto social, esto es, la administración de Fondos de Pensiones y de Cesantía, acto a partir del cual administra el FONDO DE CESANTIAS.

Oficio 92042984-9 del 01 de julio de 1993 Autoriza a la sociedad denominada PORVENIR SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS S.A., para administrar fondos de pensiones voluntarias

Resolución S.B. 535 del 30 de marzo de 1994 Autoriza a la sociedad denominada PORVENIR SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS S.A., para administrar fondos de pensiones del Régimen de ahorro Individual con Solidaridad en lo términos en que dicha autorización fue solicitada y de conformidad con las disposiciones legales vigentes.

**REPRESENTACIÓN LEGAL:** La administración y representación de la sociedad estará a cargo del Presidente

Calle 7 No. 4 - 49 Bogotá D.C.  
Conmutador: (571) 5 94 02 00 5 94 02 01  
[www.superfinanciera.gov.co](http://www.superfinanciera.gov.co)

Página 1 de 4

**MINISTERIO DE HACIENDA Y  
CRÉDITO PÚBLICO**

Cadena S.A. No. 89303340 02-11-23

11372DCYECGaA



GOBIERNO DE COLOMBIA

Certificado Generado con el Pin No: 8203236093379185

Generado el 22 de noviembre de 2023 a las 09:54:57

**ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA ENTIDAD  
HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN**

y de los Vicepresidentes, que para el efecto designe la Junta Directiva. Los representantes legales serán nombrados por la Junta Directiva de manera indefinida, pudiendo ser removidos en cualquier tiempo. Los representantes podrán ser socios o extraños. **FUNCIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL** Son funciones de los Representantes Legales las que, dentro de los límites que le imponen el objeto social y los estatutos de PORVENIR, las que les corresponden de acuerdo con la naturaleza de su cargo y en particular las siguientes: a) Usar la denominación social y ejercer la representación legal y además representar judicial y extrajudicialmente a la compañía, ante cualquier autoridad o persona natural o jurídica, con facultades para novar, transigir, comprometer y desistirse y para comparecer en juicios en que se dispute la propiedad de bienes o derechos sociales; b) Ejecutar o celebrar toda clase de actos y contratos relativos al objeto social, en que tenga interés la compañía; c) Convocar a la Junta Directiva a reuniones ordinarias y extraordinarias, y presentar en las primeras un informe sobre el estado de los negocios sociales; d) Designar los empleados cuyo nombramiento no esté asignado a otro órgano social, removerlos y firmar los respectivos contratos de trabajo; e) Abrir cuentas bancarias a nombre de la Sociedad para mantener en ella los dineros sociales, girar contra ellas y negociar toda clase de títulos valores; f) Constituir mandatarios que representen a la Sociedad en juicio o fuera de él y delegarles las funciones o atribuciones que considere necesarias, en cuanto sean delegables; g) Suscribir las escrituras de reformas estatutarias; h) Suscribir los contratos que sean necesarios para la administración de los patrimonios autónomos que constituyan las entidades territoriales y sus descentralizadas, con independencia de su cuantía; i) Resolver, en primera instancia, sobre la procedencia de auditorías especiales solicitadas por los accionistas, en los términos definidos en el Código de Buen Gobierno Corporativo de la Sociedad; j) Presentar a la Junta Directiva para su aprobación y velar por su permanente cumplimiento, las medidas específicas de Buen Gobierno de la Sociedad, su conducta y su información, con el fin de asegurar el respeto de los derechos de quienes en ella invierten o en cualquier otro valor que llegare a emitir y la adecuada administración de sus asuntos y k) Ejercer todas aquellas funciones que le sean asignadas por la Asamblea de Accionistas, la Junta Directiva o la Ley y que no se encuentren aquí relacionadas. (Escritura Pública 1674 del 30 de septiembre de 2009 Notaria 65 de Bogotá D.C.). Para efectos de la Representación Legal de la Sociedad, tendrán la calidad de Representantes Legales judiciales los abogados que con tal fin designe la Junta Directiva, quienes representarán a la sociedad ante las autoridades jurisdiccionales, administrativas, políticas, entidades centralizadas y descentralizadas del Estado (Escritura Pública 1708 del 11 de octubre de 2010 Notaria 65 de Bogotá).

Que figuran posesionados y en consecuencia, ejercen la representación legal de la entidad, las siguientes personas:

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO
Miguel Largacha Martínez Fecha de inicio del cargo: 06/10/2008	CC - 79156394	Presidente
Erik Andrés Moncada Rasmussen Fecha de inicio del cargo: 15/11/2018	CC - 79781438	Vicepresidente
Roberto Díez Trujillo Fecha de inicio del cargo: 06/02/2014	CC - 79292143	Vicepresidente
Alejandro Gómez Villegas Fecha de inicio del cargo: 27/10/2011	CC - 79941020	Vicepresidente
Alonso Angel Lozano Fecha de inicio del cargo: 28/10/2010	CC - 16799132	Vicepresidente
Juan Pablo Salazar Aristizabal Fecha de inicio del cargo: 07/10/2004	CC - 71731636	Vicepresidente
Andrés Vasquez Restrepo Fecha de inicio del cargo: 08/01/2004	CC - 71695255	Vicepresidente
Silvia Lucía Reyes Acevedo Fecha de inicio del cargo: 21/05/2020	CC - 37893544	Vicepresidente
Johana Andrea Lesmes Mendieta Fecha de inicio del cargo: 09/08/2019	CC - 1015401438	Representante Legal Judicial







Ca 4524503

La validez de este documento puede verificarse en la página [www.superfinanciera.gov.co](http://www.superfinanciera.gov.co) con el número de PIN

CERTIFICADO DE REPRESENTANTES LEGALES

Certificado Generado con el Pin No: 8203236093379185

Nº 3064

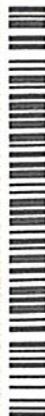
Generado el 22 de noviembre de 2023 a las 09:54:57

ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA ENTIDAD  
HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO
Daniela Guerrero Ordoñez Fecha de inicio del cargo: 09/08/2019	CC - 1018458983	Representante Legal Judicial
Miguel José Gregory Villegas Castañeda Fecha de inicio del cargo: 12/04/2021	CC - 1110464235	Representante Legal Judicial
Carla Santafé Figueredo Fecha de inicio del cargo: 12/04/2021	CC - 1130608527	Representante Legal Judicial
Ivonne Astrid Ortiz Giraldo Fecha de inicio del cargo: 12/04/2021	CC - 32243789	Representante Legal Judicial
Erika Isabel Arrieta Ruiz Fecha de inicio del cargo: 12/04/2021	CC - 32779976	Representante Legal Judicial
Fredy Quintero López Fecha de inicio del cargo: 12/04/2021	CC - 79581111	Representante Legal Judicial
Ana María Romero Lagos Fecha de inicio del cargo: 23/09/2021	CC - 1019119578	Representante Legal Judicial
Diana Marcela Bautista Ruiz Fecha de inicio del cargo: 05/10/2022	CC - 1032360609	Representante Legal Judicial
Andrés Felipe Fernández Cardona Fecha de inicio del cargo: 05/10/2022	CC - 1069582580	Representante Legal Judicial
Luisa Fernanda Currea Franco Fecha de inicio del cargo: 05/10/2022	CC - 1072709498	Representante Legal Judicial
Laura Ximena Florez González Fecha de inicio del cargo: 09/06/2023	CC - 1098797771	Representante Legal Judicial
Sebastián Fernández Bonilla Fecha de inicio del cargo: 09/06/2023	CC - 80975529	Representante Legal Judicial
Leidy Victoria Jara Muñoz Fecha de inicio del cargo: 12/07/2023	CC - 53037192	Representante Legal Judicial
Alejandro Omaña Paipilla Fecha de inicio del cargo: 11/09/2023	CC - 1090473030	Representante Legal Judicial
Alba Janneth Moreno Baquero Fecha de inicio del cargo: 13/06/2017	CC - 53077586	Representante Legal Judicial
Jorge Eduardo Montañez Cortés Fecha de inicio del cargo: 19/02/2016	CC - 79443280	Representante Legal Judicial
Carlos Andrés Sánchez Medina Fecha de inicio del cargo: 07/01/2016	CC - 94501244	Representante Legal Judicial
Genny Carolina Ramírez Zamora Fecha de inicio del cargo: 17/03/2015	CC - 52829319	Representante Legal Judicial
Diana Martínez Cubides Fecha de inicio del cargo: 29/01/2014	CC - 52264480	Representante Legal Judicial
Elizabeth Mira Hernández Fecha de inicio del cargo: 29/01/2014	CC - 43868037	Representante Legal Judicial
Ivonne Amira Torrente Schultz Fecha de inicio del cargo: 11/11/2011	CC - 32737160	Representante Legal Judicial
Nancy Adriana Rodríguez Casas Fecha de inicio del cargo: 11/11/2011	CC - 51970146	Representante Legal Judicial

Calle 7 No. 4 - 49 Bogotá D.C.  
Conmutador: (571) 5 94 02 00 5 94 02 01  
[www.superfinanciera.gov.co](http://www.superfinanciera.gov.co)

Página 3 de 4

MINISTERIO DE HACIENDA Y  
CRÉDITO PÚBLICO

Cadenas S.A. No. 890335340 02-11-23

11373G4DG YECG



La validez de este documento puede verificarse en la página [www.superfinanciera.gov.co](http://www.superfinanciera.gov.co) con el número de PIN

Certificado Generado con el Pin No: 8203236093379185

Generado el 22 de noviembre de 2023 a las 09:54:57

**ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA ENTIDAD  
HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN**

*Natalia Guerrero Ramírez*

**NATALIA CAROLINA GUERRERO RAMÍREZ  
SECRETARIA GENERAL**

"De conformidad con el artículo 12 del Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica que aparece en este texto tiene plena validez para todos los efectos legales."

CERTIFICADO VÁLIDO EMITIDO POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA







Ca45245037

**República de Colombia**  
**cadena** **Nº 3064**



Aa08977702127

ESTA ES LA ÚLTIMA HOJA DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO: **Nº 3064**

TRES MIL SESENTA Y CUATRO (3064)

DE FECHA: DICIEMBRE QUINCE (15) DEL AÑO DOS MIL VEINTITRÉS (2023).

OTORGADA EN LA NOTARÍA DIECIOCHO (18) DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C.

Viene de la página veintiséis (26)

TIENE (N) DE LEER DILIGENTE Y CUIDADOSAMENTE LA TOTALIDAD DEL TEXTO DE LA PRESENTE ESCRITURA PÚBLICA, PARA VERIFICAR LA EXACTITUD DE TODOS LOS DATOS EN ELLA CONSIGNADOS, CON EL FIN DE ACLARAR, MODIFICAR O CORREGIR LO QUE CONSIDERE (N) PERTINENTE ANTES DE FIRMARLA; PONIENDO DE PRESENTE QUE LA FIRMA ESCRITURA DEMUESTRA SU APROBACIÓN TOTAL DEL TEXTO. EN CONSECUENCIA, LA NOTARÍA NO ASUME NINGUNA RESPONSABILIDAD POR ERRORES O INEXACTITUDES ESTABLECIDOS CON POSTERIORIDAD A LA FIRMA DEL (LOS) OTORGANTE (S) Y LA AUTORIZACIÓN DEL NOTARIO. DE SER NECESARIO CORREGIR, ACLARAR Ó MODIFICAR LA PRESENTE ESCRITURA PÚBLICA, SE DEBERÁ OTORGAR NUEVA, LA CUAL TENDRÁ QUE SER SUSCRITA POR TODOS LOS QUE UNA INTERVINIERON EN LA INICIAL, SIENDO DE CARGO DE LOS OTORGANTES LOS COSTOS Y GASTOS QUE ESTO DEMANDE.

**OTORGAMIENTO Y AUTORIZACIÓN:** Leído el presente instrumento público por el (la) (los) compareciente (s) y advertido (a) (s) de su formalidad, lo aprobó (aron) en todas sus partes y firmó (aron) junto con el suscrito notario quien da fe y lo autoriza.-

La presente Escritura se elaboró en las hojas de papel notarial números:-

Aa089777008 - Aa089777009 - Aa089777010 - Aa089777011 - Aa089777012-

Aa089777013 - Aa089777014 - Aa089777015 - Aa089777016 - Aa089777017-

Aa089777018 - Aa089777019 - Aa089777020 - Aa089777021-

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario



Aa089777021

Ca45245037



11361PAZSDJANP

09-10-23

cadena s.a. No. 896935340

02-11-23

cadena s.a. No. 896935340

cadena s.a. No. 896935340

11371VECGaAE4G



Nº 3064

28

Valor de los derechos Notariales \$ 149.800.00 \*\*\*  
Superintendencia de Notariado y Registro \$ 7.950.00 \*\*\*  
Fondo Cuenta Nacional del Notariado \$ 7.950.00 \*\*\*  
Retención en la fuente \$ - 0 -  
Iva \$ 56.943.00 \*\*\*  
SE FIRMA

PODERDANTE



SILVIA LUCÍA REYES ACEVEDO

ÍNDICE DERECHO

Quien en su calidad de vicepresidente y por ende Representante Legal obra en nombre y representación de la **SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.**, identificada con NIT 800.144.331-3. C.C. No.37.893.544 expedida en San Gil - Santander

Dirección

Tel.

e-mail:

Firma tomada fuera del Despacho Artículo 12 Decreto 2148 de 1983, hoy Artículo 2.2.6.1.2.1.5 Decreto 1069 de 2015.



JOSE MIGUEL ROBAYO PIÑEROS

NOTARIO 18 DE BOGOTÁ D.C.

NOTARÍA DIECIOCHO DE BOGOTÁ, D.C.

Es Primera copia tomada de original.

Escritura pública No. 3064 de DIC 15 de 2023

Que expone y autoriza en DIECISEIS (16) hojas útiles

Con destino a

Elaboró/Fabiola Medina

Revisó/Dr. Alejandro Robayo

13362

12.12.2023

21 DEC 2023

SNR

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario





**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS****Fecha Expedición: 1 de diciembre de 2022 Hora: 11:17:02****Recibo No. 0122126507****Valor: \$ 6,500****CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 122126507918CB**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificados/electronicos](http://www.ccb.org.co/certificados/electronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

-----

\*\*\*\*\*  
EL JUEVES 1 DE DICIEMBRE DE 2022, SE REALIZARÁN LAS ELECCIONES DE JUNTA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. LA INSCRIPCIÓN DE LISTAS DE CANDIDATOS DEBE HACERSE DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE. PARA MÁS INFORMACIÓN, PODRÁ COMUNICARSE AL TELÉFONO 5941000 EXT. 2597, AL CORREO [ELECCIONJUNTADIRECTIVA@CCB.ORG.CO](mailto:ELECCIONJUNTADIRECTIVA@CCB.ORG.CO), DIRIGIRSE A LA SEDE PRINCIPAL (AVENIDA EL DORADO #68D-35, PISO 4), O A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB [WWW.CCB.ORG.CO](http://WWW.CCB.ORG.CO)

**CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL  
REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:**

**NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO**

Razón social: SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y  
CESANTIAS PORVENIR S A  
Nit: 800144331 3  
Domicilio principal: Bogotá D.C.

**MATRÍCULA**

Matrícula No. 00475512  
Fecha de matrícula: 23 de octubre de 1991  
Último año renovado: 2022  
Fecha de renovación: 11 de marzo de 2022  
Grupo NIIF: Entidades públicas que se clasifiquen según el  
Artículo No. 2 de la Resolución 743 del 2013,  
según la Contaduría General de la Nación  
(CGN).

**UBICACIÓN**

Dirección del domicilio principal: Cr 13 # 26 A - 65  
Municipio: Bogotá D.C.  
Correo electrónico: [notificacionesjudiciales@porvenir.com.co](mailto:notificacionesjudiciales@porvenir.com.co)  
Teléfono comercial 1: 7434441  
Teléfono comercial 2: No reportó.  
Teléfono comercial 3: No reportó.  
Páginas web: [WWW.PORVENIR.COM.CO](http://WWW.PORVENIR.COM.CO)

Constanza  
del Pilar  
Puentes  
Trujillo

**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS**

Fecha Expedición: 1 de diciembre de 2022 Hora: 11:17:02

Recibo No. 0122126507

Valor: \$ 6,500

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 122126507918CB**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificadoselectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadoselectronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

**INSCRIPCION PAGINA WEB**

Dirección para notificación judicial: Cr 13 # 26 A - 65  
Municipio: Bogotá D.C.  
Correo electrónico de notificación:  
notificacionesjudiciales@porvenir.com.co  
Teléfono para notificación 1: 7434441  
Teléfono para notificación 2: No reportó.  
Teléfono para notificación 3: No reportó.

La persona jurídica NO autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Procesos y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Agencia: Bogota (2) Soacha (1) Chía (1)

**REFORMAS ESPECIALES**

Por Escritura Publica No. 2250 de la notaria 65 de Bogotá D.C., del 26 de diciembre de 2013 inscrita el 31 de diciembre de 2013 bajo el número 01795106 del libro IX, la sociedad de la referencia absorbe mediante fusión a la sociedad AFP HORIZONTE sociedad ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS S.A la cual le transfirió la totalidad de su patrimonio.

**TÉRMINO DE DURACIÓN**

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es hasta el 22 de octubre de 2091.

**OBJETO SOCIAL**

Tendrá por objeto social exclusivo la administración de fondos de pensiones y de cesantías, de conformidad con lo dispuesto en el



## CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS

Fecha Expedición: 1 de diciembre de 2022 Hora: 11:17:02

Recibo No. 0122126507

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 122126507918CB

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificadoselectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadoselectronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

estatuto orgánico del sistema financiero y demás normas que lo complementen, sustituyan, modifiquen o adicionen, así como la administración de los patrimonios autónomos que constituyan las entidades territoriales y sus descentralizadas destinados a la garantía y pago de las obligaciones derivadas de cuotas partes y bonos pensionales a su cargo, en los términos de las disposiciones vigentes. En desarrollo y cumplimiento de su objeto social la sociedad podrá: A). Contratar técnicos, en el país o en el exterior en relación con las actividades propias de su objeto; B). Realizar o coordinar seminarios y prestar la capacitación en todas sus manifestaciones sobre las materias propias de su objeto; C). Adquirir, enajenar, gravar y administrar toda clase de bienes; D). Intervenir como deudora o como acreedora en toda clase de operaciones de crédito, dando o recibiendo las garantías del caso cuando haya lugar a ellas; E). Celebrar con establecimientos de crédito y con compañías aseguradoras toda clase de operaciones relacionadas con los bienes y negocios de la sociedad; F). Tomar o dar dinero en préstamo, dar en garantía o administración sus bienes, muebles o inmuebles, girar, endosar, adquirir, aceptar, cobrar, protestar, cancelar o pagar letras de cambio, cheques, pagares o cualesquiera otros títulos valores, o aceptarlos o darlos en pago y ejecutar o celebrar en general el contrato de cambio en todas sus manifestaciones; G). Celebrar contratos de prenda, de anticresis, de depósito, de garantía, de administración, de mandato, de comisión y de consignación H) Formar parte de otras sociedades, entidades o asociaciones, en la forma autorizada por la ley, que le propongan actividades semejantes, complementarias o accesorias de la empresa social o que sean de conveniencia y utilidad para el desarrollo de los negocios sociales o absorber tal clase de empresa. También podrá fusionarse bajo las modalidades previstas por la ley y celebrar contrato de participación; y celebrar convenios de administración técnica, económica o administrativa con otras personas; I) Organizar los establecimientos de comercio necesarios para la prestación y comercialización de sus servicios; J). Suscribir o adquirir toda clase de acciones, cuotas o partes de interés social, administrarlas o enajenarlas, en la forma autorizada por la ley; K). Transigir, desistir, y apelar decisiones arbitrales o judiciales, en las cuestiones en que tengan interés frente a terceros, a los asociados mismos y a sus trabajadores, y l). En general ejecutar todos los actos directamente relacionados con los anteriores y que tengan por finalidad ejercer sus derechos o cumplir las obligaciones derivadas de la actividad de la sociedad, así como todas aquellas actividades u

**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS**

Fecha Expedición: 1 de diciembre de 2022 Hora: 11:17:02  
Recibo No. 0122126507  
Valor: \$ 6,500

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 122126507918CB**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificadoselectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadoselectronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

-----  
operaciones que las normas legales aplicables le autoricen efectuar

**CAPITAL****\* CAPITAL AUTORIZADO \***

Valor : \$130.000.000.000,00  
No. de acciones : 130.000.000,00  
Valor nominal : \$1.000,00

**\* CAPITAL SUSCRITO \***

Valor : \$109.210.640.000,00  
No. de acciones : 109.210.640,00  
Valor nominal : \$1.000,00

**\* CAPITAL PAGADO \***

Valor : \$109.210.640.000,00  
No. de acciones : 109.210.640,00  
Valor nominal : \$1.000,00

**NOMBRAMIENTOS****ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN****JUNTA DIRECTIVA****PRINCIPALES**

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Primer Renglon	Alejandro Augusto Figueroa Jaramillo	C.C. No. 8228877
Segundo Renglon	Cardenas Muller Mauricio	C.C. No. 79486685
Tercer Renglon	Efrain Otero Alvarez	C.C. No. 14961168
Cuarto Renglon	Mauricio Santamaria Salamanca	C.C. No. 80410976
Quinto Renglon	Carlos Ernesto Perez Buenaventura	C.C. No. 79141430

## CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS

Fecha Expedición: 1 de diciembre de 2022 Hora: 11:17:02

Recibo No. 0122126507

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 122126507918CB

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificadoselectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadoselectronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Sexto Renglon	Edgar Augusto Solano	C.C. No. 14976295
	Mejia	
Septimo Renglon	Miguel Ignacio	C.C. No. 19065668
	Gutierrez Navarro	
Octavo Renglon	Maria Luisa Mesa Zuleta	C.C. No. 51625627

## SUPLENTE

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Primer Renglon	Rafael Arango Calle	C.C. No. 79156675
Segundo Renglon	Luis Fernando Pabon	C.C. No. 19381997
	Pabon	
Tercer Renglon	Ignacio Hernando	C.C. No. 79142476
	Zuloaga Sevilla	
Cuarto Renglon	Arturo De Jesus	C.C. No. 23864
	Zuluaga Machado	
Quinto Renglon	Douglas Berrio Zapata	C.C. No. 3229076
Sexto Renglon	Juan Manuel Rojas Payan	C.C. No. 79556426
Septimo Renglon	German Salazar Castro	C.C. No. 79142213
Octavo Renglon	Gloria Margarita Maria	C.C. No. 41674613
	Rodriguez Uribe	

Por Acta No. 066 del 13 de marzo de 2020, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 5 de octubre de 2020 con el No. 02622162 del Libro IX, se designó a:

## PRINCIPALES

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Primer Renglon	Alejandro Augusto	C.C. No. 8228877
	Figueroa Jaramillo	
Segundo Renglon	Cardenas Muller	C.C. No. 79486685
	Mauricio	
Tercer Renglon	Efrain Otero Alvarez	C.C. No. 14961168
Cuarto Renglon	Mauricio Santamaria	C.C. No. 80410976
	Salamanca	
Quinto Renglon	Carlos Ernesto Perez	C.C. No. 79141430
	Buenaventura	



## CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS

Fecha Expedición: 1 de diciembre de 2022 Hora: 11:17:02

Recibo No. 0122126507

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 122126507918CB

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificadoselectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadoselectronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

-----

Sexto Renglon	Edgar Augusto Solano Mejia	C.C. No. 14976295
---------------	-------------------------------	-------------------

## SUPLENTE

## CARGO

## NOMBRE

## IDENTIFICACIÓN

Segundo Renglon	Luis Fernando Pabon Pabon	C.C. No. 19381997
-----------------	------------------------------	-------------------

Tercer Renglon	Ignacio Hernando Zuloaga Sevilla	C.C. No. 79142476
----------------	-------------------------------------	-------------------

Cuarto Renglon	Arturo De Jesus Zuluaga Machado	C.C. No. 23864
----------------	------------------------------------	----------------

Quinto Renglon	Douglas Berrio Zapata	C.C. No. 3229076
----------------	-----------------------	------------------

Por Acta No. 23 del 24 de agosto de 2020, de Asamblea de Asociados, inscrita en esta Cámara de Comercio el 9 de octubre de 2020 con el No. 02624212 del Libro IX, se designó a:

## PRINCIPALES

## CARGO

## NOMBRE

## IDENTIFICACIÓN

Septimo Renglon	Miguel Ignacio Gutierrez Navarro	C.C. No. 19065668
-----------------	-------------------------------------	-------------------

## SUPLENTE

## CARGO

## NOMBRE

## IDENTIFICACIÓN

Septimo Renglon	German Salazar Castro	C.C. No. 79142213
-----------------	-----------------------	-------------------

Por Acta No. 20 del 24 de agosto de 2020, de Asamblea de Asociados, inscrita en esta Cámara de Comercio el 9 de octubre de 2020 con el No. 02624213 del Libro IX, se designó a:

## PRINCIPALES

## CARGO

## NOMBRE

## IDENTIFICACIÓN

**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS**

Fecha Expedición: 1 de diciembre de 2022 Hora: 11:17:02  
Recibo No. 0122126507  
Valor: \$ 6,500

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 122126507918CB**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificadoselectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadoselectronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

-----  
Octavo Renglon      Maria Luisa Mesa Zuleta      C.C. No. 51625627

**SUPLENTE**

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
-------	--------	----------------

Octavo Renglon	Gloria Margarita Maria Rodriguez Uribe	C.C. No. 41674613
----------------	--	-------------------

Por Acta No. 068 del 17 de marzo de 2021, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 28 de junio de 2021 con el No. 02718737 del Libro IX, se designó a:

**SUPLENTE**

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
-------	--------	----------------

Primer Renglon	Rafael Arango Calle	C.C. No. 79156675
----------------	---------------------	-------------------

Por Acta No. 069 del 18 de marzo de 2022, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 24 de octubre de 2022 con el No. 02892016 del Libro IX, se designó a:

**SUPLENTE**

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
-------	--------	----------------

Sexto Renglon	Juan Manuel Rojas Payan	C.C. No. 79556426
---------------	-------------------------	-------------------

\*\*\*aclaracion conformacion de la junta directiva\*\*\*  
la junta directiva del fondo esta conformada asi:  
renglones primero al quinto:

en representacion de los accionistas.

Renglon sexto:

en representacion de los empleadores.

Renglon septimo:

en representacion de los afiliados al fondo de cesantias.

Renglon octavo:

en representacion de los afiliados al fondo de pensiones obligatorias.

**REVISORES FISCALES**

**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS**

**Fecha Expedición: 1 de diciembre de 2022 Hora: 11:17:02**  
Recibo No. 0122126507  
Valor: \$ 6,500

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 122126507918CB**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificados/electronicos](http://www.ccb.org.co/certificados/electronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

-----

Por Acta No. 0000039 del 3 de marzo de 2008, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 20 de mayo de 2008 con el No. 01214933 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Revisor Fiscal Persona Juridica	KPMG S.A.S.	N.I.T. No. 860000846 4

Por Documento Privado del 1 de septiembre de 2021, de Revisor Fiscal, inscrita en esta Cámara de Comercio el 2 de septiembre de 2021 con el No. 02739672 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Revisor Fiscal Principal	Cristhian Andres Gonzalez Hamon	C.C. No. 1010192786 T.P. No. 184253-T

Por Certificación del 27 de septiembre de 2022, de Revisor Fiscal, inscrita en esta Cámara de Comercio el 28 de septiembre de 2022 con el No. 02884044 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Revisor Fiscal Suplente	Claudia Liliana Laguna Hidalgo	C.C. No. 1014189544 T.P. No. 155723-T

**PODERES**

Por Escritura Pública No. 1326 del 11 de mayo de 2022, otorgada en la Notaría 18 de Bogotá D.C., registrada en esta Cámara de Comercio el 23 de Junio de 2022, con el No. 00047647 del libro V, la persona jurídica confirió poder especial, a los siguientes Subgerentes Administrativos de servicio de las sedes Regionales de la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A., así como a los Abogados de planta y externos de la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A, para representarla ante las Autoridades Judiciales y Administrativas, con la facultad general para actuar bajo los parámetros del artículo 74 y



## CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS

Fecha Expedición: 1 de diciembre de 2022 Hora: 11:17:02

Recibo No. 0122126507

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 122126507918CB

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificadoselectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadoselectronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

77 del Código General del Proceso, en las audiencias de conciliación y de trámite de que tratan los artículos 77 y 80 del Código de Procedimiento Laboral y de la Seguridad Social, en las audiencias de conciliación de que tratan los artículos 372 y 373 del Código General del Proceso y demás normas concordantes conforme a la normatividad vigente, las audiencias de conciliación extrajudiciales, así como para absolver interrogatorio de parte, asistir a funcionarios, notificarse de resoluciones, actos administrativos, demandas judiciales y providencias judiciales, exhibir documentos, confesar y conciliar en los procesos que se adelanten en contra de SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A., por sus funcionarios, ex funcionarios, afiliados a los Fondos de Pensiones Voluntarias, Obligatorias y Cesantías, así como por las personas que ostenten la calidad de beneficiarios de éstos, empleadores, o en todos aquellos en los que la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A sea parte. Otorgar poder amplio y suficiente a: Adolfo Tous Salgado identificado con la cédula de ciudadanía No. 8.285.008 Adriana Alejandra Ordoñez Blanco identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.098.761.066 Adriana Maria Cubaque Cañavera identificada con la cédula de ciudadanía No. 39.777.477 Alba Janneth Moreno Baquero identificada con la cédula de ciudadanía No. 53.077.586 Alejandro Castellanos Lopez identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.985.203 Amalia Maria Tatis Romero identificada con la cédula de ciudadanía No. 52.324.621 Ana Maria Romero Lagos identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.019.119.578 Ana Maria Valencia Botero identificada con la cédula de ciudadanía No. 42.162.378 Ana Ximena Tamayo identificada con la cédula de ciudadanía No. 36.286.470 Anderson Alirio Ardila Medina identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.099.210.744 Andrea Ayala Gomez identificada con la cédula de ciudadanía no. 1.140.887.859 Andrea Del Toro Bocanegra identificada con la cédula de ciudadanía No. 52.253.673 Andrea Patricia Rolong Avella identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.045.685.857 Andres Felipe Angarita Arciniegas identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.140.857.122 Andres Felipe Fernandez Cardona identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.069.582.580 Andres Felipe Trejos Atehortua identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.053.844.786 Andres Gonzales Henao identificado con la cédula de ciudadanía No. 10.004.318 Andres Lalinde Ceron identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.037.641.903 Andres Valencia Gutierrez identificado con la cédula de ciudadanía No. 84.451.973 Angie Melisa Arciniegas Bohorquez identificada con la

## CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS

Fecha Expedición: 1 de diciembre de 2022 Hora: 11:17:02

Recibo No. 0122126507

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 122126507918CB

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificadoselectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadoselectronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

cédula de ciudadanía No. 1.098.814.116 Astrid Verónica Vidal Campo identificada con la cédula de ciudadanía No. 34.325.896 Beatriz Lalinde Gomez identificada con la cédula de ciudadanía No. 32.305.840 Bella Lida Montaña Perdomo identificada con la cédula de ciudadanía No. 52.033.898 Blanca Alcira Bohorquez De Diaz identificada con la cédula de ciudadanía No. 41.421.981 Camila Alejandra Abella Garcia identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.018.467.943 Carla Santafe Figueredo identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.130.608.527 Carlo Gustavo Garcia Mendez identificado con la cédula de ciudadanía No. 91.475.103 Carlos Andres Hernandez Escobar identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.955.080 Carlos Daniel Ramirez Gomez identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.049.632.112 Carlos Jacinto Valega Puello identificado con la cédula de ciudadanía No. 8.752.361 Carlos Manuel Ramirez Acosta identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.693.893 CARLOS VALEGA ABOGADOS SAS NIT No. 901.128.523-1 Carmen Rocio Acevedo Bermudez identificada con la cédula de ciudadanía No. 37.726.059 Catalina Cortes Viña identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.010.224.930 Catalina Maria Solano Causil identificada con la cédula de ciudadanía No. 51.960.087 Cesar Mauricio Heredia Quecán identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.795.447 Claudia Elena Ortega Murcia identificada con la cédula de ciudadanía No. 43.511.802 Claudia Lucia Bedoya Moreno identificada con la cédula de ciudadanía No. 43.730.160 Claudia Patricia Corzo Rincon identificada con la cédula de ciudadanía No. 63.508.106 Dagoberto Ramirez Tenorio identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.088.306.242 Daniel Fernandez Flores identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.017.170.491 Daniel Rendon Acevedo identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.017.219.299 Daniela Garcia Velez identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.088.023.743 Daniela Guerrero Ordoñez identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.018.458.983 Daniela Pelaez Rodas identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.090.399.073 Diana Marcela Bautista Ruiz identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.032.360.506 Diana Margarita Berrocal Lengua identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.067.874.002 Diana Martinez Cubides identificada con la cédula de ciudadanía No. 52.264.480 Diego Felipe Ortiz Gutierrez identificado con la cédula de ciudadanía No. 84.451.268 Diego Sebastian Alvarez Urrego identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.152.459.617 Duban Andres Jimenez Aguirre identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.152.463.385 Eduardo Jose Gil Gonzales identificado con la cédula de ciudadanía No. 16.613.428 Elizabeth Mira Hernández identificada con la cédula de

## CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS

Fecha Expedición: 1 de diciembre de 2022 Hora: 11:17:02

Recibo No. 0122126507

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 122126507918CB

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificadoselectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadoselectronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

ciudadanía No. 43.868.037 Elizabeth Mojica Chacon identificada con la  
cédula de ciudadanía No. 52.794.871 Erika Isabel Arrieta Ruiz  
identificada con la cédula de ciudadanía No. 32.779.976 Fanny  
Gutierrez Lozada identificada con la cédula de ciudadanía No.  
41.469.144 Federico Urdinola Lenis identificado con la cédula de  
ciudadanía No. 94.309.563 Felipe Alfonso Diaz Guzman identificado con  
la cédula de ciudadanía No. 79.324.734 Fernando Enrique Arrieta Lora  
identificado con la cédula de ciudadanía No. 19.499.248 Fernando Jose  
Cardenas Guerrero identificado con la cédula de ciudadanía No.  
12.971.749 Freddy Quintero Lopez identificado con la cédula de  
ciudadanía No. 79.581.111 Giancarlo Valega Bustamante identificado  
con la cédula de ciudadanía No. 1.140.838.086 Gloria Esperanza Mojica  
identificada con la cédula de ciudadanía No. 40.023.522 GODOY CORDOBA  
ABOGADOS S.A.S. NIT No. 830.515.294-0 Gretel Paola Aleman Torrenegra  
identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.129.580.678 Guillermo  
Leon Chavez identificado con la cédula de ciudadanía No. 13.011.276  
Gustavo Villegas Yepes identificado con la cédula de ciudadanía No.  
1.144.054.635 Ivonne Amira Torrente Shultz identificada con la cédula  
de ciudadanía No. 32.737.160 Ivonne Astrid Ortiz Giraldo identificada  
con la cédula de ciudadanía No. 32.243.789 Jaime Andrés Carreño  
González identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.010.185.094  
Jairo Alberto Restrepo Nohava identificado con la cédula de  
ciudadanía No. 80.879.894 Jennifer Guillen Fonseca identificada con  
la cédula de ciudadanía No. 1.018.427.249 Jessica Maria Londoño Rios  
identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.053.801.795 Jeyson  
Smith Noriega Suarez identificado con la cédula de ciudadanía No.  
1.030.548.705 Johana Andrea Lesmes Mendieta identificada con la  
cédula de ciudadanía No. 1.015.401.438 Johana Gisela Bravo Sanchez  
identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.110.479.285 Johnatan  
David Ramirez Borja identificado con la cédula de ciudadanía No.  
1.144.127.106 Jorge Eduardo Montañez Cortes identificado con la  
cédula de ciudadanía No. 79.443.280 Jorge Enrique Martinez Sierra  
identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.914.477 Jorge Enrique  
Rivero Rubio identificado con la cédula de ciudadanía No. 91.534.199  
Jose Bairon Ramirez Parra identificado con la cédula de ciudadanía  
No. 10.097.139 Juan David Rios Tamayo identificado con la cédula de  
ciudadanía No. 1.130.676.848 Juan Francisco Hernandez Roa  
identificado con la cédula de ciudadanía No. 19.248.144 Juan Gabriel  
Chinchilla Castro identificado con la cédula de ciudadanía No.  
72.255.168 Juan Jose Jaramillo Sanchez identificado con la cédula de  
ciudadanía No. 1.035.877.468 Juan Martin Galeano Jaramillo  
identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.036.623.986 Juan



## CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS

Fecha Expedición: 1 de diciembre de 2022 Hora: 11:17:02

Recibo No. 0122126507

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 122126507918CB

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificadoselectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadoselectronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

-----

Sebastian Ramirez Morales identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.036.929.558 Juana Lucia Vargas Ortiz identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.017.227.899 Juliana Barona Morales identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.015.462.399 Kelly Johanna Guerrero Hernandez identificada con la cédula de ciudadanía No. 22.731.988 Keren Maria Paez Hoyos identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.045.675.899 Laura Daniela Parra Saenz identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.030.673.595 Laura Lucia Muñoz Posada identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.037.595.474 Laura Marcela Ramirez Rojas identificada con la cédula de ciudadanía No. 53.905.165 Leonardo Andres Rodelo Ortiz identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.018.440.292 Lina Maria Vargas Liberato identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.049.639.055 Liz Wendy Perez Matos identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.143.165.172 LOPEZ Y ASOCIADOS S.A.S. NIT No. 830.118.372-4 Luis Carlos Gebauer Morales identificado con la cédula de ciudadanía No. 77.191.671 Luis Felipe Arana Madriñan identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.157.258 Luis Ferney Gonzalez Parra identificado con la cédula de ciudadanía No. 10.020.115 Luis Guillermo Iglesias Bermeo identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.082.930.759 Luis Miguel Muñoz Bueno identificado con la cédula de ciudadanía No. 94.540.769 Luisa Fernanda Currea Franco identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.072.709.498 Luz Dary Cuervo Duarte identificada con la cédula de ciudadanía No. 52.966.520 Luz Fabiola Garcia Carrillo identificada con la cédula de ciudadanía No. 52.647.144 Luz Helena Catalina Herrera Mancipe identificada con la cédula de ciudadanía No. 51.768.337 Luz Maryury Giraldo Cifuentes identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.094.890.026 Manuela Molina Valencia identifica con la cédula de ciudadanía No. 1.152.212.193 Maria Alejandra Gil Campos identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.018.462.326 Maria Angelica Aguirre Aponte identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.018.430.499 Maria Cristina Bucheli Fierro identificada con la cédula de ciudadanía No. 52.431.353 Maria Del Pilar Valencia Gutierrez identificada con la cédula de ciudadanía No. 57.463.554 Maria Fernanda Ruiz Loaiza identificada con la cédula de ciudadanía No. 67.013.937 Maria Yorladys Zapata Galvis identificada con la cédula de ciudadanía No. 42.011.709 Marisol Aristizabal Giraldo identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.017.186.779 Martha Lucia Almeida Carvajal identificada con la cédula de ciudadanía No. 34.546.611 Martha Mariño Castañeda identificada con la cédula de ciudadanía No. 52.517.325 Maycol Rafael Sanchez Velez identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.143.150.933 Melissa

## CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS

Fecha Expedición: 1 de diciembre de 2022 Hora: 11:17:02

Recibo No. 0122126507

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 122126507918CB

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificados/electronicos](http://www.ccb.org.co/certificados/electronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Lozano Hincapie identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.088.332.294 Miguel Ángel Serna Aristizabal identificado con la cédula de ciudadanía No. 75.104.922 Miguel Jose Gregory Villegas Castañeda identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.110.464.235 Natalia Gomez Castaño identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.053.768.706 Nauro Rafael Caballero Garcia identificado con la cédula de ciudadanía No. 73.380.125 Navi Guillermo Lamk Castro identificado con la cédula de ciudadanía No. 88.212.852 Nayroby Diaz Reino identificado con la cédula de ciudadanía No. 34.946.544 Neftali Vasquez Vargas identificado con la cédula de ciudadanía No. 12.106.814 Nelson Ricardo Arcos Moreno identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.167.913 Orlin Gaviris Caicedo Hurtado identificado con la cédula de ciudadanía No. 12.919.935 Oscar Andres Blanco Rivera identificado con la cédula de ciudadanía No. 19.090.427 Patricia Ceron Sanchez identificada con la cédula de ciudadanía No. 34.545.617 Paula Alejandra Quintero Bustos identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.016.089.697 Paulina Tous Gaviria identificada con la cédula de ciudadanía No. 42.137.888 Rafael Garcia Mendez identificado con la cédula de ciudadanía No. 13.719.501 Rita Mercedez Sierra Gonzales identificada con la cédula de ciudadanía No. 45.441.500 Sandra Liliana Sierra Chaparro identificada con la cédula de ciudadanía No. 46.386.722 Saul Enrique Vega Mendoza identificado con la cédula de ciudadanía No. 5.162.675 Saul Enrique Vega Nuñez identificado con la cédula de ciudadanía No. 92.642.437 Sebastian Fernandez Bonilla identificado con la cédula de ciudadanía No. 80.875.529 Sebastian Ramirez Vallejo identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.088.023.149 Shuly Roxana Gomez Fang identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.050.957.682 Tania Isabel Zapata Lora identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.152.694.649 TOUS ABOGADOS ASOCIADOS SAS NIT No. 900.411.483-2 Ugalbis Enrique Rodriguez Bolaños identificado con la cédula de ciudadanía No. 17.970.755 Valentina Sanchez Gonzalez identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.070.022.343 Vanessa Giraldo Cifuentes identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.088.271.844 Vanessa Liceth Bello Salcedo identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.140.855.245 Vanessa Prince Garcia Mejia identificada con la cédula de ciudadanía No. 40.945.070 Victoria Isabel Tous Gaviria identificada con la cédula de ciudadanía No. 42.128.976 Vladimir Montoya Morales identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.128.276.094 Walter Giovany Rocha Arias identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.014.217.682 Wendy Alejandra Sandoval Ramirez identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.026.293.434 William Arturo Troncoso Reyes

**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS****Fecha Expedición: 1 de diciembre de 2022 Hora: 11:17:02**

Recibo No. 0122126507

Valor: \$ 6,500

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 122126507918CB**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificados/electronicos](http://www.ccb.org.co/certificados/electronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.082.926.236 William Trujillo Chavarriaga identificado con la cédula de ciudadanía No. 16.783.965 Yeudi Vallejo Sanchez identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.963.537 Yoliveth Esther Castaño Avila identificada con la cédula de ciudadanía No. 22.539.744 Yulieth Arias Alvarez identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.088.276.477 Los nombrados podrán ejecutar los siguientes actos: 1. Representar a la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A, en toda clase de actuaciones y procesos judiciales ante Juzgados, Tribunales de todo tipo, Corte Constitucional, Consejo Superior de la Judicatura, Corte Suprema de Justicia y Consejo de Estado o ante cualquier autoridad del orden Nacional, Departamental, Municipal o del Distrito Capital de Bogotá y ante cualquier organismo descentralizado de derecho público del orden Nacional, Departamental, Municipal o del Distrito de Bogotá para realizar cualquier trámite ante estas entidades y atender los requerimientos y notificaciones provenientes de cualquiera de las oficinas de la Administración. 2. Notificarse de todo tipo de providencia Judicial o Administrativa, autos o decisiones judiciales o administrativas, absolver interrogatorio de parte, contestar demandas, renunciar a términos en los que haga parte la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A 3. Asistir en nombre y representación de la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A, a las audiencias especiales de conciliación que se lleven a cabo dentro de los procesos laborales, civiles, administrativos y/o en cualquier tipo de proceso judicial, en los que haga parte la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A en todo el país, con la facultad para conciliar o no de conformidad con los intereses de la Sociedad que Representa. Esta facultad también se extiende a actuaciones administrativas en el Ministerio del Trabajo y demás entidades de carácter administrativo, Centros de Conciliación, Cámaras de Comercio y Ministerio Publico. 4 Actuar como Representante Legal de la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A en las audiencias de Conciliación, de decisión de excepciones previas y saneamiento de Litigio (Ley 712 de 2001, modificada por la ley 1149 de 2007) para conciliar, notificarse, desistir, transigir, y ejecutar todas la actuaciones necesarias o indispensables para el buen éxito del Mandato conferido y en fin todas las facultades de Ley. 5. En general el apoderado queda ampliamente facultado para actuar y para interponer cualquier recurso establecido en las leyes contra las decisiones judiciales o emanadas de los Funcionarios administrativos del poder Nacional,



**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS**

Fecha Expedición: 1 de diciembre de 2022 Hora: 11:17:02

Recibo No. 0122126507

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 122126507918CB

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificados/electronicos](http://www.ccb.org.co/certificados/electronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Departamental, Municipal o del Distrito Capital de Bogotá y entidades Descentralizadas del Mismo Orden. 6. Igualmente quedan facultados expresamente para recibir, contestar demandas, desistir, conciliar, confesar, sustituir y transigir. Parágrafo: Finalmente, manifiesta el compareciente que este poder se confiere con base en lo preceptuado en los artículos 2156 y siguientes del Código Civil y el mandatario o apoderado queda advertido del alcance del artículo 2189 del Código Civil que dice: "de la terminación del mandato": El mandato termina: 1. Por el desempeño del negocio para que fue constituido; 2. Por la expiración del término o por el evento de la condición prefijados para la terminación del mandato. 3. Por la revocación del mandante; 4. Por la renuncia del mandatario.

**REFORMAS DE ESTATUTOS**

E.P. NO.	FECHA	NOTARIA NO.	NO. INSCRIP.
5.307	22- X-1991	23 STAFE BTA	23-X-1991- 343478
3.208	9- VI-1992	23 STAFE BTA	12-VI-1992- 368288
1.877	5- IV-1993	23 STAFE BTA	11-V -1993- 404963
1.442	23-III-1994	23 STAFE BTA	4-IV-1994 442612
179	2- II-1995	50 STAFE BTA	8-II-1995 480419
216	24- I-1997	23 STAFE BTA	4-II-1997 572417

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO	INSCRIPCIÓN
E. P. No. 0000836 del 17 de marzo de 2000 de la Notaría 23 de Bogotá D.C.	00722400 del 30 de marzo de 2000 del Libro IX
E. P. No. 0002143 del 29 de junio de 2001 de la Notaría 23 de Bogotá D.C.	00785305 del 11 de julio de 2001 del Libro IX
E. P. No. 0001937 del 18 de septiembre de 2002 de la Notaría 46 de Bogotá D.C.	00846033 del 25 de septiembre de 2002 del Libro IX
E. P. No. 0004440 del 20 de noviembre de 2003 de la Notaría 23 de Bogotá D.C.	00908593 del 28 de noviembre de 2003 del Libro IX
E. P. No. 0003820 del 28 de septiembre de 2004 de la Notaría	00962326 del 16 de noviembre de 2004 del Libro IX

**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS**

Fecha Expedición: 1 de diciembre de 2022 Hora: 11:17:02

Recibo No. 0122126507

Valor: \$ 6,500

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 122126507918CB**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificados/electronicos](http://www.ccb.org.co/certificados/electronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

-----  
23 de Bogotá D.C.Cert. Cap. No. 0000SIN del 12 de  
abril de 2005 de la Revisor FiscalE. P. No. 0003559 del 12 de  
septiembre de 2005 de la Notaría  
23 de Bogotá D.C.Cert. Cap. No. 00000001 del 28 de  
abril de 2006 de la Revisor FiscalE. P. No. 0002211 del 19 de  
septiembre de 2007 de la Notaría  
46 de Bogotá D.C.Cert. Cap. No. 00000001 del 4 de  
octubre de 2007 de la Revisor  
FiscalE. P. No. 0482 del 26 de marzo de  
2009 de la Notaría 46 de Bogotá  
D.C.E. P. No. 1674 del 30 de  
septiembre de 2009 de la Notaría  
65 de Bogotá D.C.E. P. No. 1708 del 11 de octubre  
de 2010 de la Notaría 65 de Bogotá  
D.C.E. P. No. 358 del 14 de marzo de  
2013 de la Notaría 65 de Bogotá  
D.C.E. P. No. 2250 del 26 de diciembre  
de 2013 de la Notaría 65 de Bogotá  
D.C.E. P. No. 00436 del 31 de marzo de  
2014 de la Notaría 65 de Bogotá  
D.C.E. P. No. 759 del 30 de abril de  
2015 de la Notaría 65 de Bogotá  
D.C.E. P. No. 01870 del 28 de  
septiembre de 2015 de la Notaría  
65 de Bogotá D.C.E. P. No. 443 del 28 de marzo de  
2016 de la Notaría 65 de Bogotá  
D.C.

E. P. No. 1557 del 13 de

00986505 del 18 de abril de  
2005 del Libro IX01012189 del 20 de septiembre  
de 2005 del Libro IX01052550 del 28 de abril de  
2006 del Libro IX01160486 del 26 de septiembre  
de 2007 del Libro IX01164415 del 12 de octubre de  
2007 del Libro IX01286838 del 1 de abril de  
2009 del Libro IX01331779 del 5 de octubre de  
2009 del Libro IX01420850 del 12 de octubre de  
2010 del Libro IX01718969 del 3 de abril de  
2013 del Libro IX01795106 del 31 de diciembre  
de 2013 del Libro IX01822566 del 1 de abril de  
2014 del Libro IX01942591 del 26 de mayo de  
2015 del Libro IX02023448 del 29 de septiembre  
de 2015 del Libro IX02091593 del 8 de abril de  
2016 del Libro IX

02141614 del 19 de septiembre

**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS****Fecha Expedición: 1 de diciembre de 2022 Hora: 11:17:02**

Recibo No. 0122126507

Valor: \$ 6,500

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 122126507918CB**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificadoselectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadoselectronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

septiembre de 2016 de la Notaría de 2016 del Libro IX  
65 de Bogotá D.C.

E. P. No. 2192 del 28 de noviembre de 2016 de la Notaría 23 de Bogotá D.C.	02162523 del 1 de diciembre de 2016 del Libro IX
E. P. No. 422 del 4 de abril de 2017 de la Notaría 65 de Bogotá D.C.	02206159 del 11 de abril de 2017 del Libro IX
E. P. No. 1873 del 10 de octubre de 2018 de la Notaría 65 de Bogotá D.C.	02387333 del 19 de octubre de 2018 del Libro IX

**SITUACIÓN DE CONTROL Y/O GRUPO EMPRESARIAL**

Por Documento Privado del 12 de abril de 2007 de Representante Legal, inscrito el 8 de junio de 2007 bajo el número 01137085 del libro IX, se comunicó que se ha configurado una situación de control por parte de la sociedad matriz: SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S A, respecto de las siguientes sociedades subordinadas:

- APORTES EN LINEA S A

Domicilio: Bogotá D.C.

Presupuesto: Numeral 1 Artículo 261 del Código de Comercio

Certifica:

Por Documento Privado del 21 de enero de 1999, inscrito el 22 de enero de 1999 bajo el número 00665531 del libro IX, comunicó la sociedad matriz:

- GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES S A

Domicilio: Bogotá D.C.

Presupuesto: No reportó

Que se ha configurado una situación de control con la sociedad de la referencia.

Por Documento Privado del 31 de enero de 2019 de Empresario, inscrito el 31 de enero de 2019 bajo el número 02419552 del libro IX, comunicó la persona natural matriz:

- Luis Carlos Sarmiento Angulo

Domicilio: Bogotá D.C.

Presupuesto: Numeral 2 Artículo 261 del Código de Comercio

Que se ha configurado una situación de grupo empresarial con la sociedad de la referencia.



## CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS

Fecha Expedición: 1 de diciembre de 2022 Hora: 11:17:02

Recibo No. 0122126507

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 122126507918CB

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificados/electronicos](http://www.ccb.org.co/certificados/electronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Fecha de configuración de la situación de grupo empresarial :  
2018-12-31

Se aclara el grupo empresarial, inscrito el 31 de enero de 2019 bajo el no. 02419552 del libro ix, en el sentido de indicar que la persona natural luis carlos sarmiento angulo (matriz), configuro grupo empresarial con las siguientes sociedades: adminnegocios s.A.S.; taxair s.A.; seguros alfa s.A.; seguros de vida alfa s.A.; negocios y bienes s.A.S.; inversiones vista hermosa s.A.S.; inversegovia s.A.; organización luis carlos sarmiento angulo limitada; inverprogreso s.A.; lcsa y cia. S. En c.; gestora adminnegocios & cia. S. En c.; luis carlos sarmiento angulo & Cia. Ltda.; grupo aval acciones y valores s.A.; indicomersocios s.A.; inproico s.A.; sosacol s.A.; aminversiones s.A.; socineg s.A.; el zuque s.A.; actiunidos s.A.; relantano s.A.; activos tesalia s.A.S.; rendifin s.A.; bienes y comercio s.A.; esadinco s.A.; sadinsa s.A.; codenegocios s.A.; petreos s.A.S.; inversiones escorial s.A.; popular securities s.A.; vigia s.A.; telestudio s.A.; corporación publicitaria de colombia s.A.; construcciones planificadas s.A.; banco comercial av villas s.A.; a toda hora s.A - ath; banco de bogotá s.A.; fiduciaria bogotá s.A. - fidubogotá; megalinea s.A.; aval soluciones digitales s.A.; almacenes generales de depósito almaviva s.A.; almaviva global cargo s.A.; almaviva zona franca s.A.; sociedad administradora de fondos de pensiones y cesantías porvenir s.A.; aportes en línea s.A.; banco de occidente s.A.; fiduciaria de occidente s.A.; ventas y servicios s.A.; banco popular s.A.; fiduciaria popular s.A.; inca fruehauf - inca s.A.; alpopular s.A.; alpopular cargo s.A.S.; corporación financiera colombiana s.A.; fiduciaria corficolombiana s.A.; leasing corficolombiana s.A. - compañía de financiamiento; casa de bolsa s.A. Sociedad comisionista de bolsa; industrias lehner s.A.; tejidos sintéticos de colombia s.A. - tesicol; promotora y comercializadora turística santamar s.A.; colombiana de licitaciones y concesiones s.A.S.; plantaciones unipalma de los llanos s.A.; proyectos de ingeniería y desarrollo s.A.S. - proindesa s.A.S; cfc gas holding s.A.S.; cfc private equity holdings s.A.S.; concesionaria vial del pacífico s.A.S.; concesionaria nueva vía al mar s.A.S.; valora s.A.; agro santa helena s.A.S.; plantaciones santa rita s.A.S.; hevea de los llanos s.A.S; tsr 20 inversiones s.A.S.; hevea inversiones s.A.S.; agro casuna s.A.S.; estudios y proyectos del sol s.A.S.; constructora de infraestructura vial s.A.S. - coninvia; peajes electrónicos s.A.S; concesionaria panamericana s.A.; concesionaria

**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS****Fecha Expedición: 1 de diciembre de 2022 Hora: 11:17:02**

Recibo No. 0122126507

Valor: \$ 6,500

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 122126507918CB**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificadoselectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadoselectronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

vial andina s.A.S. - coviandina; concesionaria vial del oriente s.A.S. - covioriente s.A.S.; proyectos de infraestructura s.A. - pisa; concesiones ccfc s.A.; organización pajonales s.A.; mavalles s.A.; estudios proyectos e inversiones de los andes s.A.; concesionaria vial de los andes s.A.S. - coviandes s.A.S.; hoteles estelar s.A.; esencial hoteles s.A.; compañía hotelera cartagena de indias s.A.; cfc energy holding s.A.S.; proyectos y desarrollos viales del pacifico s.A.S.; proyectos de inversión vial del pacífico s.A.S.; proyectos y desarrollos viales del oriente s.A.S.; proyectos de inversión vial del oriente s.A.S.; proyectos y desarrollos viales del mar s.A.S.; proyectos de inversión vial del mar s.A.S.; compañía en infraestructura y desarrollo s.A.S. - covidensa; gestora en infraestructura y desarrollo s.A.S.; proyectos y desarrollos viales andinos s.A.S.; proyectos de inversión vial andino s.A.S.; casa editorial el tiempo s.A.; ceettv s.A.; círculo de lectores s.A.S.; intermedio editores s.A.S.; printer colombiana s.A.S.; témpora s.A.S.; leadersearch s.A.S. magazines culturales s.A.S.; metrocuadrado.Com s.A.; pautefacil.Com s.A.S. En liquidación. (subordinadas)

**RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN**

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

**CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU**

**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS**

Fecha Expedición: 1 de diciembre de 2022 Hora: 11:17:02  
Recibo No. 0122126507  
Valor: \$ 6,500

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 122126507918CB**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificados/electronicos](http://www.ccb.org.co/certificados/electronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

-----

Actividad principal Código CIIU: 6630  
Actividad secundaria Código CIIU: 6810

**ESTABLECIMIENTO(S) DE COMERCIO**

A nombre de la persona jurídica figura(n) matriculado(s) en esta Cámara de Comercio de Bogotá el(los) siguiente(s) establecimiento(s) de comercio:

Nombre: ZONA INDUSTRIAL PORVENIR S.A.  
Matrícula No.: 00640259  
Fecha de matrícula: 3 de abril de 1995  
Último año renovado: 2022  
Categoría: Agencia  
Dirección: Cl 13 # 46 - 15  
Municipio: Bogotá D.C.

Nombre: LAS NIEVES PORVENIR S.A.  
Matrícula No.: 00640265  
Fecha de matrícula: 3 de abril de 1995  
Último año renovado: 2022  
Categoría: Agencia  
Dirección: Cr 7 # 17 - 49  
Municipio: Bogotá D.C.

Nombre: LAS GRANJAS PORVENIR S.A.  
Matrícula No.: 00640266  
Fecha de matrícula: 3 de abril de 1995  
Último año renovado: 2022  
Categoría: Agencia  
Dirección: Cr 680 # 13 - 79  
Municipio: Bogotá D.C.

Nombre: PORVENIR AVENIDA EL DORADO  
Matrícula No.: 00640269  
Fecha de matrícula: 3 de abril de 1995  
Último año renovado: 2022  
Categoría: Agencia  
Dirección: Cl 26 # 96 J - 90  
Municipio: Bogotá D.C.



## CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS

Fecha Expedición: 1 de diciembre de 2022 Hora: 11:17:02

Recibo No. 0122126507

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 122126507918CB

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificadoselectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadoselectronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

-----

Nombre: CENTRO PORVENIR S.A.  
Matrícula No.: 00640272  
Fecha de matrícula: 3 de abril de 1995  
Último año renovado: 2022  
Categoría: Agencia  
Dirección: Cr 13 # 26 A - 65  
Municipio: Bogotá D.C.

Nombre: OFICINA AVENIDA CHILE PORVENIR S A  
Matrícula No.: 00979735  
Fecha de matrícula: 19 de noviembre de 1999  
Último año renovado: 2022  
Categoría: Agencia  
Dirección: Cl 72 # 10 - 02  
Municipio: Bogotá D.C.

Nombre: PORVENIR CALLE 106  
Matrícula No.: 01150432  
Fecha de matrícula: 22 de enero de 2002  
Último año renovado: 2022  
Categoría: Establecimiento de comercio  
Dirección: Cr 15 # 106 - 38  
Municipio: Bogotá D.C.

Nombre: PORVENIR BOGOTA LA CABRERA  
Matrícula No.: 01164524  
Fecha de matrícula: 11 de marzo de 2002  
Último año renovado: 2022  
Categoría: Establecimiento de comercio  
Dirección: Cr 11 87 51  
Municipio: Bogotá D.C.

Nombre: PORVENIR S A CHAPINERO  
Matrícula No.: 01279221  
Fecha de matrícula: 6 de junio de 2003  
Último año renovado: 2022  
Categoría: Agencia  
Dirección: Cr 13 54 -17  
Municipio: Bogotá D.C.

Nombre: PORVENIR SOACHA

**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS**

Fecha Expedición: 1 de diciembre de 2022 Hora: 11:17:02

Recibo No. 0122126507

Valor: \$ 6,500

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 122126507918CB**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificados/electronicos](http://www.ccb.org.co/certificados/electronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

-----  
Matrícula No.: 02407500  
Fecha de matrícula: 31 de enero de 2014  
Último año renovado: 2022  
Categoría: Agencia  
Dirección: Cr 4 Este # 31 - 40 Cc Gran Plaza  
Municipio: Soacha (Cundinamarca)

Nombre: PORVENIR CHIA  
Matrícula No.: 02412686  
Fecha de matrícula: 12 de febrero de 2014  
Último año renovado: 2022  
Categoría: Agencia  
Dirección: Cc Centro Chia Lc 1222  
Municipio: Chía (Cundinamarca)

Nombre: PORVENIR S.A. NIZA  
Matrícula No.: 02659395  
Fecha de matrícula: 25 de febrero de 2016  
Último año renovado: 2022  
Categoría: Agencia  
Dirección: Cl 127 # 70 D - 05  
Municipio: Bogotá D.C.

SI DESEA OBTENER INFORMACIÓN DETALLA DE LOS ANTERIORES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO O DE AQUELLOS MATRICULADOS EN UNA JURISDICCIÓN DIFERENTE A LA DEL PROPIETARIO, DEBERÁ SOLICITAR EL CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DEL RESPECTIVO ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, AGENCIAS Y SUCURSALES, QUE LA PERSONA JURÍDICA TIENE MATRICULADOS EN OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN [WWW.RUES.ORG.CO](http://WWW.RUES.ORG.CO).

**TAMAÑO EMPRESARIAL**

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es Grande

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o

**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS**

Fecha Expedición: 1 de diciembre de 2022 Hora: 11:17:02  
Recibo No. 0122126507  
Valor: \$ 6,500

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 122126507918CB**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificados/electronicos](http://www.ccb.org.co/certificados/electronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

-----  
inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria \$ 2.764.667.415.143

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU : 6630

**INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA**

Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del RUES.

Los siguientes datos sobre RIT y Planeación son informativos: Contribuyente inscrito en el registro RIT de la Dirección de Impuestos, fecha de inscripción : 1 de marzo de 2022. Fecha de envío de información a Planeación : 24 de octubre de 2022. \n \n Señor empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y una planta de personal de menos de 200 trabajadores, usted tiene derecho a recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75% en el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el segundo año y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009. Recuerde ingresar a [www.supersociedades.gov.co](http://www.supersociedades.gov.co) para verificar si su empresa está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.

El presente certificado no constituye permiso de funcionamiento en ningún caso.

\*\*\*\*\*  
Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

\*\*\*\*\*  
Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS

Fecha Expedición: 1 de diciembre de 2022 Hora: 11:17:02

Recibo No. 0122126507

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 122126507918CB

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a  
[www.ccb.org.co/certificadoselectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadoselectronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la  
imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera  
ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

-----

\*\*\*\*\*

Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la  
autorización impartida por la Superintendencia de Industria y  
Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.

  
CONSTANZA PUENTES TRUJILLO

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

Fecha Expedición: 1 de febrero de 2024 Hora: 09:03:18

Recibo No. AA24128152

Valor: \$ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A241281523ED7F

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificadoselectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadoselectronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

**CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:**

**NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO**

Razón social: GODOY CÓRDOBA ABOGADOS S.A.S.  
Sigla: GODOY CÓRDOBA ABOGADOS S.A.S.  
Nit: 830.515.294-0 Administración : Dirección  
Seccional De Impuestos De Bogotá, Regimen Comun  
Domicilio principal: Bogotá D.C.

**MATRÍCULA**

Matrícula No. 01447565  
Fecha de matrícula: 31 de enero de 2005  
Último año renovado: 2023  
Fecha de renovación: 31 de marzo de 2023  
Grupo NIIF: Grupo II.

**UBICACIÓN**

Dirección del domicilio principal: Calle 84A #10-33 Piso 5  
Municipio: Bogotá D.C.  
Correo electrónico: pagos@godoycordoba.com  
Teléfono comercial 1: 3174628  
Teléfono comercial 2: No reportó.  
Teléfono comercial 3: No reportó.

Dirección para notificación judicial: Calle 84A #10-33 Piso 5  
Municipio: Bogotá D.C.  
Correo electrónico de notificación: notificaciones@godoycordoba.com  
Teléfono para notificación 1: 3174628  
Teléfono para notificación 2: No reportó.  
Teléfono para notificación 3: No reportó.

La persona jurídica SI autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Procesos y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

**Fecha Expedición: 1 de febrero de 2024 Hora: 09:03:18**

Recibo No. AA24128152

Valor: \$ 7,900

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A241281523ED7F**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificadoselectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadoselectronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

-----  
Administrativo.

**CONSTITUCIÓN**

Por Escritura Pública No. 0000138 del 25 de enero de 2005 de Notaría 61 de Bogotá D.C., inscrito en esta Cámara de Comercio el 31 de enero de 2005, con el No. 00974508 del Libro IX, se constituyó la sociedad de naturaleza Comercial denominada GODOY CORDOBA ABOGADOS LIMITADA SIN EMBARGO PARA SU IDENTIFICACION PODRA UTILIZAR SIMPLEMENTE LA CONTRACCION GODOY CORDOBA LTDA.

**REFORMAS ESPECIALES**

Por Acta No. 013 de la Junta de Socios del 28 de diciembre de 2009, inscrita el 27 de enero de 2010 bajo el número 01356856 del libro IX, la sociedad de la referencia se transformó de Sociedad Limitada a Sociedad por Acciones Simplificada S A S bajo el nombre de: GODOY CORDOBA ABOGADOS S A S sin embargo para su identificación podrá utilizar simplemente la contracción GODOY CORDOBA S A S

Por Acta No. 013 del 28 de diciembre de 2009 de Junta de Socios, inscrito en esta Cámara de Comercio el 27 de enero de 2010, con el No. 01356856 del Libro IX, la sociedad cambió su denominación o razón social de GODOY CORDOBA ABOGADOS LIMITADA SIN EMBARGO PARA SU IDENTIFICACION PODRA UTILIZAR SIMPLEMENTE LA CONTRACCION GODOY CORDOBA LTDA a GODOY CORDOBA ABOGADOS S A S SIN EMBARGO PARA SU IDENTIFICACION PODRA UTILIZAR SIMPLEMENTE LA CONTRACCION GODOY CORDOBA S A S.

Por Acta No. 33 del 15 de enero de 2018 de Asamblea de Accionistas, inscrito en esta Cámara de Comercio el 30 de enero de 2018, con el No. 02297434 del Libro IX, la sociedad cambió su denominación o razón social de GODOY CORDOBA ABOGADOS S A S SIN EMBARGO PARA SU IDENTIFICACION PODRA UTILIZAR SIMPLEMENTE LA CONTRACCION GODOY CORDOBA S A S a "GODOY CORDOBA ABOGADOS S.A.S." SIN EMBARGO, PARA SU IDENTIFICACION PUEDE UTILIZAR SIMPLEMENTE LA CONTRACCION "GODOY CORDOBA S.A.S.".



**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

**Fecha Expedición: 1 de febrero de 2024 Hora: 09:03:18**

Recibo No. AA24128152

Valor: \$ 7,900

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A241281523ED7F**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificadoselectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadoselectronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

-----  
Por Acta No. 37 de la Asamblea de Accionistas, del 02 de noviembre de 2018, inscrita el 16 de Mayo de 2019 bajo el número 02466433 del libro IX, la sociedad de la referencia (absorbente) absorbe mediante fusión a la sociedad FRANCISCO BURITICA ABOGADOS CONSULTORES S.A.S. la cual se disuelve sin liquidarse.

Por Acta No. 58 del 19 de julio de 2022 de Asamblea de Accionistas, inscrito en esta Cámara de Comercio el 28 de julio de 2022, con el No. 02862790 del Libro IX, la sociedad cambió su denominación o razón social de "GODOY CORDOBA ABOGADOS S.A.S." SIN EMBARGO, PARA SU IDENTIFICACION PUEDE UTILIZAR SIMPLEMENTE LA CONTRACCION "GODOY CORDOBA S.A.S." a GODOY CÓRDOBA ABOGADOS S.A.S. y adicionó la(s) sigla(s) GODOY CÓRDOBA ABOGADOS S.A.S..

**TÉRMINO DE DURACIÓN**

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

**OBJETO SOCIAL**

La sociedad podrá, por sí misma o por intermedio o en asocio con terceros, desarrollar cualquier actividad lícita. De manera particular, pero sin limitarse a ello, la Sociedad tiene por objeto social la prestación de servicios de asesoría jurídica en las distintas disciplinas del derecho, así como la planeación y proyección de negocios a nivel nacional e internacional. Así mismo, la Sociedad puede dedicarse a la prestación de servicios integrales en prevención de riesgos laborales, promoción y prevención de la salud, asesorías y capacitaciones en las siguientes áreas con profesionales competentes y licencia en salud y seguridad en el trabajo vigente: legal, medicina preventiva y del trabajo, medicina del deporte, nutrición deportiva y ocupacional, fisioterapia, psicología, auditoria, ingeniería, entre otras. Así mismo, podrá prestar servicios integrales para todas las actividades de asesoría en diseño, implementación y mantenimiento de sistemas integrados de gestión en Seguridad y salud en el trabajo. También podrá llevar a cabo las demás actividades y servicios que de acuerdo con la legislación vigente en riesgos laborales, se deban diseñar e

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

Fecha Expedición: 1 de febrero de 2024 Hora: 09:03:18

Recibo No. AA24128152

Valor: \$ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A241281523ED7F

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificadoselectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadoselectronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

-----  
implementar a nivel empresarial en organizaciones de cualquier sector empresarial ya sea del sector público o privado, entre otras. La Sociedad también podrá poseer y administrar establecimientos de comercio, así como celebrar cualquier tipo de operaciones sobre los mismos, y en general, estará facultada para realizar actividades de importación y exportación de bienes y servicios.

**CAPITAL**

**\* CAPITAL AUTORIZADO \***

Valor : \$10.000.000.000,00  
No. de acciones : 10.000.000,00  
Valor nominal : \$1.000,00

**\* CAPITAL SUSCRITO \***

Valor : \$240.201.000,00  
No. de acciones : 240.201,00  
Valor nominal : \$1.000,00

**\* CAPITAL PAGADO \***

Valor : \$240.201.000,00  
No. de acciones : 240.201,00  
Valor nominal : \$1.000,00

**REPRESENTACIÓN LEGAL**

La sociedad tendrá un gerente. El gerente ejercerá el cargo hasta cuando sea removido o reemplazado por la Junta Directiva de acuerdo con lo señalado en los estatutos. El gerente será el representante legal de la sociedad. El gerente de la sociedad tendrá tres (3) suplentes elegidos por la Junta Directiva, quienes reemplazarán al gerente en sus faltas temporales y en las definitivas hasta cuando la Junta Directiva nombre al sucesor o reemplazo del gerente.

**FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL**

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

**Fecha Expedición: 1 de febrero de 2024 Hora: 09:03:18**

Recibo No. AA24128152

Valor: \$ 7,900

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A241281523ED7F**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificadoselectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadoselectronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

-----  
El gerente tendrá en desarrollo del objeto social las siguientes funciones y atribuciones: A) Representar a la sociedad judicial y extrajudicialmente ante los asociados, terceros y toda clase de autoridades judiciales y administrativas, pudiendo nombrar mandatarios para que representen la sociedad cuando fuere el caso; B) Ejecutar y hacer ejecutar los acuerdos y resoluciones de la Asamblea General De accionistas y de la Junta Directiva; C) Realizar y celebrar los actos y contratos que tiendan a realizar los fines de la sociedad; D) Nombrar y remover libremente a los empleados de la sociedad cuyo nombramiento no esté atribuido a la Asamblea General de Accionistas o a la Junta Directiva; E) Presentar oportunamente a consideración de la Junta Directiva el presupuesto de inversiones, ingresos y gastos que requiera la sociedad; F) Presentar a la Junta Directiva en tiempo oportuno, los estados financieros de propósito general individuales y consolidados cuando sea del caso, con sus notas, cortados al fin del respectivo ejercicio junto con los documentos que señale la ley y el informe de gestión, así como el especial cuando se dé la configuración de un grupo empresarial, todo lo cual se presentará conjuntamente por los administradores a la Asamblea General de Accionistas; G) Al igual que los demás administradores, deberá rendir cuentas comprobadas de su gestión al final de cada ejercicio dentro del mes siguiente a la fecha en la cual se retire de su cargo y cuando se las exija el órgano que sea competente para ello. Para tal efecto, se presentarán los estados financieros que fueren pertinentes, junto con un informe de gestión; H) Cumplir los demás deberes que le señalen los reglamentos de la sociedad y los que le corresponden por el cargo que ejerce y particularmente velar por que a través de la sociedad o en la prestación de los servicios que constituyen su objeto social principal no fluyan o pasen dineros de origen ilícito; I) Delegar determinadas funciones propias de su cargo dentro de los límites señalados en los estatutos; J) Cuidar de la recaudación e inversión de los fondos de la sociedad; K) Velar porque los empleados de la sociedad cumplan estrictamente sus deberes y poner en conocimiento de la Asamblea General de Accionistas o Junta Directiva las irregularidades o faltas graves que ocurran sobre este particular. Esta función se cumplirá dentro de los parámetros de la estructura de la sociedad y teniendo en cuenta las funciones y procedimientos asignados a otros funcionarios de la sociedad, como cabezas de área; L) Convocar a la asamblea general de accionistas a sesiones ordinarias, y a las extraordinarias siempre que lo crea conveniente o cuando le corresponda de acuerdo con lo previsto en estos estatutos y



**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

**Fecha Expedición: 1 de febrero de 2024 Hora: 09:03:18**

Recibo No. AA24128152

Valor: \$ 7,900

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A241281523ED7F**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificadoselectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadoselectronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

-----  
en la ley; M) Las demás que le asignen la ley y estos estatutos. Parágrafo.- No obstante lo anterior, en cualquier caso y para desarrollar o ejercer cualquiera de sus funciones, el gerente requerirá la previa autorización de la Junta Directiva para celebrar cualquier acto o contrato a nombre de la sociedad, cuando la cuantía del acto o contrato o de las obligaciones a cargo de la sociedad de manera individual o a través de una serie de operaciones relacionadas- exceda el equivalente en pesos colombianos a mil salarios mínimos mensuales legales vigentes (1000 SMMLV) a la fecha de celebración del acto o contrato, o de la última operación en el caso de operaciones relacionadas. Parágrafo. - Los suplentes del gerente tendrán las mismas facultades otorgadas al gerente (incluida la facultad de representación legal de la sociedad) y no existirá para su actuación, un orden de prioridad entre los suplentes del gerente. Cuando en estos estatutos se haga referencia al gerente, se entenderá que se hace referencia también, en lo aplicable, a los suplentes del gerente. Los suplentes no requerirán acreditar, para su actuación, la configuración de una falta temporal o absoluta del gerente. Bastará con su actuación para que se presuma la falta temporal o absoluta del gerente.

Por Documento Privado No. Sin Núm del 08 de marzo de 2019, registrado el 9 de Marzo de 2019 bajo el No. 02433332 del libro IX, de conformidad con el artículo 75 del Código General del Proceso fueron inscritos como apoderado(s) judicial(es) y extrajudicial(es).

Nombre:	Identificación:	T.P
Barros Cardenas Jhon Alex	C.C. 1.043.015.010	287.301

Por Documento Privado No. Sin Núm del Representante Legal, del 5 de julio de 2019, registrado el 17 de Julio de 2019 bajo el número 02487223 del libro IX, de conformidad con el Artículo 75 del Código General del Proceso fue inscrito como apoderado(s) judicial(es) y extrajudicial(es).

Nombre:	Identificación:	T.P
Rey Londoño Oscar Alberto	C.C. 1.140.866.487	300.858

Por Documento Privado No. Sin Núm del Representante Legal, del 22 de octubre de 2019, registrado el 23 de Octubre de 2019 bajo el número 02517724 del libro IX, de conformidad con el Artículo 75 del Código

## CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 1 de febrero de 2024 Hora: 09:03:18

Recibo No. AA24128152

Valor: \$ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A241281523ED7F

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificadoselectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadoselectronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

-----  
General del Proceso fue inscrito como apoderado(s) judicial(es) y extrajudicial(es).

Nombre:	Identificación:	T.P
Ana Maria Rodriguez Marmolejo C.C.	1.151.946.356	253.718
John Jairo Rodriguez Bernal	C.C. 1.070.967.487	325.589
Omar Alonso Camargo Mercado	C.C. 1.043.010.907	285.256
Jorge Andres Sanchez Rodriguez	C.C. 1.013.641.075	278.768

Por Documento Privado Sin Núm del Representante Legal del 27 de diciembre de 2019, registrado el 27 de Diciembre de 2019 bajo el número 02537409 del libro IX, de conformidad con el Artículo 75 del Código general del proceso fue inscrito como apoderado(s) judicial(es) y extrajudicial(es).

Nombre:	Identificación:	T.P
Chavez Alvarado Andres Felipe	C.C. 1.075.655.441	232007

Por Documento Privado No. Sin Núm del 28 de febrero de 2020, registrado el 2 de Marzo de 2020 bajo el número 02559054 del libro IX, de conformidad con el Artículo 75 del Código general del proceso fue inscrito como apoderado(s) judicial(es) y extrajudicial(es).

Nombre:	Identificación:	T.P
Bernal García Federico	C.C. 80.873.156	175488
Benrey Zorro Juliana	C.C. 1.072.642.954	190673
Duarte Villalobos Irene	C.C. 1.020.744.847	273878
Carrasco Boshell Brigitte Natalia	C.C. 1.121.914.728	288455

Por Documento Privado Sin núm del Representante Legal, del 29 de julio de 2020, registrado el 30 de julio de 2020 bajo el número 02602260 del libro IX, de conformidad con el Artículo 75 del Código general del proceso fue inscrito como apoderado(s) judicial(es) y extrajudicial(es).

Nombre:	Identificación:	T.P
Viviel Gonzalez Jorge Enrique	C.C. 1.014.225.303	277.946

Por Documento Privado Sin Núm. del Representante Legal, del 13 de agosto de 2020, registrado el 13 de agosto de 2020 bajo el número 02606331 del libro IX, de conformidad con el Artículo 75 del Código General del Proceso fue inscrito como apoderado(s) judicial(es) y extrajudicial(es).

## CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 1 de febrero de 2024 Hora: 09:03:18

Recibo No. AA24128152

Valor: \$ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A241281523ED7F

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificados/electronicos](http://www.ccb.org.co/certificados/electronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

-----  
extrajudicial(es).

Nombre:	Identificación:	T.P:
Romero Méndez Andrés Felipe	C.C.1.019.080.336	286.638
Duque Duque Juan Antonio	C.C.80.085.295	138.464

Por Documento Privado Sin Núm. del Representante Legal, del 03 de septiembre de 2020, registrado el 4 de septiembre de 2020 bajo el número 02612596 del libro IX, de conformidad con el Artículo 75 del Código General del Proceso fue inscrito como apoderado(s) judicial(es) y extrajudicial(es).

Nombre:	Identificación:	T.P.
Puentes Céspedes Ana Carolina	C.C. 1.010.229.148	330105

Por Documento Privado Sin Núm. del Representante Legal, del 11 de febrero de 2021, registrado 4 de Marzo de 2021 bajo el número 02669512 del libro IX, de conformidad con el Artículo 75 del Código general del proceso fue inscrito como apoderado(s) judicial(es) y extrajudicial(es).

Nombre:	Identificación:	TP:
Carlos Augusto Suarez Pinzón	C.C. 1.032.470.700	347.852
Miguel Alejandro Lombana Cuevas	C.C. 1.022.398.901	308.077
Deivid Alexander Rodríguez Ramirez	C.C. 1.233.690.042	LT25399
Natalia Alzate Garcia	C.C. 1.095.786.682	173.261
Sara Heshusius Sancho	C.C. 1.144.068.042	346.483
Youssef Norredine Amara Pachon	C.C. 1.019.069.334	311.472

Por Documento Privado Sin Núm. del 12 de mayo de 2021 del Representante Legal, registrado 27 de Mayo de 2021, bajo el número 02709540 del libro IX, de conformidad con el Artículo 75 del Código general del proceso fue inscrito como apoderado(s) judicial(es) y extrajudicial(es).

Nombre:	Identificación:	TP:
Nicolás Eduardo Ramos Ramos	C.C. 1.018.469.231	365094
Daniel Andres Paz Erazo	C.C. 1.085.291.127	329936
Laura María Valderrama Medrano	C.C. 1.010.220.471	307507

Por Documento Privado sin num. del 18 de agosto de 2021, inscrito el 23 de Agosto de 2021 con el No. 02736169 del libro IX, de conformidad



## CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 1 de febrero de 2024 Hora: 09:03:18

Recibo No. AA24128152

Valor: \$ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A241281523ED7F

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificadoselectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadoselectronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

-----  
con el artículo 75 de la Ley 1564 de 2012 (Código General de Proceso) fue inscrito para que actúe como representante de GODOY CORDOBA ABOGADOS S.A.S. en los procesos judiciales en los que esta última sea designada como apoderado de parte a:

Nombre	Identificación	Tarjeta Profesional
Miguel Angel Salazar Cortes	C.C. No. 1.019.128.867	347296
Michelle Valeria Mina Marulanda	C.C. No. 1.234.195.459	359423

Por Documento Privado del 16 de diciembre de 2021, inscrito el 18 de Diciembre de 2021 con el No. 02773873 del libro IX, de conformidad con el artículo 75 de la Ley 1564 de 2012 (Código General de Proceso) fue inscrito para que actúe como representante de GODOY CORDOBA ABOGADOS S.A.S. en los procesos judiciales en los que esta última sea designada como apoderado de parte a:

Nombre	Identificación	Tarjeta Profesional
Angélica María Cure Muñoz	C.C. No. 1.140.887.921	369821
Paula Huertas Borda	C.C. No. 1.020.833.703	369744
María Alejandra Ramírez Olea	C.C. No. 1.152.225.557	359508

Por Documento Privado del 01 de julio de 2022, inscrito el 8 de Julio de 2022, con el No. 02856173 del libro IX, de conformidad con el artículo 75 de la Ley 1564 de 2012 (Código General de Proceso) fue inscrito para que actúe como representante de GODOY CORDOBA ABOGADOS S.A.S. en los procesos judiciales en los que esta última sea designada como apoderado de parte a:

Nombre:	Identificación:	TP:
Andres Felipe Duque Velásquez	C.C No. 1.053.772.677	221517
Daniel Felipe Ramirez Sanchez	C.C No. 1.070.018.966	373906
Deivid Alexander Rodriguez Ramirez	C.C No. 1.233.690.042	378503
Manuel Rodrigo Jaimes Beltran	C.C No. 1.071.169.446	417.436

Por Documento Privado del 22 de julio de 2022 , inscrito el 27 de Julio de 2022 con el No. 02862244 del libro IX, de conformidad con el artículo 75 de la Ley 1564 de 2012 (Código General de Proceso) fue inscrito para que actúe como representante de GODOY CORDOBA ABOGADOS S.A.S en los procesos judiciales en los que esta última sea designada como apoderado de parte a:

## CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 1 de febrero de 2024 Hora: 09:03:18

Recibo No. AA24128152

Valor: \$ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A241281523ED7F

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificadoselectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadoselectronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Nombre:	Identificación:	TP:
Diana Camila Gaitan Hemelberg	C.C No. 1.019.123.311	334532
David Ricardo Rodriguez Preciado	C.C.No. 1.057.581.246	251947

Por Documento Privado del 23 de agosto de 2022 , inscrito el 26 de Agosto de 2022 con el No. 02872678 del libro IX, de conformidad con el artículo 75 de la Ley 1564 de 2012 (Código General de Proceso) fue inscrito para que actúe como representante de GODOY CORDOBA ABOGADOS S.A.S en los procesos judiciales en los que esta última sea designada como apoderado de parte a:

Nombre:	Identificación:	TP:
Octavio Andrés Castillo Ocampo	C.C No. 1.017.267.151	380131
Stephany Obando Perea	C.C No. 1.107.080.046	361681
Diana Esperanza Gomez Fonseca	C.C No. 1.023.967.512	419.705
Lina María Varela Vélez	C.C No. 1.234.091.873	364597

Por Documento Privado del 04 de octubre de 2022, inscrito el 7 de Octubre de 2022 con el 02887434 del libro IX, de conformidad con el artículo 75 de la Ley 1564 de 2012 (Código General de Proceso) fue inscrito para que actúe como representante de GODOY CORDOBA ABOGADOS S.A.S en los procesos judiciales en los que esta última sea designada como apoderado de parte a:

Nombre:	Identificación:	TP:
Andrea Juliana Hernández Rueda	C.C No. 1.098.751.528	295.390
Juliana Araque Quiroz	C.C No. 1.035.868274	293.693

Por Documento Privado del 28 de noviembre de 2022, inscrito el 30 de Noviembre de 2022 con el No. 02904376 del libro IX, de conformidad con el artículo 75 de la Ley 1564 de 2012 (Código General de Proceso) fue inscrito para que actúe como representante de GODOY CORDOBA ABOGADOS S.A.S en los procesos judiciales en los que esta última sea designada como apoderado de parte a:

Nombre:	Identificación:	TP:
María Carolina Martinez Portillo	C.C No. 1.020.721.389	207.162
Gina Paola Espinosa Martinez	C.C No. 22.464.396 116.498-D1	
Karen Sofia Sanchez Gonzalez	C.C No. 1.152.454.659	383.959
Paola Andrea Aponte Lopez	C.C No. 1.144.089.950	387.090

## CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 1 de febrero de 2024 Hora: 09:03:18

Recibo No. AA24128152

Valor: \$ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A241281523ED7F

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificados/electronicos](http://www.ccb.org.co/certificados/electronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Mariana Pérez Cuenca	C.C No. 1.020.824.515	367.191
Maria Clara Jaramillo Berrio	C.C No. 1.152.702.664	388.141
Daniel Francisco Gomez Cortes	C.C No. 1.019.133.337	389.914

Por Documento Privado del 20 de febrero de 2023, inscrito el 22 de Febrero de 2023 con el No. 02936798 del libro IX, de conformidad con el artículo 75 de la Ley 1564 de 2012 (Código General de Proceso) fue inscrito para que actúe como representante de GODOY CORDOBA ABOGADOS S.A.S en los procesos judiciales en los que esta última sea designada como apoderado de parte a:

Nombre:	Identificación:	TP:
Brandon Camilo Archila Jaimes	C.C No. 1.098.817.164	361.004
Miguel Angel Cadena Miranda	C.C No. 1.020.792.591	380.420

Por Documento Privado del 30 de junio de 2023, inscrito el 5 de julio de 2023 con el No. 02993832 del libro IX, de conformidad con el artículo 75 de la Ley 1564 de 2012 (Código General de Proceso) fue inscrito para que actúe como representante de GODOY CORDOBA ABOGADOS S.A.S en los procesos judiciales en los que esta última sea designada como apoderado de parte a:

Nombre:	Identificación:	TP:
Camila Soler Sánchez	C.C No. 1.014.290.875	352.159
Luis Eduardo Calderón Pastrana	C.C No. 1.004.155.816	406.112
Yudi Marcela Barajas Soto	C.C No. 1.098.762.996	303.201

Por Documento Privado del 22 de agosto de 2023, inscrito el 24 de Agosto de 2023 con el No. 03010137 del libro IX, de conformidad con el artículo 75 de la Ley 1564 de 2012 (Código General de Proceso) fue inscrito para que actúe como representante de GODOY CORDOBA ABOGADOS S.A.S en los procesos judiciales en los que esta última sea designada como apoderado de parte a:

Nombre:	Identificación:	TP:
Sharik Alejandra Mateus Diaz	C.C No. 1.010.240.279	403.554
Lorena Paola Castillo Soriano	C.C No. 1.032.505.290	404.442
Vanessa Gómez Quintero	C.C No. 1.032.509.355	409.053
Laura Camila Guanumen Piñeros	C.C No. 1.032.474.517	355.025
Sebastián Huertas Trujillo	C.C No. 1.020.844.303	399.622

Por Documento Privado del 15 de noviembre de 2023, inscrito el 15 de



**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

Fecha Expedición: 1 de febrero de 2024 Hora: 09:03:18

Recibo No. AA24128152

Valor: \$ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A241281523ED7F

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificadoselectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadoselectronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

-----  
Noviembre de 2023 con el No. 03035663 del libro IX, de conformidad con el artículo 75 de la Ley 1564 de 2012 (Código General de Proceso) fue inscrito para que actúe como representante de GODOY CORDOBA ABOGADOS S.A.S en los procesos judiciales en los que esta última sea designada como apoderado de parte a:

Nombre:	Identificación:	TP:
Cristian Alexander Monroy Ortiz	C.C No. 1.233.695.695	374.931
Tania Esmeralda López Rubio	C.C No. 1.049.652.417	360.979
María Camila Guio Martínez	C.C No. 1.032.505.503	414.733
Daniela Hoyos Álvarez	C.C No. 1.010.147.363	407.057

Por Documento Privado del 25 de enero de 2024, inscrito el 25 de Enero de 2024 con el No. 03058353 del libro IX, de conformidad con el artículo 75 de la Ley 1564 de 2012 (Código General de Proceso) fue inscrito para que actúe como representante de GODOY CORDOBA ABOGADOS S.A.S. en los procesos judiciales en los que esta última sea designada como apoderado de parte a:

Nombre:	Identificación:	TP:
Gabriela Pacheco Mendoza	C.C. No. 1.020.826.114	363.705
Fausto Alejandro Villalba Salinas	C.C. No. 1.000.588.698	419.732

**NOMBRAMIENTOS****REPRESENTANTES LEGALES**

Por Acta No. 15 del 26 de marzo de 2012, de Junta Directiva, inscrita en esta Cámara de Comercio el 18 de abril de 2012 con el No. 01626132 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Gerente	Andres Dario Godoy Cordoba	C.C. No. 80086521

Por Acta No. 87 del 6 de octubre de 2023, de Junta Directiva, inscrita en esta Cámara de Comercio el 11 de octubre de 2023 con el No. 03025495 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
-------	--------	----------------

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

Fecha Expedición: 1 de febrero de 2024 Hora: 09:03:18

Recibo No. AA24128152

Valor: \$ 7,900

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A241281523ED7F**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificados/electronicos](http://www.ccb.org.co/certificados/electronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

-----  
Representante Alejandro Gonzalez C.C. No. 1020789792  
Legal Suplente Cuberos  
(Gerente  
Suplente)

Por Acta No. 15 del 26 de marzo de 2012, de Junta Directiva, inscrita en esta Cámara de Comercio el 18 de abril de 2012 con el No. 01626132 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Primer Suplente Del Gerente	Carlos Hernan Godoy Fajardo	C.C. No. 19251626

**ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN**

**JUNTA DIRECTIVA**

**PRINCIPALES**

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Primer Renglon	Santiago Andres Martinez Mendez	C.C. No. 81717493
Segundo Renglon	Ana Cristina Medina Gonzalez	C.C. No. 52991736
Tercer Renglon	Andres Dario Godoy Cordoba	C.C. No. 80086521
Cuarto Renglon	Daniel Francisco Buritica Cordoba	C.C. No. 80873703
Quinto Renglon	Juan Jose Uribe Lopez	C.C. No. 79445373

**SUPLENTES**

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Primer Renglon	Carlos Hernan Godoy Fajardo	C.C. No. 19251626

Por Acta No. 31 del 17 de noviembre de 2017, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 23 de noviembre de 2017 con el No. 02278076 del Libro IX, se designó a:

## CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 1 de febrero de 2024 Hora: 09:03:18

Recibo No. AA24128152

Valor: \$ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A241281523ED7F

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificadoselectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadoselectronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

## PRINCIPALES

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Tercer Renglon	Andres Dario Godoy Cordoba	C.C. No. 80086521

Por Acta No. 41 del 3 de marzo de 2020, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 2 de julio de 2020 con el No. 02582656 del Libro IX, se designó a:

## PRINCIPALES

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Primer Renglon	Santiago Andres Martinez Mendez	C.C. No. 81717493
Cuarto Renglon	Daniel Francisco Buritica Cordoba	C.C. No. 80873703

## SUPLENTE

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Primer Renglon	Carlos Hernan Fajardo Godoy	C.C. No. 19251626

Por Acta No. 51 del 23 de agosto de 2021, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 3 de septiembre de 2021 con el No. 02740441 del Libro IX, se designó a:

## PRINCIPALES

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Quinto Renglon	Juan Jose Uribe Lopez	C.C. No. 79445373

Por Acta No. 65 del 15 de mayo de 2023, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 30 de mayo de 2023 con el No. 02981566 del Libro IX, se designó a:

## PRINCIPALES

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
-------	--------	----------------



**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

Fecha Expedición: 1 de febrero de 2024 Hora: 09:03:18

Recibo No. AA24128152

Valor: \$ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A241281523ED7F

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificados/electronicos](http://www.ccb.org.co/certificados/electronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

-----

Segundo Renglon    Ana    Cristina    Medina    C.C. No. 52991736  
Gonzalez

**REVISORES FISCALES**

Por Acta No. 59 del 9 de noviembre de 2022, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 21 de noviembre de 2022 con el No. 02901235 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Revisor Fiscal Persona Juridica	BAKER    TILLY    COLOMBIA LTDA	N.I.T. No. 800249449 5

Por Documento Privado del 11 de noviembre de 2022, de Revisor Fiscal, inscrita en esta Cámara de Comercio el 21 de noviembre de 2022 con el No. 02901236 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Revisor Fiscal Principal	Nydia    Jasmin    Mora Torres	C.C. No. 1022334637 T.P. No. 165330-T
Revisor Fiscal Suplente	Erika    Tatiana    Castaño Cruz	C.C. No. 1026276146 T.P. No. 272902-T

**PODERES**

Por Documento Privado No. Sin núm del Representante Legal, del 22 de noviembre de 2018, registrado el 23 de noviembre de 2018 bajo el número 00040473 del libro IX, de conformidad con el artículo 75 del Código General del Proceso fue inscrito como apoderado(s) judicial(es) y extrajudicial(es).

NOMBRE:  
Ana Cristina Medina González

IDENTIFICACIÓN:  
C.C. 52.991.736

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

**Fecha Expedición: 1 de febrero de 2024 Hora: 09:03:18**

Recibo No. AA24128152

Valor: \$ 7,900

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A241281523ED7F**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificados/electronicos](http://www.ccb.org.co/certificados/electronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

NOMBRE:	IDENTIFICACIÓN:
Carlos Hernán Godoy Fajardo	C.C. 19.251.626
NOMBRE:	IDENTIFICACIÓN:
Francisco Erney Buritica Ruiz	C.C. 10.529.620
NOMBRE:	IDENTIFICACIÓN:
Andrés Fernando Da Costa Herrera	C.C. 80.505.099
NOMBRE:	IDENTIFICACIÓN:
Gustavo Gnecco Mendoza	C.C. 19.431.641
NOMBRE:	IDENTIFICACIÓN:
Santiago Andrés Martínez Méndez	C.C. 81.717.493
NOMBRE:	IDENTIFICACIÓN:
María Isabel Vinasco Lozano	C.C. 53.006.455
NOMBRE:	IDENTIFICACIÓN:
Jhon Sebastián Molina Gómez	C.C. 1.018.466.887
NOMBRE:	IDENTIFICACIÓN:
Sergio Andrés Campos Guzmán	C.C. 1.015.433.588
NOMBRE:	IDENTIFICACIÓN:
José David Ochoa Sanabria	C.C. 1.010.214.095
NOMBRE:	IDENTIFICACIÓN:
Jennifer Lorena Molina Mesa	C.C. 1.129.511.816
NOMBRE:	IDENTIFICACIÓN:
Daniel Mauricio Contreras Jaimes	C.C. 1.090.424.399
NOMBRE:	IDENTIFICACIÓN:
Fabio Andrés Salazar Reslen	C.C. 1.032.358.377
NOMBRE:	IDENTIFICACIÓN:
Ricardo José Aguirre Bejarano	C.C. 1.018.442.942
NOMBRE:	IDENTIFICACIÓN:
Ernesto Rosales Jaramillo	C.C. 1.090.420.262

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

Fecha Expedición: 1 de febrero de 2024 Hora: 09:03:18

Recibo No. AA24128152

Valor: \$ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A241281523ED7F

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificados/electronicos](http://www.ccb.org.co/certificados/electronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

NOMBRE:

Juan Sebastián Velandia Párraga

IDENTIFICACIÓN:

C.C. 1.018.456.181

Por Documento Privado del 25 de agosto de 2022, de Representante Legal, registrado en esta Cámara de Comercio el 14 de Septiembre de 2022, con el No. 00048142 del libro V, la persona jurídica confirió poder especial a Diana Carolina Soler, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.020.727.319, para que represente al Poderdante y actúe en su nombre en los diferentes temas relacionados con la administración, vinculación, contratación, afiliación, desvinculación, desafiliación y relevo de personal de la Sociedad. Específicamente, la Apoderada podrá desempeñar las siguientes funciones y todas aquellas directamente relacionadas con ellas o necesarias para poderlas ejercer, sin que se extiendan a temas o materias sustancialmente distintas: (i) Preparar, firmar y presentar cualquier documento en los temas relacionados con la administración, contratación y relevo de personal de la Sociedad, incluyendo contratos de trabajo, de prestación de servicios, diligenciamiento de formularios y documentos de vinculación ante cualquier tipo de autoridad pública o privada relacionada con el sector de salud, de trabajo o de seguridad social; (ii) Representar a la Sociedad administrativa, judicial y extrajudicialmente ante los empleados, funcionarios, terceros y toda clase de autoridades públicas, judiciales y administrativas en los temas relacionados con la administración, vinculación, contratación, desvinculación, desafiliación y relevo de personal de la Sociedad; (iii) Notificarse personalmente de cualquier decisión proferida por las autoridades administrativas y judiciales en las cuales resulten involucrados de cualquier forma los intereses de la Sociedad en los temas referidos, presentar recursos, solicitar pruebas, responder y/o elevar peticiones frente a ellas.

**REFORMAS DE ESTATUTOS**

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO

E. P. No. 0002230 del 26 de junio  
de 2007 de la Notaría 21 de Bogotá  
D.C.

INSCRIPCIÓN

01147130 del 26 de julio de  
2007 del Libro IX



**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

Fecha Expedición: 1 de febrero de 2024 Hora: 09:03:18

Recibo No. AA24128152

Valor: \$ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A241281523ED7F

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificadoselectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadoselectronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Acta No. 013 del 28 de diciembre de 2009 de la Junta de Socios	01356856 del 27 de enero de 2010 del Libro IX
Acta No. 24 del 11 de abril de 2016 de la Asamblea de Accionistas	02099420 del 2 de mayo de 2016 del Libro IX
Acta No. 33 del 15 de enero de 2018 de la Asamblea de Accionistas	02297434 del 30 de enero de 2018 del Libro IX
Acta No. 37 del 2 de noviembre de 2018 de la Asamblea de Accionistas	02466433 del 16 de mayo de 2019 del Libro IX
Acta No. 39 del 13 de diciembre de 2018 de la Asamblea de Accionistas	02407938 del 21 de diciembre de 2018 del Libro IX
Acta No. 41 del 3 de marzo de 2020 de la Asamblea de Accionistas	02582655 del 2 de julio de 2020 del Libro IX
Acta No. 51 del 31 de enero de 2022 de la Asamblea de Accionistas	02790542 del 9 de febrero de 2022 del Libro IX
Acta No. 58 del 19 de julio de 2022 de la Asamblea de Accionistas	02862790 del 28 de julio de 2022 del Libro IX

**RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN**

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

**CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU**

Actividad principal Código CIIU: 6910

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

Fecha Expedición: 1 de febrero de 2024 Hora: 09:03:18

Recibo No. AA24128152

Valor: \$ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A241281523ED7F

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificados/electronicos](http://www.ccb.org.co/certificados/electronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

-----

**TAMAÑO EMPRESARIAL**

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es Grande

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria \$ 60.705.863.638

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIIU : 6910

**INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA**

Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del RUES.

Los siguientes datos sobre RIT y Planeación son informativos: Contribuyente inscrito en el registro RIT de la Dirección de Impuestos, fecha de inscripción : 31 de enero de 2005. Fecha de envío de información a Planeación : 25 de enero de 2024. \n \n Señor empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y una planta de personal de menos de 200 trabajadores, usted tiene derecho a recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75% en el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el segundo año y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009. Recuerde ingresar a [www.supersociedades.gov.co](http://www.supersociedades.gov.co) para verificar si su empresa está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.

El presente certificado no constituye permiso de funcionamiento en ningún caso.

\*\*\*\*\*

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 1 de febrero de 2024 Hora: 09:03:18

Recibo No. AA24128152

Valor: \$ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A241281523ED7F

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a  
[www.ccb.org.co/certificados/electronicos](http://www.ccb.org.co/certificados/electronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la  
imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera  
ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

\*\*\*\*\*

Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y  
cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.

\*\*\*\*\*

Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la  
autorización impartida por la Superintendencia de Industria y  
Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.



CONSTANZA PUENTES TRUJILLO

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACIÓN PERSONAL  
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **1.032.505.503**

**GUIO MARTINEZ**

APELLIDOS  
**MARIA CAMILA**

NOMBRES  
*Camila Guio*  
FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO **12-JUN-1999**

**BOGOTA D.C**  
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

**1.60** **O+** **F**  
ESTATURA G.S. RH SEXO

**29-JUN-2017 BOGOTA D.C.**  
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL  
JUAN CARLOS GALINDO VÁCHA



P-1500150-00925597-F-1032505503-20170725 0056620519A 2 48654357

REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL



**REPUBLICA DE COLOMBIA**  
**RAMA JUDICIAL**  
**CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA**  
**TARJETA PROFESIONAL DE ABOGADO**



NOMBRES:  
**MARIA CAMILA**

APellidos:  
**GUIO MARTINEZ**

*Maria Camila Guio*

PRESIDENTE CONSEJO  
SUPERIOR DE LA JUDICATURA  
**AURELIO ENRIQUE RODRIGUEZ GUZMÁN**

*0197*

UNIVERSIDAD  
**CENTRAL**

FECHA DE GRADO  
**30/08/2023**

CONSEJO SECCIONAL  
**BOGOTÁ**

CEDULA  
**1032505503**

FECHA DE EXPEDICIÓN  
**02/10/2023**

TARJETA N°  
**414733**

**ESTA TARJETA ES DOCUMENTO PÚBLICO  
Y SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LA  
LEY 270 DE 1996, EL DECRETO 196 DE 1971  
Y EL ACUERDO 180 DE 1996.**

**SI ESTA TARJETA ES ENCONTRADA, POR  
FAVOR, ENVIARLA AL CONSEJO SUPERIOR  
DE LA JUDICATURA, UNIDAD DE REGISTRO  
NACIONAL DE ABOGADOS.**